

COMPILACIÓN

Breno Bringel

Alexandra Martínez

Ferdinand Muggenthaler



DESBORDES

Estallidos, sujetos
y porvenires
en América Latina

Grupo Permanente de Trabajo
sobre Alternativas al Desarrollo

OFICINA REGIÓN ANDINA
ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

COMPILACIÓN

Breno Bringel

Alexandra Martínez

Ferdinand Muggenthaler



DESBORDES

Estallidos, sujetos
y porvenires
en América Latina

Grupo Permanente de Trabajo
sobre Alternativas al Desarrollo

OFICINA REGIÓN ANDINA
ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

DESBORDES

Estallidos, sujetos y porvenires en América Latina

Primera edición
Fundación Rosa Luxemburg
Miravalle N24-728 y Zaldumbide
(La Floresta)
Quito – Ecuador
Teléfonos: (593-2) 255 3771
604 6945 / 604 6946
Email: info.andina@rosalux.org.ec
www.rosalux.org.ec

Compilación: Breno Bringel
Alexandra Martínez
Ferdinand Muggenthaler

Coordinación editorial
y corrección de estilo: Yanuva León

Edición: Enrique Rey y Lenin Brea

Diseño de portada: Aarón Mundo

Diagramación: Freddy Coello

ISBN: 978-9942-8539-5-0

Impreso en Quito, septiembre de 2021.

Esta publicación fue auspiciada por la Fundación Rosa Luxemburg, con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).



Esta publicación opera bajo Licencia Creative Commons, atribución no comercial, sin modificaciones 3.0. Todos los contenidos pueden ser usados y distribuidos libremente siempre que las fuentes sean citadas.

ÍNDICE

Presentación	9
Estallidos de indignación, levantamientos de esperanza Cambios en los sujetos y los sujetos del cambio	13
Otras formas de luchar son posibles El movimiento azul y blanco en Nicaragua	43
Nicaragua en la encrucijada	69
Dignidad para cambiar el mundo Los sujetos del paro de octubre de 2019 en Ecuador	77
Disputas por la representación Nuevos sujetos y desafíos en las movilizaciones ecuatorianas	117
Revolta y juventudes Políticas de lo pre y posfigurativo del 18-O en Chile	125
Interseccionalidad y sujetos del 18-O chileno	167

- 173 R de Revueltas**
Un relato colectivo y champurrea (mestizo)
del 18-O en Chile
- 221 Cartografiar la intensidad**
Aproximaciones sensibles
a la revuelta popular chilena
- 231 Parar para avanzar**
Sentir y actuar el paro nacional
de 2019 en Colombia
- 277 No empezamos ayer
ni nos cansaremos mañana**
Prácticas alternativas
a raíz del 21-N en Colombia
- 287 Poder de veto popular**
Revuelta social y elecciones en el Perú
del bicentenario republicano
- 313 Que la cuna del neoliberalismo
sea también su tumba**
Una mirada actual de la región
a partir de Colombia y Chile

¡Con todo, si no pa qué!

CONSIGNA POPULAR

Presentación

A finales de 2019 fue evidente, una vez más, que nuestro continente se movía: protestas, paros, levantamientos y revueltas sociales sacudieron a Ecuador, Chile y Colombia. Este resurgir de la acción política de calle tiene claros antecedentes; sin embargo, la fuerza de las movilizaciones y su carácter de *desborde* sorprendieron incluso a la misma gente involucrada en los sucesos. De inmediato empezó una amplia discusión sobre significados y causas. Circuló un sinnúmero de interpretaciones políticas respecto a la naturaleza de las revueltas, y nuevas esperanzas despertaron en las izquierdas latinoamericanas. En ese momento nace la idea de este libro. Como fundación quisimos aportar al debate, intentar conocer y definir las subjetividades que dieron fuerza y sostuvieron las movilizaciones: a primera vista, jóvenes que no venían de organizaciones políticas y sociales. Con este horizonte, buscamos grupos de investigación en cada país para profundizar los análisis de las dinámicas iniciales de las protestas y, en especial, establecer acercamientos con las juventudes y registrar motivaciones, experiencias, expectativas, lógicas de articulación. Asimismo, tuvimos presente que un año antes los hechos de protesta en Nicaragua mostraron algunas características en común con los acontecimientos en Ecuador, Chile y Colombia. La chispa que detonó las protestas en esa latitud fue también un recorte de gastos sociales (disminución de un 5% de las pensiones por jubilación) y participó gran cantidad de jóvenes sin afiliación a una organización, sin líderes sólidos o personalizados. Por esta razón incluimos un estudio sobre las protestas de 2018 en el país centroamericano. Al indagar en esos cuatro casos, con todas sus diferencias y desde una perspectiva compartida, aspiramos abrir espacios de reflexión y evitar interpretaciones precipitadas y simplistas. Estos trabajos conforman

el grueso del libro. Dos sobre Chile¹ (desde diferentes ángulos), y uno sobre Nicaragua², Colombia³ y Ecuador⁴. El levantamiento de datos en todos los países se realizó durante el primer semestre de 2020.

El ensayo introductorio de Breno Bringel sitúa desde una visión geopolítica los estallidos latinoamericanos, extiende la mirada más allá de los casos específicos y de la lectura inmediata para resaltar similitudes, diferencias, contradicciones, potencialidades y tendencias; despliega un campo de interpretación cuyos ejes teóricos y políticos posibilitan evaluar los acontecimientos en su multiplicidad: gritos de indignación, desbordes, sujetos en movimiento, luchas e incidencias pluriescalares.

En los estudios centrales se destaca el papel que tiene la indignación de una “generación sin futuro”, pero además abordan cómo surge la esperanza en el transcurso de las protestas, cómo se desencadenaron procesos que rápidamente trascendieron el asunto puntual que disparó el estallido colectivo, y cómo se retomaron demandas en dimensiones interseccionales, apuntando a cambios profundos. El caso emblemático de Chile, por ejemplo, se expresa en la consigna: “No son treinta pesos, son treinta años”. Las investigaciones muestran que se activaron no solo expectativas concentradas en lograr que los Estados retiraran algunas medidas, sino en construir prácticas solidarias que dan idea de otros *porvenires*. No es casual que en los textos sobre Chile, donde las protestas fueron más prolongadas en el tiempo, se mencionen profusamente esas “prácticas prefigurativas”. En cada estudio se halla un balance de los acontecimientos. Junto con el análisis, parte fundamental de la riqueza de los trabajos de investigación son los testimonios de personas entrevistadas: voces que relatan cómo se integraron a las protestas (muchas por primera vez) y cómo se conformó un sentimiento de solidaridad entre manifestantes, experiencias de quienes asumieron las primeras líneas, de juventudes organizadas, incluso de “adherentes de conciencia” y donantes de dinero, de ropa, de alimentos para sostener la movilización;

1 Página 123.

2 Página 41.

3 Página 229.

4 Página 75.

discursos que dan cuenta de las diversas posturas (desde la militancia en las calles hasta el activismo digital) y describen el rol determinante que tuvieron los colectivos feministas *in situ*, pero también que las labores de sostenimiento de la vida (cocina, cuidado de niñas y niños, repartición de alimentos, limpieza) quedaron mayoritariamente bajo la responsabilidad de mujeres, mientras los hombres dominaban las “primeras líneas”.

Las investigaciones, con sus enfoques empíricos y sus voces desde “adentro” de las protestas, cuentan con breves comentarios que exponen, a manera de corolarios, marcos interpretativos y enclaves complementarios escritos entre junio y julio de 2021. En esos documentos se refleja el proceso de debate del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, que discutió borradores de los estudios en 2020.

Seguidamente, en aras de completar el panorama que brindan los informes de investigación, y por la relevancia de la coyuntura, incorporamos un ensayo sobre las protestas en Perú a finales de 2020, desarrollado por Carmen Ilizarbe, en el mes de julio de 2021, específicamente para este libro.

En el apartado de cierre, Alejandro Mantilla, desde Colombia, y Pierina Ferretti, desde Chile, exploran posibles escenarios en diálogo con Breno Bringel: conectan las protestas de 2019 y 2020 con la situación en curso. A partir del paro y de las movilizaciones de calle en sus países, dejan de relieve algunas expectativas sobre una posible fase en ciernes y perfilan varias interrogantes para discusiones y debates urgentes que deben emprender organizaciones políticas, colectividades populares, personalidades académicas e intelectuales.

Tenemos consciencia de que América Latina ha permanecido en convulsión allende las fronteras de los hechos aquí tratados. Paraguay, Puerto Rico, Haití y más recientemente Cuba se han visto sacudidos por protestas masivas y acontecimientos sociopolíticos potentes. En tal sentido, es nuestro deseo que la compilación de trabajos que ofrecemos sirva como referencia en el análisis comparativo de los eventos no incluidos, sobre todo porque prefiguran la emergencia de nuevos sujetos sociales y formas de hacer política que contribuyen a la construcción de alternativas de futuro.

Es justo enfatizar que *Desbordes / Estallidos, sujetos y porvenires en América Latina* no existiría sin la participación activa de un nutrido conjunto de personas y voluntades. Queremos agradecer especialmente:

A los equipos que realizaron las investigaciones que conforman el cuerpo principal, puesto que aceptaron la tarea con entusiasmo a inicios de 2020 y se toparon con el desafío de adaptar sus metodologías a las condiciones globales que impuso la pandemia de covid-19. No obstante, dieron continuidad al proyecto, lidiaron con los embates excepcionales y consolidaron estrategias que en algunos casos exigieron riesgos y exposición, y en otros, mantener coordinación a distancia, con núcleos de apoyo dentro y fuera del país de estudio.

A todos los integrantes del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, por sus aportes en la discusión de las investigaciones, en particular a Maristella Svampa, Pablo Ospina, Stalin Herrera y Pierina Ferretti, quienes actualizaron sus reflexiones para este libro. Igualmente, a Anahi Macaroff, por su comentario al estudio de Nicaragua, a Carmen Ilizarbe por su análisis sobre las movilizaciones populares en Perú, y a Alejandro Mantilla, por su disposición y valioso aporte en la entrevista final.

A Breno Bringel quien, comprometido con nosotros en la concepción y arquitectura del libro, desarrolló en el ensayo introductorio una lectura amplia e imprescindible que prepara el abordaje de las investigaciones de modo panorámico y abarcador.

A Yanuva León, Lenin Brea y Enrique Rey, quienes se integraron al proyecto en 2021 y asumieron las labores de tratamiento de originales, edición y corrección de contenidos, cuidando los detalles necesarios para la producción editorial; así como a Aarón Mundo por el diseño de portada y a Freddy Coello por la maquetación.

A todo el equipo de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito, porque sin su faena dedicada, en diferentes roles y bajo circunstancias sanitarias todavía adversas, esta obra no habría sido posible.

**ESTALLIDOS DE INDIGNACIÓN,
LEVANTAMIENTOS DE ESPERANZA** |
Cambios en los sujetos y los sujetos del cambio

BRENO BRINGEL¹

¹ Profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg y director de ALAS.

Estallidos latinoamericanos: entre la década de la indignación y el nuevo caos global

La década de 2010 será probablemente identificada en el futuro próximo como la década de la indignación. Su marco fundacional es la ola de protestas masivas conocida como “Primavera Árabe”. Iniciada en Túnez en diciembre de 2010, llevó a la destitución del presidente Ben Ali, tras más de veinte años en el Gobierno y de una serie de cambios políticos que culminaron con un proceso constituyente y la aprobación de una nueva Constitución luego de una intensa politización de la sociedad. Túnez, además, fue la antesala y la inspiración de otros levantamientos relevantes en el mundo árabe, como los de Jordania, Yemen y Egipto, que pronto se convirtieron en epicentro del nuevo ciclo en la región. Aunque aquellos estallidos fueron muy heterogéneos, compartieron algunas características, tales como la desconfianza y el rechazo a los sistemas políticos, a los sujetos políticos tradicionales, a las formas convencionales de organización política y a los liderazgos formales. El hartazgo de la población, el deterioro de las condiciones de la vida y el déficit democrático fueron algunos de los principales detonantes.

Tras este impulso inicial, las movilizaciones de la indignación fueron ampliándose y difundiéndose por el mundo con acontecimientos muy conocidos (entre ellos el 15-M en el Estado español y el *Occupy* en los Estados Unidos), pero también otros menos sonados (como el “Y’en a Marre” en Senegal). Después de la eclosión de protestas amplias y difusas, cohabitaron en los espacios públicos de varios lugares del globo demandas y experiencias muy diversas que apuntaron a signos de transformaciones del activismo contemporáneo, principalmente en lo que se refiere a dinámicas de sociabilidad militante, formas de organización, de mediación política y de convocatoria de protestas. Este proceso llevó a la emergencia de nuevos sujetos, a la

redefinición de aquellos previamente establecidos y a la generación de escenarios múltiples que reabrieron el horizonte de expectativas y de posibilidades, con desenlaces muy diferentes según cada caso, oscilando entre la democratización y el retroceso democrático.

Protestas de gran magnitud en América Latina, como las jornadas de junio de 2013 en Brasil, se dieron bajo la reverberación de este ciclo mundial de protestas. En otros casos, como en Chile y Colombia, también hubo amplios ecos de las protestas globales de la indignación, principalmente en 2011 con la convocatoria de acciones y protestas del 15-O, dinamizada principalmente por colectivos vinculados al 15-M y que llegó a alcanzar más de ochenta países. A pesar de eso, no hubo en nuestra región un peso tan fuerte de este tipo de levantamientos al inicio del período 2010, tal como ocurrió en otras partes del mundo. Esto se debe a una confluencia de varios motivos. Por un lado, aunque la crisis de 2008 también afectó fuertemente a América Latina, sus consecuencias tardaron un poco más en llegar que en otras latitudes, encontrándose con una región más fortalecida en términos macroeconómicos que en crisis económicas mundiales previas. Por otro lado, a pesar de su declive gradual, el ciclo progresista todavía estaba en vigor durante la primera mitad de la década, sirviendo como fuerza de contención geopolítica, pero también como eje de gravitación de muchos conflictos sociales.

Es solo a finales de la década de 2010 cuando América Latina entra de lleno en el mapa mundial de los estallidos de la indignación. La chispa que desató los levantamientos se debió a motivos diferentes en cada país: las reformas de la seguridad social (Nicaragua) en 2018; el alza de los precios de la gasolina (Ecuador y Haití); los escándalos de corrupción política (Puerto Rico); el precio de los transportes (Chile); o el “paquetazo” de Duque (Colombia) en 2019. En todos los casos, la represión gubernamental avivó todavía más las protestas, que desbordaron tanto los movimientos iniciadores como las reivindicaciones específicas. No obstante, más que un rechazo a una política o a un tema concreto, lo que ha estado en juego, en la mayoría de los casos, ha sido una impugnación mucho más amplia a la representación, a la política institucional y a los sujetos políticos tradicionales, así como había ocurrido hacía algunos

años en las protestas de la indignación del mundo árabe, de Europa o de América del Norte. A pesar de estas y otras similitudes, cada lugar, país o región tiene sus propias especificidades y culturas político-militantes. En el caso latinoamericano, aun considerando la gran variedad de situaciones, hay un énfasis marcado en la crítica al neoliberalismo, al desarrollismo, a la impunidad, al colonialismo, a las diferentes formas de violencia y a cómo se concibió y se gestionó la vida política en las últimas décadas desde la transición del período dictatorial y sus múltiples herencias.

De esta forma, los estallidos latinoamericanos irrumpen, curiosamente, cuando muchos hablaban justamente del fin del ciclo global de las protestas de la indignación. ¿Serán estallidos a destiempo del resto del mundo? ¿O, más bien, una nueva era de protestas de la indignación? Seguramente un poco de ambas cosas. Desde mi punto de vista, los levantamientos latinoamericanos abren un nuevo ciclo de luchas en la región que, simultáneamente, cierra la década global de la indignación y abre nuevas fisuras e inspiraciones para los procesos de contestación que están por venir.

Todavía no sabemos su alcance y sus desenlaces, pero se podría hablar de una especie de “ciclo de transición” o “entreciclo” que emerge contra todo pronóstico. Cuando se hablaba de una fuerte tendencia de derechización y de la dificultad de generar movilizaciones masivas, irrumpe el estruendo. Cuando proliferaba una serie de balances simplistas y equivocados –incluso desde los “progresismos”– sobre los levantamientos de 2010 adjudicando, con frecuencia, la emergencia de Gobiernos autoritarios y/o conservadores a las protestas ciudadanas (ejemplos: junio de 2013 es responsable del ascenso de la derecha en Brasil y de la victoria de Bolsonaro; o Lasso gana en Ecuador por culpa del movimiento indígena y del estallido de 2019), las luchas recientes nos recuerdan que no hay causalidad apriorística y que los desenlaces de los procesos de contestación social están siempre abiertos y son objeto de disputas. Mientras la desestabilización política crecía y los centros de *intelligentsia* vinculados al poder construían la narrativa de un nuevo “there is no alternative”, las voces de las calles nos recuerdan que otros mundos todavía son posibles y necesarios. Mientras a cualquier internacionalista atento

le costaba vislumbrar esperanza más allá de varias luchas defensivas y de resistencia, los levantamientos vuelven a emocionarnos, a mover el tablero político y a construir rutas posibles.

Como sugiere la editora, escritora y poeta venezolana Yanuva León, los estallidos irrumpen en nuestras *tierras de lumbre* como fuego y combustión. Pero también como nuevo espacio-tiempo que permite que asome la luz y la esperanza en tiempos de penumbra. El camino, sin embargo, es muy complejo y se va transformando al caminar. Si la década de la indignación se abrió bajo las consecuencias directas de la crisis financiera de 2008, ahora se cierra, con los levantamientos latinoamericanos, bajo una crisis mucho más profunda, de carácter civilizatorio, exacerbada y visibilizada de forma más amplia por la pandemia de covid-19.

Los primeros estallidos empezaron un poco antes de la pandemia y muchos creían que el confinamiento y la situación sanitaria impedirían que proliferaran. Aunque es cierto que la movilización masiva en las calles remitió en los primeros meses de 2020, la politización de la sociedad no cesó. Hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar, como llevo tiempo insistiendo en mi trabajo conjunto con Geoffrey Pleyers, los movimientos sociales son icebergs y no podemos estudiar solo su parte visible. En las casas, en los barrios, en las comunidades y en los territorios se activó la autogestión, los vínculos comunitarios, el apoyo mutuo, las ollas populares, los tejidos sociales resilientes y las solidaridades cotidianas. En el caso de Chile, por ejemplo, buena parte de la fuerza callejera se volcó luego a los cabildos y las asambleas barriales. En el caso de Colombia, un segundo estallido brotó en 2021 con mayor fuerza incluso que el de 2019 articulando múltiples territorios y tradiciones de movilización. En segundo lugar, las brutales desigualdades sociales existentes en nuestra región se visibilizaron todavía más con la pandemia. “Es más fácil morir por ser negro que por el coronavirus”, decían militantes brasileños en protestas antirracistas contra el genocidio del pueblo negro; o “el Gobierno nos mata más que el covid” se podía escuchar en las marchas de Colombia. Eso, junto a la gestión deficiente (cuando no catastrófica) por parte de la mayoría de los Gobiernos fue, paulatinamente, aumentando la indignación de la población.

Hay, por lo tanto, un “caldo de cultivo pandémico” para los estallidos recientes, que aportan nuevos elementos que no estaban presentes en los levantamientos previos de la indignación. Es así en términos individuales, colectivos y subjetivos, pero también geopolíticos. La pandemia acentuó el caos global, pero también la idea de que estamos experimentando una gran inflexión histórica —en la cual lo que hagamos ahora será muy decisivo para el futuro de la humanidad— y, por ello, no podemos ser espectadores pasivos de ese momento. El caos no implica la ausencia total de algún tipo de orden, sino que evoca la turbulencia y la indefinición geopolítica contemporánea ante múltiples “riesgos globales” y destinos posibles. La imprevisibilidad e inestabilidad pasan a ser regla, y eso se refiere tanto a mayor volatilidad ante amenazas como a dinámicas propias de lo social, lo político y lo económico. Frente a este escenario, cobra mucha fuerza el sentido de urgencia ante una coyuntura crítica y la disputa de sentidos sobre el futuro pospandémico.

En los estallidos podemos entrever buena parte de estas angustias, crisis, emociones, fisuras, posibilidades y tendencias. Los estudios que dan origen al presente libro buscan examinar tanto los contextos sociopolíticos que dan origen a las protestas masivas en Nicaragua, Ecuador, Colombia y Chile entre principios de 2018 y finales de 2019, como los sujetos que las protagonizaron, con especial énfasis en las juventudes. Tal como anuncia la presentación, este esfuerzo por comprender las motivaciones, los sentidos y los sujetos de los estallidos se complementa con un ensayo sobre el levantamiento ocurrido en 2020 en Perú, y con una conversación más amplia sobre Chile y Colombia, que busca actualizar las consecuencias de los estallidos, ante los desenlaces chilenos, el nuevo levantamiento colombiano de 2021 y las novedades de la coyuntura latinoamericana.

Este texto introductorio intenta, a su vez, situar de forma más analítica y panorámica los estallidos latinoamericanos, tratando de ir más allá de los casos específicos y de la lectura inmediata para ubicar similitudes, diferencias, contradicciones, potencialidades y tendencias. El artículo está dividido en tres partes, además de esta entrada. En primer lugar, examino los estallidos, procurando distinguir sus diferentes dimensiones, de tal modo que podamos

comprenderlos como un *acontecimiento perturbador* en sus múltiples facetas, temporalidades e implicaciones. En segundo lugar, analizo los sujetos de los estallidos a partir de la identificación de una tendencia amplia de descentramiento de los sujetos contemporáneos. El objetivo, en este caso, será, en diálogo con las demás contribuciones al libro y con el debate teórico-político contemporáneo sobre el tema, indagar tanto los cambios en los sujetos (sus transformaciones contemporáneas más destacadas) como los sujetos del cambio (protagonistas de las protestas). Finalmente, la tercera y última parte pretende discutir los (posibles) impactos de los estallidos y de las transformaciones de los sujetos en las concepciones y en los procesos de cambio social. Aunque el texto no tiene la intención de sistematizar los debates recientes que hemos mantenido sobre estos temas en el Grupo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg, es profundamente tributario de sus conversaciones colectivas.

Las múltiples dimensiones de los estallidos y la realidad latinoamericana

La historia latinoamericana está repleta de episodios de rebeldía colectiva y de autoafirmación de la dignidad de los pueblos. La dinámica de confrontación social y las movilizaciones son tan habituales en la región que la literatura sobre los movimientos sociales llega a hablar de una “rutinización de la protesta”. Menos frecuentes, sin embargo, son aquellos acontecimientos que se despliegan no solo por los movimientos sociales y por los actores organizados, sino por la sociedad como un todo. Obviamente existen y son muchos en toda la geografía nustramericana, pero por su magnitud se dan menos veces puesto que, como sugiere Maristella Svampa, suelen remover las “placas tectónicas” de nuestras sociedades, es decir, sacuden los cimientos culturales, sociales y políticos, poniendo en jaque a los Gobiernos, a los pactos de las clases dominantes y sus orientaciones normativas y político-ideológicas. No estamos hablando necesariamente de revoluciones o de procesos inducidos por sujetos revolucionarios, aunque sí de acontecimientos que revolucionan la vida política.

Los estallidos son acontecimientos complejos que trastocan la vida social y política y marcan inflexiones y desplazamientos tanto en lo micro (en las trayectorias individuales y en la vida cotidiana) como en lo macro (orientaciones político-institucionales y lineamientos más generales de la acción política). De ahí que cualquier intento de analizarlos únicamente a partir de un ángulo o de una mirada apresurada estará condenado al fracaso. Sugiero, por ello, pensar los estallidos a partir de cuatro dimensiones interrelacionadas: como *gritos de impugnación* (el levantamiento en sí, sus motivaciones y mensajes críticos), como *termómetro social* (en tanto signo que permite captar tendencias latentes, correlaciones de fuerzas y la manifestación concreta de cambios societales), como *desborde* (en tanto proceso que desestabiliza y rebasa las fronteras políticas previas y los sujetos existentes en el momento de los levantamientos) y, finalmente, como *apertura societaria* (que supone la permeabilidad de la vida social y política para emprender cambios en sentidos diversos y, con frecuencia, antagónicos). En conjunto, estas cuatro dimensiones permiten introducir elementos importantes sobre los estallidos, tanto en una perspectiva teórica como en sus orientaciones concretas de la realidad latinoamericana actual.

Los estallidos como gritos de impugnación

Un estallido es, *ipsis litteris*, algo que irrumpe con estruendo y que causa un ruido extraordinario. Los estallidos son gritos de impugnación que resuenan en toda la sociedad en estos tiempos de descrédito generalizado de los sistemas políticos. Son masivos y suelen marcar un antes y un después, ya que pueden apoyarse o no, pero no es posible permanecer indiferente. Sirven para demoler mitos y derribar muros, reales o metafóricos, que conforman el paisaje habitual. Aunque muchas veces emergen de manera inesperada y se expanden de modo descentralizado y viral, eso no significa que surjan de la nada o de forma “espontánea”, por más que pueda existir cierto grado de espontaneidad en la incorporación de algunos actores específicos (individuales, principalmente, pero también colectivos) a las movilizaciones y a su difusión. De hecho, los estudios que dan

origen a este libro muestran como fundamental considerar los procesos previos de movilización y de articulación política, los antecedentes inmediatos y de mediano plazo de las luchas, y analizar cómo estas configuraciones previas se van sedimentando.

Por tanto, la noción de estallido –al igual que otras similares pero ligeramente distintas, como levantamiento, revuelta, rebelión, motín o insurgencia– contribuye a captar el alzamiento colectivo contra el *statu quo* y los poderes instituidos. Durante la emergencia del estallido suele producirse un momento de catarsis entre quienes participan. Se trata de la proyección, más o menos duradera, de una subjetividad liberadora que se construye en la propia manifestación del “grito”, tal como ha sugerido John Holloway. La experiencia vital de los estallidos entre quienes lo protagonizan y la exteriorización del malestar acumulado se suma al reconocimiento del otro (la importancia del “encontrarse”, del “conocerse” y del “identificarse” a través de la ocupación del espacio público, tal como narran investigadoras e investigadores en el primer trabajo del capítulo dedicado a Chile²) y a la posibilidad (a veces romantizada, a veces escépticamente formulada) del cambio al calor de los acontecimientos.

Hay una negatividad inherente en los estallidos, es decir, un sentido oposicional fuerte (el “no” o los “noes”, en singular y en plural, en forma de “¡ya basta!”), aunque no es fácil captar ni tampoco decantar rápidamente sus sentidos propositivos, que a menudo se forjan en el propio proceso de contestación. Algunas revueltas son principalmente muestras de hartazgo contra los Gobiernos y alguna medida específica, y poseen un carácter eminentemente reactivo, sin mayor continuidad tras las movilizaciones iniciales, alcancen o no sus objetivos. Otros, a su vez, ponen en jaque al sistema como un todo y se prolongan más allá de su expresión callejera, planteando un cambio amplio en la configuración social, política y económica. En estos casos, la capacidad de interpelación es mucho más potente, generando un movimiento destituyente e instituyente y, muchas veces, también constituyente. Esta diferencia sobre los alcances del estallido es importante y se observa claramente en el contraste, por ejemplo, entre Chile (como caso emblemático de intento de refundar la sociedad

2 “Revuelta y juventudes / Políticas de lo pre y posfigurativo del 18-O en Chile”, p. 125.

y la política) y Nicaragua (donde la “insurrección cívica” no logró articular un horizonte político alternativo más allá de la denuncia contra el régimen). A su vez, en el caso peruano, como muestra Carmen Ilizarbe en su análisis³, la impugnación se plasmó en un poder de “veto popular” fundamental para rechazar una reacomodación política desde arriba e influenciar las reñidas e inauditas elecciones presidenciales de 2021.

Los estallidos como termómetros sociales

Los estallidos operan también como una suerte de termómetro de nuestras sociedades. Funcionan, simultáneamente, como “medidor” de los rumbos de la conflictividad social y como señal que permite identificar tensiones y tendencias relevantes. En lo que refiere al primer punto, a través de los estallidos —y, en particular, de sus agendas reivindicativas— es posible identificar los principales temas emergentes, combinando, en la mayoría de los casos, demandas materiales de redistribución de los recursos y de la riqueza con reivindicaciones más simbólicas y otras que buscan afirmar la dignidad de los pueblos y detener la violencia y los abusos de poder. Pero no nos engañemos: que algunos temas no estén presentes en las calles, no significa que no importen o que no sean igualmente centrales, sino que pueden estar siendo trabajados por colectividades diversas y en los territorios de maneras menos visibles.

Por otro lado, los estallidos recientes han contribuido a observar la centralidad de, al menos, cuatro grandes cambios sociales que poseen implicaciones profundas en la dinámica de nuestras sociedades, de las protestas y de los sujetos contemporáneos. Estos cambios están asociados a lo que Kathya Araujo y Danilo Martuccelli denominan “desafíos estructurales”. Son muchos, pero los de mayor centralidad seguramente son la cuestión socioambiental, la individualización, la digitalización y la aceleración de la vida social. No son temas que exigen simples respuestas políticas, como muchas veces se sugiere. Tampoco son desafíos “externos” a las luchas. Son, más bien, retos

3 “Poder de veto popular / Revuelta social y elecciones en el Perú del bicentenario republicano”, p. 287.

que influyen y moldean a los individuos y a las colectividades, con diferentes tipos de mediación en este proceso.

Pensemos ejemplos concretos. La crisis ecológica y la emergencia climática se han extendido (quizá demasiado tarde) como un marco de referencia, instalándose hoy de forma central en las agendas políticas. Esto quiere decir que se convirtió en un tema público decisivo del cual no se puede huir. Interpela a todos los sujetos y eso se ve de forma clara en los estallidos recientes, principalmente en la mayor consciencia ecologista de las juventudes y en la ampliación de la preocupación por el futuro y por los pueblos originarios. La domesticación instrumental de la naturaleza, que marcó la modernidad y el desarrollo del capitalismo, pasa a ser cuestionada y nadie puede estar al margen de esta agenda. De hecho, incluso el negacionismo climático y el obstruccionismo no dejan de ser modos de participar y de posicionarse en este debate.

Otro ejemplo es la tendencia a la creciente individualización de la sociedad, algo que, en general, se ha leído mal desde las izquierdas porque se ha asociado casi exclusivamente al individualismo, a la racionalidad neoliberal y a los procesos de diferenciación social. Esa es, sin duda, una cara de la moneda. Pero la otra es cómo esta tendencia a la individualización también debe ser leída —y las dinámicas de las movilizaciones sociales y de los estallidos nos ayudan en este esfuerzo— a partir de una reconfiguración de las subjetividades emancipadoras. Eso se expresa, entre otros frentes, en la necesidad de un mayor compromiso personal desde sujetos críticos (que reivindican para sí mismos una mayor coherencia individual entre práctica cotidiana y discursos); o en la creciente personalización —que tampoco implica necesariamente personalismo, aunque puede derivar en ello— de las luchas y una mayor reivindicación del rol de los individuos y sus “marcas” (biográficas, de clase, de género, de experiencias...) dentro de las colectividades. Como consecuencia, emerge una creciente valoración de las singularidades que puede tener implicaciones muy dispares que no son solo el “elogio del yo”, sino también una mayor densificación y corporeización de la trama colectiva/comunitaria, además de una renovación de la crítica sobre la libertad y el poder.

Lo mismo se podría decir de la digitalización de la sociedad y de la aceleración de la vida social como grandes desafíos estructurales que se evidencian en los estallidos. En el primer caso, la digitalización tiene que ver no solo con el activismo digital (claramente decisivo en la dinámica de las protestas actuales) o con cómo la vida cotidiana y los procesos de contestación están cada vez más mediados por un complejo ecosistema comunicativo (con efectos profundos en la sociabilidad), sino también en cómo se da la relación entre mediatización y mediación política. Este es un tema clave porque la crisis política y de representación que vivimos también es —o, quizá, sobre todo es— una crisis de las mediaciones políticas. Por fin, la experiencia de aceleración del tiempo y de los ritmos de vida impulsados por las tecnologías, por presiones sociales y económicas y por formas culturales que buscan imponerse, tienen consecuencias brutales, que incluyen retos centrales para la militancia contemporánea vinculados a la comprensión y a la gestión del tiempo o, como veremos en la siguiente sección, a una aceleración de las perspectivas del cambio social.

Así, los estallidos entendidos como termómetros sociales pueden ser valorados también a partir de cómo algunos de los principales “desafíos estructurales” de nuestro tiempo aparecen y son canalizados en momentos críticos, colocando en el centro de las disputas contemporáneas las tensiones entre lo social y lo ambiental, lo individual y lo colectivo, las redes y los territorios, lo efímero y lo permanente, lo destituyente y lo instituyente.

Los estallidos como desbordes

Los estallidos en su faceta de desborde apuntan a la ruptura de las fronteras políticas previas, y al rebase de los escenarios y sujetos establecidos en el momento en que se produce el levantamiento. Eso implica que durante el período de irrupción de un estallido —y a partir de las primeras consecuencias de su desarrollo— los sujetos, los consensos y las dinámicas previamente consolidadas son frontalmente interpelados y entran en un período de *stand by*, de incertidumbres y reconfiguraciones.

El desborde se produce por la dinámica de difusión de las protestas tras un levantamiento y su ampliación no solo en términos geográficos, sino también sectoriales y de perfiles de adherentes. Buena parte de la izquierda del siglo XX solía mirar los estallidos populares tratando de ubicar *un* sujeto social protagonista, *un* líder y *una* fuerza política que conduciría o dirigiría la movilización. “Controlar” la movilización, sus variables y sus desenlaces es todavía una obsesión de parte de la izquierda tradicional que parece no captar los nuevos vientos históricos, invocando imágenes anacrónicas, congeladas y normativas de lo que es y debería ser una “protesta bien hecha”.

Los estallidos contemporáneos son altamente contradictorios y complejos. No se pueden leer únicamente a través de una escala blanco y negro (de izquierdas o de derechas, reformistas o revolucionarios, viejos o nuevos, etc.). Son caleidoscopios multicolores que revelan potencialidades, pero también fisuras y límites. Caben en ellos casi todas las tonalidades del arcoíris, aunque unas puedan sobresalir más que otras. Asimismo, como veremos enseguida, se vinculan con la posibilidad de la emergencia de lo nuevo (que no será necesariamente mejor), pero también con la multiplicidad y la imposibilidad de generar un sentido unívoco. Implican una diversidad de procesos políticos y de antagonismos que atraviesan varias culturas militantes, en algunos casos con arraigos más locales, en otros con raíces nacionales.

La idea de *desborde*, que da título al libro, remite siempre a un doble movimiento de “extrañamiento del proceso vivido” por parte de quienes lo impulsaron y a un “desplazamiento de protagonismos”. A partir del momento en que las protestas se masifican y van más allá de las colectividades que las convocaron, estas, muchas veces, no se reconocen en el proceso que contribuyeron a promover. Los estallidos suelen ser iniciados por activistas y organizaciones con algún grado de experiencia militante previa que comúnmente consideran la importancia de extender la lucha hacia sectores más amplios de la sociedad. Pero cuando eso ocurre, emerge con frecuencia un choque entre el horizonte de expectativas de quienes inician las protestas y la dinámica que estas van adquiriendo al masificarse. Esto es fruto de una inevitable cacofonía de los estallidos y de la coexistencia heterogénea y tensa entre actores, agendas y concepciones. El desborde

implica, por tanto, un sentimiento de sobredimensión, pero también un desplazamiento paulatino del foco del orden de prioridades de la vida pública y de las centralidades políticas.

Los estallidos como apertura societaria

La apertura societaria es consecuencia directa del desborde que provocan los estallidos. Tiene que ver con la mayor permeabilidad de la sociedad hacia las reivindicaciones, agendas y sujetos emergentes, así como con el momento en que gana mayor eco la posibilidad de cambiar las dinámicas de funcionamiento de la vida colectiva. La apertura indica posibilidad, pero que eso ocurra o no es otro asunto y depende de muchos factores.

Por tal motivo, la dinámica de apertura societaria involucra una auténtica batalla de posiciones y sentidos. Aquellos sujetos que se ven amenazados intentan no sucumbir y para ello utilizan estrategias distintas, que pueden oscilar desde la autocrítica y el diálogo, a la negación, el victimismo, la persecución, la violencia exacerbada y el aislamiento, pasando por múltiples formas de reposicionamientos. Alteraciones sustantivas o cosméticas pueden ocurrir en todos los sujetos. En el caso latinoamericano reciente, se observan, por ejemplo, diferentes grados de adaptación y sobrevivencia de las organizaciones históricas *vis-à-vis* la emergencia de nuevas organizaciones y subjetividades.

Los artículos reunidos en el libro muestran, de hecho, caminos distintos en este sentido. En algunos casos, organizaciones sociales históricas y representativas, como la CONAIE⁴ en Ecuador, han buscado transformarse ante las coyunturas críticas, tratando de canalizar nuevas agendas, actores y subjetividades en el interior de su organización. En otros casos, sin embargo, como el de Perú, algunas de las organizaciones históricas han perdido buena parte de su capacidad articuladora, dando paso a la emergencia de nuevos actores y dinámicas organizativas. En todos los casos, el peso de las juventudes parece central para tratar de “rejuvenecer” —con mayor o menor éxito— las organizaciones más clásicas, sean sindicales, partidistas, político-electorales o algunos movimientos.

4 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Por otro lado, la disputa política por la apropiación de los estallidos y sus significados es inherente al proceso de apertura societaria. Como son acontecimientos tan heterogéneos, muchas interpretaciones son posibles, incluso las autoritarias y conservadoras. En varias ocasiones, estallidos impulsados por fuerzas democratizadoras y con anhelo de justicia social acaban a lo largo del proceso siendo también apropiados por fuerzas antitéticas a las semillas originales. Eso ocurrió, de hecho, durante toda la década de 2010 tras la emergencia de las protestas de la indignación en el mundo. Es importante distinguir, por tanto, entre el estallido como *evento* y como *proceso*. Para ello, tenemos que asociar el evento en sí (el ciclo de protestas) con temporalidades más amplias, sean ciclos políticos o económicos. Solo así podremos captar los sentidos que orientan las protestas, pero también su sedimentación, apropiaciones y posibles impactos.

Si leemos los estallidos a partir de todas estas dimensiones y no exclusivamente desde sus fragmentos, emerge una serie de retos estratégicos que merecen una reflexión más sosegada. ¿Cómo trabajar con activismos volátiles y con fronteras elásticas? ¿Cómo pensar la continuidad organizativa tras el momento de la eclosión de los levantamientos? ¿De qué manera los formatos organizativos y los sujetos se están adaptando a desafíos centrales de nuestro tiempo histórico? ¿Cuáles son las colaboraciones y tensiones creativas que se pueden generar entre los sujetos emergentes y los más establecidos o entre diferentes generaciones y culturas militantes? ¿Qué aprendizajes principales se pueden extraer, a partir de las experiencias de los estallidos recientes, de las posibilidades, pero también de los límites de transformación social? Para ensayar respuestas a estas cuestiones es fundamental ubicar los estallidos dentro de un proceso más amplio de transformaciones de los sujetos políticos contemporáneos, así como examinar cuáles son los diferentes tipos de sujetos del cambio en juego en (y más allá) de los levantamientos.

Cambios en los sujetos y los sujetos del cambio

Vivimos en las últimas dos décadas una reconfiguración profunda de los activismos y de los movimientos sociales, que están llevando

a accionamientos profundos no solo de los sujetos políticos tradicionales, sino también de la propia “forma-movimiento” social y de las concepciones de transformación social. Mi argumento más general es que experimentamos en la larga transición para este nuevo siglo la *tendencia hacia un progresivo descentramiento de los sujetos políticos*, con consecuencias trascendentales para la comprensión de las acciones, los actores y el cambio social. Veamos algunas de las principales implicaciones de este descentramiento de los sujetos a partir de cinco elementos complementarios que discutiré a continuación.

El descentramiento de la forma-movimiento

Desde hace décadas se puso en cuestión la idea y la práctica de un movimiento social ideal, fuertemente centrado en términos de un conflicto (capital-trabajo), una ideología, una identidad (de clase) altamente cohesionada y espacios-tiempos bien marcados para la conflictividad social. Al menos desde la década de 1960 las izquierdas tratan de reinventarse globalmente, tratando de convivir con una dinámica de progresivo descentramiento de la “forma-movimiento”, que la vuelve más diversa y elástica. Como consecuencia, existe en la actualidad inclinación hacia la existencia de fronteras cada vez más tenues en las colectividades y en las formas de organización. Eso tiene implicaciones en las modalidades de compromiso con la militancia, en la entrada y en la salida de un movimiento y también en la definición de quién es parte o no de una colectividad. Las formas organizativas más abiertas y con tendencias a la horizontalidad, así como la constitución de organizaciones con dimensiones más reducidas (en vez de la búsqueda prioritaria de crear grandes movimientos nacionales) vienen desafiando los formatos tradicionales y los movimientos populares en América Latina.

Los sentidos de lo colectivo y la colectividad son cada vez más heterogéneos y pueden oscilar desde una agregación situacional y momentánea hacia la búsqueda por una integralidad y una interdependencia (y, en algunos casos, una ecodependencia) que busca trascender la suma de individuos. La forma-movimiento clásica se va descentrando progresivamente y emergen nuevas configuraciones político-organizativas que gestan espacios de articulación plural,

de toma de decisión y de distribución de las responsabilidades. Los liderazgos siguen importando, pero suelen ser más informales y compartidos, como muestran algunos de los capítulos del libro.

A la vez, la permeabilidad y el tránsito permanente hacen que sea muy difícil hoy ejecutar cualquier ejercicio de tipologías sobre los sujetos. Por ejemplo: la habitual división entre sujetos “tradicionales” (consolidados) o “emergentes” (nuevos) parece insuficiente para captar las dinámicas de adaptación e innovación de los sujetos. Lo mismo ocurre si los clasificamos como sujetos “organizados” o “no organizados” (u otros términos como atomizados o fisurados), puesto que suelen presuponer un modelo ideal de organización y clasificar los demás como insuficientes o “no organizados”, sin discutir las reconfiguraciones y los dilemas de la organización política en la actualidad. No sin razón, las voces investigadoras y militantes que firman colectivamente el segundo trabajo sobre Chile⁵ explicitan su incomodidad frente al hecho de que muchas veces quienes definen ciertos sujetos y espacios como “no organizados” suelen perder de vista que precisamente ahí pueden estar emergiendo nuevas formas de organización social y política.

El descentramiento de la forma-movimiento presupone, como alternativa a las lecturas dicotómicas, el entendimiento de un proceso en dinamismo constante. A partir de la identificación de una tendencia se buscan las configuraciones sociopolíticas y no un tipo ideal. Eso es clave en un momento de transiciones y redefiniciones de sujetos diversos, en algunos momentos generando confluencias, y en otros, fragmentaciones y bloqueos.

En el caso concreto de aquellos que habitualmente son definidos como “no organizados” y que son parte de esta masa de individuos y pequeñas colectividades que pasan a movilizarse en los estallidos, se torna fundamental examinar con lupa la variedad de casos y situaciones, desde nuevas colectividades hasta individuos sin experiencia militante previa o vínculos con organizaciones sociales y políticas que se suman a las protestas. Es el caso de los “azules y blancos”

5 “R de Revueltas / Un relato colectivo y champurrea (mestizo) del 18-O en Chile”, p. 173.

analizado en el capítulo sobre Nicaragua⁶ y de aquellos definidos habitualmente como “autoconvocados”. Antes que rotularlos rápidamente como “individualistas”, “masa de maniobra”, “emprendedores de sí mismos” u otras etiquetas que tienden a ubicarlos, con frecuencia, en un espectro ideológico conservador o, al menos, antimovimentista, hay que entender mejor quiénes son, qué quieren, por qué se movilizan, en qué medida pueden pasar, en el proceso de desborde y de apertura societaria, a apoyar no solo propuestas vinculadas a las derechas, sino también a las izquierdas. Tampoco se trata de una multitud homogénea, por lo cual es clave tratar de entender y mapear posturas ambivalentes y contradictorias (por ejemplo, a veces abiertas en el terreno moral y de las costumbres, a la vez que conservadoras en lo económico, o viceversa).

Diversidad de tipos de sujetos

Hasta los años noventa del siglo pasado, casi todo lo que teníamos en términos de organización y de autodefinición se vinculaba a cinco formas asociativas y organizativas principales: partido, sindicato, movimiento, comunidad y red. Con estas cinco nociones cubríamos prácticamente casi todo el espectro del “movimentismo” y de la acción política transformadora. En la actualidad el mapa es mucho más plural, pero también más fragmentado, como muestran los artículos del presente libro al tratar de reconstruir la composición social de los estallidos y la variedad y plasticidad del tejido social y asociativo contemporáneo.

En mi propia actuación como investigador y militante puedo testimoniar que hace algunos años en Río de Janeiro, en conjunto con la organización de educación popular FASE, hicimos una serie de talleres que contaron con el apoyo de la oficina de São Paulo de la Fundación Rosa Luxemburg y reunieron decenas de activistas y “movimientos”. Uno de los ejes principales de debate de los talleres formativos fue precisamente la diversidad de los sujetos y emergieron muchísimas autodefiniciones: comité, colectivo, asamblea, frente,

6 “Otras formas de luchar son posibles / El movimiento azul y blanco en Nicaragua”, p. 43.

articulación, *rolé*, casa, quilombo, consejo, marcha, escuela, espacio, grupo, brigada, proyecto, comuna, levante, aldea, quintal, etc.

Eso nos llamó la atención porque prácticamente ninguno de esos sujetos se definía como “movimiento”, aunque podrían ser fácilmente identificados con lo que habitualmente entendemos como movimiento social. A partir de las lecturas que los propios sujetos hacen de sí mismos y del contexto que les rodea podemos avanzar mejor en un intento de interpretación de los actores contemporáneos y sus dinámicas de articulación. Aunque los estallidos son momentos excepcionales, nos permiten, debido a su carácter masivo, percibir cómo coexisten diferentes ejes de conflicto social y casi todas aquellas voces que se sienten excluidas del sistema y que sufren las injusticias y consecuencias de las decisiones de las élites. El hilo delicado que permite articular mínimamente tamaña diversidad se constituye casi siempre por colectivos, redes descentralizadas y coordinadoras o plataformas que se forman para tratar de agregar temporalmente demandas y energías sociales.

Identidades multirreferenciales y plurimilitancia

El cambio en las identidades políticas y en la política de identidades es otro elemento clave de las transformaciones de los sujetos contemporáneos. Hay una dificultad enorme en construir hoy identidades estables y con fuerte adherencia. Casi todas las personas activistas participan de una infinitud de espacios y esta dinámica de plurimilitancia forja también identidades múltiples.

Esta tendencia está estrechamente relacionada a algunos de los cambios societales contemporáneos previamente aludidos que operan como “desafíos estructurales” para las luchas: por un lado, la digitalización de la sociedad forja no solo un uso más activo de las redes sociales y de los medios digitales de comunicación (Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal, TikTok, etc.), sino también otras formas de relacionarse con el otro y con la política. Por otro, la creciente individualización de las sociedades, aunque contrarrestada parcialmente por la persistente fuerza comunitaria todavía existente en nuestra región, ha llevado también a una autonomía cada vez mayor del activista/militante dentro de los procesos colectivos.

En los estudios reunidos en el libro hay muchas muestras de voces de participantes en los estallidos que enfatizan la singularidad y la dimensión de las emociones como clave para entender *su* inserción en las protestas. Por ejemplo, María Angélica Prada-Uribe y Andrea Lopera muestran de forma detallada en su investigación⁷ cómo se produce en el caso colombiano una mezcla contradictoria de esperanza, solidaridad, orgullo, rabia, miedo y ansiedad en las experiencias activistas, algo que reaparece, de diferentes maneras, en prácticamente todos los estudios del libro.

Esto importa a la hora de reflexionar sobre los sentidos del “nosotros” en las colectividades contemporáneas. En los estallidos parece haber más dinámicas de identificación entre sujetos heterogéneos que identidades colectivas. A la vez, la diversidad de sujetos experimentando los mismos espacios sin compartir necesariamente las mismas visiones apunta a otra dimensión de la coexistencia tensa entre diferentes tipos de sujetos colectivos. Si tras los estallidos se logra seguir politizando la sociedad, generando tejido asociativo y espacios deliberativos y de encuentro, así como formas de incidencia política en diferentes niveles, seguramente el paso hacia la creación de identidades colectivas se produzca, aunque, como nos muestran las investigaciones sobre los casos chilenos, estas son más fluidas y crecientemente multirreferenciales.

Los anclajes de los sujetos

Los cambios hasta ahora mencionados en los sujetos tienen mucha relación con cómo se producen sus “anclajes” posicionales, socioeducativos y subjetivos. En lo que atañe a los anclajes posicionales, importa sobre todo pensar tres elementos: la estratificación social y sus impactos en la composición social de los sujetos que participan de los estallidos (clase, raza, etnia, género, etc.), el vínculo territorial de las acciones y los actores, y también las posibles dinámicas de cruce e interseccionalidad de sujetos y temas. En este sentido, los estudios reunidos en el libro muestran algunos elementos interesantes:

7 “Parar para avanzar / Sentir y actuar el paro nacional de 2019 en Colombia”, p. 231.

a) en aquellos lugares donde los estallidos tuvieron mayor anclaje territorial, tuvieron mayor facilidad para que el proceso sobreviviera allende las protestas; b) aunque haya un protagonismo de jóvenes, estos tienen perfiles y pertenencias diferentes con cruces culturales, étnicos, ideológicos y de género muy variados; c) debido a su protagonismo, el ecologismo y los feminismos lograron transversalizar buena parte de las luchas y sujetos, más allá del movimiento feminista y del ambientalismo, poniendo en el centro de las agendas políticas los debates sobre clima, cuidados, desigualdad de género, justicia ambiental, entre otros. Sin embargo, eso no significa que se genere necesariamente mayor articulación política entre sujetos distintos, ni tampoco una comprensión convergente sobre cómo actuar ante estos temas.

En términos de anclajes socioeducativos importa especialmente examinar cómo se produce la socialización política y la sociabilidad militante. Ese es un punto absolutamente crítico hoy. Muchos de los sujetos y de los espacios/instituciones que hasta hace poco tiempo detentaban casi exclusivamente el papel de la formación y de la socialización política en América Latina han sido desplazados y desbordados como instancias centrales de la formación militante. Esto está asociado a varios factores superpuestos: la alteración de la composición y de la estructura familiar, el cambio en las formas de mediación territorial y de trabajo junto a las comunidades, la deslegitimación de los partidos tradicionales y de las organizaciones jerárquicas y verticales que poseen perspectivas formativas muy cerradas, la disputa cultural y militante por parte de sectores conservadores o el protagonismo de pequeñas redes de afinidad en la circulación de información y en la politización.

Finalmente, los anclajes subjetivos están asociados a las bases existenciales y a la tensión entre aquello que Koselleck define como “horizonte de expectativas” y “horizonte de posibilidades”. En este punto, es patente la inestabilidad, la incertidumbre y la rabia como potenciadoras de la indignación. La desestabilización de las instituciones, de las prácticas, la informalidad, la precariedad o la ausencia de trabajo lleva a una angustia del presente y a una especie de “achicamiento” del futuro, plasmado en las maneras de percibir el porvenir de multitud de jóvenes.

La cuestión generacional es clave puesto que permite analizar el modo a través del cual, desde los estallidos, se construyen narrativas y mitos fundacionales y se disputan proyecciones, muchas veces a partir de una contraposición discursiva, performática y estética entre lo viejo y lo nuevo, como queda patente en el caso chileno. La construcción de esta operación de oposición entre lo pasado y lo presente no es una novedad. Lo determinante es percibir cuáles son los sentidos atribuidos a lo viejo y a lo nuevo hoy. Es a partir de estas tensiones (pero también de colaboraciones) generacionales, organizativas y de formas de comprender la política y el mundo, que podemos ubicar algunos de los “nudos críticos” – tal como se define en el segundo trabajo sobre Chile, previamente referenciado– para lograr avanzar hacia una política emancipadora para el siglo XXI.

Multiescalaridad de los sujetos y las luchas

La articulación entre diferentes escalas es una de las discusiones que más ha avanzado en los últimos años en cuanto a acción política contemporánea. Luchas localizadas que no son localistas, sino que se abren a articulaciones más amplias, suelen tener más fuerza que aquellas que se aíslan demasiado en sus propios territorios. En el caso de los estallidos, hay una interesante intersección entre cuatro escalas principales: el cuerpo, el barrio/la comunidad, la localidad y el Estado nación.

Es interesante observar cómo lo “local” pasó a estar saturado de espacialidades y significaciones que redefinen las fronteras del conflicto y de la geopolítica del poder y de las resistencias. De hecho, varios ejercicios colectivos de cartografía crítica en nuestra región muestran cómo los sujetos territorializados viven y representan los lugares con una riqueza enorme de artefactos, referencias, relaciones y sensibilidades que trascienden las concepciones más formalistas y oficiales de lo “municipal”. En los estallidos esta densidad multilocal se combinó con una fuerte interpelación al Estado y a los Gobiernos nacionales, aunque también, en muchos casos, se ensancharon los sentidos de lo plurinacional.

En términos supranacionales y propiamente regionales, no son muchos (al menos todavía) los contactos directos entre los diferentes estallidos y sus protagonistas, aunque sí existe —así como ocurrió en todas las demás protestas de la indignación de la última década— una fuerte dinámica de adaptaciones creativas, inspiraciones y resonancias entre ellos. En los estallidos de Perú de 2020 y de Colombia de 2021 los ecos chilenos eran constantes. El debate sobre la constituyente en Perú, por ejemplo, difícilmente habría surgido como lo hizo sin la influencia del proceso chileno. Todo eso permite reconstruir una nueva narrativa desde abajo, pero no restringida a los movimientos sociales, sobre la América Latina contemporánea que refuerza la idea de “pueblos en movimiento”, según sugiere Raúl Zibechi.

Cambio social, impactos de los estallidos y porvenires de la transformación

Los cambios en los sujetos y la posibilidad de apertura de nuevos porvenires posibilitados por la emergencia de los estallidos recientes en América Latina nos llevan a preguntarnos sobre el día después de la explosión. Aunque la mayoría de los textos del libro no abordan directamente los impactos de los estallidos, puesto que buscan captarlos en sus despliegues, esta es una preocupación central de las reflexiones sobre Perú y de la conversación sobre los casos de Chile y Colombia al final del libro⁸. Además de las pistas ofrecidas por Carmen Ilizarbe, Alejandro Mantilla y Pierina Ferretti, avanzaré, a modo de cierre, en algunos otros puntos.

Durante mucho tiempo, el debate sobre los impactos se restringió principalmente a lo visible y a los efectos político-institucionales, mientras que el cambio social pasaba inevitablemente por dos vías principales: las reformas o la revolución. Tanto el pensamiento hegemónico como la izquierda estadocéntrica contribuyeron a reforzar estas visiones, según las cuales el impacto se podría casi siempre medir y observar (a partir de una política pública concreta, por ejemplo) y

8 “Que la cuna del neoliberalismo sea también su tumba / Una mirada actual de la región a partir de Colombia y Chile”, p. 313.

sería principalmente orientado al Estado. Sin embargo, estas miradas –todavía bastante extendidas– son muy parciales y no dan cuenta de las diferentes dimensiones, escalas y temporalidades del cambio social.

Los impactos de los estallidos, por tanto, deben ser considerados desde su multidimensionalidad. Pueden ser: a) individuales/biográficos: marca biográfica y en las trayectorias y cambios resultantes de las experiencias de politización (como muestran las entrevistas del caso de Nicaragua, pero también Chile y otros); b) culturales: transformación de los códigos culturales (Chile y Colombia) y disputas en el ámbito de las narrativas e imaginarios; c) basados en reivindicaciones específicas (caso de Colombia, Ecuador y Chile); d) político-institucional: cambio de Gobierno (Perú), cambio constitucional (Chile, quizá Perú); crisis/cambio de régimen (Chile y quizá Colombia); e) socioterritoriales: fortalecimiento de la autogestión, de los tejidos comunitarios, de la autonomía territorial y de la organización social local (parcialmente en Colombia, de forma más avanzada en Chile).

Estos diferentes tipos de impactos se imbrican de formas variadas con tensiones y complementariedades. Pero no se producen solo por la “recepción” en la sociedad y en las instituciones de las demandas de los sujetos. Son también forjados por los propios sujetos según sus estrategias políticas. Aquellos que enfatizan más el impacto institucional tienen, como sabemos, perspectivas y estrategias distintas a las de quienes dan mayor centralidad al impacto socioterritorial. Sea como fuere, un estallido solo tendrá impactos profundos cuando logre articular varias de estas dimensiones, trascendiendo lo coyuntural y lo inmediato. A la vez, será más exitoso si consigue desafiar los códigos y ciclos políticos imperantes para abrir una nueva era.

Nada de eso está todavía suficientemente asentado y claro en los estallidos latinoamericanos recientes, pero su recorrido en el período 2018-2021 parece indicar que el tiempo que sigue en la región será turbulento y que el horizonte todavía está abierto y en disputa. El fin del ciclo progresista llevó a muchas discusiones sobre qué emergería en su lugar. Para muchos, habría surgido un nuevo ciclo, dominado por las derechas tanto en los Gobiernos (con expresiones diferentes como Jair Bolsonaro, Mario Abdo, Luis Lacalle

Pou, Sebastián Piñera, Guillermo Lasso o Iván Duque) como en sus influencias culturales y sociales. Para otros, el “ciclo progresista” no habría terminado, sino que estaría regresando, debido al “retorno” en ese mismo período, entre 2018 y 2021, de muchos Gobiernos que estarían supuestamente alineados con los progresismos en la región, como son los casos de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Luis Arce o Pedro Castillo (con dificultades mayores ahora para lidiar con las derivas cada vez más autoritarias de Daniel Ortega y Nicolás Maduro).

Ambas perspectivas son equivocadas y precipitadas para definir el actual momento latinoamericano. La idea de un retorno de la hegemonía progresista es más un deseo de intelectuales y políticos vinculados a estos mismos sectores que una realidad, por mucho que algunos Gobiernos de este signo puedan seguir ganando elecciones. Tampoco hay indicios sólidos y vectores determinantes que apunten a un “giro” contundente hacia la derecha, que implique una reorganización clara de la política y de la sociedad en las próximas décadas. Que hayan emergido “nuevas derechas” y que hoy sean más protagónicas, tales como discutimos de forma exhaustiva en el anterior libro del Grupo Permanente⁹, no significa que marcarán las pautas del próximo ciclo político.

En vez de una opción u otra, el escenario parece abrirse más bien hacia lo contingente y contradictorio, así como a una intensa disputa entre orientaciones diversas que están, en el actual momento, buscando repositionarse: a) una reorganización de las izquierdas, críticas con los “progresismos”, con intentos locales y nacionales de recomponer nuevas mediaciones, instrumentos, organizaciones e imaginarios políticos, bajo la centralidad de la política territorial y de una sensibilidad anticapitalista, anticolonial, antirracista, ecologista y feminista; b) los intentos de los progresismos de no sucumbir definitivamente (lo que se expresa, por ejemplo, en los reacomodos del MAS en Bolivia o la apuesta de Lula da Silva por las elecciones generales de 2022 en Brasil); c) las recomposiciones de las derechas que se autodefinen como liberales y moderadas, amenazadas por proyectos diversos que las han rebasado, siendo el macrismo en Argentina

9 *Nuevas derechas autoritarias / Conversaciones sobre el ciclo político actual en América Latina.*

todavía el ejemplo fundamental; d) el intento de manutención y expansión de derechas autoritarias y radicales, que siguen tratando de ganar espacio ante la crisis de los sistemas políticos, aunque con mayores dificultades tras la derrota de Donald Trump en su intento fallido de reelección en Estados Unidos.

Este complejo escenario es habitual en los momentos de transición entre ciclos y por ello es muy apresurado determinar un sentido o una tendencia clara. De hecho, lo más interesante del momento actual latinoamericano es la *asincronía entre los procesos políticos en marcha*. Esto se puede observar de maneras diversas en los países que vivieron o no estallidos recientes. En el caso de Colombia, los estallidos de 2019 y 2021 y la ascensión de la izquierda y de un centro renovado parecen apuntar a una crisis terminal del uribismo. En Ecuador, la disputa entre la izquierda ecologista, indigenista, juvenil y feminista y el correísmo fue tan dura, tras años de criminalización y de persecución a los movimientos, que se produjo un profundo *impasse*. En Chile, a su vez, el levantamiento de 2019, precedido por intensas movilizaciones principalmente estudiantiles y feministas, culminó en un proceso constituyente histórico que busca abrir un nuevo ciclo y pasar página a la herencia de la dictadura y a un modelo desigual insoportable para la población. Mientras tanto, en Perú el fujimorismo fue derrotado electoralmente, aunque todavía está por verse la orientación del Gobierno de Castillo y las articulaciones desde la sociedad. Finalmente, en Nicaragua la represión del régimen y las violaciones a los derechos humanos aumentaron todavía más a pesar de las denuncias y las protestas en un contexto altamente hostil para la militancia crítica y transformadora.

La apertura societaria provocada por los estallidos, aunada al escenario de fondo que está detrás de estos, hace que el momento sea favorable para una renovada radicalidad política. Pero esto exige evitar que las derechas se apropien de los sentidos de la indignación, a la vez que aprender de los errores de iniciativas y experiencias que, tras los levantamientos recientes de la indignación en otras latitudes, acabaron muchas veces reproduciendo aquello que en su origen criticaban: dependencia de liderazgos carismáticos, pérdida de pluralidad e incapacidad para gestionar la diversidad, falta

de democracia interna en la formación de nuevas colectividades y organizaciones políticas o énfasis excesivo en refundar la política institucional, descuidando la política territorial. A pesar de los enormes desafíos por delante, América Latina tiene, una vez más, el reto y la oportunidad de estar al frente de la reinención de la política transformadora y de alumbrar nuevos mundos posibles.



NICARAGUA

OTRAS FORMAS DE LUCHAR SON POSIBLES |

El movimiento azul y blanco en Nicaragua

YERLING MARINA AGUILERA ESPINOZA¹

1 Socióloga. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales.

*La lucha es como un círculo,
se puede empezar en cualquier punto,
pero nunca termina.*

SUBCOMANDANTE MARCOS

Introducción

En abril de 2018 inicia un nuevo ciclo de protestas en Nicaragua. Desestabilizando las lógicas económicas, políticas y sociales, estos levantamientos abrieron diversas ventanas para pensar y analizar diferentes maneras de hacer política en el siglo XXI. Nuevas subjetividades, formas de organización y modos de articulación política con dinámicas horizontales y autónomas vinieron a expresar el desencanto hacia las estructuras tradicionales de participación. Los denominados movimientos sociales emergentes nos llevan a analizar sus contextos de irrupción desde renovados enfoques que nos permitan entender las apuestas por el cambio social. Apuestas que no pasan, necesariamente, por agendas políticas estructuradas sino por cambios que se viven y experimentan en la inmediatez de la protesta, criticando patrones como el caudillismo, el sacrificio y las dinámicas patriarcales.

El presente texto fue parte de una investigación² más amplia enmarcada en el análisis de las motivaciones que llevaron a diversos sectores de la sociedad a vincularse con la insurrección en Nicaragua, sus vivencias durante las protestas, la solidaridad que

2 Se realizaron doce entrevistas semiestructuradas a partir de abril de 2020 a personas que participaron en las protestas de 2018, y que recogen voces heterogéneas del movimiento azul y blanco; también se llevaron a cabo trescientas ochenta y nueve encuestas, de manera virtual. Este trabajo se fundamenta en esos instrumentos, de allí se toman tanto los testimonios citados como algunos datos aportados.

logró sostenerlas y los aprendizajes posteriores al dismantelamiento de la toma de las calles por parte del Gobierno. Por cuestiones de síntesis, este trabajo se centra en la dimensión que permitió articular las protestas desde la solidaridad, la autonomía y la horizontalidad del movimiento como elementos identitarios, así como en las experiencias de las personas participantes para comprender los cambios que tenían como objetivos desde una visión al margen de la toma del poder.

El análisis no parte de esquemas que juzgan las acciones colectivas a partir de triunfos o derrotas. Los movimientos sociales expanden otras maneras de hacer política al margen de estructuras tradicionales, irrumpiendo en un contexto donde la población siente poca simpatía por la política formal institucionalizada. Los movimientos sociales emergentes en Nicaragua no tienen una agenda estructurada o no presentan un plan de futuro, pero lo empiezan a enunciar y llevar a cabo a través de maneras más creativas desde la insurrección con la toma de las calles, la ocupación de espacios universitarios y la instalación de tranques y barricadas que visibilizan sus primeros anhelos de otro mundo posible. Podemos leer los cambios sociales que ponen de manifiesto estos movimientos desde marcos que no están necesariamente regidos por estructuras jerárquicas, sino activados en sus propias dinámicas de reconstrucción del tejido social. Vemos estos acontecimientos como “mediadores evanescentes” que, aunque desaparezcan, conectan desde sus acciones presentes con ideas de mundos más justos, porque cristalizan, en el día a día, pequeñas transformaciones susceptibles de impregnar luchas venideras.

La disputa en las calles: la insurrección de abril

En abril de 2018 Nicaragua vivió una ola de movilizaciones masivas que desembocó en toma de universidades, barricadas y tranques en las carreteras. Las manifestaciones lograron articular un conjunto de luchas, reivindicaciones y demandas que, si bien fueron explosivas y canalizadoras del descontento, se encontraban aisladas entre sí producto de la represión gubernamental. Protestas contra los fraudes

electorales, la ley de penalización del aborto y el canal interoceánico encontraron en la revuelta de abril un espacio de articulación, un campo de expresión colectivo para denunciar y confrontar las prácticas autocráticas del Gobierno de Daniel Ortega. Esta articulación de estudiantes, trabajadoras y trabajadores, feministas y otros sectores sociales, fue conocida, al calor de la revuelta, como el “movimiento azul y blanco”, significante que funcionó como aglutinador de una expresión popular.

A pesar de que el detonante inicial se enmarcó en la condena a la mala gestión del Gobierno frente a la quema de la reserva Indio Maíz³ y al paquete de reformas a la Seguridad Social⁴, las protestas devinieron rápidamente en una muestra colectiva de hartazgo y profundo rechazo hacia el escenario de reformas implementadas por el presidente Daniel Ortega. Desde su retorno al poder, en 2006, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha instrumentalizado instituciones y mecanismos legales para llevar a cabo un rediseño de los poderes estatales y acomodarlos a sus intereses. Sirviéndose de pactos políticos y alianzas con élites económicas, Ortega y el FSLN han logrado consolidar una estrategia de control que no solo ha reducido la oposición política y desmantelado la participación plural, a través de las estructuras partidistas, sino que también ha institucionalizado la violencia para gestionar y reprimir los conflictos sociales (Sánchez & Osorio, 2020).

En este contexto, estudiantes, jóvenes, feministas y otros sectores sociales, se articularon en torno a un núcleo de demandas democráticas y destituyentes que exigían la salida de Daniel Ortega y la “desaparatación” de las instituciones estatales que sirven como extensión del partido oficial, condenaban las violaciones de derechos humanos y rechazaban la represión. La respuesta gubernamental no se

3 La reserva de Indio Maíz es la segunda reserva biológica más importante de Nicaragua. El 3 de abril de 2018, se produjo un incendio en la comunidad de Siempre Viva que, días más tarde, dejó un saldo de más de cinco mil hectáreas arrasadas por el fuego.

4 Para esos días, jubiladas y jubilados de diferentes organizaciones gremiales instaron a la ciudadanía en general a manifestarse en contra de las últimas reformas que venían a deducir el 5% de las pensiones de vejez para gastos de salud (Munguía, 2018).

hizo esperar. Fuerzas de choque y paramilitares arremetieron contra las personas manifestantes con violencia, atizando el descontento. La denominada “operación limpieza”, a mediados de julio de 2018, desmanteló los tranques de carreteras y la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Luego de veinte horas de ataque armado, estudiantes y ciudadanía fueron desalojados del recinto universitario, dejando como resultado el asesinato de dos jóvenes (Amnesty Internacional, 2018).

Estas protestas se iniciaron de forma espontánea, sin ninguna tutela política y aprovechando el anonimato que muchas veces proporcionan las redes sociales. Vale mencionar como antecedente cercano el #OcupaInss, convocatoria a las protestas de 2013, que acompañó la lucha de ancianas y ancianos en sus protestas por la reducción de pensiones en el sistema de seguridad social. Las convocatorias, a través de las redes sociales, conformaron un espacio ajeno a canales tradicionales de estructuras y poderes políticos, constituyéndose, como apunta Reguillo (2013), en una forma de desestabilizar el monopolio de los saberes legítimos y centros de irradiación acreditados. Fueron un foco que expresó, al mismo tiempo, el hartazgo de las representaciones tradicionales, como los partidos políticos movilizadores del discurso, y produjo vías alternas de canalización del descontento social, ampliando de esta forma el eco de las protestas.

Las sombras de la memoria: una izquierda a la derecha

Nicaragua ha estado atravesada en los últimos cien años por frecuentes levantamientos sociales y armados que, en algunos casos, han tomado por asalto el poder, tales como la lucha armada de Sandino (1927) en contra de la ocupación de Estados Unidos en las montañas de Las Segovias, y la Revolución Sandinista (1979). Estos ecos del pasado están muy presentes en la reciente insurrección cívica de 2018. Los sujetos manifestantes abrevan de sus precedentes históricos y se apropian de un repertorio que ha formado parte de la revolución sandinista: consignas como “Patria libre para vivir”, que interpela y cuestiona el carácter de sacrificio y violencia de la

consigna original “Patria libre o morir” (levantada durante la lucha armada sandinista en contra de la dictadura de Somoza); “Que se rinda tu madre”, y canciones de protesta que había utilizado tradicionalmente el FSLN; disputa por los referentes del sandinismo a partir de pintas en los barrios, con colores azul y blanco, de figuras de combatientes sandinistas asesinados durante la insurrección contra Somoza; y monumentos de Sandino. Todo esto como estrategias para contrarrestar los usos y apropiaciones del legado revolucionario que había hecho Daniel Ortega en un intento por reforzar su imagen para el poder personal y partidista (Aguilera, Mosinger & Thaler, 2018).

La memoria histórica heredada de la revolución sandinista sirvió como impulso para un sector de participantes en la insurrección cívica, por cuanto es más difícil que la gente sienta motivación de vincularse a una acción colectiva, sobre todo de tipo radical, sin que nadie lo haya hecho antes o si en la memoria no figuran antecedentes parecidos. En las entrevistas realizadas se encontró que algunos jóvenes venían de familias que estuvieron vinculadas a la revolución sandinista:

Yo fui parte de la Juventud Sandinista durante años, hasta el 2016, fui a escuelas de cuadros... tenía que seguir lineamientos y ya no me convenían. Luego me aparté, aunque seguía participando en actividades partidarias. Tenía malestares y yo de manera personal me crié con la idea del enamoramiento de lo que fue la revolución, de la lucha. Mi mamá fue parte de la Federación de Estudiantes de Secundaria y movimientos estudiantiles que se organizaron. Ella me contaba toda esa historia de lucha en el contexto de Somoza, pero luego había algo que no terminaba de convencerme (mujer joven, comunicación personal).

Vemos cómo la memoria histórica se traslada a las personas que participaron en la insurrección cívica desde lo más individual, al disponer de antecedentes familiares de resistencia. Aguilera, Mosinger & Thaler (2018) sostienen que el FSLN, una vez en el poder, pudo haber proporcionado a la generación más joven los medios para intentar derrocarlo. Ese repertorio se dio a través de la circulación de una narrativa insurreccional que luego se manifestó

en el uso de símbolos. Los movimientos sociales que salen ahora a las calles, como el azul y blanco, no solo plasman o reivindican nuevas formas de organizarse, sino que integran narrativas donde el sacrificio ya no es parte del horizonte de lucha, vuelven su mirada sobre lo concreto (Hinkelammert, 2007): la defensa de la vida y lo que la sostiene frente a las grandes abstracciones, como lo fue una “revolución” que en la práctica les traicionó y ahora opera a la derecha, saliendo incluso a asesinar gente que protesta. Estas nuevas maneras de lucha vienen a cuestionar los grandes relatos abstraídos de la vida cotidiana, que han servido para justificar la violencia de Gobiernos autoritarios que, amparados en la supuesta defensa de la revolución, han afinado sus métodos represivos y se han perpetuado en el poder.

Lo ocurrido en Nicaragua revela que los procesos recientes de derechización en América Latina no solo desplazaron Gobiernos progresistas de las presidencias en países como Brasil y otros de la región, sino que derechizaron algunas prácticas en estos, al punto de generar cambios radicales en su carácter, que hábilmente siguen capitalizando viejas narrativas y apoyos de algunas izquierdas internacionales. Nuevamente, estamos ante serias borrosidades en la distinción izquierda/derecha que ameritan discusión, sobre todo por los sentidos que las poblaciones otorgan a las izquierdas. Borrosidades que comportan un grave síntoma de descomposición política, con alto impacto en la legitimidad de las izquierdas en tiempos donde estas se encuentran en una encrucijada histórica⁵, expresada, por ejemplo, en el brutal nivel de represión del Gobierno de Ortega y sus grupos de choques paramilitares que confrontaron las protestas populares.

Autonomía, horizontalidad y solidaridad autoconvocada

El movimiento azul y blanco logró sostenerse gracias a la capacidad de una ciudadanía organizada en diferentes redes de apoyo a la gente que salió a las calles. Esta solidaridad que se da entre manifestantes, junto a la red de personas que la sostiene, es el primer aviso

5 Agradezco por esta retroalimentación de las derivas de la izquierda a Emiliano Terán Mantovani.

de que no se necesita permiso de partidos políticos para tomar las calles, que se puede funcionar al margen de estos en pos de autonomía; gesto que permite levantar la moral durante las protestas frente a una avasalladora máquina represiva, y que facilitó el cuido entre participantes, aun cuando la mayoría no se conocía. Esta solidaridad se constituye en primer eslabón de nuevas relaciones que pueden ser base de un cambio social, fuente de un sentido de comunidad y acompañamiento; base ética para crear realidades alternativas que no caben en las prácticas de la política instituida, porque los cambios no siempre pasan por la toma del poder, sino por la reconstrucción de dinámicas sociales impregnadas por otros valores.

La mayoría de las personas encuestadas consideró que la solidaridad en las manifestaciones fue muy alta, una forma en que el movimiento, y cada persona en la insurrección, renunció a tuteladas tradicionales para convertirse en agentes importantes en el sostenimiento de la lucha: desde la persona que cocinaba para alimentar a quienes estaban en las universidades, hasta el vecino o vecina que notificaba cuando la policía y las fuerzas de choques se acercaban. En tal sentido, la toma de los espacios públicos logró mantenerse gracias a la gente de los alrededores que acuerpó principalmente al estudiantado. Un exatrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua lo expresa de este modo:

[Comprendí] que “solo el pueblo salva al pueblo”. Miré que hasta incluso los vendedores ambulantes fueron solidarios. Yo entendí que el pueblo, aunque no tenga que comer y solo tenga un bocado, va a ofrecer lo poco que tiene. Aunque el pueblo tenga poco, es tan maravilloso que lo da todo, es algo bastante satisfactorio ver que la gente nos apoyaba (hombre joven, comunicación personal).

Un factor también clave para la toma de las universidades fue el apoyo de los barrios aledaños que proporcionaron suministros necesarios para la sobrevivencia. Los barrios configuraron un laboratorio de solidaridad a la vez que un bloque de defensa y contención; un espacio organizado para la sobrevivencia de las protestas y la protección de estudiantes activos en ellas. Parte de la cadena que soportó las movilizaciones, eran vecinas y vecinos que decidían el momento de realizar una asamblea para solicitar insumos o para organizar

la seguridad frente a la posible incursión de las fuerzas de choque. Este proceder fue dotando de cierta autonomía al movimiento azul y blanco, y le permitió despachar intentos de partidos y otras agrupaciones de oposición por capitalizar el descontento.

Fueron muchos grupos los que intentaron aprovecharse de la lucha y mandaron gente a las universidades para preparar ese terreno, pero nosotros ya sabíamos por lo que venían. Lo mismo hicieron con la UPOLI⁶ y lo que hicieron fue ensuciar la lucha. Igual el partido MRS⁷ trató de mandarnos a sus emisarios, pero no fueron aceptados, porque lo primero que queríamos era quitar a los partidos zancudos, porque por culpa de ellos estábamos atravesando todo esto. También fueron grupos de la Alianza Cívica⁸ que enviaron a sus estudiantes intentando persuadirnos de que entregáramos el recinto porque ellos ya estaban arreglándolo todo, según ellos nos trataban de convencer, pero nunca dimos pauta (joven hombre, comunicación personal).

El desencanto con los partidos políticos se produce en un contexto donde domina el bipartidismo pactista entre el partido del FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista, donde muchas personas no se sienten políticamente representadas, principalmente jóvenes. Por ello, estas movilizaciones tuvieron una fuerte composición juvenil que recogió la experiencia de una generación que creció escuchando y viendo pactar a las élites políticas con miras a perpetuarse en el poder. Estas juventudes, siguiendo a Zibechi (2018), vienen de espacios de socialización no jerárquicos, o donde las jerarquías no tienen un rol preponderante. Por tanto, marcan distancia con estructuras verticales, autoritarias, patriarcales o eclesiásticas (en el caso de las feministas), desvinculándose de esquemas opresivos y rescatando la autonomía y la solidaridad. Es un ejercicio prefigurativo que, a diferencia de los movimientos nicaragüenses de los sesenta y setenta, refleja una política de autoorganización, autogestión, participación

6 Universidad Politécnica de Nicaragua.

7 Movimiento Renovador Sandinista, fundado por disidentes del FSLN. Actualmente, Unión Democrática Renovadora-UNAMOS.

8 La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) es una organización formada en mayo de 2018.

y democracia directa que desborda las lógicas de las reformas del Estado y la toma del poder estatal (Sitrin, 2010).

Es preciso señalar que parte de las personas encuestadas no tuvieron como experiencia política previa la militancia en ningún partido, sino que han estado vinculadas con movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG), espacios que permiten prácticas menos verticalistas e interacciones entre jóvenes, desde donde se esbozan incluso narrativas más críticas a estructuras tradicionales. Asimismo, hay que subrayar que con la expansión de las ONG también se establecen otros espacios para incentivar la participación política, ocupados en su mayoría por jóvenes, donde se empiezan a plantear críticas al sistema constituido e intentar sacudirse viejos modos de hacer política, heredadas de años de guerra y luchas guerrilleras. Al rechazar estas ataduras tradicionales que muchas veces limitan la acción colectiva, los nuevos movimientos sociales, como el azul y blanco, se convierten en “organizaciones vivas” que funcionan como redes, sin centro ordenador, una cultura organizacional a través de la cual apelan a la horizontalidad y la autonomía:

... como un sello defensivo, como la forma de asegurar que en el espacio no interviniera nadie ajeno que lo distorsionara. Por el contrario, la autonomía es una posibilidad, la de hacer algo distinto, incierto. Una buena muestra de autonomía sería llevar hasta el final la concepción no instrumental de la organización y la lucha. Eso supone correrse de la centralidad de la política, darse otros tiempos, pensar acerca de las razones por las que se hace algo. Es cierto que es imposible desengancharse totalmente de los tiempos que impone el sistema. Pero entre seguirlos en todos los casos y buscar darse algún tiempo propio marcado por las necesidades interiores de los colectivos, media una distancia considerable (Zibechi, 2018, p. 137).

La autonomía se manifestó desde el día cero de las protestas. Hubo muchos momentos en que se inició una marcha y luego se unieron más personas en el trayecto. Cuando la marcha finalizaba, se iniciaba de forma continua y espontánea otra marcha, porque había gente que se enteraba tarde de las convocatorias. En resumen, hubo días en que se desarrollaron más de tres movilizaciones masivas y no era posible saber dónde arrancaban y dónde terminaban, puesto

que las personas se incorporaban en cualquier punto y momento. Cuando una universidad tomada por el estudiantado era desalojada por las fuerzas paramilitares y de choque, las juventudes estudiantes iban a acompañar tomas de otros centros educativos que habían logrado mantenerse en pie; luego, desde ahí volvían a organizar la recuperación de las universidades perdidas. Cualquier estudiante de cualquier universidad podía conectar con otras universidades y mudar de espacio si sentía alguna incomodidad, porque el movimiento fue flexible y no contó con una dirección disciplinaria.

El 19 de abril fui a la UPOLI, universidad donde yo estudié, aunque en ese momento estaba estudiando Psicología en la UNAN, pero en la UNAN todavía no había coordinación, por medio de un amigo me di cuenta que había estudiantes en la UPOLI y que se estaban organizando para hacer un piquete en la universidad (mujer joven, estudiante, comunicación personal).

El ser parte de una organización más horizontal y autónoma permitió cierta fluidez y dinamismo. Por ejemplo, el relato anterior permite vislumbrar que cada quien se movilizó donde sintió que podía encajar, incluso, no se exigía ninguna militancia dura. Las personas entraban y salían de las casas de estudio tomadas, iban a sus casas a comer, dormir o buscar provisiones en el exterior para suministrar a los recintos universitarios. Si una persona se iba de una universidad tomada, ese mismo día o al día siguiente llegaban nuevos relevos.

Ni partidos, ni empresas, ni élites

Los movimientos sociales irrumpen en un escenario que había estado dominado por los partidos como agentes únicos en el quehacer político. Los años noventa suponen cierto viraje con respecto a las formas de organización política, luego se va consolidando y fecundando una generación que ya no se siente representada y cercana a los partidos tradicionales ni a sus mandatos. En Nicaragua, quienes van marcando estas distancias son los movimientos de mujeres que venían cuestionando las posturas verticales y autoritarias del FSLN

en el Gobierno de los ochenta, y esas distancias también se marcan en la insurrección cívica de abril:

Hay una enorme distancia... las organizaciones de mujeres en los setenta, incluso aquellas que venían del movimiento sindical, estaban bajo la tutela del partido, y esto se siente hasta los ochenta y noventa con la aniquilación de AMNLAE, fue una decisión burocrática del partido de cambiarle el nombre de AMPRONAC⁹ a AMNLAE, pasando por encima de las mujeres. En los setenta las mujeres sacrificamos mucho; el esquema de subordinación de los movimientos sociales e incluso del movimiento de mujeres se supeditó al partido, fue muy difícil para el movimiento hacer esa ruptura con el partido. Para mí en los ochenta hubo logros de masividad y se pensaba que por el concepto de participación se modificaba automáticamente la condición de opresión de las mujeres, pero la participación era el costo de la vida misma de las mujeres, de sus cuerpos. Eran unos grandes sacrificios que tenían que hacer las mujeres para tener un cargo y participar. Las mujeres en los ochenta pusieron el cuerpo, pero no tenían voz autónoma. Hubo propuestas fuertes de las mujeres, pero esa voz autónoma no se divorció del partido. La rebelión de abril tiene el aprendizaje de los noventa y del movimiento feminista de Nicaragua que tiene una historia importante. La rebelión de abril consciente o inconscientemente tiene una memoria histórica de que no hay que repetir lo que pasó en los ochenta, no hay que supeditarse, y de que las tensiones dentro del movimiento feminista tienen que aprender a manejarse para enfrentar al patriarcado (mujer, comunicación personal).

Son precisamente los movimientos feministas quienes, sin depender de estructuras jerárquicas, han logrado avances en materia de derechos, producto de grandes movilizaciones. Para ello, al igual que el movimiento ecologista, no han necesitado ser parte de la carrera electoral por la toma de poder; como diría Zibechi (2018), nadie en su sano juicio puede afirmar actualmente que las acciones colectivas de esos movimientos no han sido eficaces:

9 La Asociación de Mujeres Preocupadas por la Crisis Nacional (AMPRONAC) fue una organización de mujeres sandinistas fundadas en 1977. Más tarde, luego del derrocamiento de Anastasio Somoza, cambió su nombre a Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE).

Pienso que si el movimiento de mujeres hubiera creado una estructura centralizada (patriarcal), no habría podido luchar con tanta eficacia contra el patriarcado como lo viene haciendo. En parte porque habría tenido problemas para identificarlo, en la medida que el propio movimiento de mujeres no se diferenciaría del sistema que combate. Estatizar la lucha parece un mal camino; es crear pequeños estados en nuestros movimientos, lo que contribuye a introducir cierto orden pero, a la vista de la experiencia, con consecuencias paradójicas: en un primer momento frenan la desintegración del sistema, luego son destruidos y aniquilados por el mismo desorden que quisieron evitar. La historia reciente de los regímenes dirigidos por partidos comunistas debería servirnos de espejo (Zibechi, 2018, p. 268).

No hay que olvidar que el movimiento feminista, y mucha gente que se unió a la insurrección cívica, conocía de la experiencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional y su ascenso al poder por la vía de una insurrección, por las armas, convirtiéndose luego en una estructura militarizada y centralizada, sin que la gente tuviera margen, libertad para influir y construir otros procesos creativos que apuntaran hacia nuevas relaciones sociales o formas de organizarse. El partido lo absorbió todo; llegó a convertirse en una estructura paramilitar, brazo del autoritarismo que hoy gobierna Nicaragua. En tal sentido, en las entrevistas, las personas expresaron desconfianza con respecto a las conducciones políticas, frente al hecho de que la lucha se gestiona a través de canales institucionales, porque saben que estos no siempre responden a aspiraciones de cambio y terminan deslegitimando las demandas sociales, principalmente cuando se embarcan en la carrera electoral que sacrifica al movimiento de base por el nacimiento de otro partido.

En las entrevistas se evidencia una postura bastante crítica a estos modos de encarrilar las acciones colectivas por vías institucionales, por grupos históricamente vinculados al poder que aparecen en la escena para instrumentalizar las luchas sociales. Este fue el caso de la empresa privada en Nicaragua, con la Alianza Cívica. Este grupo, que surgió luego de la insurrección de abril de 2018, reclutó personas en las filas del movimiento azul y blanco, tomando ventaja de sus recursos e influencias en las altas esferas del poder. Luego,

se encaminó hacia lo que denominó una especie de diálogo con el Gobierno, en el momento más intenso de las protestas, para dar salida a la crisis política. Sin embargo, esta estrategia no prosperó por varias razones: por un lado, la represión del Gobierno que buscó ahogar el proceso; y por el otro, el diálogo no contaba con el respaldo del movimiento azul y blanco, se percibió como un atentado contra la dinámica de las protestas que intentó gestionar todo el proceso en una estructura empresarial. Muchas de las personas encuestadas expresaron no haberse sentido representadas en las formas y posturas que dominaron esa acción:

Hubo un gran error, y es el hecho de que se diera un diálogo, que era donde estaban quienes caían bien a la empresa privada. En ese diálogo la empresa privada acuerda quitar los tranques, pero la empresa privada no tenía el poder de representación de la ciudadanía, o sea, los tranques que estaban en las zonas rurales y que cerraban la conexión entre ciudades enteras, no eran comandados por la empresa privada, es más, la empresa privada ni sabía dónde estaban esos tranques (mujer joven, entrevista personal).

El diálogo intentó limitar la política que se hacía desde las calles, las universidades, los barrios; procuró dar un salto y convertir el movimiento azul y blanco en una estructura política conducida por un grupo o personas en específico. Pero ese salto fue dado casi en solitario por las cúpulas, sin respaldo de las calles, sin apoyo de un movimiento que no quiso volver a apostar por esas vías, que resultaban conocidas y sin pocas posibilidades de alcanzar cambios. Además, había mucha fricción y desencuentro entre los mismos grupos empresariales que empujaban arreglos con el Gobierno, y las personas manifestantes del movimiento azul y blanco expresaron sentirse infravaloradas y no querer apostar por mecanismos tradicionales de la política:

La supuesta cabeza [Alianza Cívica, que controla la empresa privada y oposición] que estaba en la mesa de negociación ni siquiera sabía lo que el cuerpo [personas atrincheradas en la universidad] estaba haciendo. La cabeza ignoraba totalmente lo que el cuerpo hacía. La supuesta dirigencia que estaba encargada de la negociación en la mesa de diálogo ni siquiera sabía de nuestra exigencia. Nuestra

primera exigencia fue: no al diálogo; y ellos nos ignoraron. Eso fue lo que nos dañó. Si la Alianza Cívica nos hubiese dejado actuar y hubiesen salido de esa mesa de diálogo, nosotros ya tuviéramos dos años trabajando en la reconstrucción del país y no hablando de reformas electorales, pero este diálogo lo que vino a hacer fue oxigenar a Daniel Ortega y permitirle que armara todo su plan para jodernos. Nuestra lucha y las exigencias del pueblo jamás llegaron al diálogo y eso fue lo que nos perjudicó, la cabeza no sabía lo que hacía el cuerpo, les permitimos que hicieran su juego, pactaron a costilla de la lucha del pueblo, las exigencias nunca llegaron; las que llegaron fueron las exigencias de las empresas (hombre joven, comunicación personal).

Nosotros dentro de la UPOLI no queríamos diálogo, llegó el COSEP [Alianza Cívica] diciendo que nosotros no íbamos a durar ni quince días en protestas y que dejáramos y abandonáramos las instalaciones de la universidad porque era desgastante y estábamos destruyendo la economía. Yo me levanté con voz fuerte y les dije que se fueran de ahí porque nosotros íbamos a resistir hasta que se fuese Daniel Ortega. Pero luego agarraron a algunos estudiantes y los ocuparon de mampara para poder hacer ese proceso de ese diálogo nefasto y montaron un show mediático (hombre joven, comunicación personal).

El objetivo, por parte de un grupo de empresarios, de cooptar parte del movimiento social y conducirlo a la vía electoral, partía de una supuesta necesidad de transitar de lo “social” a lo “político” y del argumento según el cual las tomas de universidades o espacios públicos no siempre son la vía para “triunfar”, estableciendo una separación que pone al movimiento social en un nivel inferior:

... falsea la realidad: es el argumento y la práctica de quienes quieren dominar el movimiento, utilizarlo como escalera –personal o colectiva– para acceder al poder estatal. En los hechos, el movimiento social muestra cómo una parte sustancial de las organizaciones que lo integran son, o pueden ser, a la vez económicas, sociales, políticas y culturales. La división en esferas pretende disciplinar a la sociedad en movimiento, partirla en pedazos para que los especialistas se hagan cargo de cada área (Zibechi, 2018, p. 263).

Si bien la Alianza Cívica captó para su grupo una parte de las personas que participaron en las protestas, la gran mayoría del

movimiento llegó a valorar de forma bastante negativa el rol de esta agrupación. Fue percibido como un intento poco fructífero considerando que la historia de negociaciones en Nicaragua se ha desarrollado “fuera del ámbito institucional (previamente vaciado de representatividad por el régimen en curso) entre actores enfrentados que se reconocen como interlocutores”¹⁰ (Martí, 2019, p. 13). El movimiento azul y blanco, lejos de exaltar a las élites como vanguardias del proceso insurreccional, se distanció de ellas consciente de que estas brindan poco margen para introducir nuevos cambios, porque los métodos tradicionales suelen encaminarse por estructuras rígidas y poco flexibles que se reducen a intereses de élites que aspiran ser las nuevas clases dominantes.

Sin querer tomar el poder

Los movimientos sociales, como el azul y blanco, no solo expresan desencanto hacia los partidos políticos, sus jerarquías y las formas tradicionales de hacer política, sino que también se distancian del objetivo central de estas estructuras: la toma del poder. Como hemos mencionado, son muchas las experiencias donde empresarios y partidos políticos se acercaron (tomas de universidades y demás espacios de movilización social) con la finalidad de plegarlas a lineamientos que limitaban sus potencias, en claros intentos por ingresar al movimiento a las lógicas del poder. En contraste, un aspecto del movimiento azul y blanco fue no contar con agendas programáticas o líneas sobre el futuro o los cambios sociales. Al pensar estos últimos desde el *aquí* y el *ahora*, no buscaron proveerse de agendas paradigmáticas para gobernar, sino perturbar el estado de cosas desde los procesos que germinan, cambiando las maneras de organización, rechazando las jerarquías, cuestionando patrones. Se trata

10 Entre los ejemplos, Martí (2019) señala los pactos realizados en el marco de los Acuerdos de Esquipulas entre el Gobierno sandinista y la Contra; negociaciones establecidas entre el ejecutivo de Violeta Barrios y el FSLN en 1990, y el pacto entre Alemán y Ortega que terminó por dismantelar el sistema democrático.

de un proceso de creación continua que muchas veces puede pasar desapercibido, sobre todo si procuramos analizarlo con marcos tradicionales que juzgan desde el horizonte del triunfo o del fracaso, obviando nuevas relaciones que pueden generarse a nivel microsocioal (Sitrin, 2010). Movimientos como el azul y blanco no ponen el acento en la construcción de agendas porque consideran que con el solo hecho de manifestarse empiezan a cambiar las cosas. Tomas de universidades, tranques y barricadas fueron ejemplos realmente significativos en un país cuyo Gobierno ha tenido el control hasta de los lugares más recónditos, sin dejar posibilidad de protesta (Arditi, 2011).

En la historia, muchos movimientos sociales nacieron sin una agenda política; incluso, al mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional, después de su fundación, le tomó años construir un programa que plasmase las líneas de su porvenir político. Contar con una agenda muchas veces puede limitar el movimiento, como un corsé rígido y abstracto que evita la creatividad, puesto que la realidad suele desbordar y superar las agendas y estas no son siempre garantía de cambios. Las transformaciones sociales tienen un ritmo continuo, con tiempos lentos que no se reflejan en carreras electorales por alcanzar un poder que no en todos los casos llega a lo profundo, donde se enraízan hábitos y patrones. Por tanto, los programas no son completamente capaces de resolver la complejidad de una sociedad que se mueve: solo la sensibilidad individual y colectiva es capaz de captar la diversidad y multiplicidad del contexto social. De manera que al parecer para este tipo de movimientos sociales entrar en la lógica del poder es perderse, toda vez que el Estado no es una herramienta emancipatoria, ni la toma del poder conduce necesariamente a propuestas revolucionarias: “No puede construirse una sociedad de relaciones de no-poder por medio de la conquista del poder” (Zibechi, 2018, p. 260).

Según mencionan analistas de los nuevos movimientos sociales, las espontaneidades pueden tener más influencia y pueden crear más desestabilización a los poderes que estructuras organizadas y sólidas con programas definidos, ejemplo de ello es el movimiento feminista. En esta línea hay que resaltar que muchas de las personas entrevistadas hablan, por ejemplo, del contacto con renovados formatos de relaciones sociales dentro de universidades que vienen

a cuestionar no solo el caudillismo, sino también prácticas machistas o violentas que ya no son tan normalizadas al interno de estos ámbitos. De hecho, entre las personas encuestadas, la mayoría afirmó que las demandas feministas tienen la misma importancia que otras demandas de carácter democrático. Es decir, la cuestión de género y las denuncias feministas tienen alta valoración junto con la ampliación de derechos para la comunidad LGBTI+. Estas exigencias ya no pertenecen a un movimiento social específico, sino que se presentan de modo transversal, amplían la dimensión de ciudadanía y ponen en perspectiva luchas por el reconocimiento que antes no eran visibles. Encontramos, también, posturas críticas al modo hegemónico de relacionamiento entre hombres y mujeres que vislumbran posturas antimachistas y menor tolerancia a cualquier tipo de violencia. Al menos en las entrevistas realizadas para esta investigación, se denunciaron conductas inapropiadas de compañeros hombres hacia mujeres durante las tomas universitarias.

Para explorar los pequeños cambios que se van dando, es necesario volver la mirada sobre dinámicas que se construyen en los nuevos movimientos que, como organizaciones vivas, tejen redes donde cada integrante cumple una función necesaria. Por ejemplo, el estudiantado que tomó las universidades conformó una amplia red que operó desde los propios centros de estudio, pero a la vez, cada recinto accionó de forma independiente a través de asambleas donde se tomaron decisiones y se expresaron voces que generalmente no se manifiestan en estructuras verticales y partidarias. Incluso en estos circuitos pudieron generarse diversos debates que no siempre giraron en torno al tema estudiantil, como los debates feministas, ambientalistas y de derechos humanos. En la fluidez de la movilización (que desde afuera podía percibirse como caos) y en la repartición de roles asumidos voluntariamente, hubo creatividad para sostener la protesta.

Dentro de la UNAN, al principio había solo un líder, pero luego se cambió y en cada portón hubo un líder que escuchaba las demandas de quienes estaban ahí. Ese líder llevaba las demandas cada tres días: se exponían las demandas y las exigencias y lo que se necesitara; luego llegábamos a un consenso entre todos. Había personas

que no solo estaban en las barricadas, también estaban trabajando en el ámbito legal, en documentos, organización. Una gran parte de las personas al frente eran mujeres, y fue algo superimportante por sus capacidades extraordinarias para organizar, fue algo importante tenerlas ahí (hombre joven, comunicación personal).

Desde estos espacios se empezaron a abrir fisuras críticas que cuestionaban las formas tradicionales, y se expresaron sujetos sociales que habían sido periféricos en las acciones colectivas, como la comunidad LGBTI+. Uno de los entrevistados mencionó que en una de las universidades tomadas se fue reestructurando la organización interna; pasó de ser centralizada a más expansiva y horizontal, con diferentes frentes para escuchar demandas y voces del estudiantado:

Incluso había personas gay, que estaban ocupando un espacio importante, había líderes de portones que eran homosexuales, como Victoria Obando que estaba trabajando en el tema de organización. La concepción del género dentro de la UNAN fue bastante respetada, no importaba si eras mujer, homosexual. Estábamos todos bajo el mismo techo sufriendo balas (hombre joven, comunicación personal).

Los testimonios citados dan cuenta de un cambio que empieza por lo inmediato, a través de una organización autónoma y horizontal flexible a los microcambios. La gente asumió desafíos que empezaron a empujar la organización desde lo cotidiano y para ello no necesitaron de un programa o de un diálogo con el Gobierno. Más allá de su viabilidad, la estrategia de buena parte del movimiento azul y blanco se mantuvo enfocada en aquello por lo que se luchaba. Como menciona Ardití (2011), estas insurrecciones vienen a ser performativos políticos que actúan como mediadores evanescentes, “pasadizos o conectores entre mundos, entre el actual y otro posible, por lo que son modos de poner en acto una promesa de algo diferente por venir” (p. 148). Al centrarse en relaciones sociales presentes y futuras, el movimiento azul y blanco dejó clara su característica prefigurativa (Sitrin, 2010) y expresó la constitución de una nueva subjetividad.

En este performativo político, las demandas de “libertad, justicia, democracia, respeto a los derechos humanos, autonomía universitaria”, como horizonte anhelado, empezaron a ser concebibles

y cercanas, retando la mordaza gubernamental que intentaba establecer como imposible tomar las calles. Por tanto, las movilizaciones lograron cierto alcance al derrotar la parálisis política, la impotencia ante el control estatal de los espacios públicos. Las personas manifestantes no tomaron el poder, pero redujeron su influencia, demostraron que “se puede deshacer el encantamiento del poder porque en realidad el emperador está desnudo” (Arditi, 2011, p. 162). Esto lo expresan también entrevistadas y entrevistados como asunto significativo de la insurrección cívica:

... es la unidad que hubo de los diversos sectores y diversas personas de los diferentes municipios, porque había personas que antes no se involucraron en estas actividades y luego decidieron sumarse y salir a las calles, personas en silla de ruedas, con muletas, algo que llena de alegría porque ves que nada les limitaba para sumarse a las luchas (mujer joven, comunicación personal).

Perder el miedo de salir del ámbito privado, evidenciar la falacia izquierdista del Gobierno de Ortega, exponer al régimen y sus dinámicas autoritarias, adquirir mayor conciencia sobre los derechos, unidad entre nicaragüenses, mayor debate sobre la situación política, una nueva revolución, entre otros, fueron los alcances más valorados en la encuesta realizada. La ciudadanía ensayó esa libertad y democracia saliendo a las calles, intentó recuperar los espacios perdidos, aplicó nuevas formas de hacer política a los márgenes de los partidos, conformó una utopía en acto que “anticipa algo por venir, a medida que la gente empieza a experimentar aquello en lo que busca convertirse” (Arditi, 2011, p. 152). La insurrección también logró poner en perspectiva que el poder no es incuestionable, que en la política las cosas pueden cambiar y removerse, que se desactiva de alguna manera la sumisión ante las élites y hegemonías, y que los grupos que aspiren a tomar el poder estarán más expuestos al cuestionamiento de la población que ya no se arrodilla frente a los poderosos.

Las protestas y el movimiento azul y blanco pusieron un cerco a los autoritarismos a través de la indignación, y parte de la población expresó que no quiere que las cosas se mantengan igual. El hecho de

protestar colectiva y públicamente comporta en sí mismo un poder simbólico, algo que no se concebía años atrás. Un elemento importante es que aunque estos movimientos sociales desaparezcan, ya sea por la represión a la que se enfrentan o por causas internas que se generan en el mismo movimiento, queda un legado que trasciende su existencia y puede acompañar nuevas luchas colectivas:

La materialidad de este remanente se manifiesta en los cambios cognitivos que producen las insurgencias, la experiencia de la vida en las calles y de la participación en asambleas generales para planear los siguientes pasos, en los recuerdos de estas experiencias, en los líderes que pudieran surgir en el proceso de ocupación, en las asociaciones y campañas subsecuentes que fomentan y en los cambios de políticas que generan. La inventiva es otra cara de esta materialidad. El remanente material de las insurgencias también se observa en los artefactos culturales que dejan: canciones, grafitis, manifiestos, panfletos, fotografías, películas, blogs, sitios de internet y una serie de testimonios en los medios sociales como Twitter y Facebook. También está el predecible torrente de congresos, talleres, publicaciones, entrevistas, análisis de los medios, evaluaciones por parte de los y las activistas, y conversaciones cotidianas que intentan comprender la experiencia de estas insurgencias tiempo después de que ya pasaron (Arditi, 2011, pp. 167-168).

Anteriormente se comentaba que las insurrecciones alimentan los levantamientos sociales que acontecerán pasado algún tiempo. La insurrección de abril de 2018 bebe de remanentes de luchas anteriores, de las experiencias y acciones que de manera gradual pueden ir apuntando hacia pequeños cambios. Aunque los movimientos sean mediadores que pueden desvanecerse, dejan una huella sobre el contexto que impregna alientos para los cambios, deja rastros sobre la realidad que ayudó a generar, no logran revolucionar de un solo golpe la sociedad, pero ponen en contacto el orden existente con otros mundos posibles. En tal sentido, no podemos contemplar necesariamente un final decisivo en estas acciones colectivas, porque nuevos estallidos podrían irrumpir el escenario político¹¹, aunque con

11 Un elemento interesante es que la mayoría de las personas encuestadas expresó que de haber otro ciclo de protestas se uniría nuevamente, aunque eso implique retornar desde el exilio.

una *performance* que mute, que se alimente del “remanente espectral” de acontecimientos sociales previos.

Conclusiones

El movimiento azul y blanco se activa a partir de redes de solidaridad interna que permitieron sostener las protestas, potenciaron la reproducción de esta vía alterna de expresión política y articularon actores populares muy diferentes: estudiantes con economías informales, incluso grupos de jóvenes en condición de calle y vinculados a delincuencia común. El movimiento acciona en un contexto de deslegitimación de la política institucional y de los partidos políticos, donde estos ya no son referentes para posibilitar cambios; de manera que se disputa la política a los centros instituidos. Asimismo, hubo poca identificación con estructuras que intentaron apropiarse de las protestas y que se rigen por patrones tradicionales de organización. Las personas movilizadas se desvincularon totalmente de viejas formas de hacer política, pero a su vez abrevaron de antiguas insurrecciones en Nicaragua. La horizontalidad y la autonomía fueron características identitarias de los nuevos movimientos sociales. Esto podría entenderse como herencia o legado que impregne futuras luchas y nuevas organizaciones político-sociales.

La insurrección se empezó a organizar de manera espontánea, sin manuales, sin programas, entre la incertidumbre que planteó un contexto sin conducción ni liderazgo, mientras se enfrentaba a una maquinaria monumental de represión. Es muy probable que parte de la semilla sembrada florezca en diversas formas, a través de pequeñas transformaciones en la conciencia colectiva. Venir de la incertidumbre puede permitir sobrevivir en la incertidumbre, seguir existiendo en flujos y reflujos, regenerándose o dando lugar a renovadas estructuras políticas. Aun cuando no es posible saber qué acontecerá en el futuro, sí se puede afirmar que los hechos de abril de 2018 implican un quiebre que demuestra que los autoritarismos no son infranqueables. Desde la espontaneidad surgieron modos creativos de intervenir la realidad con más fuerza de lo que han podido hacerlo agrupaciones con esquemas tradicionales, como los partidos políticos.

Por otra parte, movimientos como el azul y blanco no quieren tomar el poder y operar desde arriba, han vislumbrado que los cambios también pueden emprenderse desde abajo, como un continuo que no cesa. Para entender esto, se precisan otros modos de analizar el poder y concebir un poder que no radica en la toma de instituciones, un poder construido desde las bases. Las acciones cotidianas durante las protestas conformaron su propia agenda. La utopía tuvo lugar en el día a día, intentó desplegar una experiencia democrática y en libertad, ejercitando la horizontalidad y la autonomía, desafiando el *statu quo*, cuestionando. La lucha cotidiana empezó por cambiar algunos patrones de relación social como las machistas entre compañeras y compañeros de protesta: microautoritarismos que se dan en las formas de organización. Por tanto, es importante problematizar el alcance de estas insurrecciones, incluso cuando están desprovistas de programas de cambio sistémico o “agendas de futuro”. Las transformaciones estructurales tienen más de una temporalidad, escala y dimensión, y no deben ser interpretadas como virajes súbitos e instantáneos, sino como procesos progresivos que coexisten con el viejo orden. Se ha demostrado que la toma del poder del Estado y el cambio de régimen jurídico y constitucional no garantizan dinámicas emancipatorias para los pueblos (y agregaríamos para la naturaleza). Existen dimensiones constitutivas de la política (en los territorios, en las prácticas micropolíticas, en la reproducción de la vida) que conforman su sustrato; estas dimensiones constitutivas, en su multiplicidad, tienen códigos propios, geografías y temporalidades propias. Las lecturas donde prevalecen aproximaciones ortodoxas o paradigmáticas corren siempre el riesgo no solo de invisibilizarlas, sino de valorarlas únicamente en función de su relación con el panorama macropolítico y su objetivo de alcanzar el poder de Estado.

En tal sentido, estos procesos políticos expresan y abren dinámicas que tejen alternativas al sistema hegemónico: huertos urbanos y redes de intercambio solidario barrial, mecanismos de seguridad comunitarios, renovadas maneras de organización más incluyentes, etc. Ejemplos de esto se dieron en diversos grados durante las manifestaciones y posterior a ellas. Movimientos como el ecologismo, los feminismos y las luchas indígenas han logrado dar saltos cualitativos

en las disputas políticas. De modo que la emergencia de nuevas subjetividades posiblemente remita a rutas políticas otras, que quizás evolucionen con experimentación y creatividad. La ebullición de la protesta en Nicaragua fue inesperada y estaba fuera de pronóstico, como sucedió en Chile, Colombia, Puerto Rico (por mencionar solo algunas de las experiencias latinoamericanas recientes) y nos muestra cómo estas dimensiones constitutivas también generan grandes escenarios políticos. Las movilizaciones evidencian que el binarismo izquierda/derecha está siendo desbordado por códigos que se realizan en la insurrección, y que los grupos políticos dominantes no fueron convocantes ni tuvieron legitimidad para encauzar demandas o agendas.

Más allá del tiempo durante el cual lograron sostenerse las protestas y tomas de espacios públicos, es positivo que exista una conciencia crítica actual en oposición a antiguos patrones nocivos de la política. Hay menos reverencia hacia los poderes instituidos, por tanto la impugnación y la fiscalización por parte de nuevos sujetos aspirantes a ocupar o compartir el poder estatal es más fuerte. Ha quedado en evidencia, también, que la capacidad de poner en apuros a los Gobiernos no se da siempre a través de estructuras jerarquizadas o verticales. Estos movimientos espontáneos han tenido la capacidad de hacer tambalear la sociedad y poner ante la mirada pública y colectiva problemas políticos y sociales. El tiempo actual es lo menos cercano a una ruta lineal y predecible; es más bien fragmentado, amorfo, inestable, volátil y paradójico. Es en este contexto que se producen nuevas politicidades y, a partir de ellas, es fundamental rastrear nuevos caminos y códigos, señalar limitaciones, pero también resaltar potencialidades.

Referencias bibliográficas

- Aguilera, Y., Mosinger, E & Thaler, K. (14 de mayo de 2018). In massive street protests, Nicaraguans are using Ortega's revolutionary symbols against him. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/05/14/in-massive-street-protests-nicaraguans-are-using-ortegas-revolutionary-symbols-against-him/>
- Arditi, B. (2007). *La política en los bordes del liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación*. Gedisa S. A.
- Martí, P. (2019). *Nicaragua: análisis de una crisis inesperada* [Archivo PDF]. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/07/DT_FC_10.pdf
- Munguía, I. (18 de abril de 2018). Jubilados rechazan reformas al INSS y llaman a manifestarse en contra. *La Prensa*. Sitio web de: <https://www.laprensa.com.ni/2018/04/18/nacionales/2405643-jubilados-rechazan-reformas-al-inss-y-llaman-manifestarse-en-contra>
- Reguillo, R. (Febrero de 2013). *Jóvenes en la encrucijada contemporánea: en busca de un relato de futuro*. Conferencia presentada en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura, Guadalajara (México).
- Sánchez, M & Osorio, H. (2020). *Abril 2018, Nicaragua. El desafío de la democracia frente al autoritarismo*. UCA publicaciones.
- Sitrin, M. (2010). Horizontalidad, autogestión y protagonismo en Argentina. *HAOL*, 21: 133-142.
- Zibechi, R. (2018). *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*. Editorial Corte y Confección.

NICARAGUA EN LA ENCRUCIJADA |

ANAHI MACAROFF¹

1 Antropóloga e investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos. Miembro del GT “Élites empresariales, Estado y dominación” de CLACSO.

La situación actual de Nicaragua representa una encrucijada para los sectores de la izquierda y los movimientos sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y a su vez pone en evidencia un problema que atañe a la política contemporánea a nivel regional: que se ha entrampado en una lógica peligrosamente dicotómica. En el caso nicaragüense, esta reducción de la política imposibilita la visibilización y análisis del complejo y heterogéneo campo popular que sostiene posiciones críticas al Gobierno de Ortega sin identificarse explícitamente con las ideologías de derecha. ¿A quién o quiénes beneficia esta política en clave dicotómica?

Esta lógica, con reminiscencias de la guerra fría, posibilita al Gobierno de Ortega-Murillo deslegitimar toda crítica y reclamo como parte de la injerencia internacional —en particular la estadounidense— y sus aliados de la derecha golpista. Al desconocer la existencia de las colectividades sociales que no se identifican con la derecha tradicional (como estudiantes y feministas, entre otras), el Gobierno magnifica el rol de la derecha y esto le permite posicionarse peligrosamente como la única opción/oposición posible. Por su parte, desde la derecha se apela a las mismas reglas de juego, sus líderes se autoproclaman como únicos voceros de las protestas, denuncian la existencia de una dictadura y solicitan la intervención extranjera en un claro abandono de la soberanía nacional.

Los diversos testimonios recogidos en el informe precedente² dan sobrada muestra de cómo este proceso de dicotomización conlleva la invisibilización de las múltiples subjetividades de la protesta y sus demandas. Para complementar el trabajo realizado por Yerling Aguilera y poder entender la gran complejidad de la coyuntura que atraviesa Nicaragua, resulta imperativo (además de analizar la

2 “Otras formas de luchar son posibles / El movimiento azul y blanco en Nicaragua”, p. 43.

movilización social y las respuestas del Gobierno) prestar atención al comportamiento de las élites, tanto de las que tradicionalmente y desde la derecha han actuado en oposición al Gobierno, como de las que han establecido alianzas con él. Es preciso tener en cuenta que el proceder general de las élites consiste en romper alianzas con los Gobiernos (incluso cuando algunos de sus sectores se benefician de las políticas gubernamentales) ante la primera oportunidad de acceder sin mediaciones al poder, mudan su apoyo a opciones que representan más directamente sus intereses.

En Nicaragua, mientras los sectores sociales y antiguos sandinistas cuestionan a Daniel Ortega (por abandonar los ideales del sandinismo, generar alianzas con sectores de las élites, llevar adelante políticas acordes a los lineamientos del FMI y el BID, e incluso, por sus posiciones conservadoras en temas de género), tanto las élites como la Iglesia le dan la espalda y se suman a la derecha apenas tienen oportunidad. Es que, por más que Ortega se haya alejado de los ideales del sandinismo y en términos sociales y políticos sea cada vez más difícil reconocer su programa de gobierno como de izquierda, no deja de ser una figura incómoda tanto para las élites y sujetos de la derecha tradicional como para los intereses norteamericanos sobre la región. Tampoco hay que perder de vista que el Gobierno de Ortega es una piedra en el zapato para la política estadounidense por su apoyo a Cuba y Venezuela, pero especialmente por el proyecto del canal interoceánico³ apoyado por China, que entraría en competencia directa con el canal de Panamá.

En este escenario, ¿qué pasó con las demandas de quienes protagonizaron las protestas de 2018? El informe de Aguilera muestra cómo la falta de cohesión social entre los distintos grupos que participaron activamente en las protestas permitió a la derecha capitalizar la vocería y el descontento, y de este modo lograr una relevancia mucho mayor de la que realmente tuvieron durante las movilizaciones. Por otra parte, el desmesurado accionar represivo

3 Nuevamente en este caso, las múltiples críticas desde las organizaciones sociales por las afectaciones ambientales y sociales que acarrea la construcción del canal quedan en medio de una pugna de poderes e intereses geopolíticos que manipulan y cuestionan la legitimidad de los reclamos para sus propios fines.

desplegado por el Gobierno de Ortega y el encarcelamiento en junio de 2021 de varias personas posibles candidatas en las venideras elecciones presidenciales, bajo cualquier argumento, avivan la condena internacional y otorgan una nueva bandera de lucha tanto a los sectores sociales (que fueron reprimidos) como a los sectores de derecha. ¿Cómo entender este accionar de un Gobierno que según los datos del latinobarómetro aún conserva altos índices de apoyo? ¿No sería más justo reconocer la diversidad de actores sociales y separarla de la oposición de derecha, en vez de ponerlo todo en un mismo saco? En esto radican algunas de las complejidades de la actual situación de Nicaragua y del posicionamiento de las izquierdas internacionales ante el Gobierno de Ortega-Murillo.

Sin duda, las izquierdas internacionales no pueden seguir ingenuamente el juego de agrupaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, que no dudan en solicitar la suspensión de Nicaragua mientras guardan un impactante silencio ante la sistemática violación de derechos humanos en Colombia, por ejemplo.

En este sentido, es interesante la posición adoptada por los Gobiernos de Argentina y México que decidieron no votar a favor de la resolución del Consejo Permanente de la OEA⁴ en condena al arresto de precandidatos presidenciales y persecución a partidos políticos y medios de comunicación, así como un llamado de atención al Gobierno de Daniel Ortega por no implementar las reformas electorales solicitadas por esa entidad. Si bien la posición de los Gobiernos argentino y mexicano expresó preocupación por la situación de Nicaragua, también alertó sobre los peligros de avalar políticas injerencistas desde organismos internacionales.

Ahora bien, no hacerle el juego a tales organismos no debería implicar hacer la vista gorda sobre la situación en Nicaragua. La pregunta central a plantearse es si la alianza entre las derechas nacionales con los intereses transnacionales de Estados Unidos invalidan las protestas

4 CP. OEA (16/6/2021). CP/RES. 1175 (2324/21): “La situación en Nicaragua”. <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/009-RESOLUCIO%CC%81N-NICARAGUA-ADOPTADA.pdf> (consultado el 13 de agosto de 2021).

y reclamos sociales. Si, por ejemplo, las protestas estudiantiles ocurridas durante 2018 solo pueden leerse como disturbios orquestados desde la derecha, o tienen base en un descontento social legítimo que nada tiene que ver con estrategias de las élites. ¿Acaso, para no “hacerle el juego a la derecha”, las feministas deben hacerse a un lado y soportar la criminalización de las mujeres que abortan?

En un contexto de avance regional de la derecha empresarial, que en algunos casos tiene preocupantes visos de fascismo, como en el caso brasilero, el gran desafío para los sectores sociales consiste en desembarazarse de esta encrucijada. No se trata de un desafío menor. En primer lugar, porque, tal como muestra la investigación precedente, existen enormes dificultades de articulación y entendimiento entre los distintos actores, y la pandemia redujo los espacios de encuentro. En segundo lugar, porque no es suficiente con tener claridad en las demandas, sino que hace falta diferenciarse radicalmente de los agentes de derecha y de los intereses internacionales, para lograr un sólido posicionamiento como sujetos político-sociales frente a un Gobierno que hace todo lo posible por desestimar su existencia y sus demandas.



ECUADOR

DIGNIDAD PARA CAMBIAR EL MUNDO
Los sujetos del paro de octubre
de 2019 en Ecuador

MARÍA MORENO PARRA¹
ANGÉLICA MEJÍA²
ALEXÁNDER AMEZQUITA³

-
- 1 Antropóloga. FLACSO-Ecuador.
2 Antropóloga. Universidad Central de Venezuela.
3 Sociólogo. FLACSO-Ecuador.

Introducción

El 1 de octubre de 2019 el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció al país la eliminación del subsidio de combustible a través de la promulgación del Decreto 883. Esta decisión, enmarcada en el cumplimiento de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desencadenó el ciclo de protestas más intenso que haya atravesado Ecuador en la última década. Jóvenes estudiantes, organizaciones de pueblos indígenas, colectivos feministas y ciudadanía organizada y no organizada se sumaron al paro general de cuarenta y ocho horas convocado, el mismo día de publicación del decreto, por el gremio de transportistas para el 3 de octubre.

La serie de movilizaciones sostenidas durante doce días consecutivos fue el foco de expresión de una sociedad ecuatoriana que rechazaba las medidas gubernamentales, exigiendo, principalmente, la derogación del Decreto 883. Sin embargo, mientras el gremio de transportistas negociaba un alza al precio de los pasajes, la diversidad de plantones, piquetes, cacerolazos, toma de edificios públicos, marchas, pronunciamientos y otras formas de acción, continuaba y adquiriría nuevas dimensiones. Miles de personas pertenecientes a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de comunidades y otras organizaciones sociales, se movilaron desde las provincias hacia la capital, propiciando un levantamiento popular de dimensión nacional que rechazaba el “paquetazo” de Moreno y cuestionaba, al mismo tiempo, las relaciones jerárquicas y el orden hegemónico de la sociedad ecuatoriana.

La respuesta del Estado frente a estas movilizaciones fue la declaración de un estado de excepción y una inusitada violencia que dejó un saldo de once personas muertas, mil trescientas cuarenta heridas y más de mil detenidas, 80% de las cuales resultaron de detenciones arbitrarias, según datos aportados por la Defensoría del

Pueblo (2019). A pesar de este escenario de represión, la capacidad organizativa del movimiento indígena, junto con la organización en las calles y el levantamiento en barrios quiteños de extracción popular, permitieron establecer redes de solidaridad que apoyaron logísticamente las protestas y fortalecieron la cultura de lucha de sus habitantes.

Algunos trabajos han explorado los marcos constitutivos de las protestas, sea atendiendo a las condiciones políticas y económicas que gatillan el descontento popular que se expresó en octubre (Arias y Chiriboga, 2020; Báez, 2020; Resmini, 2020), al fin de un esquema de acumulación capitalista acordado desde la época de Lucio Gutiérrez (Cuvi, Arteaga, Cueva y Maldonado, 2020; Unda e Idrovo, 2020), o enfocados en el alto grado de violencia, represión y persecución política que caracterizó la acción del Estado (Abad, 2020; Acosta y Cajas Guijarro, 2020; Cuvi et al., 2020; Guamán, 2020; Luque et al., 2020; Muñoz, 2020; Pino, 2020; Resmini, 2020; Saltos, 2020; Sierra, 2019, 2020; Unda Lara, 2020; Walsh, 2020).

Este trabajo aborda las experiencias de jóvenes que participaron en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019, con el objetivo de caracterizar los motivos que impulsaron a estos sujetos y las interpretaciones que elaboraron acerca de sus acciones de protesta. Desde la premisa que afirma que las protestas no son solo una reacción mecánica frente a las graves consecuencias de la crisis económica y la desigualdad social (Auyero, 2020), buscamos rastrear las novedades de este desborde popular espontáneo (Unda e Idrovo, 2020) sin perder de vista las continuidades y rupturas de la historia sedimentada y reciente. Para ello, hemos atendido no solo el contexto macroestructural, las condiciones políticas concretas y los factores del contexto inmediato, sino que también hacemos énfasis en las dimensiones culturales de la protesta a partir de la experiencia, agencia, emociones y significados que los sujetos dan a su participación en las manifestaciones (Alvarado et al., 2015; Antón, s/f; Unda, 2010).

La investigación combinó distintas estrategias metodológicas: 20 entrevistas a jóvenes, realizadas a través de plataformas virtuales (Zoom, Skype, WhatsApp), un análisis de medios de comunicación

alternativos, y una miniencuesta virtual respondida por 272 personas. A pesar de las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia de covid-19 en el 2020, las estrategias metodológicas nos permitieron contar con pistas y hallazgos significativos que enriquecieron la investigación.

Decreto 883: detonante de la protesta

La magnitud e intensidad de la manifestación social de octubre de 2019 tomó a la ciudadanía ecuatoriana por sorpresa. Si bien estuvo precedida por un acumulado de demandas, las protestas se pueden entender como explosión de una sociedad empobrecida y frustrada, como un “estallido social” (Iza Tapia y Madrid, 2020) frente a medidas económicas de austeridad y, en especial, en respuesta al Decreto 883 que daba por terminado el subsidio de la gasolina. Se trata de un momento de “desborde popular” donde confluyeron sectores organizados y no organizados para crear una “nueva fuerza de masa” que, aglutinada en torno al sector que en ese momento tenía mayor capacidad de organización y de generar propuestas (Unda e Idrovo, 2020, p. 108), golpeó a la opinión pública y cambió la relación de fuerzas (aunque de manera momentánea) obligando al Gobierno a sentarse en la mesa de negociación (Billion y Ventura, 2020, p. 47).

Aunque las movilizaciones de octubre de 2019 surgen como reacción inicial de la ciudadanía y los movimientos organizados frente a la promulgación del Decreto 883, una entrada analítica a la protesta demanda revisar las estructuras económicas y sociales que afectan la región latinoamericana, así como el marco específico de cada contexto nacional. El conflicto social en América Latina se desarrolla en un escenario caracterizado por una desigualdad social crónica y la existencia de estructuras de poder muy concentradas (Calderón Gutiérrez, 2012, p. 15). En un marco más amplio de crisis económica mundial, América Latina ha vivido un proceso de desaceleración económica a partir de la caída de precios de los *commodities*, en especial entre 2014 y 2020, a la vez que la pobreza ha ido en aumento junto con la precarización del trabajo y el desempleo.

En el específico contexto nacional de Ecuador, los movimientos de protesta provienen de una acumulación de causas diversas de descontento (Billion y Ventura, 2020, p. 42). El deterioro de la economía ecuatoriana viene complicándose con la caída de ingresos petroleros fiscales, las dificultades de la balanza comercial y el endeudamiento externo (Ortiz, 2020, p. 88). En relación con los índices sociales, las medidas de ajuste han tenido fuerte repercusión. La pobreza ha aumentado especialmente en el sector rural de 35,3% en diciembre de 2014, a 43,8% en junio de 2019 (Acosta y Guijarro, 2019). Asimismo, la pobreza multidimensional se incrementó a partir de 2017, llegando a 37,9% en diciembre de 2018 (Chiriboga Tejada y Arias, 2020, p. 188). Alarma la reducción del empleo adecuado, con la tasa más baja en los últimos doce años (Chiriboga Tejada y Arias, 2020, p. 184). Para junio de 2019, el empleo adecuado solamente englobaba al 37,9% de trabajadoras y trabajadores (Acosta y Guijarro, 2019). Por tanto, ha resurgido la precarización laboral, con una mayoría de la población vinculada a la informalidad y con el consecuente desmejoramiento de la calidad de vida. Esta precarización ha golpeado, en Ecuador como en otros países de América Latina, a las clases medias, sumamente vulnerables a las crisis, que durante la primera década del 2000 habían visto cierto aumento de sus ingresos y consumo, y experimentado cierta mejoría en la protección social. A su vez, otros sectores como las poblaciones indígenas, trabajadores informales, estudiantes y mujeres, por citar solo algunos, se vieron también impactados por el estancamiento económico, los ajustes y la reducción de la inversión pública, situación que se tradujo en un acumulado de frustraciones, demandas y posibles motivos que afectan su voluntad de protesta (Ortiz, 2020).

Aun cuando el deterioro de las condiciones económicas y el aumento de la desigualdad social son elementos fundamentales para explicar la respuesta popular, es preciso prestar atención a la complejidad de factores que intervienen e interactúan en el proceso de las protestas, como la relación Estado-sociedad, la desconfianza ciudadana en las instituciones y la suspicacia hacia las élites.

En Ecuador, al inicio del régimen de Lenín Moreno (2017), varios movimientos sociales se mostraron abiertos al diálogo propuesto por el presidente; en parte, debido al permanente bloqueo,

desplazamiento y criminalización de varios líderes sociales durante la década del Gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, los diálogos no se materializaron. El Gobierno de Moreno se alineó con los intereses de élites empresariales y financieras para decidir sobre la política gubernamental, al tiempo que demostró un cierre institucional para procesar el ajuste (Ramírez Gallegos, 2020, p. 36) y las demandas de los movimientos sociales. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terminó por desgastar la relación con las organizaciones del movimiento indígena y de trabajadores. Por tanto, se observaba entre los factores del contexto inmediato un bloqueo evidente del sistema político hacia las demandas de los movimientos sociales que, mientras se instalaba una segunda ola neoliberal, daba cuenta de la incapacidad del Estado y sus instituciones para gestionar y procesar conflictos “con un sentido de cohesión social y expansión democrática” (Calderón Gutiérrez, 2012, p. 26).

Las manifestaciones de octubre de 2019, aunque sorprendidas en su intensidad y magnitud, están precedidas de un aumento de conflictos y protestas que, a pesar de ser más localizadas y particulares, desde 2014 venían irrumpiendo en el escenario político del país, como quedó expresado líneas arriba, a partir de la caída internacional de los precios de los *commodities* y la profundización de las tensiones relacionadas con el extractivismo y las vulneraciones de derechos laborales. Estas tensiones se mostraban claramente en la “Marcha por la vida y la dignidad de los pueblos” en agosto de 2015. El movimiento indígena cuestionaba la falta de concreción en la práctica del Estado plurinacional y denunciaba el desmantelamiento de la educación bilingüe. En 2016, las tensiones crecieron en los territorios indígenas y campesinos en resistencia a la megaminería, como el caso del territorio shuar de Nankints desalojado por una empresa minera china con la venia del Gobierno. La criminalización de la protesta social caracterizó este período (Iza, Tapia y Madrid, 2020, p. 79)⁴. Antes de

4 Entre 2007 y 2015, el total de personas judicializadas en el país llegó a 841 individuos, bajo las figuras de resistencia a la autoridad, terrorismo, sabotaje e incitación a la discordia; 90% de estos casos judiciales fueron iniciados por la Fiscalía en contra de indígenas, defensores de la naturaleza, trabajadores y estudiantes (Calapaqui Tapia, 2017).

la actual administración, entre 2016 y 2017, se produjo un ascenso de la conflictividad social, y desde 2018, brotes de contestación por el ajuste (Ramírez Gallegos, 2020, p. 18).

Entre 2017 y 2018, el nuevo Gobierno hizo un llamado al diálogo. Sin embargo, mientras avanzaban los acuerdos con las élites empresariales y financieras, se estancaban los diálogos con los movimientos sociales. Durante el 2019, en los meses previos al levantamiento de octubre, se registraron aproximadamente treinta acciones de hecho que respondieron a distintas agendas de organizaciones y movimientos sociales, y al rechazo hacia las políticas económicas que venía adelantando el Gobierno de Moreno.

Es así como se dieron huelgas de hambre de maestros retirados y grupos de jubilados (julio de 2019) y empleados jubilados de la Corporación Nacional de Electricidad (septiembre de 2019). Los estudiantes de Medicina, en especial los internos debido a la reducción de su estipendio, también protagonizaron una serie de protestas entre mayo y septiembre de 2019. Asimismo, el movimiento feminista había mostrado una presencia continua en las calles, con capacidad de movilización importante y nutridas marchas durante 2019⁵. Hacia finales de septiembre, las fuerzas vivas con el apoyo de los gobiernos locales de la provincia del Carchi protestaban contra el abandono por parte del Gobierno.

La CONAIE había planificado manifestarse hacia el 15 de octubre, pero se vio llamada a adelantar la protesta ante la reacción que generó el Decreto 883. El movimiento se posicionó como actor central de las movilizaciones, con una nueva dirigencia y un discurso capaz de construir alianzas con diversos sectores, bajo la demanda de derogar el decreto (Ortiz, 2020). Octubre evidenció la capacidad del movimiento indígena de recomponerse luego de una década de represión, desplazamiento y fragmentación, mediante un trabajo de reconstitución de las relaciones entre el liderazgo nacional y las bases (Altmann, 2020). El movimiento indígena había mantenido

5 Entre ellas, la marcha del 29 de enero de 2019, protestando por la xenofobia a raíz del asesinato de una joven ecuatoriana embarazada a manos de su pareja, migrante venezolano, ante la inacción de la policía; la marcha del 8 de marzo; y la marcha del 29 de septiembre de 2019 a favor de la despenalización del aborto.

sus reclamos por la concreción práctica del Estado plurinacional, la defensa de la educación intercultural bilingüe y su resistencia ante la estrategia del extractivismo minero y petrolero que desmedra a sus comunidades y territorios.

Las manifestaciones de descontento de diferentes grupos sociales forman parte del contexto inmediato y del conflicto social en ascenso en el año 2019. De cualquier manera, el carácter particular y las demandas específicas por sector que caracterizaron dichas manifestaciones aún no sugerían lo que vendría en octubre: movilizaciones masivas a nivel nacional, un levantamiento indígena de dimensiones no vistas desde hacía más de una década, un paro nacional al que se plegaron múltiples organizaciones, un levantamiento de los barrios populares, y una noche de cacerolazo general en Quito, durante doce días en octubre de 2019.

Sin embargo, se habían conjugado tres factores que resultaron en esta protesta de dimensiones imprevistas: “un sentimiento muy extendido de inconformidad y descontento de amplias capas de la población, una acumulación de movilizaciones de varios sectores (que son la forma activa del descontento) y un detonante” (Unda e Idrovo, 2020, p. 111). El detonante fue la expedición del Decreto 883, que precipitó las movilizaciones y generó una masiva respuesta popular de personas que acumulaban descontentos por la recesión económica, pérdida de empleo e inconformidad con la gestión política, junto con una serie de reclamos de diversos grupos sociales. Adicionalmente, se ha producido cierta reconstitución de los movimientos sociales y una convergencia que se “ha venido vislumbrando desde el fin del correísmo como nuevas posibilidades de confluencia alrededor de un eje compartido: FUT⁶ y CONAIE” (Unda e Idrovo, 2020, p. 109).

Motivaciones, aprendizajes y experiencias de una protesta heterogénea

Para el análisis de la participación de diferentes sujetos en las formas de protesta y acción, es fundamental prestar atención a la experiencia

6 Frente Unitario de los Trabajadores.

de los actores sociales, sus modos de agencia y prácticas políticas, sus motivaciones para la acción colectiva, sus aprendizajes emergentes en la lucha, sus emociones y los significados (marcos interpretativos) que otorgan a las situaciones y sucesos que viven. En este trabajo ponemos la vivencia de los participantes en el centro del análisis, principalmente las juventudes, enfatizando la dimensión cultural y simbólica. Para comprender la acción política, por tanto, optamos por situar el punto de arranque en el sujeto: “Partir de su realidad material, su práctica social y su subjetividad, así como su capacidad de acción (agencia), su experiencia y su comportamiento frente a las injusticias (estructurales o inmediatas), con una perspectiva histórica y relacional” (Antón, s/f).

Poner en el centro la vivencia de los participantes consiste en incluir en el análisis las emociones, pues “es difícil pensar en actividades y relaciones que sean más abiertamente emocionales que las asociadas a la protesta política y la resistencia” (Goodwin, Jasper y Polleta citados en Poma y Gravante, 2014, p. 22). La experiencia cotidiana de la gente contribuye a edificar un sentimiento de injusticia, pero en las protestas se articulan muchas otras emociones: rabia, indignación, ultraje, frustración, alegría, solidaridad, hermandad (Poma y Gravante, 2014, p. 22). Las emociones pueden tener efectos diversos en la movilización, como motivar a las personas a participar, desanimar, radicalizar y resignificar la experiencia de la protesta. La incorporación a la protesta también puede incidir en un sentido de empoderamiento, de dotación de poder para dinamizar las capacidades, para ser sujetos activos y adquirir confianza en la potencia de desafiar las relaciones existentes de dominación y las actividades que afectan la vida (Romero Guayasamín, 2006, p. 139).

Si bien la juventud no es una, sino que es heterogénea en términos de género, raza-etnicidad, ocupación y clase, por ejemplo, es necesario reconocer que las juventudes comportan grupos que se ven afectados de modo particular por las situaciones de crisis que se han venido viviendo en América Latina. Entre estas crisis se encuentran: la violencia generalizada, la extrema polarización de la estructura social, el racismo, el cambio climático. Para las personas jóvenes existe la idea de un estado de crisis normativo, de una situación de

incertidumbre que produce sentimientos de inseguridad (Gutiérrez Cham y Kaltmeier, 2019).

El paro de octubre de 2019 guarda relación con elementos que caracterizaron la Guerra de los 4 Reales de 1978, “un carácter cooperativo de la movilización y (...) la presencia de jóvenes no vinculados a las organizaciones y movimientos políticos” (Unda Lara, 2005, p. 166). Las juventudes han tenido un papel central en las movilizaciones de América Latina; destaca, por ejemplo, el movimiento estudiantil que aparece como representativo de este grupo social (Faletto, 2009). En la última década, la región ha visto importantes movilizaciones netamente juveniles que reclaman educación pública y gratuita, enfrentan las grandes cadenas mediáticas y exigen el derecho a la inclusión social efectiva (Alvarado et al., 2015). De esta manera, los jóvenes que participan en protestas sociales devienen actores políticos, influyendo las dinámicas del escenario político en el que actúan. Asimismo, en el contexto ecuatoriano, “su presencia resulta decisiva en las acciones de movilización en las calles y en las redes, así como los momentos electorales” (Unda Lara, Llanos Erazo e Hidalgo Landeta, 2018, p. 126).

En lo sucesivo pasaremos revista, en un primer momento, de las múltiples formas de involucramiento de los jóvenes entrevistados. La heterogeneidad de los perfiles de quienes participaron marca significativamente la protesta, en especial en cuanto a ejes de diferenciación como clase social, género, adscripción étnico-racial, y también la adscripción o no a movimientos sociales, organizaciones y grupos de redes primarias (amigos, compañeros de aula, vecinas y vecinos del barrio). En segundo lugar, revisaremos las motivaciones o razones que señalaron para su participación. En tercer lugar, tratamos algunas de las emociones nombradas de manera más recurrente, para luego pasar a los aprendizajes y experiencias que se consideran destacables y sus significaciones. Por último, damos cuenta de cómo las juventudes perciben el Estado y la política.

Formas de participación

En la protesta de octubre de 2019 participaron jóvenes de perfiles variados, algunos desde el inicio y otros a partir del escalamiento

del conflicto y cuando el movimiento indígena había llegado a Quito. Las juventudes participaron de múltiples maneras en el paro, constituyéndose, desde su práctica social específica, en actores con motivos y estrategias desplegadas hacia fines determinados (Unda, 2010). Como decía un muchacho entrevistado, “cada uno fue definiendo su rol de acuerdo con lo que podía hacer en ese momento” (hombre joven, estudiante de Comunicación). Desde estar en la calle como manifestante, con donaciones, apoyando en centros de acopio y acogida humanitaria, y resistiendo el ataque de la fuerza pública, las juventudes reconocieron y legitimaron su participación como elemento dinamizador en la configuración de otros modos posibles de organización de la vida en común (Alvarado et al., 2015). Acciones por demás multitudinarias, en tanto las necesidades individuales confluyeron en intereses comunes configurando así demandas colectivas (Unda, 2010).

Los resultados de la miniencuesta⁷ realizada nos permitieron no solo agrupar y caracterizar formas de participación y agencia, sino reconocer el repertorio de tácticas y estrategias expresadas en la acción (Unda, 2010). Junto con ello, tuvimos acceso tanto a la historicidad de los actos de beligerancia y acción de los actores dentro de ciertos repertorios conocidos (Auyero, 2007), como a las innovaciones derivadas de la improvisación, sus cálculos de relaciones de fuerza y los trucos ingeniosos desplegados al calor de las movilizaciones (De Certeau, 1984).

PRIMERA LÍNEA

La primera línea vendría a ser el foco neurálgico de confrontación y resistencia durante el ciclo de protestas de octubre de 2019. Compuesta por actores con experiencia previa en esta forma de movilización, agrupó, inicialmente, a jóvenes de estratos populares pertenecientes a organizaciones de izquierda (estudiantiles y sindicales) y estudiantes de colegios públicos con tradición de participación

7 No es una encuesta representativa para toda la población ecuatoriana. Sobre todo incluyó personas que participaron en el paro (únicamente 16,4% contestó que no) y 68% eran estudiantes. La encuesta se realizó de manera virtual a mediados de 2020.

en protestas, como los colegios Mejía y Montúfar de Quito. Posteriormente, reunió también a jóvenes indígenas y otros actores marginales urbanos callejizados, “gente que habita las calles que, normalmente o desde la izquierda tradicional, no se le toma en cuenta como compañeros, sino que son algo como que está aparte” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

Aun cuando la primera línea estaba compuesta predominantemente por hombres, dado el carácter violento de confrontación con agentes de policía, mujeres, principalmente de medios alternativos e indígenas, participaron tanto en la confrontación como en la documentación de los sucesos y elaboración de reportajes que permitían conocer, de primera mano, lo que estaba sucediendo. “La conformación de esta primera línea fue un proceso gradual que se inició antes de la llegada del movimiento indígena de Cotopaxi y del Cañar cuando profesionales y estudiantes se apostaron en las movilizaciones en San Blas” (hombre joven, dirigente indígena), en directa resistencia y confrontación con las fuerzas de represión.

Las estrategias y repertorios de acción incluían, por un lado, el cierre de vías y medidas de hecho en comunas y comunidades cercanas a Quito, como Tola Chica, San Miguel del Común, Carcelén y Santa Clara de San Millán, con la finalidad de “dividir la fuerza represiva del Estado a diferentes lugares para que (...) no hubiera tanta represión en el centro de Quito” (hombre joven, dirigente indígena). Por otra parte, el despliegue de mecanismos de cuidado y protección de la dirigencia y los manifestantes a través de, por ejemplo, el uso de escudos y baldes de plástico con agua para neutralizar las bombas lacrimógenas y evitar que se dispersaran los gases tóxicos. En tal sentido, afirma uno de los entrevistados: “No fui solo yo, fueron varios compañeros de la comunidad que se desplazaron en diferentes momentos del paro a Quito, llevando baldes de plástico para llenarlos de agua y ahí botar las bombas lacrimógenas cuando las lanzaran para evitar que se dispersaran los tóxicos. Subieron con escudos también los compañeros” (hombre joven, dirigente indígena).

BRIGADISTAS MÉDICOS Y ESTUDIANTES DE MEDICINA

Alrededor de esta primera línea se constituyeron otros modos de participación que contribuyeron al establecimiento de redes de

solidaridad y al apoyo logístico para las protestas. Una de ellas fue la creación de brigadas de médicos y estudiantes de Medicina. Si bien el estudiantado de Medicina de diferentes universidades había realizado acercamientos entre sí y organizado, en los meses previos a la protesta, manifestaciones por el pago de un estipendio justo para estudiantes que se encontraban en la etapa de internado y para los médicos posgradistas, fue con el anuncio de movilización de las comunidades indígenas hacia Quito cuando estas redes previamente establecidas comenzaron a activarse: “Por lo que ellos escuchaban, porque rotaban en los hospitales de la policía, hospitales militares, [se decía] que ya iban a aplicar un tipo de represión, ya disuasiva” (hombre joven, estudiante de Medicina). Frente a este escenario de represión, estudiantes de varias universidades tomaron la iniciativa de conformar brigadas médicas, a pesar del recelo inicial de algunas de las autoridades universitarias. Con el pasar de los días, autoridades y otros profesionales de la salud se unieron a la iniciativa, tal y como refrenda un entrevistado: “Luego de que pasó el tiempo, la gente se fue motivando más, aparte de que la [Universidad] Católica ya abiertamente recibió a los manifestantes. Entonces en la universidad ya se hizo una centralización de la ayuda” (hombre joven, estudiante de Medicina).

Aunque muchos de estos brigadistas no tenían experiencia ni en protestas ni en el tipo de atención que se da en situaciones de emergencia en medio de conflictos violentos, estuvieron en las calles brindando atención a personas heridas o apoyando en el traslado hacia los puntos improvisados en el Parque Arbolito y en las universidades. Así, estudiantes de distintas áreas y carreras como Medicina, Fisioterapia, Enfermería, etc., se trasladaban continuamente entre la primera línea y los puntos de atención, respondiendo a la necesidad de estar allí, de ayudar, sin interrogarse mucho acerca de la politicidad de su participación. Afirma una de las entrevistadas: “No sé si se sentirían actores políticos, a pesar de que lo fueron, no sé si ellos se enuncian desde ahí todo el tiempo, o si era más un asunto de ‘yo estoy ayudando a mi pueblo’” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

VOLUNTARIADO

Otra de las formas de participación y apoyo logístico a las protestas se expresó en la conformación de acciones voluntarias. Encarnadas principalmente por jóvenes de clases medias, vinculados a, por ejemplo, centros de educación privados, la participación se dio en centros de acogida, “apoyando en lo que se pueda” y al interior de la Casa de la Cultura, donde se hallaba el movimiento indígena. Atención a heridos, preparación de comida, cuidado de niñas y niños, seguridad y clasificación de las donaciones de ropa, comida, medicinas, etc., fueron algunas de las variadas y diversas maneras de participación de voluntarios y voluntarias en las protestas.

Las universidades jugaron un papel clave en relación con la articulación de múltiples voluntades de jóvenes y supusieron puntos focales donde convergían personas relacionadas a organizaciones sociales, grupos ligados a redes de socialización primaria y conjuntos de amigos, y fueron, junto a otros centros, los lugares que permitieron “sostener la vida” y sostener la protesta. Aunque las universidades sirvieron de puntos nodales para este modo de ordenamiento, en los primeros días y durante la protesta otras casas y centros vinculados con organizaciones sociales empezaron a funcionar como centros de acogida y de acopio, con ollas comunitarias. Constitución de una red de apoyo y cuidado, protagonizada principalmente por mujeres, donde confluyeron colectivos y organizaciones de mujeres con otros actores juveniles que se integraron en el marco de las movilizaciones. Una de nuestras entrevistadas testimonia: “Hubo esta participación superimportante de sostener la vida y de cuidar la vida por parte de las mujeres, tanto de la ciudad como de las compas indígenas” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

APROVISIONAMIENTO

Muchos jóvenes, a través de redes convocadas por sus grupos sociales primarios (amigos, compañeros de aula, vecinos) se encargaron de temas de aprovisionamiento y recolección de comida, ropa y medicinas para llevar a los centros de acopio y a la Casa de la Cultura. Algunos de estos jóvenes combinaron la participación en las calles (pero no necesariamente en las primeras líneas de protesta) con estas

formas de apoyo. Tales acciones de solidaridad abarcaron un amplio espectro en términos de pertenencia de clase, desde clases populares hasta clases medias y medias alta. Comenta un joven: “Hacíamos colectas con la gente de la comunidad, cada persona ponía un dólar, cincuenta centavos, otra gente donaba huevos y se hacía una olla común para poder compartir con todas las personas que estaban en los diferentes bloqueos”. (hombre joven, dirigente indígena).

Voluntades de variada índole se aunaron, movilizando múltiples recursos en sintonía con la infraestructura que proveyeron los centros de acopio y ayuda humanitaria, clave para sostener la protesta: donaciones de dinero, comida, ropa, colchones, cobijas, insumos médicos para la atención en los centros y las brigadas médicas. La gente utilizó sus diversas capacidades, como los carpinteros y cerrajeros que elaboraron escudos. Las ollas populares o las donaciones de comida cocinada se encauzaron hacia donde estaban manifestantes, fuese en Quito en el sector del Arbolito y la Casa de la Cultura o en lugares donde se realizaron cierres de vías. En un momento dado las universidades tuvieron que pedir que no trajeran más donaciones de comida: “¡Había tanto pan!”. Estas múltiples voluntades y recursos fueron determinantes para sostener la movilización en un contexto de escalada de violencia. Además de los manifestantes vinculados a organizaciones políticas o movimientos sociales, gran parte del apoyo provino tanto de sectores populares que se verían directamente afectados por las medidas económicas, como por “adherentes de conciencia”: grupos o individuos “que apoyan a un movimiento social aun cuando no reciben beneficios materiales directos como resultado de su éxito” (Almeida, 2020, p. 91).

ACTIVISMO DIGITAL

Diversidad de jóvenes encontró en el activismo digital una forma de participación y apoyo a la protesta. Tanto de manera profesional, periodistas y comunicadores comunitarios, como de manera improvisada y espontánea, las juventudes compartieron información e imágenes entre sus redes sociales. Uno de los entrevistados comentó: “Entonces, ¿qué tenía? Las redes sociales. El papel de las redes sociales fue brutal, porque era hablarle a la gente así, en tiempo real”

(hombre joven, profesor de Música y anarquista). Muchos de estos jóvenes no pertenecían a organizaciones políticas ni eran comunicadores de profesión. Sin embargo, el ordenamiento espontáneo de la protesta articuló tanto a medios alternativos digitales como a otras nuevas formas de difusión de información que se constituyeron como plataforma para reporteros y reporteras de campo *ad hoc*. Al igual que los brigadistas médicos y los estudiantes de Medicina, la politicidad de su participación no era un punto en cuestión: “Si les preguntabas, la mayoría te iba a decir: ‘yo no soy de izquierda, ni de derecha’, ‘la política no me interesa’, etc.” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

Frente al papel de los medios de comunicación masivos y los procesos discursivos que intentaron legitimar las medidas tomadas por el presidente y desacreditar las razones que llevaron a las personas a salir a protestar (Cuví, 2019; Castro, 2020), las juventudes consideran que esta forma de participación fue clave para romper el cerco mediático. A través de estas acciones, los jóvenes daban testimonio sobre los hechos e informaban en sus redes, en especial sobre temas de violencia y represión por parte de las fuerzas del orden público, “para que la gente visualizara qué realmente estaba pasando y cómo realmente había un uso excesivo de la fuerza” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

Motivaciones para participar

Aunque la promulgación del Decreto 883 y la oposición a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno fueron razones que gatillaron las protestas, las razones que movieron a las juventudes fueron variadas y están relacionadas a agendas que difieren, por ejemplo, según pertenencia o no a organizaciones formales, y a la adscripción de clase, raza y género. De acuerdo a nuestro levantamiento de datos, varios activistas del paro encontraron su motivación en el modo como se desarrollaron los acontecimientos. Algunas razones están bien definidas: rechazo a las políticas neoliberales, apoyo y solidaridad con el movimiento indígena, repudio a las abiertas expresiones de racismo y discursos clasistas, preocupación por los

niveles de violencia y represión hacia los manifestantes, percepción de desinformación y parcialidad de los medios tradicionales.

En el análisis de la movilización y protesta social, la revisión de las condiciones y medidas económicas o políticas debe acompañarse por la manera en que se significan tales medidas. Interviene un proceso de “enmarcamiento”, de cargar de sentido los hechos sociales. Así, se pasa de entender la medida (por ejemplo, el Decreto 883), a comprender la experiencia de subordinación e injusticia, se valora la actitud concreta de una mayoría que vive esa política como indigna o injusta. La injusticia o (como se menciona recurrentemente por jóvenes en esta investigación) la indignación son recursos de movilización poderosos. Por tanto, es imperativo analizar cómo se interrelacionan e influyen mutuamente los marcos interpretativos (significados) y la acción colectiva (Antón, s/f).

RECHAZO A POLÍTICAS NEOLIBERALES

“Si bien lo que incendió fue lo del subsidio, era una marcha antineoliberal. El decreto fue como la gotita que derramó el vaso” (hombre joven, estudiante de Ciencias Políticas). De este modo queda manifiesta la preocupación por los efectos de la aplicación de políticas de ajuste neoliberal en el marco de los acuerdos con el FMI, y el rechazo al Decreto 883. Más allá de la posición política o ideología previa, el descontento u oposición a las medidas de gobierno y su impacto en amplios sectores de población fue una preocupación compartida por grupos de personas políticamente heterogéneas.

Aun cuando la derogatoria del Decreto 883 fue una demanda compartida por todas las personas participantes de las protestas, podría decirse que la oposición al decreto funcionó como símbolo del descontento hacia políticas neoliberales que implicaban otras dimensiones que, para los jóvenes entrevistados, se constituyeron en el centro de sus demandas y motivaciones para sumarse a las movilizaciones. Junto a la derogación del Decreto 883, como objetivo explícito se expresó el repudio a los recortes presupuestarios en educación, salud, seguridad social, y la flexibilización del régimen laboral, así como la exigencia de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garante de los derechos sociales y económicos. “Todo el mundo

decía: ‘derogatoria del Decreto 883’ (...) pero desde ese discurso se empezó a construir y a evidenciar o visibilizar una problemática que está ahí, como el abandono del Estado a la zona rural, desde el tema agrario, desde el tema agrícola. El tema de evidenciar cómo la eliminación del subsidio a los combustibles implicaría un encarecimiento de la vida” (hombre joven, dirigente indígena).

Desde jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios, hasta las comunidades y sectores populares que expresaron su preocupación por el alza de los precios del pasaje y el incremento de los costos de vida, se ponía de relieve un descontento general ante las consecuencias de tales políticas a nivel individual, familiar y colectivo. El rechazo a las medidas neoliberales, en cualquier caso, responde a la relación que tienen con el aumento de la pobreza, la ausencia de derechos sociales y la acentuación de la desigualdad social. Es decir, las políticas de ajuste son vistas como una amenaza directa a las posibilidades de desarrollo profesional, laboral, económico; son entendidas como detonantes que precarizan aún más las perspectivas de futuro de la juventud ecuatoriana. Especialmente, jóvenes de clases populares asocian el neoliberalismo con impactos negativos en las condiciones económicas propias y de sus familias, con la imposibilidad de que las comunidades a las que pertenecen y la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana accedan a derechos fundamentales, todo esto en el marco de una sociedad que de por sí connota elevados niveles de desigualdad y mantiene grandes segmentos de población en estado vulnerable. De este modo lo comenta una de las entrevistadas: “Luchaba para no ser la última mujer de mi familia que pueda estudiar; para que mi primo pequeño pueda estudiar, para que mi vecina pueda estudiar. Para que mi cuñada, las mujeres de mi barrio, no vivan más violencia de género, para que tengan medios con los que subsistir. Para yo misma (...) seguir estudiando y con un trabajo digno lograr mantenerme” (mujer joven, estudiante de género).

Los testimonios narran también las distintas realidades que experimentan los jóvenes según su condición de clase, étnica y de género, hechos que aportan distintos matices a las maneras de concebir su participación en las protestas y que determinan el peso de

múltiples aspectos en la justificación de sus acciones. Por otro lado, jóvenes estudiantes provenientes de clases medias, que no se consideraban a sí mismos los actores más afectados por las políticas del Gobierno, refirieron su desacuerdo con estas en tanto “se trataba de una preocupación por la brecha social que a la mínima medida aparentemente inofensiva se agranda” (hombre joven, estudiante de Ciencias Políticas). “No es que había una ideología (...) sino que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, porque esto va a afectar al país en el que tenemos que trabajar, que tenemos que sacar adelante”, afirmó un estudiante de Medicina, dando cuenta de su preocupación por lo que podría suceder a la ciudadanía. Posición congruente con datos arrojados por la encuesta realizada para este estudio, en la que el 44% de jóvenes contestó que al momento de decidir su participación en las protestas priorizó los efectos que podrían sufrir otras personas antes que su propia situación, en contraste con el 10% que favoreció, en el otro extremo de la escala, “participé por lo que me pasaba a mí”.

Entrevistadas y entrevistados, en su totalidad, consideran las políticas gubernamentales “antipopulares”, por cuanto vulneran los derechos básicos de las mayorías mientras favorecen a las élites nacionales y transnacionales. El rechazo al FMI se inscribe, además, en la defensa de la soberanía nacional que arrojan las narrativas de algunos jóvenes. De manera que las medidas económicas son entendidas como fundamentalmente injustas, puesto que con su implementación el Gobierno obliga a los de abajo a pagar la crisis, toda vez que beneficia a grandes grupos económicos.

Por último, estas políticas son percibidas como expresión de un modelo social históricamente injusto que produce desigualdad, sufrimiento y atenta contra la vida misma. Frente a esta realidad, las acciones de protesta cobran sentido como defensa del grupo familiar y de la comunidad, como acción de rebeldía frente a un sistema que discrimina y oprime. La naturaleza misma de las políticas neoliberales facilitó que en octubre confluyeran malestares de sujetos jóvenes. Coincidimos con Acosta y Cajas Guijarro en que más allá de una reacción coyuntural contra medidas específicas, el levantamiento indígena y popular debe considerarse un momento

durante el cual “las movilizaciones expresaron el rechazo hacia una realidad de dominación vivida que venía acumulándose” (Acosta y Cajas Guijarro, 2020).

APOYO AL MOVIMIENTO INDÍGENA

Independientemente de los lugares políticos donde se situaban los jóvenes, existió un eje de estímulo claro para su incorporación en las protestas de octubre: brindar apoyo al movimiento indígena y reconocer que desde su llegada a Quito este actor lideraba las protestas. Estudiantes universitarios, que se involucraron en las acciones durante los primeros días de paro de transportistas y respondieron al llamado del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) y del Frente Popular, relataron que luego de que se anunció la activación del movimiento indígena hacia Quito pasaron a ver su participación desde este posicionamiento, con la idea de colaborar con el movimiento y sostener las protestas; otros actores juveniles, actualizando sus experiencias previas de trabajo social y ayuda humanitaria, comenzaron a “mover cables y ver qué se [podía] hacer, porque teníamos entendido que llegarían al parque El Arbolito (...) y que realmente iban a necesitar algún tipo de ayuda o de suministros para soportar las protestas” (hombre joven, estudiante de Ciencias Políticas).

Los testimonios denotan que para una parte importante de hombres y mujeres jóvenes de colectivos y organizaciones sociales, allende su participación en la primera línea, en los voluntariados o las brigadas médicas, esta postura se vincula con el reconocimiento del papel central del movimiento indígena, en particular del liderazgo de la CONAIE, dentro de los movimientos sociales de izquierda y la incidencia que esta tiene en situaciones de movilización. Reconocimiento que, en algunos casos, desencadenó procesos reflexivos que incluso ponían en cuestión sus propias militancias.

RECHAZO AL RACISMO Y A LOS DISCURSOS CLASISTAS

“Lo que más me motivó fue el racismo y el clasismo que estaba implicado en esta situación”, destaca una joven estudiante de Antropología como motivos que acicatearon su decisión de participar en las protestas. Esta afirmación, compartida por varios participantes

mestizos, expone una fuerte indignación ante abiertas expresiones de racismo y discriminación basada en la clase social, manifiestas tanto en la represión de las fuerzas del orden como en los discursos emanados desde el Gobierno que circulaban en medios tradicionales y redes sociales. Uno de los hechos que salió a colación fue el proceder de las élites quiteñas y guayaquileñas, quienes marcaron los espacios de las ciudades como no indígenas. Los jóvenes sintieron la necesidad de posicionarse en contra de ese orden a través de su participación en la primera línea, en las brigadas médicas o desde el activismo digital.

Tanto en los discursos oficiales como en las redes sociales, se intentó desacreditar al movimiento indígena y a otros actores que participaban en las protestas. Por una parte, el Gobierno les negaba agencia y capacidad de discernimiento, acusando a los indígenas de ser manipulados por fuerzas del correísmo, calificando sus acciones como actos vandálicos o acusando a los jóvenes manifestantes de “drogadictos, borrachos y majaderos” (hombre joven, indígena). Mientras que en las redes sociales se evidenciaron discursos antiindígenas que revivían viejos tropos racistas, como el barbarismo y el miedo ante el asedio a la ciudad mestiza o su destrucción. “Empezaron a relacionar todo el discursillo detrás de la raza: los indígenas no son civilizados, son salvajes, ellos no entienden qué es la ciudad. Incluso a mí me sorprendió cómo compañeros de universidad empezaron a decir: ‘no destruyan las piedras de Quito’” (hombre joven, dirigente indígena). Aun cuando una joven indígena de la CONAIE minimizó la importancia de estos comentarios, argumentando que son asuntos con los que conviven y no pueden dejar que los afecten, otros jóvenes indígenas activos en las protestas los subrayaron como agravios a pueblos y nacionalidades que ponen en evidencia la naturaleza del orden social al que se enfrentan.

Puede ser que hayamos vivido en algún momento más discriminaciones, pero no significa que nos deje de sorprender cuando esta señora guayaquileña (...) empieza con un juego de “póngale la pluma al indio”. ¡Cómo alguien en el 2019 puede decir “póngale la pluma al indio”! O cómo este periodista, no sé si es periodista, pero este señor de *La Posta* empiece a decir “indio cogido, indio preso” y no sé

qué, y empiece a utilizar conceptos. Nosotros podríamos utilizar el concepto “indio”, o el concepto “runa” para reivindicar, pero ellos lo utilizan de la forma más despectiva posible. Entonces, al mestizo o al indígena que al menos tenga conciencia, le va a perturbar (hombre joven, dirigente indígena).

VIOLENCIA DE ESTADO

Situaciones como el ataque a traición en las afueras de la Asamblea Nacional y la muerte de tres jóvenes que cayeron del puente San Roque perseguidos por la policía, son rememorados por algunos jóvenes como ejemplos de la arremetida y del ensañamiento de las fuerzas públicas contra los manifestantes. Se trata de un despliegue inaudito de violencia que hizo repuntar la indignación, la voluntad de participar y mantener el fervor en las calles. Es importante señalar el efecto que produjo en los jóvenes la circulación de información a través de medios de comunicación alternativos y de redes sociales que mostraron la violencia de Estado contra las personas movilizadas. Los sentimientos de indignación desbordaron no solo ante la constatación de la violencia estatal desproporcionada, la brutalidad de la represión, las personas heridas y asesinadas, sino también por la autocensura de los medios de comunicación tradicionales, la criminalización de los manifestantes y la negación por parte de representantes del Gobierno a asumir la responsabilidad de posibles violaciones a los derechos humanos. Con relación a esto, los resultados de la encuesta muestran que más del 80% de los jóvenes encuestados opinó que los cuerpos del orden público de octubre aplicaron un uso excesivo de la fuerza y el Estado ecuatoriano vulneró derechos humanos.

CERCO MEDIÁTICO

Desde un primer momento los medios de comunicación comunitarios y alternativos fueron herramientas activas para informar sobre los acontecimientos en las protestas y ofrecer espacios de difusión a las voces de los manifestantes. Igualmente, a medida que transcurrieron los levantamientos, jóvenes, en su mayoría sin vinculación con organizaciones o colectivos, encontraron en el activismo digital una trinchera de lucha, tanto en Quito como en territorios

fuera de la capital. Documentando las protestas y haciendo circular la información a través de sus redes o hacia medios alternativos, compartían imágenes y testimonios “para que la gente visualizara qué estaba pasando realmente y cómo había un uso excesivo de la fuerza” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante). Se menciona recurrentemente que los medios tradicionales no estaban cubriendo lo que pasaba y que estaban alineados a la posición del Gobierno. A su vez, se afirma la importancia de la comunicación alternativa para contrarrestar los discursos deslegitimadores que posicionaban medios tradicionales sobre indígenas y manifestantes, para establecer redes de apoyo internacional y para romper lo que denominaron el “cerco mediático”.⁸

Entre la indignación y la solidaridad

La indignación fue la emoción mencionada de modo más reiterado, tanto en las entrevistas como en la encuesta. De acuerdo con las personas entrevistadas, la indignación surgía como consecuencia de la actuación del Gobierno: las medidas económicas, la represión de manifestantes, las narrativas oficiales que envilecían y criminalizaban la protesta, y los discursos racistas, clasistas y xenófobos. Para Cadena Roa (citada en Poma y Gravante, 2014, p. 27), la indignación es un sentimiento íntimamente relacionado con situaciones injustas y “es provocada por la creencia de que alguna norma moral ha sido deliberadamente rota y que un daño y sufrimiento han sido infligidos a personas que no lo merecían”.

Junto a la indignación, los entrevistados señalaron un conjunto de emociones: miedo, rabia, sorpresa, sentido de inseguridad, ultraje. La encuesta permitió establecer el peso relativo que también tuvieron la incertidumbre y la tristeza. Este mapa de emociones conforma un “shock moral” como respuesta a un evento que suponía peligro para la seguridad de las personas (Poma y Gravante, 2014, p. 28). Entre

8 Los resultados de la encuesta muestran que el 40% de los jóvenes encuestados consideró que “romper el cerco mediático” tuvo más peso en su decisión de participar en el paro que la idea de oponerse al extractivismo minero y petrolero, hecho, este último, que comportó mayor peso para un 15%.

las juventudes, el sentimiento de ofensa hacia los manifestantes, tanto a su dignidad como a su seguridad física y su vida, las empujó a la participación y a la acción política. Participantes en la primera línea, brigadistas médicos, voluntariado y reporteros profesionales o improvisados, fueron testigos de formas de violencia que detonaron respuestas emocionales características del shock moral. Una estudiante que participó en la organización del centro de acogida de la Universidad Central lo explicita con las siguientes palabras: “Era muy fuerte lo que veíamos, la gente llegaba herida, sangrando, sin conocimiento, los niños y las niñas con frío (...) estábamos en una guerra, literalmente. El Gobierno nos había declarado la guerra a los ciudadanos y ciudadanas y lo sentíamos así. Era un contexto de guerra” (mujer joven, estudiante y feminista).

Algunas personas entrevistadas no solo fueron testigos del sufrimiento de manifestantes, sino que experimentaron de manera directa la violencia, en especial quienes estuvieron en la primera línea, brigadistas que la acompañaban y quienes se desempeñaban como reporteros.

Tres momentos me marcaron del paro. El primero fue el jueves, cuando corríamos de la Plaza Grande hacia San Blas. Fue la primera vez que vimos que salió el trucutú y nos dispararon, y yo estaba en ese momento con Carlos, que es mi compañero en la revista, y estaba escondida detrás de un taxi en la Antepara, y estaban tan cerca que se rompían los vidrios y me caían en la cabeza, y el miedo de saber que tenía que correr en subida, en el centro histórico, y con gas, fue una de las veces en que más me asusté. También ese vértigo entre lo que en ese momento creíamos que era salvar la vida y a la vez tratar de recuperar el casquillo que estaba ahí. Esa fue una de las cosas que más me marcó, porque tuve mucho miedo, porque pensé que nos íbamos a morir, que nos iban a matar (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

Entre preocupación, miedo e indignación, también proliferaron otros sentimientos, como la admiración que inspiró la solidaridad de un sinnúmero de voluntades que confluían. Fue precisamente esta solidaridad, desplegada desde las redes de aprovisionamiento, las brigadas médicas y los voluntariados, la que sostuvo los ánimos

de muchos, así como la sorpresa ante la capacidad de organización improvisada: “Había mucha solidaridad alrededor y había una cosa que yo no había visto (...) muchos estudiantes que no estaban organizados necesariamente, estuvieron ahí organizando todas las noches, con mucha disposición, con mucho compromiso” (mujer joven, estudiante y feminista).

Experiencias, aprendizajes y significados

Respecto a cómo los jóvenes entrevistados vivieron esos días, qué experiencias les resultaron más relevantes y qué aprendizajes rescatan a partir de su participación, encontramos varios elementos reiterados en sus testimonios: la importancia de la organización y la solidaridad; la comprensión de la vigencia de legados coloniales; la relevancia del cuidado y el sostenimiento de la vida; y las potencialidades de la lucha en las calles.

ORGANIZACIÓN Y SOLIDARIDAD

Los jóvenes aludieron repetidamente al valor que, luego de su experiencia en las protestas, dan a la organización. Resaltan cierta sorpresa ante la capacidad de ordenamiento que afloró durante las protestas y su espontaneidad, tanto en escenarios de primera línea como en el establecimiento de centros para el resguardo, el cuidado y la atención de manifestantes, familiares y heridos. Asimismo, los jóvenes agrupados espontáneamente con amistades o compañeros universitarios insistieron en que la organización fue una de las enseñanzas más destacadas del paro de octubre.

Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de jóvenes entrevistados expresaron admiración por el movimiento indígena, sobre todo por su capacidad organizativa, de movilización y liderazgo durante las protestas. Por otro lado, la referencia a la solidaridad como eje vivencial durante los días de protesta está presente en todos los relatos de jóvenes entrevistados; consideran la solidaridad popular una respuesta inmediata que emergió en la lucha y que marcó la experiencia. Tal como acotamos con respecto a las emociones que impulsaron la lucha, las personas entrevistadas señalan que las

múltiples acciones y modos de colaboración de una gran masa heterogénea fueron clave para sostener la protesta. Fue esta solidaridad la que sirvió de soporte a procesos de articulación improvisados en diferentes espacios: “Eso fue algo espontáneo que pasó, y desde muchísimos frentes” (mujer joven, comunicadora social y periodista militante).

En definitiva, los resultados de la encuesta arrojan la importancia de la solidaridad como elemento significativo en el análisis de la participación de jóvenes durante las protestas. Como hemos mencionado, ante la pregunta “¿qué pesó más en tu decisión de participar en el paro de octubre?”, un mayoritario 44% de las personas encuestadas respondió: “participé por lo que le podría pasar a otras personas”, en oposición a “participé por lo que me podía pasar a mí”.

COLONIALISMO

Otro aprendizaje está relacionado con la oposición a manifestaciones explícitas de racismo y tiene que ver con la asimilación de que vivimos en una sociedad de legados coloniales no superados. Entre los entrevistados mestizos, darse cuenta de esta realidad los llevó a “salir de la burbuja”, a reconocer que “esa relación de las personas blanco-mestizas con las personas indígenas es una relación de superioridad; somos muy herederos de toda esa cosa colonial horrible y superracista” (mujer joven, estudiante y feminista). Jóvenes indígenas tuvieron oportunidad de superar diferencias generacionales y reafirmar un vínculo intergeneracional, desde la reactivación, por un lado, de la memoria de las luchas del movimiento indígena, en términos anticoloniales y anticapitalistas, en tanto conciencia colectiva: “Yo me acuerdo de guagua, mis padres siempre han estado en las movilizaciones (...) Ese canto de los quinientos años de resistencia, compañeros y compañeras de las nuevas generaciones se agarraron de eso, ese es nuestro canto y ahora lo entendemos” (mujer joven, indígena, estudiante doctoral). Y por el otro, la asunción de que, a pesar de los avances en derechos o reconocimiento, persiste un problema de racismo y exclusión que configura las dinámicas sociales.

Otro elemento que surge en las entrevistas tanto de mestizos como de indígenas, se refiere a un momento de quiebre en una

cotidianidad vivida desde el privilegio de clase y que les conectó con un país caracterizado por la desigualdad y la vulneración de derechos. Este momento de quiebre permitió alianzas (al menos momentáneas) interclasistas y antirracistas. Algunos jóvenes mestizos reflexionaron y concluyeron que sentirse parte de una comunidad mayor, de una comunidad “ecuatoriana” donde caben mestizos e indígenas: “Fue para nosotros un antes y un después, salimos de una burbuja (...) nos movió algo. Entonces, yo creo que ha sido un momento para que nosotros y mucha gente de mi círculo pensemos y digamos: sí, vivimos en cierta situación social, tenemos cierta comodidad en nuestra vida, ¿por qué no poder hacer desde ese punto algo?” (hombre joven, estudiante de Ciencias Políticas).

Desde estos mismos círculos, jóvenes universitarios de clase media a quienes entrevistamos comentaron haber sufrido durante esos días estigmatización por parte de amigos y personas cercanas: “Ah, este es un rojo, este es un comunista”. A su vez, un joven indígena hizo referencia al hecho de que sectores de jóvenes, y también profesionales de clase media, “asumieron una posición de clase”, “decidieron estar junto a la gente que estaba luchando” (hombre joven, dirigente indígena), a riesgo de ser directamente afectados en su seguridad y libertad. Para este entrevistado la opción era estar con el pueblo o estar junto al Gobierno: “Si estabas con el pueblo, estabas en la calle; si estabas con el Gobierno, estabas en las redes sociales criticando que al país se lo saca adelante trabajando”.

CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE LA VIDA

Existe un notable reconocimiento por parte de mujeres y hombres entrevistados de la importancia del soporte de la lucha mediante actividades de cuidado y sostenimiento de la vida. Al igual que comentaristas y académicos, jóvenes que participaron en el paro reconocen la destacada relevancia de actividades que hicieron de las casas y centros de acogida humanitaria “el corazón de la resistencia” (Noriega Donoso y Criollo Galván, 2020): “Y si los centros de acogida eran el corazón de la resistencia, las cocinas eran, a su vez, el corazón del corazón” (mujer joven, estudiante y feminista).

El cuidado incluyó soporte emocional, por ejemplo, en las noches, después de las jornadas de protesta y cuando empezaba

el toque de queda. Así, voluntarios y voluntarias en los centros trataban de consolar a personas afectadas y emprender gestiones para la búsqueda de adultos y menores perdidos, tal como testimonió uno de los entrevistados, “la parte fea era la gente que se perdía. Se perdían niños (...) incluso familias, se perdían personas, como ya era toque de queda quedaban atrapados en algún lado (...) y encontraba llorando a los familiares” (hombre joven, estudiante de Medicina).

En sintonía con debates adelantados por el feminismo, estas actividades son esenciales para la reproducción social y de la vida, pero a partir de octubre, otros actores sociales reconocen la importancia de estas tareas también para la acción colectiva y la política contenciosa. Sin embargo, estas labores no dejan de estar feminizadas, y de alguna manera reproducen ciertos estereotipos de género, como rasgos asociados a la maternidad: “Yo veía en ese momento que las mujeres tenían más capacidad de lograr organizar y, digamos, con mucho cariño, pero a la vez con disciplina. Era un poco ese rol que las madres juegan en su casa (...) era como trasladar esa lógica que llevamos en nuestra vida cotidiana, y en los distintos espacios en que sociabilizamos, a este espacio” (mujer joven, estudiante y feminista).

POTENCIAS DE LAS LUCHAS DE CALLE

La encuesta arrojó que un mayoritario 35% de jóvenes estima la “importancia de la lucha en las calles” como el principal aprendizaje de su participación en las protestas de octubre, seguido por la “importancia de lo que puede lograr la organización de las personas para sus objetivos”, con un 21%. La activación en las movilizaciones fue valorada como una posibilidad real de incidir en el giro de los acontecimientos: “Sí se puede cambiar saliendo a las calles”. Esto era de especial relevancia para jóvenes de clase media que no habían tenido experiencia previa en protestas sociales. Algunos entrevistados recurrieron a formas de organización espontáneas con grupos de amigos o de compañeros universitarios y cuestionaron la participación que se limita a las redes sociales.

En ese momento existía una sensación de triunfo, de euforia, de expectativas en las posibilidades que abre la protesta, la recomposición de un bloque popular y la solidaridad de un gran sector

de la ciudadanía. Sin embargo, recordado desde el momento de la pandemia, y en vista de que las movilizaciones en contra de recortes a la educación no alcanzaron la convocatoria de octubre, existe cierto sentimiento de nostalgia: “Entonces, yo creo que regresar a ver octubre es regresar a ver lecciones de unidad, regresar a ver lecciones de la fuerza popular, y también es esa esperanza que te da saber que no estuvimos tan lejos de poder lograr transformaciones” (mujer joven, estudiante y feminista).

SACAR DE LA PRESIDENCIA A LENÍN MORENO

Aunque en menor grado, una de las razones para participar en las protestas expresada por entrevistadas y entrevistados, y reflejada con más claridad en los resultados arrojados por la encuesta, fue lograr la salida de Lenín Moreno de la presidencia. Los resultados de la encuesta muestran que el 42% sostuvo que sacar al Gobierno de Moreno pesó más en su decisión que la derogación del Decreto 883 (22%). Los testimonios hacen referencia a la fuerza que ganó con el transcurso de los días el llamado de los manifestantes a que Moreno abandonara el poder, y a la legitimidad de tal reclamo al calor de la indignación por las muertes, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas públicas.

El Estado, la política, los políticos

En cuanto a la visión que tienen las juventudes sobre el Estado, la política formal y los partidos políticos, es posible concluir que en Ecuador estas instituciones se encuentran deslegitimadas. La información cuantitativa denota una alta desconfianza en el Estado, sus instituciones y el sistema político. En una escala de cinco puntos entre “ninguna confianza” y “mucho confianza”, las siguientes instituciones inspiran poca o ninguna confianza, situación que empeoró, en la percepción de encuestadas y encuestados luego de las protestas de octubre de 2019:

1) Presidencia: el 78% sostuvo que no tenía ninguna confianza en el presidente, pero luego del paro este porcentaje aumenta hasta un 92%.

2) Policía: antes de las protestas de octubre, el 57% señala que no tenía ninguna confianza en los cuerpos policiales, dicho porcentaje sube a 78% después de octubre.

3) Fuerzas armadas: el 51% señala que no tenía ninguna confianza, de allí, el porcentaje se incrementa al 71% luego del paro.

4) Asamblea Nacional: el porcentaje de quienes no tenían ninguna confianza en la asamblea antes del paro es de 62%, porcentaje que sube al 82% una vez que acontecieron las protestas.

5) Partidos políticos: el 63% sostiene que antes del paro de octubre no tenía ninguna confianza en los partidos políticos, este porcentaje alcanza el 76% después del paro.

6) Sistema de justicia: de 67% de encuestados que no tienen nada de confianza en el sistema de justicia, el porcentaje sube al 80% luego del paro.

7) Medios de comunicación tradicionales: quienes no tenían ninguna confianza en estos medios antes del paro corresponde a un 69%, porcentaje que aumenta a 82% luego del paro.

Las juventudes venían desde una posición de desconfianza ante estas instituciones y, con posterioridad al paro de octubre, el nivel de desconfianza aumentó considerablemente. Sin embargo, el déficit de confianza en estas instituciones no se ve compensado por un superávit de confianza en organizaciones sociales u otras instituciones que fueron actores importantes en el paro. Así, la pregunta sobre niveles de confianza hacia el movimiento indígena, los movimientos sindicales, las universidades, los medios de comunicación alternativos y las organizaciones estudiantiles, no arrojó resultados positivos. Este hecho deberá ser investigado a futuro para conocer en qué o quién las poblaciones jóvenes depositan su confianza, pues por el momento parece claro que las instituciones y organizaciones mencionadas no son los referentes.

Si bien en los testimonios no se expresa un rechazo categórico a los partidos políticos como forma de participación, en las entrevistas se observa una tendencia al cuestionamiento y la valoración negativa de los partidos políticos y la política formal. Este dato coincide con estudios que señalan que el sistema político constituye una instancia cuestionada y poco valorada por las juventudes (Unda, 2010).

Al respecto de la política, un entrevistado comentó: “La política en Ecuador está desgastada, está desgastada desde la estructura de los partidos políticos. El último partido grande que tuvimos, Alianza País, ha estado en entredicho por muchas cosas. No hay un aire fresco que dé (...) esperanzas, que diga por aquí puede ser el camino, por aquí podemos reformar esto” (hombre joven, estudiante de Ciencias Políticas). La actuación del Gobierno contribuyó a profundizar aún más la imagen desgastada de varias instituciones. La mayoría de personas entrevistadas coincidió en que el Gobierno pudo haber actuado de otra manera y tomado medidas económicas diferentes y que su actuación ratificó su interés por velar por los intereses de las élites.

Uno de los temas más contenciosos sobre las protestas fue la violencia. El Gobierno culpabilizó a los manifestantes por la escalada de hechos violentos y por actos vandálicos, y de este modo legitimó su aplicación de la represión. Sin embargo, para algunos entrevistados, la fuerza represiva estatal en las marchas fue constatación de que el Estado protege intereses que no representan a la población. La represión confirmó la idea de un Estado que no garantiza derechos y de la vulnerabilidad de la población (sea de clases populares o de clases medias, y de colectivos indígenas o mestizos) frente a prácticas autoritarias. Recientemente, el defensor del pueblo ratificó una extralimitación en el uso de la fuerza pública durante las protestas, y un despliegue policial del 88% de sus efectivos.⁹

Para finalizar, comentaremos brevemente la visión que tienen los jóvenes sobre el futuro. En un estudio sobre diferentes formas asociativas juveniles, Unda Lara encontró que existe la tendencia hacia una suerte de precarización de las expectativas de futuro, pues “no se observa con nitidez que tales expectativas estén referidas a la construcción de un futuro que provea esperanzas de una situación mejor que la presente sino, antes bien, a adecuarse a lo que las circunstancias, inciertas y preocupantes, exijan e impongan” (2010, p. 108). Tal vez

9 “Defensor del pueblo afirma que hubo uso excesivo de la fuerza en protestas de octubre de 2019”. 26 de octubre de 2020: <https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/69292-defensor-del-pueblo-afirma-que-hubo-uso-excesivo-de-la> (consultado el 5 de agosto de 2021).

en los momentos posteriores a una protesta ganada, esta perspectiva de futuro con sensación de incertidumbre pudo dar paso a uno de mejores posibilidades, aunque el contexto actual de pandemia por el coronavirus lo haya cambiado radicalmente otra vez en sentido negativo. De manera que es posible decir que en la actualidad ha predominado una percepción pesimista ante el futuro. Este resultado debe leerse en el contexto de contagio global de covid-19 y en el marco de una serie de duras medidas económicas que el Gobierno ecuatoriano aplicó y que terminó de socavar por completo los logros de octubre; lo cual se traduce en un panorama general de profundización de crisis económica, pérdidas de empleo y suspenso de apuestas educativas para muchos jóvenes.

Conclusiones

El paro de octubre constituyó un momento de desborde popular. Estuvo antecedido por varias manifestaciones y protestas de grupos organizados con demandas particulares durante los años recientes y por múltiples expresiones de inconformidad social durante 2019. Sin embargo, la situación coyuntural de la expedición del Decreto 883 sirvió para articular estos descontentos. Esta articulación devino en fuerzas populares que superaron las expectativas de movilización de las organizaciones convocantes. Como indican los resultados de nuestra encuesta, la mayoría de jóvenes movilizados no formó parte de una organización, hecho que respalda la noción de desborde social.

Es importante considerar las diversas agendas de organizaciones y movimientos sociales que en años precedentes y durante 2019 habían retomado diversos modos de manifestación en la calle, así como la recomposición del movimiento indígena, con su capacidad de movilización de bases. De igual manera, organizaciones de estudiantes venían activas en contra de las políticas de ajuste y recorte a la educación. Por otro lado, el movimiento feminista y organizaciones de mujeres venían ganando destacada presencia y fuerza con acciones contra la violencia de género y en la lucha por la despenalización del

aborto. Asimismo, distintos gremios de trabajadores también habían organizado varios actos de protesta ante el anuncio de reformas laborales y de seguridad social.

En las experiencias relatadas por jóvenes entrevistados se observa confluencia de varios sectores organizados y no organizados con el movimiento indígena. Mujeres; jóvenes indígenas, mestizos y afroecuatorianos; jóvenes urbanos y rurales; jóvenes pertenecientes a organizaciones y colectivos sociales, y jóvenes que no pertenecen a ninguna organización política; jóvenes con discursos políticos articulados y jóvenes con discursos menos abiertamente politizados; dan cuenta de la heterogeneidad de los sujetos de la protesta. Aunque predominó una participación de sectores populares, esta afirmación es susceptible de ser matizada por la configuración múltiple de participantes, que incluye la actuación de jóvenes de clase media, con motivaciones relacionadas con la solidaridad o el apoyo humanitario. En la coyuntura de la protesta de octubre, las juventudes vieron posibilidad de tejer alianzas interétnicas e interclasistas, y subvertir, al menos momentáneamente, las jerarquías sociales que estructuran la sociedad ecuatoriana. Esta confluencia se da a partir del rechazo común hacia las medidas económicas.

Las narrativas de jóvenes acerca de las razones de su participación en las protestas expresan un malestar que se despliega más allá de la coyuntura, malestar fundamentado en la valoración de las medidas como concreción y continuidad histórica de desigualdad y opresión. Las medidas económicas se entienden como la profundización de un modelo de acumulación que ataca directamente la existencia de las mayorías sociales, de la naturaleza, y del desarrollo de la vida misma.

La indignación fue la emoción preponderante que acompañó a las juventudes manifestantes. Esta emoción estuvo ligada a la percepción de injusticia, tanto por las medidas económicas recién aprobadas como por la preocupación y miedo ante la arremetida represiva de las fuerzas del Estado. Asimismo, queda de relieve la preocupación frente a expresiones abiertas de prejuicios racistas y clasistas que se daban por superados. Los múltiples sentimientos de indignación se ven relacionados con un marco de interpretación

de los acontecimientos durante la protesta y con la actuación del Gobierno que provocó un sentido de shock moral.

Tanto las redes de socialización primaria como las redes sociales vinculadas a las tecnologías de información y comunicación jugaron un papel clave en las movilizaciones. Por una parte, se activaron grupos de amigos, compañeros, vecinos y familias con el objetivo de incorporarse en la protesta. Los jóvenes utilizaron estas redes para coordinarse y mantenerse informados. Las redes de amigos fueron entendidas como imprescindibles para lograr un mínimo de sensación de seguridad y gestionar mejor el miedo a participar en el conflicto. Se trataba de coordinar con amistades y conocidos para contar con la fortaleza que da la compañía y el cuidado mutuo. A su vez, el activismo digital se convirtió en el generador de información que pugnó por romper el cerco mediático impuesto por el Gobierno y los medios tradicionales.

Durante los doce días del paro, las redes de colaboración, solidaridad y cuidado fueron determinantes. Los centros de acopio y acogida humanitaria y las universidades abrieron espacios donde confluyeron diversas voluntades y capacidades, tanto de jóvenes como de otros participantes. Las múltiples acciones de cuidado y protección de la vida (atención médica, hospedaje, alimentación, cuidado de niños y niñas, soporte emocional, etc.) encontraron bases de operaciones desde donde brindar apoyo a los manifestantes. Se trató en definitiva de una forma de participación que fue tan valorada como la permanencia en la primera línea de protesta.

El descrédito de las políticas neoliberales fue un motivo manifiesto en la mayoría de entrevistados. Se entiende que estas políticas tienen efectos perjudiciales para una gran parte de la población. Son interpretadas como prueba del alineamiento del Gobierno con grupos de poder económico nacionales e internacionales. Asimismo, varios entrevistados, en su condición de estudiantes de diversas carreras, en general, y de Medicina, en particular, denunciaron las políticas de recorte de gasto en salud y educación y las afectaciones a los derechos laborales. La información cuantitativa ratificó la percepción de que las medidas económicas tendrían consecuencias muy negativas para la sociedad ecuatoriana.

La valoración del Estado, la política y los políticos es en general negativa, y queda claro que empeoró luego de las protestas. El Estado y sus instituciones, y los partidos políticos no generan confianza entre las juventudes. Existe una preocupación latente de que el Estado haya dejado de ser garante de derechos, así como por las estrategias represivas que sustentan las políticas neoliberales. Las personas encuestadas consideran que el Gobierno pudo haber actuado de manera diferente, que defendió intereses de la élite y que abusó de su fuerza represiva. Sin embargo, el Estado sigue siendo visto como necesario para articular propuestas transformativas. Cabe señalar que otras organizaciones y movimientos sociales tampoco gozan de alta confianza por parte de las juventudes, en consecuencia queda por ver en quién y en qué depositan su confianza.

Octubre, para las personas jóvenes de nuestro estudio se vivió como posibilidad de realizar una forma de democracia más legítima, construida desde la diversidad de voces; una democracia plurinacional. Estos jóvenes no ven la protesta como parte de un viejo modelo de insurrección, sino como escenario para poner en práctica la construcción de un modelo que no está definido ni acabado. Este horizonte social y político se piensa como opuesto a una versión de democracia representativa que sigue siendo excluyente y que se despliega en toda la violencia que le es intrínseca. Pero también se entiende como un horizonte político que se propone ir más allá de los límites del progresismo de la Revolución Ciudadana, de las limitaciones del personalismo político y de las prácticas tradicionales de los partidos políticos.

El paro de octubre hizo que muchos jóvenes revalorizaran el lugar de la protesta en las calles como vía eficaz para alcanzar logros sociales. La derogación del Decreto 883 fue comprendida como un logro de la acción colectiva popular. El paro demostró las posibilidades de la solidaridad y amplió el repertorio de la acción colectiva, haciendo que una multitud hiciera uso de diversas capacidades para concretar su participación.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A., y Cajas-Guijarro, J. (2020). Rebelión en los Andes: ecos económicos-políticos del levantamiento popular ecuatoriano. *Árbol de Papel*, octubre, pp.149-186. https://www.researchgate.net/publication/349486116_Rebellion_en_los_andes_ecos_economico-politicos_del_levantamiento_popular_ecuatoriano (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Acosta, A., y Cajas-Guijarro, J. (2019). Ajuste del FMI: cuentas sin cuadrar. *La línea de fuego. Revista digital*. <https://lalineadefuego.info/ajuste-del-fmi-cuentas-sin-cuadrar-por-alberto-acostayjohn-cajas-guijarro/> (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Almeida, P. (2020). *Movimientos sociales. La estructura de la acción colectiva*. CLACSO.
- Altmann, P. (2020). Eleven days in October 2019 - The indigenous movement in the recent mobilizations in Ecuador. *International Journal of Sociology*, pp.1-7. DOI: 10.1080/00207659.2020.1752498.
- Alvarado, S. V., Rodríguez, C., Gómez, A., y Sánchez, M. C. (2015). Emergencias y desplazamientos de la acción política de jóvenes colombianos. *Juventudes latinoamericanas: Prácticas socioculturales, políticas y políticas públicas*. CLACSO, pp. 31-48.
- Auyero, Javier. (2007). Introduction. Politics under the Ethnographic Microscope. *New perspectives in political ethnography*. Springer, pp. 1-13.
- Billion, D., y Ventura, C. (2020). ¿Por qué protesta tanta gente a la vez? *Nueva Sociedad*, N° 286, marzo - abril 2020. <https://nuso.org/articulo/por-que-protesta-tanta-gente-la-vez/> (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Calderon, F. (coord). (2012). *La protesta social en América Latina. Cuaderno de prospectiva política 1*. Siglo XXI Editores.
- Cuvi, J. (2019, 13 noviembre). Un debate simbólico cargado de prejuicios. *Plan V*. <https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/un-debate-simbolico-cargado-prejuicios> (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Cuvi, J., Arteaga, E., y Maldonado, X. (2020). El agotamiento de un modelo de control social. *Árbol de Papel*, octubre, pp. 125-132.

- De Certeau, M. (1984). *The practice of everyday life*. University of California Press.
- Defensoría del Pueblo. (2019). *Informe Ejecutivo personas detenidas*. <http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/2019/10/Informe-detenidos-paro-nacional-%E2%80%93-Ecuador-October-2019.pdf> (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Falleto, E. (2009). La juventud como movimiento social en América Latina. *Dimensiones políticas, sociales y culturales del desarrollo*. Siglo del Hombre Editores - CLACSO, pp. 265-278.
- Guamán, A. (2020). Neoliberalismo autoritario y paro nacional. Fin del Estado de derecho y la protesta popular. *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. CLACSO, pp. 149-168.
- Gutiérrez Cham, Gerardo y Kaltmeier, Olaf. (2019). Introducción: ¡Aquí los jóvenes! Frente a las crisis. *¡Aquí los jóvenes! Frente a las crisis*. Universidad de Guadalajara - CALAS.
- Iza, L., Tapia, A., y Madrid, A. (2020). *Estallido. La rebelión de octubre en Ecuador*. Quito, Ediciones Red Kapari.
- Luque, A., Poveda, C., y Hernández, J. (2020). Análisis del levantamiento indígena de 2019 en Ecuador: entre la respuesta legal y el lawfare. *Nullius*, 1(1), pp. 18-45. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/340062416_Analisis_del_levantamiento_indigena_de_2019_en_Ecuador_entre_la_respuesta_legal_y_el_lawfare_Analysis_of_the_indigenous_uprising_of_Ecuador_2019_between_a_measured_legal_response_and_lawfare (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Noriega, J., y Criollo G. (2020). Solo el pueblo salva al pueblo: centros de acopio y acogida humanitaria como corazón de la resistencia. *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. CLACSO, pp. 127-148.
- Ortiz, S. (2020). Ecuador: deriva autoritaria y levantamiento indígena popular. *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. CLACSO, pp. 85-110.
- Pino, C. (2020). Estado de excepción y violencia estatal. *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. CLACSO, pp. 221-248.

- Poma, A., y Gravante T. (2014). Emociones, protesta y cambio social. Una propuesta de análisis. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 13 (5), pp. 21-34.
- Resmini, F. (2020, 3 marzo). The Long Coup in Ecuador. *nacla.org*. <https://nacla.org/news/2020/03/03/long-coup-ecuador> (consultado el 5 de agosto de 2021).
- Ramírez, F. (2020). Paro plurinacional, movilización del cuidado y lucha política. Los signos abiertos de Octubre. *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. CLACSO, pp. 11-46.
- Romero Guayasamín, Pablo. (2006). Juventud, participación y ciudadanía. Reflexiones para la construcción del movimiento juvenil. *Ecuador Debate*, (68), pp.131-142.
- Saltos, N. (2020). El acontecimiento: la autonomía. *Árbol de Papel*, Octubre, pp. 133-148.
- Sierra, N. (2020). Y a pesar de todo nos levantamos. *Árbol de Papel*, Octubre, pp. 90-106.
- Unda, R. e, Idrovo M. (2020). Octubre: el estallido social. *Árbol de Papel*, Octubre, pp. 107-124.
- Unda Lara, R. (2005). Rebeliones quiteñas. Persistencia y transformaciones de la protesta. Versión actualizada de la ponencia presentada en el Foro “Prohibido Olvidar” (septiembre 2005) organizado por el Consejo Metropolitano del I. Municipio de Quito a propósito de los sucesos de abril de 2005 en Quito.
- Unda Lara, R. (2010). *Jóvenes y juventudes. Acción, representaciones y expectativas sociales de jóvenes en Quito. ¿Qué hacen, qué piensan y qué esperan los/las jóvenes?* Abya-Yala y Centro de Investigación de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
- Unda Lara, R. (2020). Ecuador: levantamiento popular y democracia en crisis. *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. CLACSO, pp. 351-366.
- Unda Lara, R. e Hidalgo Z. (2018). *Transición política en Ecuador y atisbos de presencias juveniles. Un análisis en la coyuntura actual*. Universidad de Manizales.

- Vásquez, M. (2009). La política desde abajo: narrativas militantes de jóvenes desocupados y desocupadas en Argentina. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 7(1), pp. 423-455.
- Walsh, C. (2019). El despertar de octubre y el cóndor: Notas desde Ecuador y la región. 1991. *Revista de Estudios Internacionales*, 1(2), pp. 84-90. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revesint/article/view/27009> (consultado el 5 de agosto de 2021).

DISPUTAS POR LA REPRESENTACIÓN

Nuevos sujetos y desafíos
en las movilizaciones ecuatorianas

STALIN HERRERA¹

1 Sociólogo. Director ejecutivo del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg.

El texto precedente² resulta especialmente interesante porque indaga en torno a uno de los actores más importantes de las movilizaciones de octubre de 2019: los jóvenes que masivamente ocuparon las calles portando la esperanza de renovar los movimientos sociales y sus ciclos de protesta. Además, el texto plantea algunas preguntas sobre las que quisiera hacer algunos aportes. Aunque las autoras eligen una estrategia de análisis y reflexión que indaga en las distintas dimensiones de la protesta como los factores estructurales y las condiciones de la coyuntura, ponen énfasis en la dimensión cultural de la protesta, lo cual nos presenta un plano de la movilización que resulta novedoso. La investigación nos brinda una “fotografía” del proceso de *subjetivación política* de los “jóvenes” movilizados, recoge testimonios de jóvenes (sujetos diversos y heterogéneos según su sexo, etnia, clase y nivel de organización) que rompen con las condiciones que los individualizan y los separan de sus pares; enlazan sus experiencias y construyen una posición crítica a las políticas neoliberales y al régimen de exclusión y marginación dominante (que tiene claras herencias coloniales); y finalmente desarrollan un “compromiso político” con el movimiento indígena y la movilización social. Los testimonios en sí mismos son de una enorme belleza y potencia política, especialmente porque el fenómeno, definido como un proceso de “enmarcamiento” desde el enfoque teórico de las autoras, una vez que nos da una idea clara del momento, también posibilita desplegar otras miradas críticas sobre el proceso, sus vínculos con la historia y las condiciones materiales.

Resalto lo anterior porque el texto ayuda a identificar una gran contradicción del momento histórico que quisiera explorar a fondo. La participación de los jóvenes no solo fue espontánea, tal como

2 “Dignidad para cambiar el mundo / Los sujetos del paro de octubre de 2019 en Ecuador”, p. 77.

explicita el estudio previo, había un conjunto de demandas respecto a las cuales actuaban políticamente: hablamos del libre ingreso a la educación superior, la oposición a la reducción del presupuesto para las universidades y del estipendio de los estudiantes de Medicina. A estas demandas podríamos sumar las luchas feministas, ecologistas o de trabajadoras y trabajadores, en las que las juventudes también han tenido protagonismo. Sin embargo, tanto jóvenes como organizaciones de mujeres, trabajadores y ecologistas, no fueron parte del diálogo con el Gobierno. Esto plantea una pregunta: ¿qué pasó con las históricas organizaciones de representación y articulación de jóvenes, como la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE)? Las organizaciones estuvieron en la movilización, “calentaron las calles” antes del estallido, sostuvieron la primera línea y movilizaron sus redes para sostener la protesta. A pesar de esto, su ausencia en el diálogo con el Gobierno y los resultados obtenidos en él reflejan la debilidad de esas organizaciones.

Lo cierto es que, si bien las organizaciones de trabajadores y de estudiantes fueron importantes hasta mediados de los años ochenta, aunque se mantuvieron activas en la resistencia al neoliberalismo, no lograron resistir a su embate. Con el progresismo, a pesar de que este recogió algunas de las demandas y proyectos de los movimientos sociales, el proceso se tradujo en una creciente contención y polarización donde las organizaciones, en contra o a favor del proceso, se fragmentaron y debilitaron. El fenómeno fue extensivo al conjunto del campo popular y el movimiento indígena no escapó, aunque sí logró mantener su autonomía. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) terminó en el centro de la representación del desborde social de 2019 a pesar de que en los últimos años se observaron varias contradicciones y disputas internas; sin embargo, tampoco logró convocar a una movilización importante y se había priorizado una estrategia de negociación con el Gobierno. Las primeras movilizaciones surgieron de modo más espontáneo, no fueron impulsadas ni promovidas por ella y su incorporación al escenario de protestas fue algo tardía. Por otra parte, el núcleo gravitante de sus acciones estuvo en Quito, la Sierra Central y la Amazonía, mientras que las movilizaciones tuvieron lugar en todo el país, y en

estas participaron amplias capas de los sectores no indígenas. Me atrevería a decir que aunque la insurrección de octubre no hubiese sido posible sin el movimiento indígena, no fue resultado de la CONAIE. El reposicionamiento en el campo popular de esta última fue consecuencia de las movilizaciones, y no a la inversa.

Así, la falta de representación de los otros movimientos en la mesa de diálogo tiene que ver no solo con la actitud de la CONAIE, que no se propuso ampliar las voces de la representación, sino con la debilidad del resto de organizaciones del campo popular. La crisis de las organizaciones estudiantiles³ y sindicales es un problema de larga data, además, junto a ecologistas y mujeres, fueron de los sectores organizados más golpeados por las reformas estatales y las acciones de contención del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Aun así, a pocos días de la movilización, la importante participación de las organizaciones de mujeres, campesinos, estudiantes, trabajadores, colectivos de jóvenes en la organización del Parlamento de los Pueblos, muestra que la CONAIE conserva el capital político que le permite situarse como actor de interlocución/representación, no solo frente al Gobierno, sino que estas organizaciones reconocen en el movimiento indígena también a su interlocutor.

Ahora, más allá de la debilidad organizativa, es importante que la movilización social no fue solo expresión de solidaridad y cooperación entre muchos, también fue un campo de disputa por la representación. En esa disputa la organización cumple un rol importante: primero como espacio en el cual se depositan las demandas y el descontento para que sean traducidas en un programa y un proyecto; luego, como espacio que hace posible engranar las demandas en un proyecto y articulación más amplios. De esto se desprende que el *estallido social* se explica desde la constitución de las subjetividades, así como desde la constitución de las estructuras de organización y representación de la sociedad, ejes que están estrechamente vinculados. El estallido o desborde expresa tanto la incapacidad del

3 El trabajo de Carlos Celi Hidalgo, publicado por la revista *Universidades* 76 en 2018, “Movimientos estudiantiles en América Latina: Ciclos de sincronía y desencuentros”, nos muestra que la crisis de representación estudiantil, con sus matices y singularidades, es un fenómeno latinoamericano.

“régimen político” para contener la presión y el malestar social, como la dificultad de las organizaciones para conducirlo. En el marco de la historia reciente esto se explica por la fragmentación del partido que hegemonizó el sistema político durante diez años (PAIS) y por la crisis de los movimientos sociales que habían sido asidero del descontento social contra el neoliberalismo hasta el 2007, y luego contra el Gobierno de Rafael Correa hasta el 2017.

Como lo recogen los testimonios, una parte de las razones por las cuales se movilizaron las juventudes tenía que ver con el sentimiento de injusticia frente a las reformas neoliberales y sus efectos sobre la sociedad: la creciente conflictividad que nace del deterioro de las condiciones de vida de la población y de la presión que ejerce el capital en su dinámica de apropiación/explotación de la naturaleza y el trabajo. Pero es preciso hacer énfasis en que la situación de conflicto no era nueva, de hecho, durante el Gobierno de Rafael Correa hubo mucha conflictividad. De modo que hay que preguntarse: ¿por qué el estallido se produce ahora y no antes?, ¿por qué no se produjo durante ese período de creciente conflicto?, ¿qué cambió? Es visible que el neoliberalismo ejerce una presión que aviva las pugnas; sin embargo, se entiende menos cómo debilita el régimen de control. Mi punto es que el Gobierno de Lenín Moreno, al desmontar las instituciones del Estado y reducir las inversiones sociales fracturó el sistema de persuasión y control del descontento social vía consensos que funcionó en el periodo anterior. Así, el estallido es resultado de la conjunción de tres elementos: la presión que el neoliberalismo produce sobre las condiciones de vida de la población en los territorios; el debilitamiento del Estado y la fractura del régimen de control de la población, consecuencia también del neoliberalismo; y la debilidad de las organizaciones sociales para canalizar la protesta.

En ese contexto, la indignación explícita y clara frente al sistema de injusticias aparece como motor de la subjetivación política de los jóvenes, de sus compromisos con la movilización, en general, y con el movimiento indígena, en particular, y como una oportunidad para renovar las alianzas y tejidos organizativos. Para esto parece importante recuperar la fortaleza de las organizaciones como depósito de las nuevas apuestas de las juventudes.



CHILE

REVUELTA Y JUVENTUDES

Políticas de lo pre y posfigurativo del 18-O en Chile

RAÚL ZARZURI¹
RODRIGO GANTER²
KARLA HENRÍQUEZ³
XIMENA GOECKE⁴

-
- 1 Sociólogo. Magíster en Antropología y Desarrollo. Doctor en Educación.
 - 2 Sociólogo. Doctor en Estudios Urbanos. Profesor e investigador de la Universidad de Concepción.
 - 3 Psicóloga. Magíster en Psicología Social Aplicada. Doctora en Estudios Americanos.
 - 4 Historiadora. Magíster en Género y Cultura. Profesora en la Facultad de Letras de la Universidad de Chile.

Introducción

Desde inicios del siglo XXI, se viene registrando en Chile un incremento exponencial de movilizaciones sociales y expresiones de protesta colectiva. Un análisis de información recopilada, entre los años 2005 y 2012, por el Observatorio Social de América Latina (OSAL de CLACSO) mostró a una sociedad que entraba en efervescencia, registrando, en este lapso temporal, un total de 1.852 eventos de conflicto, cuyos principales protagonistas eran estudiantes, trabajadoras y trabajadores, indígenas y activistas urbanos (Aguilera & Álvarez, 2015). Es preciso señalar que a partir de 2016 se suma una actoría, mujeres, particularmente jóvenes que nutren la nueva ola de movilizaciones feministas en todo el mundo. Esta efervescencia coincidió con otras protestas que se intensificaron a partir de 2010 en distintos puntos del orbe. Frente a estos escenarios, Ganter y Zazuri (2020) afirman que el caso chileno no constituye una excepción en el contexto global y latinoamericano, y agregan que las cuatro causas de movilización recogidas en el informe *World Protests 2006-2013* (Ortiz, Burke, Berrada, Cortés, 2013) para el caso chileno, se presentan de modo simultáneo y sincrónico durante 2019 y se influyen mutuamente: justicia económica; crisis política y del modelo de democracia; resistencia frente a organismos internacionales o tratados de libre comercio; defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes. También se percibe un distanciamiento de ciudadanas y ciudadanos respecto a la política tradicional (adhesión a los partidos políticos, militancia y abstención electoral), cuestión que se manifestó con mucha mayor fuerza en las juventudes (Zazuri, 2016; 2021).

La situación que vivió Chile a partir del 18 de octubre (18-O) podría denominarse de varias maneras: estallido, explosión, revuelta social, o “rebelión antineoliberal” como señala el Movimiento Revolucionario 18 de Octubre (2020). De cualquier modo, el rasgo

que destaca a esta movilización es ser el primer gran estallido social y político desde el inicio del llamado proceso de transición a la democracia (Zarzuri, 2019), hecho que no se veía desde las protestas nacionales durante los años ochenta en plena dictadura militar. Si bien a lo largo de la transición se han registrado grandes movilizaciones conducidas principalmente por jóvenes, sean estudiantes secundarios o universitarios, estas no tuvieron las características del 18-O: explosión con rápida onda expansiva que impacta la estructura política, económica, cultural y social, y que moviliza recursos (humanos y materiales) de magnitud inusitada.

El presente trabajo intenta profundizar en la comprensión de los procesos de levantamientos y protestas originadas desde el llamado 18-O, tomando como sujeto a jóvenes que no tenían militancia en partidos políticos y que participaban o no en organizaciones. El estudio buscó responder una serie de preguntas que, constituidas en categorías de análisis, indagaron en motivaciones, afectos, horizontes de expectativas, aprendizajes, experiencias, demandas, agendas de lucha y percepciones sobre la economía, la política y el Estado. Para dar cuenta de las variables antes señaladas, se realizaron ocho grupos de conversación y siete entrevistas individuales en las ciudades de Santiago, en Concepción (ubicada en la zona sur de Chile), y en la región de Biobío, atendiendo a un muestreo por cuotas que procuró dar cuenta de las variables de género, participación o no en organizaciones sociales, y zonas de procedencia. Además, se realizaron tres entrevistas a expertos.

Una generación destituyente

En la revuelta social del 18-O se expresan y confluyen múltiples malestares colectivos que la sociedad chilena viene acumulando al menos desde hace tres décadas, fue una máquina de lucha que se activó para lidiar contra la indiferencia frente a la situación de desmedro económico, social y cultural que viven vastos sectores de nuestro país, y que permitió que personas que no tienen problemas en la producción de la vida cotidiana, se sumaran. En ella “converge una multiplicidad de deseos y afectos que se unen, y lo más interesante, sin

que se suprime lo diverso o lo heterogéneo de los intereses de quienes concurren a las manifestaciones” (Zarzuri, 2020b, p. 2). Se observa, entonces, un tipo de acción colectiva desarrollada “por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros” (Tarrow, 1997, p. 19); un espacio donde la política contenciosa se revela, o sea, ocurre un levantamiento de demandas colectivas (Tilly y Tarrow, 2007; Zarzuri, 2020a); un tipo de acción denominada transgresiva, donde actores y modos de levantar demandas no están institucionalizados. Esto supone un desplazamiento hacia nuevas maneras de participación con orgánicas y estructuras distintas a las tradicionales, donde la ciudadanía se manifiesta con una efervescencia política que se ha formado desde abajo y que no tiene necesariamente la mediación de un movimiento político que la modele y module⁵ (Zarzuri, 2020a).

Por otra parte, las movilizaciones de la revuelta ponen en entredicho el concepto instalado de democracia liberal. Hay que recordar que de acuerdo a esta concepción la democracia solo se remite a procedimientos y relaciones funcionales e instrumentales donde la participación es mínima. Mouffe (1999), criticando a Rawls, señala que en las democracias liberales los ciudadanos solo deben compartir creencias acerca de los procedimientos y reglas sobre el vivir juntos. En esa misma línea, Amna & Ekman (2014) señalan que los modelos tradicionales no contemplan la participación democrática masiva. Es más, en este tipo de modelo, la población debe permanecer al margen de la política y debe ser convocada únicamente cuando haya elecciones. Sin embargo, en las personas que se han movilizadas es evidente el deseo de ir más allá del establecimiento de relaciones funcionales cuando se participa en política. Esto lleva a una reconfiguración de las modalidades de participación política más propias del siglo XXI, es decir, donde “[los sujetos posmodernos] evitan las formas

5 Refiere a que la revuelta del 18-O no tiene punto de comparación o experiencia que dé forma a su explosión (modele) ni tampoco, al estar fuera de la política tradicional, tiene estructura que permita modular la acción y su intensidad, como habría sucedido si hubiese estado coordinada o conducida por algún bloque partidario.

tradicionales de participación política, pero también desarrollan nuevas formas de comportamiento político y se mantienen interesados en los asuntos sociales (cf. Inglehart, 1997, 1999; Norris, 2002; Dalton, 2004)” (Amna & Ekman, 2014, p. 265). También se puede entender el levantamiento como generación de una conciencia colectiva que empuja a sus participantes a la acción. Esta idea, trabajada por MacAdam (1989) bajo el concepto de “liberación cognitiva”, pone el acento en condiciones subjetivas que —ligadas a condiciones objetivas que devienen o no en constantes, por ejemplo las desigualdades estructurales— describen un dinamismo en las interpretaciones de los sujetos (Galafassi, 2006) y les permiten pasar de la pasividad a la actividad. Precisamente esto se vivió en Chile, donde la mayoría percibió la pérdida de legitimidad del sistema, salió del aletargamiento y entró en acción colectiva (García Montes, 2013). El 18-O demuestra la desconexión entre la política y la vida común. A decir de Zarzuri, enfrentamos “uno de los raros momentos de la historia de Chile en que podemos observar cómo una política que estaba confinada a los subterráneos emerge como erupción volcánica, como magma volcánico, que con fuerza avasalladora atropella todo a su paso” (Zarzuri, 2019). Esto da cuenta de una tremenda frustración respecto a esa política tradicional que no ha podido resolver la producción de la vida en términos dignos para un sector mayoritario de la población. Así, la producción de la vida cotidiana, donde situaremos el inicio de la revuelta, comienza a ser de interés, puesto que es precisamente en ese espacio donde surge el descontento general. Por tanto, en una dimensión donde, como señala Lechner, “las organizaciones políticas cada vez más especializadas (burocratizadas) y escindidas del quehacer diario de ‘la gente como uno’ ya no crean ni aseguran las identidades colectivas; estas tienden a recomponerse al margen e incluso en oposición a las instituciones” (1984, p. 7). El autor describe, treinta y cinco años antes del 18-O, un descontento social concomitante a una crisis de la democracia, un deterioro de las prácticas políticas que se evidencia fuertemente en el distanciamiento entre grandes sectores de población y las instituciones políticas.

Habría que señalar que la denominada vida cotidiana ha sido denostada tradicionalmente como no política. A lo más se le considera

una forma de subpolítica, no en el sentido que lo trabaja Beck⁶, sino en términos negativos, como expresión incompleta. Esto no es asunto menor, pues muchos científicos sociales han visto las luchas feministas, las dinámicas políticas juveniles, y en general las prácticas organizacionales populares como no políticas. De acuerdo a esta perspectiva, solo se hace política en espacios institucionalizados (el congreso, los partidos, etc.) (Zarzuri, 2021). Sin embargo, hoy día nos encontramos con una vida cotidiana bullente, que se estructura, al mismo tiempo, como campo e instrumento de disputa (Lechner, 1984). En este marco de contextualización sobre el 18-O surge una pregunta: ¿qué papel juegan los jóvenes?

Una respuesta inicial sostiene que las juventudes actuales, y particularmente jóvenes estudiantes del ciclo secundario, se han convertido en una actoría relevante. Desde la incursión del nuevo siglo, han sido jóvenes quienes se han movilizado en Chile y han mostrado preocupación ante las desigualdades persistentes, a través de movilizaciones que demandan una educación de calidad, sin lucro, sin endeudamiento y con acceso gratuito; criticando el modelo económico. Hace casi dos años, al visibilizar la violencia, el acoso y el abuso sexual que sufren las mujeres, las juventudes fueron determinantes para el despliegue de lo que se denominó una nueva ola feminista; y mantuvieron su participación en el estallido del 18-O y las críticas a la Prueba de Selección Universitaria (PSU)⁷. Así, la clave generacional es central y se hace necesaria si se quiere hablar del malestar que lleva a cientos y miles de jóvenes a escenarios de protesta, poniendo en jaque a la

6 Para Beck, “la subpolítica se distingue de las *politics* (procesos de conflicto político relativos al reparto de poder y las posiciones de poder), en primer lugar, en que a los agentes externos al sistema político o corporativo se les permite aparecer en el escenario del diseño social (este grupo incluye grupos de profesionales y ocupacionales, la *intelligentsia* técnica en fábricas, instituciones de investigación y cuadros de gestión, trabajadores cualificados, iniciativas ciudadanas, la opinión pública, etc.) y, en segundo lugar, en que no solo los agentes sociales y colectivos sino también los individuos compiten con estos últimos entre sí por el creciente poder configurador de lo político” (1999, p. 140).

7 La Prueba de Selección Universitaria fue un test implementado en 2003 para el proceso de admisión a la educación superior. En 2020, producto de movilizaciones y denuncias, la PSU fue eliminada, dando paso a la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria (PDT).

política tradicional. Las actuales generaciones, insertas en el marco de las transformaciones de la sociedad chilena, son quienes vienen sacudiendo las barreras culturales, políticas y morales, e introduciendo críticas al sistema que produce nudos renovados de conflicto social. Esto ha llevado también a la constitución de prácticas políticas centradas (los feminismos, la vida cotidiana, grupos territoriales y ambientales, veganismos, entre otras), al refrescamiento de repertorios de acción colectiva (redes sociales y movilizaciones callejeras de diverso cuño), y a la resemantización de formas tradicionales de participación política. Por otro lado, esta realidad supone la puesta en juego no solo de miradas juveniles, sino adultas, para buscar puntos de convergencia y divergencia que posibiliten diálogos intergeneracionales.

A modo de hipótesis se puede esbozar que las movilizaciones más significativas del siglo en curso [que comenzaron en el año 2001 (mochilazo), se intensificaron entre 2005-2006 (revolución pingüina)⁸ y 2011, para alcanzar su punto culmen con la emergencia de la llamada marea feminista de 2018 y los sucesos del 18-O] configuran un momento generacional inédito. Es decir, hay una avanzada de jóvenes que ha construido y vivido su juventud en un período histórico de grandes movilizaciones estudiantiles. Franja temporal-experencial que contribuye a la reconfiguración de la política tradicional y dota a estos sujetos de un discurso y una épica que los distingue como generación⁹. Ellas y ellos han removido sentidos, recursos e imaginarios, han logrado instalar una preocupación colectiva sobre cuál país y sociedad se quiere construir, más allá de reivindicaciones específicas que tienen que ver con la calidad de la educación, asunto que de por sí era y sigue siendo relevante (Zarzuri, 2020a, 2021).

8 Se llamó “mochilazo” a la serie de protestas estudiantiles en el año 2001. Al ser las primeras posteriores al proceso de transición democrática, estas movilizaciones se constituyen como un hito para el movimiento estudiantil secundario y universitario. Por su parte, la “revolución pingüina”, ocurrida en el 2006, levantó sus demandas en favor del derecho a la educación y en respuesta al proceso de privatización del sistema de educación impuesto desde la dictadura de Augusto Pinochet.

9 Por generación entendemos tanto un grupo que se conformó homogéneamente en consecuencia de los grandes hechos y variaciones de su época, como un modo de subjetivación que, a partir de determinados problemas y situaciones, propicia rupturas con personas de grupos etarios distintos (Dilthey, 1875, como se citó en Longa, 2016; Lewkovicz, 2004).

Para la generación de los años ochenta, el problema era la dictadura militar y la represión que se implementó como política de Estado. Para la actual, el problema es la desigualdad y la falta de movilidad social. En tal sentido, el diagnóstico político-emocional de las juventudes de hoy habla de una sensación de estafa. Se les dijo que si estudiaban tendrían movilidad, es decir, acceso a otras posiciones en la estructura social; y sin embargo no es así. En definitiva, este tiempo ha conformado una generación más empoderada, con una vitalidad que la planta de igual a igual frente al mundo adulto. Son jóvenes quienes, por ejemplo, han roto (en sentido simbólico) estereotipos de género, y quienes han hecho propios los feminismos que circulan. Por tanto, son también más radicales al momento de enfrentar las desigualdades de género y enfrentar las violencias cotidianas. Como se ha señalado, las movilizaciones sociales en las últimas dos décadas fueron organizadas por jóvenes estudiantes, principalmente secundarios y después universitarios. Vale enfatizar que se trata de un actor minusvalorado por la sociedad chilena: un actor subestimado que no tenía posibilidad de acceder a roles centrales en el escenario societal y político chileno. A pesar de esto, paradójicamente, han incidido de forma relevante en el devenir del país. Varias de las transformaciones culturales, educacionales y políticas que se han emprendido en los últimos años no habrían sido posibles sin esas movilizaciones.

Cuando se hace referencia a jóvenes y su participación en el acontecer político y social en Chile, en los trabajos históricos aparece una serie de relatos fragmentados y discontinuos; pues las juventudes, desde una perspectiva adultista, no son consideradas una actoría relevante. Las prácticas y discursos de los sujetos jóvenes suelen subordinarse a una estructura institucional que los arropa (las Fuerzas Armadas, los movimientos o partidos políticos formales, la Iglesia católica) y los invisibiliza en tramas mayores diseñadas por adultos.

El despertar de la revuelta

Para las juventudes, la revuelta social no fue un fenómeno ligado exclusivamente a su condición de jóvenes ni a una clase social determinada; sin embargo, reconocen su protagonismo dentro de las

manifestaciones como elemento fundamental. Primero, por haber sido estudiantes secundarios quienes convocaron a la evasión en el metro de Santiago (chispazo inicial de la revuelta que invitó a otras generaciones) y, en segundo lugar, porque algunos papeles claves (como el sostenimiento de la movilización más desafiante y creativo en las calles y la llamada “primera línea”) eran mayoritariamente asumidos por ellas y ellos. Algunas de las personas entrevistadas tienen consciencia de que esto no ocurre sobre un vacío, sino que es parte de un proceso de activación sociopolítica de larga data. Para los jóvenes, el estallido social tiene su origen en la crítica a un modelo socioeconómico que, después de varias décadas, ha demostrado su desinterés por atender las necesidades de grandes sectores de la población: “Este es un movimiento que se da también por un despertar, no está ligado a una conducción política o a un partido propiamente tal, sino que es presión y consecuencia de años de un sistema neoliberal que no ha sido capaz de entregar respuesta, tanto a los derechos sociales como a un modo de vida de las personas que sea capaz de satisfacerlas” (hombre joven, participante de organizaciones, Concepción).

Se puede afirmar que las manifestaciones se dirigen hacia aquello que representa la clase política privilegiada. Si bien, según señalan personas entrevistadas, la mayoría de los políticos han sido elegidos democráticamente y unos menos han sido designados unilateralmente, ninguno representa las necesidades de la ciudadanía ni gobiernan para ella. En resumen, no ejercen una política a favor de sus electores ni para el desarrollo sostenible del país, sino que gobiernan para algunos pocos, principalmente para las élites económicas, quienes, a su vez, tienen gran influencia en las decisiones políticas.

¿Quiénes protestaron?

*No hay clase sin raza, sin género,
por eso la clase es una abstracción.*

LUIS THIELEMANN

Son adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultas y adultos, profesionales, ancianas y ancianos, estudiantes, técnicos, trabajadoras y

trabajadores, personas que no pertenecen a la clase política, sectores empobrecidos, capas medias y asalariadas con empleos precarios y extenuantes horarios laborales, que reciben el impacto de las decisiones de las élites y lidian mes a mes con los costos de la vida. Ellas y ellos comparten los efectos de la desigualdad social y económica, viven las precariedades de años de endeudamiento producto de esfuerzos y riesgos económicos para tener más posibilidades y mejores condiciones materiales, o para lograr sortear las dificultades que trae la privatización de servicios básicos: agua, salud, educación... Este panorama se traduce en injusticias cotidianas que vistas de manera independiente pueden parecer irrelevantes, pero cuando conforman parte sustantiva de un sistema que produce inequidades, toman otra connotación. En tal sentido, las trayectorias de quienes participaron en las protestas son diversas y expresan heterogeneidad en términos de género, edad y clase. Durante las protestas fue posible hallar jóvenes de distintos estratos socioeconómicos. Este encuentro, que se da en el espacio público al momento mismo del estallido, es fortuito y llama la atención. Es durante las acciones de protesta donde toman consciencia de que hay más jóvenes en las calles haciendo frente a policías y militares, asumiendo posiciones protagónicas en la primera línea, o protestando en otros ámbitos de modo pacífico: “Tengo compañeros que se conocen como cuicos¹⁰, por ejemplo (...) cuando pasó esta cuestión del 18 de octubre, me fijé que muchos compañeros se dieron cuenta de que sí había cosas que había que cambiar y se pusieron de este lado” (mujer joven, primera línea, Santiago).

La calle fue punto de encuentro espontáneo y común para las diferentes clases sociales que protestaron para recuperar la dignidad, cambiar la Constitución y dar cuenta del descontento social, transversal e intergeneracional, producto de décadas de abusos por parte de la clase política dominante y la élite económica. Punto de encuentro donde, en primer lugar, las juventudes comenzaron a acercarse por sí mismas, sin convocatoria ni planificación, con el objetivo de sumarse a la manifestación e integrarse a ella, a sus actividades y rutinas, sin que mediaran, en algunos casos, amigos, familia, pareja

10 Personas de clase alta.

o colegas. En segundo lugar, punto de encuentro donde comenzaron a tejerse redes de solidaridad y agendas de luchas comunes, articulaciones con otras personas que concurrieron de igual forma a la protesta, incluso cuando no era posible verse las caras, sobre todo en la primera línea, donde generalmente se actúa a rostro cubierto. La calle, entonces, fue plataforma común de personas con diversas condiciones y experiencias de vida:

Lo que pasa es que todos se están manifestando; tú te puedes encontrar pobladores que se están manifestando. Pero ahora en una manifestación te puedes encontrar con un doctor, con un abogado, con un poblador, con estudiantes, con universitarios, con un ingeniero, ya esto se extrapoló de la lucha de clases, digamos, porque había gente incluso de clase media acomodada manifestándose (hombre joven, participante de organizaciones, Santiago).

Elemento articulador (de comunión y de construcción de horizontes afines), la calle produjo un sentido de comunidad, de empatía con otras y otros que no se conocían, el solo hecho de estar en las movilizaciones hacía posible la creación de vínculos: “Igual era cálido el grupo, porque siempre éramos los mismos; sin conocernos, nos cuidábamos, ‘oye, ¿te pasa esto?’, ‘oye, ¿quieres ?, ¿necesitas agua?’ (...) siempre ‘apañándonos’. Yo que iba sola, nunca me sentí sola o desorientada; al contrario” (mujer, primera línea, Concepción). Sin embargo, las distinciones de clase adquirieron un protagonismo central en las protestas y fueron reforzadas por policías y militares quienes, a servicio de la clase política y económica dominante, reprimieron de manera selectiva a los manifestantes, allanando y violentando a sectores y comunas donde habita la población más vulnerable del país, y reproduciendo prácticas policiales clasistas. Por ejemplo, durante los primeros días de toque de queda después del 18-O, mientras que en la comuna de Las Condes (representativa de la clase alta) caminaban grupos de jóvenes por la avenida Apoquindo hacia sus hogares sin enfrentar complicaciones, en el centro de Valparaíso golpeaban y apresaban a jóvenes de clases medias y bajas que también intentaban llegar a sus casas una vez apagada la locomoción colectiva. Así se reportan distintas situaciones de desigualdad o prácticas

policiales clasistas. En Santiago las detenciones en sectores populares fueron numerosas, y no es casual que una vez acaecida la pandemia de covid-19 la mayor cantidad de fallecidos se encuentren dentro de esos mismos sectores (Fundación Sol, 2020).

Por otro lado, los lugares de protesta no se redujeron exclusivamente a ciudades centrales. También se situaron en sectores rurales y espacios alejados de grandes y medianas urbes. Gran cantidad de participantes del estallido convive junto a industrias o empresas (hidroeléctricas, agroindustriales, forestales, etc.) que han irrumpido en sus entornos de vida (urbanas, rurales y rururbanas¹¹), exponiendo a sus habitantes a riesgos socionaturales. Este tipo de intervención ha traído múltiples consecuencias: expropiación de tierras, incendios forestales, modificaciones en el ecosistema, escasez hídrica por usurpación de aguas para riego de amplios sembradíos, desvíos de cauces de ríos que provocan inundaciones y problemas de abastecimiento. Para los jóvenes entrevistados este modo de explotación no es un problema de ahora o de la dictadura, consideran que data desde el pasado colonial: “Entonces, estos tipos no es que vengan de la dictadura y que vengan de ahí aprovechando, sino que vienen desde la colonia sistemáticamente aprovechándose de la clase más empobrecida” (hombre, joven rural, participante de organización, Concepción).

Si bien en Chile, históricamente, las manifestaciones han sido configuradas a partir de bloques ligados a organizaciones políticas y sociales (con orden, jerarquía, vocería y liderazgo definido), como las marchas convocadas por la Unidad Social¹² o el movimiento feminista, las formas de comunicación y difusión de las distintas

11 Un espacio *rururbano* es un territorio que antes fue totalmente rural, pero que en la actualidad se suele utilizar para fines industriales o urbanos.

12 Unidad Social es un espacio de articulación convocado, inicialmente, por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En la actualidad está compuesta por 115 miembros, entre quienes destacan: Coordinadora Nacional NO+AFP; Confederación de Estudiantes de Chile; Agrupación Nacional de Empleados Fiscales; Colegio de Profesores; Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente; Comité de Allegados de la Agrupación de Vendedores Ambulantes de Santiago; Sindicato Starbucks Chile; y la Coordinadora Feminista 8M.

actividades de la revuelta en estudio tuvieron un carácter novedoso e incluso más personal. Las asambleas, cabildos, debates colectivos, denuncias y despliegue de información (como por ejemplo métodos para contrarrestar el gas lacrimógeno y cómo obtener ayuda si se era detenido) encontraron, al igual que en otros escenarios de protesta, un espacio significativo en las redes sociales: “Creo que fue totalmente por redes sociales (...) otra me decía: Mañana hay marcha. Yo le decía: ¿A qué hora? No sé, acá sale a esta hora. Y todo era por Facebook, por Instagram” (mujer joven, rural, participante de organizaciones, Concepción). Espacio significativo que funcionó también como herramienta para contrarrestar la imagen negativa y de criminalización de la protesta, difundida por medios tradicionales de comunicación: “Tuvimos muchas cosas en contra, la televisión, que criminalizaba la protesta (...) la guerra mediática fue brutal, el tema mediático y la criminalización del movimiento fueron brutales” (hombre joven, participante de organizaciones, Concepción).

Motivaciones para participar

Aun cuando la revuelta del 18-O aparece como hecho inesperado, las motivaciones que llevaron a miles de manifestantes a la acción articulan un acumulado histórico de demandas, agendas emergentes de movimientos sociales y efectos que el sistema político y el modelo económico de la transición democrática ha producido en la vida cotidiana de la sociedad chilena. Se trata de un abanico que logró convocar e integrar tanto a participantes de movimientos, partidos y organizaciones políticas, como a personas sin trayectoria previa que fueron fácilmente convocadas a incorporarse en el levantamiento, sin necesidad de mediación de grupos u organizaciones sociales. Las experiencias familiares de inequidad, precariedad y abuso cotidiano, se engranan con las demandas de ampliación democrática, defensa de derechos humanos, derechos laborales, agendas ecológicas y luchas por un sistema educativo justo, público y de calidad. Expectativas de movilidad y mejora de las condiciones de vida que junto a las agendas históricas y emergentes de las organizaciones constituyeron un potente vehículo de movilización para la juventud y para el resto

de la ciudadanía. La premisa fue: no hay nada que perder. Esa línea sintetiza bien la consigna voceada y puesta en muros físicos y digitales: “Nos han quitado todo, hasta el miedo”.

Los más jóvenes no tienen nada que perder porque todavía no tienen nada (...) y cuando observan la vida de sus padres o de sus abuelos, todo lo que les costó lograr ciertas cosas y que aun así no les garantiza poder llegar a una vejez y poder disfrutarla, es algo superpotente. O sea, para mí el tema de que tú vayas a llegar a la tercera edad y no puedas solventar una vida digna es superfuerte (hombre joven, participante de organizaciones, Santiago).

Más allá de las agendas, las juventudes que participaron en las movilizaciones percibieron en la revuelta una posibilidad de transformación social que permitía esbozar horizontes de expectativas e imaginarios de futuro. Así, la revuelta como catalizadora de cambios y la lucha por un futuro se constituyeron en ejes articuladores y motivadores de la protesta. Si bien la percepción del estallido como posibilidad de porvenir es una convicción que en algunos jóvenes pudo estar presente con anterioridad, la experiencia que arranca el 18-O reforzó y dio bríos al compromiso de sostenerla en el tiempo, con participación: “Los jóvenes y todas las personas entendimos que este cambio solo va a suceder si estamos dispuestos a sacrificar algo, y eso significa participar en la construcción de ese futuro que queremos” (hombre joven, participante de organizaciones, Santiago). Esto es interesante, porque evidencia el descubrimiento, en muchos de ellos, de formas de activación política que, mediada o no por organizaciones, pasa por estar presente, por hacerse parte del colectivo. Es un giro subjetivo que involucra significativamente dos dimensiones novedosas en la política nacional. Primero, la política fuera de los canales institucionales, fenómeno que aquí eclosiona como novedad visible, pero que sin duda venía sucediendo en Chile desde comienzos del siglo XXI. Segundo, el sentimiento de que, para poder cristalizar objetivos comunes, es necesario involucrarse personalmente: “Lo que me motiva es que la lucha social es la vía correcta para una sociedad más justa; yo antes era bastante apolítico, pero me di cuenta de que no era la política lo que no me gustaba, sino que eran los políticos

mismos de Chile. Creo que la única forma de hacer cambios dentro de la política es introducirse en la misma” (hombre joven, no participante de organizaciones, Santiago).

Para las personas jóvenes no fue difícil encontrar motivos para sumarse al levantamiento; lo que sí fue y es problemático aún es definir hacia dónde debe conducir ese deseo, qué sentido debe darse al cambio: “Un camino distinto implica armar un presente diferente o trabajar por un presente diferente. Pero ¿para dónde va? No tengo idea” (mujer joven, participante de organizaciones, Santiago). En la conciencia de esta dificultad encontramos distintas respuestas a la incertidumbre. Por un lado, en muchos existe la claridad de que no hay una respuesta predefinida de lo que viene, de lo que se está construyendo. Pero sí aparece con claridad que las respuestas se deben construir colectivamente y que están en manos de un “nos” colectivo que las canalice: “Creo que hoy en día más que nada el futuro depende de nosotros, depende de cómo se vaya organizando y como vayan surgiendo organizaciones sociales (...) cómo se vayan canalizando todas esas inquietudes y cómo se vayan presentando a nivel país” (hombre, joven rural, participante de organizaciones, Concepción). Otros manifiestan mayor confusión y frustración, como resultado del cruce entre incertidumbre e impotencia: “También siento que es superválido ir a protestar y no saber bien qué quiero conseguir; pero sí sé por qué estoy ahí (...) no sé lo que quiero aún, ni cómo lo voy a conseguir claramente. Con todo lo que pasó, yo siento que no conseguimos nada” (mujer, participante de organizaciones, Santiago). A pesar de ello, entre la constatación o existencia de un futuro prefigurado al cual aspirar y las dificultades para alcanzarlo, el horizonte de expectativas que permitía ensamblar un futuro distinto al ideal del sistema político y el modelo económico imperante, fue un movilizador a la participación en las protestas. Anhelar un porvenir distinto, no solo para ellas y ellos, sino también para sus descendientes, para sus familias, es un eje de movilización donde la juventud desea ser actor: “Queremos un futuro cercano distinto (...) no un futuro de la próxima generación, queremos hacer un cambio y lo queremos hacer ahora” (hombre joven, no participante de organizaciones, Concepción). Esto pone de relieve que las juventudes,

lejos de pensar que no tienen futuro como suele afirmarse, tienen expectativas y se perciben como agentes de cambio: “Creo que las clases medias fueron quienes, digo, fuimos quienes nos adjudicamos el movimiento, porque, claro, somos quienes pedimos dignidad, de cierta forma, y quienes pedimos salvaguardar nuestro futuro, más que nada” (mujer joven, no participante de organizaciones, Concepción). La meta de ese cambio es vivir en un mundo más justo, pero también más feliz y digno: “O sea, una vida digna, porque igual se puede vivir de manera precaria, pero siendo feliz con lo que se hace y lo que se tiene (...) pero ese vivir feliz es muy difícil en el modelo en que vivimos” (hombre joven, participante de organizaciones, Santiago). Así, para estos jóvenes el levantamiento significó salir del aislamiento y de la predestinación a un futuro precario, tomando consciencia de que se puede torcer este modelo, pudieron soñar con otros porvenires. Persiste una voluntad de futuro que es, esencialmente, una voluntad refundacional. Es decir, aunque no tengan claro hacia dónde, sienten que el giro debe ser radical: “Hay que empezar todo de nuevo, de raíz, porque si seguimos así, como escalando, igual van a haber vacíos y vamos a seguir estando como estamos” (mujer, primera línea, Concepción).

Por último, es interesante destacar que esta intención de modificar la realidad y co-construir otro devenir posibilita a las juventudes distinguir particularidades entre las diversas experiencias generacionales. Ellas y ellos se autoperciben más luchadores por un futuro mejor, cuestión que no se observa necesariamente en grupos de personas mayores. Sin embargo, matizan esto aludiendo a la represión sufrida por generaciones antecesoras.

Nuestros abuelos, papás, tampoco quieren que pasemos por lo que ellos pasaron (...) tal vez ellos fueron personas sin futuro porque no pudieron luchar (...) porque sufrieron mucha más represión que nosotros; entonces ellos eran sin futuro porque tuvieron que sufrir mucho más por este sistema (...) yo me considero todo lo contrario, todo lo contrario (hombre joven, no participante de organizaciones, Santiago).

Agendas históricas y emergentes

“La gente [está] reventada por el capitalismo que tiene para vender su fuerza de trabajo (...) Por eso esta revuelta es tan uniforme, porque pega muchas cosas tan heterogéneas, las vuelve a unificar en distintas ligas. La liga de la deuda une todo eso, la liga de la periferia” (entrevista a Luis Thielemann, historiador). Estas palabras refieren a los modos de articulación de agendas y demandas que se forjaron y recorrieron transversalmente el contexto de las protestas. Sin embargo, desde los discursos juveniles es posible observar una distinción gruesa en las agendas de luchas enmarcadas en el 18-O. Por un lado, hubo una agenda histórica, donde se enmarcaron las deudas sociales y exigencias asociadas a educación, salud, territorio, transporte de calidad, entre otras acumuladas durante décadas y que, en el marco del desborde social, se reactivaron de manera enfática y radical. En algún grado, muchos de los contenidos de este programa histórico tenían un carácter más sectorial o fragmentario que convergente o coral, hasta los episodios del 18-O. Por el otro, hubo agendas de lucha emergentes, es decir, que surgieron con fuerza y se legitimaron transversalmente en la ciudadanía durante el escenario abierto por las protestas. Estas consiguieron legitimarse más allá de un sector, facción o gremio en particular, politizando un área, tema o dimensión de la reproducción de la vida cotidiana, que no necesariamente era objeto de disputa o significación política, pero que ahora cuenta con reconocimiento en amplios sectores de la población y la ciudadanía (PNUD, 2015).

En la revuelta hubo signos importantes de un malestar ubicuo, no solo frente a cuestiones asociadas con el abuso de poder, el sobreendeudamiento de las familias, el agobio interpersonal, la desigualdad, la precariedad y el ensimismamiento por parte de las élites económicas y políticas (PNUD, 2012, 2015 y 2018), sino con el *ethos* cultural que sustenta esas dinámicas: la forma naturalizada de imponer un imaginario que concibe que toda fragilidad y malestar social deben resolverse a través de agentes privados y expertos (mediante la racionalidad mercantil y técnica), apelando a las competencias personales, la resiliencia individual y el empresariado de sí (Araujo, 2019). No obstante, a pesar del mantra de que la “sociedad no existe”, esta no solo ha dado pruebas de su existencia, sino que viene mostrando

su lado más disruptivo (Araujo, 2019; Güell, 2019). Más allá de esta explosión sincrónica de octubre, en el primer semestre del año 2019, con el llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), se habían manifestado, particularmente en escenarios universitarios, señales de esa energía volcánica en aumento por más de treinta años. Lo propio ocurría con el movimiento de resistencia del pueblo mapuche y los ciclos de protesta estudiantil y feminista. Energía que hizo confluir demandas que fueron puestas en “hibernación” por la agenda política y legislativa; por ejemplo, la cuestión del reconocimiento del pueblo mapuche o el No+AFP, en sintonía con exigencias más puntualizadas del 18-O, como los temas del fin de los abusos de cuerpos de seguridad del Estado o el fin de la PSU: “El eslogan de los treinta pesos hizo retratar ese cambio del torniquete hasta reforzar más el eslogan de no más AFP, desde ese acto hasta poder hablar de Chile y todas sus problemáticas históricas” (hombre joven, no participante de organizaciones, Concepción).

Respecto al programa de luchas recientes, hemos realizado una tipología básica entre agendas centradas en demandas que apelan a lo material, organizadas en torno a la redistribución de recursos y riquezas, y las que incluyen demandas no materiales, enfocadas en exigencias simbólicas y luchas por el reconocimiento. Por un lado, las voces juveniles no solo actualizaron las agendas en torno a la modificación estructural y eliminación del sistema previsional (AFP), sino que además reivindicaron el acceso a ciertos bienes públicos de calidad como la salud digna, la educación gratuita y de calidad, el transporte público: “El No+AFP, educación de calidad y salud digna, esos son los tres ejes principales de las demandas que me tocó visualizar, son los discursos más escuchados” (hombre joven, participante de organizaciones, Concepción). Por el otro, el abanico de demandas simbólicas y de luchas por el reconocimiento articuló programas de temas ambientales, de derechos humanos, étnicos, raciales y culturales, así como la agenda por una asamblea constituyente y una nueva Constitución política.

Aun cuando esta última configura un anhelo expresado intermitentemente en diversos ciclos de protesta enmarcados en las últimas dos décadas, en esta coyuntura aparece como agenda

transversal y prioritaria, centrada en el reconocimiento y protección de derechos sociales; además, como horizonte posible que inyecte legitimidad al sistema político a través de un ejercicio democrático amplio, participativo e inclusivo, que dé garantías a la ciudadanía de incidir en la toma de decisiones y en los grandes asuntos del país: “Si queremos cambiar ciertas cosas, ciertos aspectos en lo económico, en lo social, en lo institucional, la Constitución era lo que sí o sí había que cambiar, porque ahí se engloban (...) todos los aspectos de la sociedad” (hombre, joven rural, participante de organización, Santiago). Aunque los aspectos étnicos, raciales y culturales tuvieron presencia de distintas maneras en la revuelta, la exigencia por un cambio constitucional que incorpore, también, el reconocimiento de un Estado plurinacional, fija la necesidad y la urgencia de devolver aquello usurpado a los pueblos originarios, que históricamente les ha significado la imposibilidad de habitar sus territorios y desarrollarse culturalmente.¹³

Encontramos, asimismo, una actualización por la defensa y la promoción de los derechos humanos que pasa, simultáneamente, por las denuncias de prácticas policiales y de la violencia de Estado, por el fin de los abusos de poder, y por demandas de mayor justicia social. Los informes emitidos por organismos internacionales en esta materia muestran un ejercicio arbitrario de la violencia de Estado, con violaciones masivas, reiteradas y graves a los derechos de manifestantes, al margen de todo protocolo institucional: “Hubo una violencia sistemática, hubo terrorismo de Estado, es superimportante decirlo, porque no fue solamente la policía (...) fueron los altos mandos, las personas que se supone escogió el país (...) ejercieron violencia totalmente sistemática” (mujer joven, no participante de organizaciones, Concepción).

Por último, la nueva agenda por los recursos comunes y el medioambiente formó parte de un amplio y transversal consenso:

13 Desde lo étnico sobresale la presencia de cientos de banderas mapuche para levantar las demandas a favor de la reivindicación de los pueblos originarios, de su autonomía y de la autodeterminación del pueblo mapuche. Los derechos de los pueblos originarios se han visto violentados por la enajenación de territorios de alta plusvalía, esa es una alternativa más radical que busca la revolución anticolonial anticapitalista (Paírigan, 2020).

“Hubo marchas por el agua, porque como están privatizando todo, el agua es un recurso natural que debería ser gratis para todos, y está en manos de los ricos” (mujer, joven rural, participante de organización, Concepción)¹⁴. Las juventudes son herederas de las consecuencias de una industrialización excesiva y extractivista que no da tregua a la regeneración de los ambientes naturales. La industria alimentaria, por ejemplo, sobrevalora la productividad para obtener ganancias económicas, desecha materia que no cumple con estándares de calidad relacionados con “la apariencia” de un “buen producto”, mata animales por no cumplir con escalas de tamaño óptimo o inyecta soluciones químicas en sus cuerpos para aumentar sus dimensiones de manera artificial, produce más de lo necesario para la población pero, a su vez, no distribuye los excedentes de alimentos entre quienes no tienen fácil acceso a comida o presentan problemas de desnutrición, por el contrario, los productos que no vende o no cumplen estándares son destruidos, generando contaminación en zonas donde estas se ubican.

Experiencias emocionales

Participar en acciones de protesta supone poner en juego una serie de emociones, sensaciones o afectos. Junto a los sentimientos de unidad, momento histórico compartido e identificación colectiva con una población excluida y abusada, ocurre, como se ha mencionado, el despertar de una afectividad comunitaria de solidaridad y cooperación. La colaboración espontánea abrió un sinnúmero de expresiones de inclusión a las personas que se acercaron a participar, en particular a la juventud. Un golpe de impulso que surge de la ocupación del espacio público, del reclamo de las calles y del atrevimiento de ejercer la autonomía (incluso, la soberanía más primaria, la ciudadana): salir sin pedir permiso, romper los límites que intentaron colocar al movimiento, organizarse en asambleas y cabildos, sin esperar iniciativas desde arriba.

14 Las demandas medioambientales están fuertemente relacionadas con el reconocimiento del pueblo mapuche, y un aspecto que destaca en las entrevistas es precisamente la manera en que este se relaciona con el entorno natural, el valor simbólico que le da a la tierra.

Un sentimiento presente en los jóvenes, durante el levantamiento, fue la esperanza. Asociados a la posibilidad de cambio y a imágenes de porvenires, el descontento y la pena devinieron en ejes de articulación: “Esa solidaridad era porque todos compartíamos el sentimiento de que sí, sí se puede. Y en ese descontento venía oculta la esperanza, porque también pensábamos que éramos tantos, yo pensaba, ya ¡pero somos tantos! ¿Cómo no se va a conseguir nada?” (mujer joven, participante de organizaciones, Concepción). La movilización también despertó otras emociones: agradecimiento, felicidad, alegría, rabia y rebeldía. Sin embargo, una sensación transversal, reportada por entrevistadas y entrevistados, fue el miedo, que en muchos casos suele paralizar y disminuir la voluntad de protesta, pero que para la juventud de la revuelta constituyó un acompañante permanente que, si bien no inmovilizó, hay que considerar. Así, “dar pelea, ser parte de la resistencia”, fue un modo de superar y resignificar el miedo en tanto energía para actuar y, al mismo tiempo, un catalizador del cuidado de sí y de otros; un estado emocional que implicó toma de consciencia sobre la exposición, la vulnerabilidad, el peligro que la situación suponía. Este sentimiento intenso, en el contexto del estallido social, se amplificó producto de la fuerte represión: mutilaciones oculares, violencia sexual, encarcelamiento, entre muchas otras acciones cometidas por los cuerpos policiales: “Todos sabemos que cuando se va a la marcha hay peligro, igual uno se motiva, porque no tendría sentido levantarnos, que Chile despertara, y al tercer día todos a la casa porque tenemos miedo de las lacrimógenas y de los milicos” (hombre, no participante de organizaciones, Santiago).

Informaciones publicadas por medios de comunicación señalaron una alarmante cifra de personas que padecieron vulneración de sus derechos fundamentales; entre ellas destacaron las jóvenes, quienes sufrieron, según el *Informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el 18-O en Chile* (2019), el mayor costo social y humano de la brutalidad policial. La larga movilización y la violencia represiva generaron, en varios casos, una sensación de agobio o crisis psíquica personal, porque la participación no solo significó potencial exposición a agresiones y amenazas: “Después llegabas a la casa y

era más represión, y mirabas en redes sociales que habían perdido ojos, y habían baleado a alguien, entonces estábamos muy mal; de hecho, con mis amigos después de las marchas íbamos a mi casa y empezábamos a escuchar música y todos llorando, y era horrible” (mujer, no participante de organizaciones, Concepción). Este miedo a la represión se conjugó con el miedo ante la incertidumbre, el cual se expresó en algunas preguntas. ¿Qué se va a lograr? ¿Para dónde vamos? ¿Vale la pena seguir enfrentando violencia? Y más visible aún fue el miedo a que finalmente todo quedara igual, a una vuelta a la “normalidad” predecesora, a la ineficacia de la movilización: “Es que como fue un despertar histórico, yo tenía mucho miedo de que quedara ahí nomás, que despertáramos un mes (...) y después todo volviera a la normalidad” (mujer, no participante de organizaciones, Concepción).

No menores son los llamados quiebres sociales entre participantes de la revuelta y personas de sus entornos durante los acontecimientos. Se suma la existencia de “sentimientos encontrados” entre propios manifestantes.

Yo vi una división entre quienes íbamos por convicción y quienes iban a huepear (...) mi primera crisis fue cuando estaba con un grupo de personas donde tiraban muchas lacrimógenas, y yo no veía, estaba en una nube, me tiré al suelo porque no podía respirar, la cosa es que me saca alguien, me llevan a un lugar seguro, y respiro, luego voy caminando por el parque y están carreando¹⁵ y están vendiendo cerveza; yo me puse a discutir (...) y mientras discutía lloraba, yo decía, huevón están muriendo personas allá adelante, esto no es carrete, esta es una protesta (mujer joven, primera línea, Santiago).

Finalmente, es importante resaltar el valor que tiene para las personas jóvenes el “apañe”, expresión chilena que refiere a estar cerca, al lado, ofrecer apoyo, acompañar o luchar junto a alguien de forma solidaria. El apañe tiene una fuerte repercusión emocional en las juventudes: “En la calle cuando ocurrían situaciones que ameritaban

15 Charlar y pasarla bien con amigas y amigos.

la rabia, se vivía la esperanza, se vivía un sentimiento agradable de comunión, de apañe y creo que durante todo ese proceso esas emociones mantuvieron a la gente ahí también, con las ganas de seguir” (hombre, no participante de organizaciones, Concepción). “Y ese apañe también te hacía sentir que estabas más protegida, desde que por último si te llegaba algo, había alguien que iba a estar preocupado de hacerte un seguimiento” (mujer joven, participante de organizaciones, Concepción).

Aprendizajes y experiencias

La revuelta del 18-O generó una multiplicidad de aprendizajes y experiencias en el campo social y militante. Hasta el momento hemos referenciado formas de participación, articulación y ensamblaje de voluntades que, sin mediaciones políticas o ideológicas, tomaron las calles para expresar sus descontentos. Sin embargo, estas miradas, si se quiere más panorámicas, dejan de lado experiencias sustanciales en la configuración de subjetividades que se constituyeron al calor de las movilizaciones: la potencia del movimiento feminista, el reconocimiento de los tipos de violencia desplegados, y los modos de ocupación del espacio público más allá de los piquetes, las manifestaciones y concentraciones. Estas experiencias enriquecen tanto la memoria histórica de las luchas como sus agendas, se traducen en aprendizajes, estimulan acciones disruptivas y los modos de percibir, organizar y construir política.

Género y feminismo

La participación de mujeres, especialmente jóvenes, en ciclos de protesta en Chile ha sido preponderante. Durante las revueltas feministas de 2018, la recuperación de una política radical que hizo visible la violencia patriarcal en las instituciones, en la vida privada, y el daño que el modelo económico produce en el cuerpo social, fueron antecedentes potentes para las manifestaciones del 18-O (Castillo, 2019). Si bien existe multiplicidad de colectividades y corrientes en movimiento (con trabajo intergeneracional en muchas de ellas), es posible

reconocer a la Coordinadora Feminista 8M (CF8M)¹⁶, organización creada y liderada por mujeres, emergida a partir de los años ochenta, que conduce las principales intervenciones y posiciones políticas dentro del ámbito feminista. Aun cuando las organizaciones feministas no invitaron a la movilización inicial de octubre, el contacto entre la CF8M y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización que convoca a la evasión y a una convergencia programática, estimula la participación de mujeres que asumieron el rol fundamental de sostener y reactivar las movilizaciones, innovando con sus repertorios de protestas, resistiendo al sistema político y activando mecanismos de articulación que permitieron enlazar demandas que nadie había logrado nominar (Luna, 2020, CIPER).

Al iniciarse la revuelta, las organizaciones feministas agrupadas en la CF8M comienzan a concebir acciones de apoyo a las convocatorias en torno a los principales temas y momentos del levantamiento, produciendo hitos propios: el pañuelazo; la movilización por la paridad en la convención constitucional; el *flashmob* de Muertín; las *performances* de Las Tesis; el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan (con tres mil participantes de todo Chile); el Cabildo Feminista y de las Disidencias Sexuales; las campañas contra la violencia político-sexual (con *gifs*, textos e imágenes virales, afiches, conversatorios) y la interpelación a las autoridades por sus declaraciones y acciones patriarcales, además de su falta de reacción y protección frente a la violencia político-sexual; la recolección de datos de violencia política a disidencias sexuales tradicionalmente invisibilizadas; y finalmente, la marcha del 8 de marzo de 2020, que superó todas las expectativas.

En tal sentido, se puede afirmar que el levantamiento popular contó con una activa participación de mujeres de todas las edades, este protagonismo, que fue a la par del de hombres jóvenes, rompe

16 La Coordinadora Feminista 8M (CF8M) es un espacio que articula a organizaciones sociales, políticas e individualidades. La CF8M tiene como virtud la articulación y transversalización de demandas feministas (entretrejidas con otras) con un proyecto político claro (el Programa para la Huelga Feminista, levantado en colectivo a través de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres que Luchan, de diciembre 2018 y enero 2020), un trabajo en red y descentralizado, y una radicalidad expresada en su voluntad de cambio profundo y de acción directa.

ciertos imaginarios que diferencian tareas y establecen roles distintos para unas y otros: “Las mujeres tuvieron un papel bastante protagónico, tanto en las acciones más de choque, como en la organización territorial. El movimiento feminista, que se venía gestando hace muchos años, aportó a que muchos frentes los ocuparan mujeres, vecinas, pobladoras de los distintos sectores, y que de alguna forma se empoderaran” (hombre joven, participante de organizaciones, Concepción). Si bien aflora en las entrevistas cierto tipo de reclamo relacionado con prácticas de seguridad especiales para las mujeres (sus compañeros se empeñan en enviarlas “para atrás” para cuidarlas), este panorama ha ido cambiando; así lo refiere una entrevistada comparando su experiencia previa como estudiante secundaria en Valparaíso con su participación en la revuelta del 18-O: “Cuando yo estaba en el liceo también me encapuchaba. Yo iba a las marchas en Valparaíso y éramos muy pocas mujeres, incluso a las mujeres nos decían ‘ya chiquillas, para atrás’. Ahora, en cambio, es a la par, ahora es uno a uno con el hombre que está al lado” (mujer, primera línea, Santiago). En los casos donde se reportaron estas diferencias, las jóvenes se muestran conscientes del machismo, y también inconformes con esa realidad. Sin embargo y a pesar del alto grado de conciencia sobre el propio arrojo y su capacidad de acción junto a compañeros en la manifestación, no deja de ser interesante que ellas se autoasignan tareas de cuidado, labores tradicionalmente impuestas al género femenino: “Yo lo único que me fijo es si es menor de edad [el compañero encapuchado], porque a mí me sale mi instinto de madre leona, y me pongo a vigilarlos para cuidarlos, pero cuando son personas de mi edad me da lo mismo” (mujer, primera línea, Santiago).

Por consiguiente, es posible evidenciar (tanto en las ideas como en las prácticas) elementos que indican cambios en la imaginación política juvenil y feminista, que participa de manera significativa en la posibilidad de un nuevo orden político. Esta nueva subjetividad tiende hacia una radicalidad democrática que busca: formas de representación y participación más horizontales, conectadas a territorios o problemas concretos; organizaciones no jerárquicas con liderazgos rotativos, identitarios o especializados; transparencia en

la toma de decisiones, en las alianzas, en los actos de representación pública y en el uso de los recursos; ayuda, contención y protección mutua (apañe); la valoración y aceptación de la diversidad en materia de género; y el reconocimiento a la llamada “interseccionalidad”, es decir, a los cruces de variables que atenúan o exacerbaban las condiciones de asimetrías, explotación o precarización de la vida (Goecke, 2020). Se trata de una subjetividad movilizadora en distintos escenarios (artístico, intelectual, local e internacional) para el rescate de su memoria y realizarse en experiencias críticas, antineoliberales, radicales y creativas.¹⁷

Las mujeres son un poco más colaborativas, a mí eso fue lo que más me sorprendió dentro de los liderazgos femeninos, esa forma colaborativa de plantearse y de levantar proyectos (...) creo que en el liderazgo femenino existe una mentalidad tipo colmena, es como si las chicas conocen el para qué son buenas o qué tipo de habilidades tienen y las saben potenciar entre ellas. Entonces, ese discurso de la sororidad, ellas lo aplican políticamente (hombre, primera línea, Concepción).

Por último, es destacable que la revuelta quedó claramente enmarcada entre las dos más grandes movilizaciones feministas de la historia en Chile: 8-M de 2019 y 8-M de 2020. En este contexto, el movimiento feminista actual, impulsado por mujeres jóvenes, tiene consciencia de su papel. Sabe que no fue “su” batalla, pero también sabe del profundo vínculo que su programa mantiene con el empeño de transformación política que unió a las personas de la protesta, así como lo mucho que queda aún por trabajar dentro de la sociedad y de la cultura chilenas, incluso en aquellos movilizadores. En definitiva, el feminismo chileno es consciente de estar incorporado en un proceso de cambio que requiere políticas ligadas a la memoria y a las causas de amplios sectores del país, que debe formar parte, como afirma Constanza

17 Sobre este aspecto hay evidencias de un intercambio importante principalmente con Argentina, luego México, Brasil y España, así como de una intensa lectura de varias autoras de relevancia global. Múltiples contenidos y experiencias se han diseminado exitosamente entre colectivos, organizaciones y redes feministas de toda índole gracias a Internet, publicaciones tradicionales y artesanales (cartoneras, por ejemplo) y procesos de autoeducación, y educación mutua y sorora.

Cifuentes, del tejido popular que se gesta en cada rincón: “[Son] miles las feministas que se articulan en esta revuelta, nos reconocemos en un movimiento diverso, plural, transgeneracional y de construcción de memoria, capaz de poner en cuestión diversas formas de violencia patriarcal, racista y colonial (...) Lo hemos dicho muchas veces, capitalismo y patriarcado son alianza criminal” (Cifuentes, 2020).

Las transformaciones del espacio público

Las movilizaciones implicaron una transformación de la acción política relacionada con el uso del espacio público; de acuerdo con Zarzuri (2020b), este mostró “una reivindicación de la autonomía y la recuperación de espacios o acciones carnavalescas de reminiscencias tribales” (p. 230). Así, el descontento se hizo visible y surgió a la superficie para recuperar y resignificar lugares de tránsito común, ejercer poder frente al Estado y desplegar maneras novedosas de democracia directa (Roitman, 2012). En las experiencias de las juventudes se identificaron distintos espacios de acción, a veces asociados a temáticas y momentos específicos; como hemos mencionado, la calle es uno de ellos. No solo aquellas que fueron tomadas en grandes concentraciones o marchas, sino también escenarios locales donde se organizaron actividades de encuentro o barricadas. De hecho, uno de los principales actos del levantamiento social fue la ocupación del espacio público, como gesto desafiante, incluso durante las horas de toque de queda.

Otras acciones, frecuentemente mencionadas, fueron las marchas, donde se vivieron situaciones espectaculares que incluyeron grupos de bailes tribales, batucadas, barras de fútbol, personas enarbolando la bandera mapuche, grupos feministas, sujetos de distintas clases sociales y edades. Dentro de ellas, ciertos grupos cometieron actos vandálicos o saqueos, bajo la siempre constante presencia de la policía, que en algún momento intervino (según jóvenes entrevistados) provocando o reprimiendo a los manifestantes.

Además la calle, en particular, y el espacio público, en general, fueron usados no solo para la acción y el desborde, sino también para reflexionar sobre las acciones de la protesta e invitar a la ciudadanía

a pensar y debatir demandas. Dos experiencias fueron ejemplares. En primer lugar, una de las iniciativas más difundidas durante los meses de la revuelta, la conformación de cabildos ciudadanos: a través de una configuración territorial y, en algunos casos, con orientación temática¹⁸, se compartieron ideas y propuestas acerca del malestar social, se debatió, y se desarrollaron prácticas pedagógicas mutuas respecto a la necesidad de una nueva Constitución y sus implicaciones. En segundo lugar, las asambleas territoriales; forma de organización que en algunos casos persiste en la actualidad y fue propicia para aprendizaje en múltiples temas y escalas: “Primero fue marchar, después había actos culturales que fueron evolucionando en contenido (...) ya no solamente era marchar, sino que también había una parte muy importante que era educar” (hombre, joven rural, participante de organizaciones, Concepción).

Violencias

Tal como señalan jóvenes participantes, en la protesta se expresaron diversos tipos, momentos y agentes de violencia. Es posible identificar, de un lado, la ejercida por fuerzas de seguridad del Estado, y del otro, la practicada por manifestantes. Informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de algunas organizaciones internacionales demuestran que buena parte de las violaciones a derechos humanos fue ejecutada por la policía uniformada, Carabineros de Chile¹⁹, violencia mucho más notoria que la militar, puesto que los militares solo estuvieron durante quince días en las calles.

Yo estaba como paralizada de miedo (...) de repente voy a ver y estaban todos vomitando, gente les estaba echando leche y después los llevamos a un punto de primeros auxilios (...) y llegaba después más gente. Fue la misma acción de la policía, así sin ningún pudor,

18 Entre jóvenes participantes encontramos referencias a un cabildo de disidencias sexuales en Santiago y un cabildo de niñas y niños.

19 En Chile existen dos tipos de cuerpos policiales. Carabineros de Chile, cuyos agentes uniformados tienen como objetivo mantener el orden y seguridad pública; y Policía de Investigaciones (PDI), que viste de civil y se dedica principalmente a la investigación criminalística.

[tiraban] gas pimienta en la cara (...) hubo semanas donde los perdigones eran todos los días, después bajó, pero [esa violencia] nunca se acabó (mujer, participante de organizaciones, Santiago).

Por otra parte, la violencia de manifestantes se efectúa tanto en respuesta a la agenciada por carabineros y militares, como en saqueos, desmanes y vandalismo. Esta última se expresó en acciones de personas borrachas o drogadas; en momentos de agresión verbal entre grupos de hombres y mujeres por irrespeto al separatismo acordado para alguna convocatoria particular; en abusos de connotación sexual de hombres hacia mujeres (toqueteos o insinuaciones); y en discusiones entre manifestantes “pacíficos” y aquellos que cometían desmanes.

En ambos tipos de violencia (de Estado y de manifestantes), se distinguen diversos subtipos: 1) represiva, ejercida por las fuerzas del orden; 2) reactiva/defensiva; 3) medioambiental/ecológica; 4) simbólica, asociada a discursos criminalizadores de la revuelta; 5) instigadora, menos visible pero efectiva, que desde afuera buscó provocar la violencia a lo interno de las protestas para justificar la represión; 6) psíquica; y 7) político-sexual y de género, agenciada en especial sobre mujeres y principalmente por la policía: “Empecé a ver esto que estaba pasando, que había muchas mujeres violentadas sexualmente, muchos abusos” (mujer, no participante de organizaciones, Concepción).

Política, economía, Estado y protesta

Sobre la política, entre las voces juveniles predominan relatos que muestran descontento, desafección y decepción ante formatos políticos convencionales. Esta situación es compartida tanto por jóvenes que participan en organizaciones, como por jóvenes que no militan en ningún tipo de agrupación, indistintamente del género. Asimismo, como se refirió en apartados anteriores, persiste la visión de que los actores políticos son más bien parte del problema que de la solución. Para la juventud, el sistema político vigente es responsable de la crisis, esto se traduce en desilusión frente a las formas de expresión

de la política actual: “Me desilusioné un poco de la política, de la poca flexibilidad o adaptación que tienen los viejos con respecto a una política tan dinámica que yo creo exige la actualidad” (hombre, joven rural, participante de organización, Santiago). El rechazo y el evidente desencanto que produce la “Política”, con mayúscula (la política entendida como cosa de héroes, opuesta a la vida cotidiana, la política de palacio, de oficina, de secretaría general, de comité central, de operadores, expertos y profesionales), revelan la convicción de un modelo colapsado que demanda y exige renovar actitudes y compromisos con los temas más urgentes del país.

Una de las primeras cuestiones que muestra el 18-O es la transformación de la acción política, caracterizada en este caso por su naturaleza inorgánica y transversal, que no responde a lógicas de izquierdas y derechas, sino a un eje vertical que distingue en la estructura social a quienes están arriba (élites político-económicas) de quienes están abajo (la inmensa mayoría de la población): “Es muy evidente que quienes conforman los partidos políticos en este país sirven a los intereses del *statu quo* y a los intereses de la élite económica, o sea, trabajan para ellos mismos y son una clase endogámica asquerosa” (mujer, participante de organizaciones, Santiago). Esta reconfiguración de la acción política supone un fuerte y progresivo proceso de autonomización con evidentes rasgos de despartidización; aspecto sustantivamente divergente con respecto a otros ciclos de movilización política, particularmente los predominantes durante la segunda parte del siglo XX chileno.

Asimismo, como se ha reiterado también previamente, las expresiones de movilización no respondieron a dinámicas de un movimiento social clásico. Tampoco se observaron ideologías, sino causas de diversa procedencia, hecho conocido como activismo sincrónico y acción conectiva generacional (Pleyers, 2015, 2018; Reguillo, 2017). De ahí la proliferación de redes con escasa estructura y sin relación directa con actores políticos convencionales. En suma, no hay un sujeto que represente demandas ni peticiones definidas y jerarquizadas con claridad, situación que complejiza el procesamiento institucional del clamor multitudinario. Sin embargo, este fenómeno logró consolidar cierta unidad y solidaridad en la calle: “Que no vean a los grupos políticos reventados en el escenario también

ayuda, porque igual estaban generando más división que unión. Tener una bandera de tal color o de tal logo te lleva para otro lado como piño²⁰. Que no estuvieran esas banderas, que no estuvieran esos colores políticos, también ayudó a que la cuestión fuera más unitaria” (hombre, no participante de organizaciones, Concepción).

En este sentido, los principales adversarios políticos del “movimiento” han sido: 1) el neoliberalismo y sus modos indignos de organizar la vida y los vínculos sociales; 2) la élite política y económica; y 3) el Gobierno, encarnado en el Estado y su lógica arbitraria y punitiva contra manifestantes. Frente a ellos, se pone en marcha otro tipo de política, que de momento podríamos denominar “prefigurativa”, con la cual aún se están tejiendo, sin estructura ni proyecto de mayor alcance, sentidos y horizontes compartidos en el contexto de la vida cotidiana, que ponen de relieve cuestiones como la democracia participativa, el feminismo, el cuidado de vínculos y afectos, la autonomía individual y colectiva, la protección de ciertos bienes comunes, entre otras.

Hay una realidad en la política, nosotros vivimos en política y no necesitamos una representatividad y una bandera, cuando la bandera es la misma realidad, nuestra realidad (...) no existe la necesidad de formar representatividad o dar una forma, una bandera a un movimiento que es de la misma gente (...) el mismo movimiento del que estamos hablando demostró con hechos eso (hombre, no participante de organizaciones, Santiago).

Por último, a modo de hipótesis de trabajo, es posible decir que esta política de carácter prefigurativo viene a ser la expresión de una subjetividad susceptible de asociarse con aquello conocido como “política de los sin parte” (Rancière, 1996). Política que no se relaciona de modo automático con un actor específico o un grupo social concreto sino que, por el contrario, está en permanente apertura, en relación con la acción de sujetos que experimentan una des-identificación y, por tanto, irrumpen en el espacio público para interrumpir, súbitamente, el orden geométrico de las distribuciones de poder: el orden de quienes mandan y quienes obedecen, pugnando por participar de las decisiones comunes que competen a todas y todos.

20 Grupo, rebaño.

Por su parte, la economía es observada por las juventudes como ámbito y fuerza que impactan negativamente sus vidas y experiencias, sobre la cual no parece posible ejercer control o maniobra, hecho que les genera angustia, agobio, incertidumbre y precarización. Si bien no vislumbran con claridad un modelo o esquema económico alternativo al imperante, ven con nitidez la hegemonía extractivista y neoliberal de un proceso histórico de privatización y mercantilización de la vida en Chile. En muchos de sus testimonios queda manifiesto un clima emocional de resignación e impotencia, una desesperanza aprendida, una sensación de que no hay futuro posible bajo ese *ethos* dominante: “Existe al menos una mercantilización de la dignidad humana, o sea, para efecto de la sociedad en que vivimos, si yo logro tener un posicionamiento económico, voy a controlar gente, voy a tener gente a mi disposición (hombre, primera línea, Concepción).”²¹

En relación con la percepción del Estado, en general resulta difícil identificar hallazgos claros sobre este tópico. Si bien el Estado aparece en voces y representaciones de entrevistadas y entrevistados, no aparece como espacio político, como campo, como aparato o recurso por conquistar y colonizar con el objeto de dirigir un proceso político o disputar la hegemonía de un proyecto de sociedad. Por el contrario, aflora como entidad ajena a sus experiencias vitales y políticas, y como agencia punitiva que atropella sus derechos fundamentales y opera con un nivel de arbitrariedad y violencia importante. De modo difuso, surge asociado al Gobierno cuando se lo piensa como actor frente al cual se pueden reivindicar derechos sociales y colectivos. Finalmente, y de manera aún más difusa, el Estado se relaciona con la encarnación de aquello denominó “principio de subsidiariedad”²²: “A mí el Estado o el Gobierno no me dan

21 En Chile el 50% de trabajadoras y trabajadores gana menos de \$400.000 (USD 315), mientras el 1% se lleva un 26,5 % de la riqueza chilena. El 50% de las pensiones por vejez son inferiores a \$151.000 (USD 120); 11,3 millones de chilenas y chilenos están en deuda económica y 4,6 millones de ellos, en mora.

22 Es necesario aclarar que en Chile el subsidio va dirigido al individuo, es decir, no va para instituciones, por ejemplo, hospitales, escuelas, universidades, etc. Con lo cual la deuda sigue siendo privada, no como carga del sector público. De ahí que nuestra deuda pública sea tan baja, puesto que en Chile no se garantizan constitucionalmente derechos colectivos y, según la ortodoxia neoliberal, la deuda se concentra en las personas y las familias.

absolutamente nada. Se supone que para la municipalidad soy el 40% y soy más vulnerable, y nada (...) y a nadie de mi familia tampoco, con suerte una tía que le llega un bono, estos bonos de ahora, pero el resto nada, es como cero apoyo, aquí en este país una se las tiene que arreglar sola” (mujer, primera línea, Concepción).

Conexión del 18-O con la pandemia

Los primeros días de marzo de 2020, a cinco meses de las protestas, se detecta el primer caso de covid-19 en el sur de Chile. Los contagios se incrementaron de manera acelerada alcanzando, para el mes de julio de ese año, más de seis mil. La pandemia dejó al descubierto una serie de deficiencias del supuestamente “exitoso modelo económico de Chile”, que ya venían siendo visibilizadas por las consecutivas protestas del 18-O. En ese sentido, la pandemia se entrelaza con las demandas levantadas por vastos sectores de la población. Así, las agendas de lucha que se abanderaron en octubre, adquieren un carácter mucho más concreto ante la precarización del sistema de salud y sus efectos sobre los sectores más desposeídos. “Los cuicos trajeron la enfermedad, y los pobres nos estamos muriendo”, afirmó un joven, y con ello, resumió el peso y validez de un reclamo ubicado no solo en una dimensión de demandas (por ejemplo, la salud), sino que se expande e impacta todas las dimensiones de la producción de la vida cotidiana.

El coronavirus también vino a mostrarnos que todo por lo que se estaba reclamando durante el estallido social era absolutamente coherente, porque la salud pública estaba totalmente precarizada. La educación, el tema de las AFP, el trabajo. Basta que la pandemia haya azotado un mes para que la gente entrara en crisis, porque se estaba muriendo de hambre. Así de frágil era el sistema en el que estábamos viviendo, donde no había seguridad social, no existe. El coronavirus llegó para hacernos dar cuenta que teníamos absoluta razón. Empresas gigantes acogándose a la ley de protección del empleo como si ya estuvieran en bancarrota, cuando ellas podrían solventar sin ningún problema cuatro, seis meses de sueldo de las personas (hombre joven, participante de organizaciones, Santiago).

A partir de la crisis sanitaria mundial, el empuje que el movimiento social venía agenciando a través de una serie de protestas que implicaban desplazamientos bastante grandes de recursos (particularmente humanos), se ralentiza y se desplaza de espacios públicos (calles, plazas) hacia espacios privados, consecuencia de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. Así, el confinamiento supuso tanto la vuelta a ámbitos más íntimos, como la pérdida de contacto físico interhumano. Esta merma de la protesta generó espacios de reflexión sobre el proceso de movilizaciones, permitió evaluar lo realizado y pensar la posible continuidad de acciones afectadas por el virus. Para algunas personas entrevistadas, pasar largo tiempo confinadas conllevó a la evaluación de la protesta y sus logros. En tal sentido, si bien no comporta una discursividad mayoritaria, es interesante rescatar un eje que surge relacionado con cierta insatisfacción; después de interrumpido y finalizado el proceso de movilizaciones, hay quienes estiman que tal vez no son tantos los resultados positivos, a pesar de lo invertido en capacidad movilizadora. Sin embargo, una mayoría de voces entrevistadas señala que con todo y confinamiento “seguiremos teniendo los mismos sueños, los mismos ideales y aspiraciones, la misma fuerza” (hombre joven, participante de organizaciones, Santiago); apelando a la capacidad reflexiva de las personas y a la constatación del desastre de las políticas de Gobierno.

Esta posición no está exenta de temores; así lo expresa una joven entrevistada: “Yo espero que las ganas de luchar estén” (mujer joven, no participante de organizaciones, Concepción). Cuestión que remite a los efectos que va a dejar el confinamiento prolongado, los muertos, la pérdida de empleos, la falta de insumos básicos para sostener la vida cotidiana, por un lado; y por el otro, el impacto en dinámicas de lucha: “La merma de ciertas capacidades organizativas, si bien están las ganas, mermó la constancia y el tipo de organización cambió también con esto” (hombre joven, primera línea, Concepción). No menor es la preocupación de algunos grupos por el estado de salud mental de la población para enfrentar nuevas manifestaciones. Aunque está instalada la esperanza de volver a salir a la calle, con la misma o incluso más fuerza que el 18-O, es evidente que las experiencias que resultan de la pandemia van a dejar rastros importantes en la capacidad de movilización.

La posible vuelta de las movilizaciones es atravesada, también, por angustias relacionadas con la violencia y la capacidad de organización poscovid-19. Es preciso recordar que con la revuelta social emergió una serie de espacios autogestionados, como los cabildos o las asambleas ciudadanas, en diferentes puntos del país, que sistematizaron y levantaron peticiones. Un segundo momento organizativo se ha dado con la aparición de ámbitos para enfrentar la situación económica, particularmente la falta de alimentos. Así, se activaron comedores populares y ollas comunes, junto a distribución de cajas de alimentos por parte de la misma población, dando cuenta de una potencia organizativa enfilada hacia la construcción de redes de apoyo y solidaridad. Por tanto, si bien la pandemia detuvo las movilizaciones de protesta, no significa que se desaparecieran del todo: “Esto se ha transformado en redes de ayuda y ha potenciado nuevamente esta forma de autogestión que tiene la gente, y yo creo que perdimos en fuerza de protesta pero ganamos en formas de organización solidaria y de consolidación de grupos sociales” (hombre joven, primera línea, Concepción).

Conclusiones

La participación de jóvenes en la vida pública, y por ende en la política, ha sido una constante a lo largo de la historia chilena, aunque muchas veces ha sido descalificada por agentes que han predominado al interior de escenarios políticos y coyunturas históricas. Desde inicios del siglo XXI, son las juventudes quienes dieron señal de activación a la sociedad chilena. De esta manera se constituyeron en catalizadoras de masivas movilizaciones sociales que hicieron converger varias generaciones, manifestando profundos descontentos con respecto al sistema económico imperante, al modelo educativo, y al modo en que la política tradicional se disocia de los problemas de la población.

Como se ha enfatizado, las motivaciones que estimularon la revuelta y la composición social de quienes participaron en ella son diversas, multilocales e interseccionales. No obstante, la diferenciación en las demandas adquiere un hilo articulador que bien resume

la consigna “hasta que la dignidad se haga costumbre”. En tal sentido, una de las novedades de este ciclo de repolitización y del propio estallido en estudio es que las demandas y las agendas de distintas generaciones tendieron a sincronizarse, hecho que marca una diferencia relevante con otros ciclos de protesta. Los acumulados históricos desembocaron en el mismo cauce con demandas relacionadas al reconocimiento y la defensa de derechos (sociales, culturales, ambientales, por ejemplo), y en el llamado a la redacción de una nueva Constitución política que podría sentar las bases para un nuevo pacto social que supere el diseño neoliberal impuesto por casi medio siglo.

Por otro lado, los repertorios de acción colectiva en contexto de protesta y movilización urbana vienen mostrando importantes signos de cambio, pues no solo es posible evidenciar un relevo del “sujeto histórico” por otro que va tomando las calles de nuestras grandes ciudades (diversificado en demandas y fisonomía), sino que los repertorios clásicos de protesta (marchas, barricadas, ocupación de infraestructuras, corte de rutas, lienzos y cánticos) han sido permeados por acciones de tipo estéticas o de corte festivo donde el cuerpo deviene soporte expresivo de denuncias. En este sentido, observamos el surgimiento de múltiples formas de activismo popular en escenas de protesta, donde destaca lo que denominamos “artivismo”, en tanto combina prácticas de impugnación política con acciones de arte callejero, desplegadas en espacios públicos durante las movilizaciones del 18-O (Ganter, 2017). Igual de resaltable es el uso de las tecnologías disponibles, sobre todo redes sociales, canal muy importante de comunicación y difusión de información que permitió articular la acción de calle, y cuestionar y denunciar el papel de los medios de comunicación oficiales y tradicionales.

Lo anterior pone de manifiesto la renovada centralidad de los componentes socioemocionales en las dinámicas de movilización y protesta. El consenso actual en la literatura sobre el tema plantea que emociones como la indignación frente a episodios de abuso de poder o la solidaridad frente a la vulneración de derechos básicos, estimulan la participación de la ciudadanía en movimientos sociales y en hechos de protesta colectiva, creando un ambiente social que propicia y diversifica el activismo ciudadano (Flam, 1990, 2005). Esta

centralidad de elementos emocionales al interior de la movilización social ha tenido como protagonistas a jóvenes estudiantes, más claramente identificables a partir de cuatro ciclos de manifestaciones masivas de este siglo, exponentes, a su vez, de mareas generacionales: generación pingüina, del año 2006; generación del no+lucro en la educación, del año 2011; generación de estudiantes feministas #CompañeraYoTeCreo, del año 2018; y las unidades generacionales activistas del 18-O.

Además, las maneras de organización, especialmente entre las juventudes, se muestran proclives a dinámicas de coordinación más flexibles, horizontales y porosas, donde confluyen participantes de diversos orígenes, generaciones y clases sociales, con heterogéneas trayectorias militantes. Asimismo, se evidencia una progresiva feminización de las formas y las orgánicas de estos movimientos, asunto que implica una creciente participación de mujeres en eventos de protesta en espacios públicos, dejando atrás los liderazgos clásicos y los modelos heroicos anclados en la visión patriarcal de la tradición revolucionaria (Guiomar Rovira, 2017, 2018). Sin embargo, no dejan de ser significativos la amenaza y el temor a violencia política sexual como método de control psíquico y físico contra las mujeres que se involucran en el quehacer político.

Observamos, entonces, el rol activo que juega un gran número de jóvenes en el actual escenario, en tanto agentes públicos detonantes y difusores de demandas que exceden sus propios intereses particulares, poniendo en agenda temas que las generaciones previas no lograron empujar ni alcanzar. Se trata de un modo de construcción de otro tipo de política, prefigurativa, donde se tejen sentidos y horizontes compartidos; de una nueva subjetividad que disputa espacios en distintas escalas del ámbito social; de marcos de acción que se han feminizado, puesto que ponen en el centro “lo común”, la política de los cuidados, el medioambiente, los vínculos afectivos y colaborativos. Este panorama conlleva sentimientos y percepciones de futuro, ilusión y esperanza por la construcción de un Chile más justo; interés colectivo perfectamente recogido en la consigna: “Con todo, si no pa qué”.

Referencias bibliográficas

- Aguilera, O. & Álvarez, J. (2015). El ciclo de movilización en Chile 2005-2012: Fundamentos y proyecciones de una politización. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 29: 5-32. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2015.n29-01>
- Amna, E. & Eckman, J. (2014). Standby Citizens: diverse faces of political passivity. *European Political Science Review* 6(02): 261-281. <https://doi.org/10.1017/S175577391300009X>
- Araujo, K. (2019). *Hilos tensados: para leer el octubre chileno*. Universidad de Santiago.
- Castillo, A. (2020). *Asamblea de los cuerpos*. Sangría.
- Flam, H. (1990). Emotional “Man”: I. The emotional “man” and the problem of collective action. *International Sociology*, 5(1): 39-56. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/026858090005001004>
- Fundación Sol [@lafundacionsol]. (20 de junio de 2020). *Tasa de mortalidad por COVID-19 en las comunas del Gran Santiago*. Twitter. <https://twitter.com/lafundacionsol/status/1274506089535602692> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Galafassi, G. (2006). Cuando el árbol no deja ver el bosque. Neofuncionalismo y posmodernidad en los estudios sobre movimientos sociales. *Revista Theomai*, 14: 37-58.
- Ganter, R., Vergara, C. & Fuica, I. (2017). Caleidoscópolis: signos de cambio en los repertorios de protesta callejera en Concepción. *Universum (Talca)*, 32(2): 81-105. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762017000200081>
- Ganter, R. & Zazuri, R. (2020). Rapsodia de una Revuelta Social: retazos narrativos y expresiones generacionales del 18-O en el Chile actual. *Universum (Talca)*, 35(1): 74-103. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762020000100074>
- García Montes, N. (2013). *Aproximación teórica al estudio de la acción colectiva de protesta y los movimientos sociales* [Archivo PDF]. https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/t_aproximacion_teorica_mmss_garcia.pdf (consultado el 19 de agosto de 2021).

- Gil, S. (2011). *Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión*. Traficantes de Sueños.
- Goecke, X. (Octubre de 2020). Los Feminismos en la Revuelta. *Le Monde Diplomatique. Edición Chilena*. <https://www.lemondediplomatique.cl/0000/00/los-feminismos-de-la-revuelta.html> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Güell, P. (3 de diciembre de 2019). El estallido social de Chile: Piezas para un rompecabezas. *Mensaje*. <https://www.mensaje.cl/edicion-impresa/mensaje-685/el-estallido-social-de-chile-piezas-para-un-rompecabezas/> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Lechner, N. (1984). *La Vida Cotidiana*. FLACSO.
- Cifuentes, C. (8 de enero de 2020). Constanza Cifuentes: “Este es un llamado a no dejar las calles, a resistir juntas”. *Marcha*. <https://www.marcha.org.ar/constanza-cifuentes-este-es-un-llamado-no-dejar-las-calles-resistir-juntas/> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- McAdam, D. (1989). The Biographical Consequences of Activism. *American Sociological Review*, 54(5): 744-760. <https://doi.org/10.2307/2117751>
- Mouffe, Ch. (2009). *En torno a lo político*. Fondo de Cultura Económica.
- Movimiento Revolucionario 18 de Octubre. (15 de julio de 2020). Diez tesis para comprender los acontecimientos en Chile. *El porteno*. <https://elporteno.cl/tag/movimiento-revolucionario-18-de-octubre/> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Pairican, F. (9 de julio de 2020). Opinión del académico Fernando Pairican: La vía xampurria (mestiza) hacia la autodeterminación. *U de Santiago al Día*. <https://www.usach.cl/news/opinion-del-academico-fernando-pairican-la-xampurria-mestiza-hacia-la-autodeterminacion> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Pleyers, G. (2015). Volverse actor: Dos vías para los movimientos sociales del siglo XXI. *Revista Estudios Sociales*, 54: 179-183. DOI: <http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.13>
- Pleyers, G. (2018). *Movimientos sociales del siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas*. Clacso.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2012). *Informe de Desarrollo Humano - Chile: Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. PNUD.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015). *Informe de Desarrollo Humano - Chile: Los tiempos de la politicidad*. PNUD.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2018). *Informe de Desarrollo Humano - Chile. Las paradojas de la modernización*. PNUD.
- Rancière, J. (2007). *El desacuerdo. Política y filosofía*. Nueva Visión.
- Reguillo, R. (2017). *Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio*. NED ediciones.
- Roitman, M. (2012). Los indignados. El rescate de la política. *Aportes*, 45: 144-154.
- Rovira Sancho, G. (2017). *Activismo en red y multitudes conectadas*. Icaria.
- Rovira Sancho, G. (2018). El devenir feminista de la acción colectiva: las redes digitales y la política de prefiguración de las multitudes conectadas. *Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 15(2): 223-240. <https://doi.org/10.5209/TEKN.59367>
- Tarrow, S. (1997). *El poder en Movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial.
- Tilly, Ch. & Tarrow, S. (2007). *Contentious politics*. Paradigm Publishers,
- Ortiz, I., Burke, S. Berrada, M. & Cortés, H. (2013). *World Protest 2006-2013* [Archivo PDF]. http://policydialogue.org/files/publications/papers/World_Protests_2006-2013-Complete_and_Final_4282014.pdf (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Zarzuri, R. (2021). De la despolitización a la repolitización. Política, jóvenes y vida cotidiana. En Manuel Antonio Garretón (Ed.), *Política y movimientos sociales en Chile hoy. Antecedentes y proyecciones del estallido social de octubre 2019*. LOM Ediciones / Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Zarzuri, R. (2020a). Explorando las concepciones de militancias en mujeres jóvenes feministas de organizaciones políticas emergentes en Chile. En Antonio Álvarez-Benavides, Francisco Fernández-Trujillo Moares, Ariel Sribman Mittelman & Andy

- Eric Castillo Patton (Ed.) *Acción colectiva, movilización y resistencias en el siglo XXI. Vol. 1: Teoría* (pp. 155-168). Fundación Betiko.
- Zarzuri, R. (2020b). El malestar en los jóvenes chilenos y las movilizaciones estudiantiles en el siglo XXI. En Gloria de la Fuente y Danae Mlynarz (Ed.). *El pueblo en movimiento. Del malestar al estallido*. Editorial Catalonia.
- Zarzuri, R. (Noviembre de 2019). La oportunidad de ir a un nuevo pacto social. Días de furia. *Le Monde Diplomatique. Edición Chilena*. <https://www.lemondediplomatique.cl/2019/11/dias-de-furia.html> (consultado el 19 de agosto de 2021).
- Zarzuri, R. (2016). Las transformaciones en la participación política de los jóvenes en el Chile actual. En Manuel Antonio Garretón (Coord). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

INTERSECCIONALIDAD Y SUJETOS DEL 18-O CHILENO

MARISTELLA SVAMPA¹

¹ Socióloga y escritora. Investigadora del CONICET (Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), de Argentina. Integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg y profesora de la Universidad Nacional de La Plata.

En 2019 las *placas tectónicas* se movieron a nivel global y latinoamericano. Cada levantamiento, cada erupción volcánica, cada giro político en medio del vértigo tiene su especificidad, pero me atrevo a decir que aquel que tuvo lugar en Chile a partir del 18-O nos conmovió en lo más profundo. Al preguntarnos el porqué de esa conmoción tan profunda, salta el hecho de que Chile fue hasta hace poco la encarnación más persistente del modelo neoliberal, el buen ejemplo de las derechas del continente, el alumno perfecto de todos los organismos internacionales. El país en el cual se privatizó todo, desde la educación hasta la salud, desde las pensiones hasta el agua; en el cual lo público desapareció por el gran agujero negro del neoliberalismo. El país donde se aplican todavía las leyes antiterroristas de la época de Pinochet para encarcelar por décadas a los activistas mapuche. El país donde el golpe de Estado militar de setenta fue “más exitoso” y las desigualdades calaron más hondo.

No obstante, hay que reconocer que Chile fue un actor dentro del *ciclo progresista latinoamericano* entre 2000 y 2015, aunque de manera secundaria o periférica, con los mandatos de Michelle Bachelet. Estos ilustrarían una suerte de progresismo débil o de baja intensidad que nos recuerda la matriz neoliberal persistente, avalada por gran parte del arco político. Asimismo, si bien los movimientos sociales y los levantamientos populares *tienden a autorrepresentarse como inaugurales*, hay que decir que Chile también ha participado del nuevo ciclo de protestas de América Latina de los últimos veinte años, compartiendo características del nuevo *ethos* militante y de las formas de acción colectiva que predominan en la región desde fines de los años noventa y que se afianzaron durante la primera década del siglo XXI. Gran parte de los elementos reivindicados por los nuevos sujetos sociales en el levantamiento del 18-O, ya estaban ahí: demanda de autonomía, rechazo a los partidos políticos, crisis de representación, activismo cibernético y uso de las redes. Hablamos

de un *ethos* militante que encuentra su lugar de identificación o de construcción identitaria en la intervención del espacio público; una identidad que no es de clase ni partidaria, sino que está cruzada por temas sociales ligados a las múltiples desigualdades.

El texto precedente² está centrado en el análisis de las motivaciones, vivencias e ideas de futuro de jóvenes durante las acciones de protesta; en la relación entre hombres y mujeres; en el tipo de demandas que atravesaron y construyeron el campo de acción; y en la visión que tales subjetividades tienen sobre los partidos políticos y el Estado. Se trata de un informe fundamentado no solo en entrevistas individuales, sino también grupales, que toma en cuenta la geografía (dos ciudades: Santiago y Concepción), el género y la participación política previa al levantamiento, y que me permite hacer ciertos aportes complementarios.

Primeramente, algunos de los conceptos utilizados en la investigación son: “ruptura”, “rebelión del coro” y “acción contenciosa”. Todos ellos remiten a la crisis de representación política y a la emergencia de cuestionamientos por fuera de los partidos políticos tradicionales. Cabe insistir en la idea de que esto se halla en continuidad con procesos de acción colectiva vividos en otras regiones del continente; así como agregar otras nociones, por ejemplo, el concepto de *liberación cognitiva*, que alude a la transformación de la conciencia de los potenciales participantes en una acción colectiva. La consigna “Chile despertó” ilustra a cabalidad el proceso³. El levantamiento chileno expresa el trance de superación del fatalismo y la ampliación del horizonte de expectativas; muestra el modo secuencial: cómo, a partir de una protesta puntual, se desencadenó una ola generalizada de desobediencia civil que puso en el centro de la discusión las desigualdades y cuestionó de base el modelo neoliberal, ampliando muy rápidamente las demandas a diferentes sectores sociales. Estos procesos de liberación cognitiva pueden ser ilustrados por numerosos testimonios ligados a la vivencia emocional

2 Revuelta y juventudes / Políticas de lo pre y posfigurativo del 18-O en Chile”, p. 125.

3 Ver: http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/t_aproximacion_teorica_mmss_garcia.pdf (consultado el 12 de agosto de 2021).

de la revuelta: un “despertar histórico”, traducido también como un golpe de energía, esperanza, pérdida del miedo a la represión y a que todo quedara igual.

Luego, si bien es factible hablar de ejes de un nuevo *ethos* militante –denominados “activismo sincrónico” y “acción conectiva generacional”, siguiendo a Rossana Reguillo– y resaltar la importancia de las redes sociales, la fluidez de los espacios, la acción descentralizada, la ausencia de líderes; asimismo es preciso no perder de vista que la movilización tiene varias capas y en tal sentido debe enfocarse lo que podríamos llamar las diferentes *arenas de subjetivación*. De este modo se valora, además, *el espacio festivo* (que tiene una singularidad propia, una especificidad), y también *la autoorganización comunitaria territorial y asamblearia*. Habiendo participado de una movilización en plaza La Dignidad, lo que más llamó tanto mi atención como la de otros participantes no chilenos, fue el clima de fiesta, la emergencia de una suerte de comunión, donde la música, lo nuevo y lo viejo, el folklore y la canción militante hacían las veces de conector festivo y comunitario. Algo así como una *rave* interclase. De manera que se impone una pregunta, ¿qué rol han jugado estas movilizaciones festivo-comunitarias? Queda la labor de profundizar en la arena territorial-asamblearia, la de los cabildos, y en las asambleas territoriales; es decir, en *el espacio de la polis, de la comunicación argumentativa entre iguales*.

Por otro lado, es imperativo hablar de un escenario donde se evidencia una tendencia a la interseccionalidad de las luchas, a través de la cual se van estableciendo cadenas de equivalencias. Ciertamente, la protesta chilena, con el correr del tiempo, se convirtió en una “máquina de lucha”, pero en una máquina de lucha interseccional, que en su dinámica procesual fue desplegando cadenas de equivalencias, que a su vez apuntalaron la demanda de Asamblea Constituyente. Sería interesante evaluar a detalle los elementos novedosos de la protesta, ligados a los grafitis, murales y *performances* artístico-culturales. Sabemos, por ejemplo, que existe relación de continuidad entre memoria, historia de lucha y muralismo en Chile. Lo innovador en este caso es el *proceso de desmonumentalización* que recorrió el estallido chileno, a través de la intervención de monumentos y estatuas.

Vale interrogar, ¿se trata de una intervención que pone de relieve el carácter interseccional de estas luchas a partir de la denuncia de un régimen racista, colonial y patriarcal, o han estado particularmente ligadas al reclamo histórico de los mapuche?

Cierro diciendo que en América Latina actualmente no existen fuerzas político-partidarias de izquierda capaces de constituirse en articuladoras de los nuevos procesos sociales antineoliberales. Una parte importante de las izquierdas está agotada, cuando no desacreditada, luego de la experiencia de los progresismos realmente existentes, cuyo balance (ambivalente y desigual, según los países) todavía está siendo debatido en la región. De cualquier modo, ni la experiencia de Andrés Manuel López Obrador en México (muy desconectada del ciclo progresista anterior), ni la vuelta del kirchnerismo en Argentina (con un líder más moderado, de baja intensidad), pueden ser interpretadas sin más como el advenimiento de una segunda ola progresista. La novedad en América Latina es la fragilidad del escenario político emergente, eso que Victoria Murillo denomina “ciclo político divergente”⁴, que viene acompañado por la amenaza de un *backlash*, de una reacción virulenta en contra de la expansión de derechos, capaz de desplegarse a través de peligrosas cadenas de equivalencias.

No solo se aceleraron los tiempos políticos en el mundo, sino que en su vertiginosidad amenazan con mutaciones bruscas y violentas, de carácter irreversible. Es posible que estemos ingresando a un “tiempo extraordinario”, en el cual la liberación cognitiva de las multitudes y la conciencia de las desigualdades múltiples muevan “las placas tectónicas de la transición”. Pero a ciencia cierta, en un contexto tan enrarecido ideológicamente, mucho más a raíz de la pandemia de covid-19, es difícil decir hacia dónde nos dirigimos.

4 Ver: <http://library.fes.de/pdf-files/nuso/nuso-274.pdf> (consultado el 18 de agosto de 2021).

R DE REVUELTAS |

Un relato colectivo y champurrea (mestizo) del 18-O en Chile¹

SIMONA MAYO², ROCÍO VALDERRAMA³, CRISTIÁN AHUMADA⁴,
CLAUDIO ALVARADO LINCOPÍ⁵, JAVIERA MANZÍ⁶,
KARINA NOHALES⁷, ERICK VALENZUELA.⁸

-
- 1 El 70% de los fondos de esta investigación fue destinado a la defensa de los presos políticos de la revuelta.
 - 2 Lingüista. Integrante del Colectivo Mapuche Feminista Rangiñtulewfu. Universidad Católica Silva Henríquez.
 - 3 Trabajadora social. Miembro del Comité de Defensa del Pueblo “Hermanos Vergara Toledo”.
 - 4 Abogado. Integrante del Comité de Defensa del Pueblo “Hermanos Vergara Toledo”.
 - 5 Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Miembro de Memoria Mapuche.
 - 6 Socióloga. Activista de la Coordinadora Feminista 8M.
 - 7 Abogada laborista. Integrante del Comité de Defensa del Pueblo “Hermanos Vergara Toledo”.
 - 8 Integrante de la revista digital *La Raza Cómica* y del Colectivo Audiovisual Fuga Colectiva.

*Me acuerdo de la sensación parecida a cuando hay un terremoto,
una sensación de que está todo quemándose
y uno no sabe qué va a pasar.*

*A través de los chiquillos, los escolares,
creo que nos sentimos con el valor o las ganas
de poder manifestarnos con todas las demandas sociales.*

*Bendita la revuelta, porque despertó Antofagasta.
Porque la gente que estaba detrás de su tele
salió a su ventana.*

Introducción

La revuelta estalló en Chile el 18 de octubre de 2019. Un movimiento telúrico atravesó el país en un levantamiento social que nadie anticipó. Las consignas repetidas (“hasta que la dignidad se haga costumbre”, “hasta que valga la pena vivir”, “no son treinta pesos, son treinta años”) dejaron entrever que no se trataba de una sola demanda o de un sector aislado de la población irrumpiendo en las calles; fue un contundente cuestionamiento de la forma misma de organizar la vida; la impugnación radical de las formas de administración; un levantamiento contra la normalidad, precaria y violenta, que al estallar dio paso a múltiples revueltas.

Distintos trabajos han considerado los marcos constitutivos de la protesta desde la urgencia de entregar proyecciones y posibles salidas. Dentro de las aristas abordadas, una de las temáticas más prolíficas se concentró en el análisis de la dimensión constitucional, particularmente enfocada en la necesidad de una nueva carta magna que permita comenzar a desligar de raíz toda herencia dictatorial

(Aste Leiva, 2020; Brito, 2019; Bustamante, 2020; Castiglioni, 2019; Fernández Droguett, 2019; Garcés, 2020; Hurtado, 2020; Palma, 2020; Pezo, 2019). Una segunda línea de análisis, centra su mirada en la crisis profunda de la democracia representativa, develando el quiebre entre instituciones, estrategias políticas y modos de gestión social, en el marco de una movilización que ha cambiado completamente las formas de protesta y representación (Cortés, 2019; Ragas, 2020; Ramírez, Yáñez, Salinas, 2020; Tello, 2019). En tercer lugar, encontramos un conjunto de trabajos que busca explicar las razones, ejes y pilares que desencadenaron el estallido social (Aññir & Candiña, 2020; Ganter Solís, R. y Varela Álvarez, G., 2020; Gerber, 2019; Guíñez, 2019; Jerez, 2019; Karmy, 2020; Millahueique, 2019; Valdés, 2019). La presente investigación se acerca al estallido a partir de percepciones y experiencias de jóvenes de cuatro ciudades del país, principalmente; aquellas donde las protestas fueron medulares: Antofagasta, Santiago, Concepción y Temuco. Por medio de entrevistas individuales y *nütram/nütramkan*⁹ intergeneracionales, el objetivo de este estudio fue ahondar en las voces y miradas de jóvenes que experimentaron procesos de politización en el curso de los meses posteriores a octubre; esto con la intención de relevar trayectorias juveniles desde donde entender el impacto de los acontecimientos en un nivel tanto personal como social. La contingencia que implica el contexto de pandemia nos llevó a tomar la virtualidad como herramienta para desarrollar el trabajo de campo, a través de una metodología *chamपुरreada*¹⁰ que respondiera a la complejidad, polifonía y dinamismo del proceso. De manera que se trata de una investigación interdisciplinaria e interseccional; una perspectiva situada y militante que pretende desestabilizar la posibilidad misma de un “afuera” de la historia o de la política, y contribuir a la confección de instrumentos para leer los desafíos actuales.

Se realizaron cinco *nütram on-line* con jóvenes que participaron en la revuelta, para abordar los momentos previos al 18-O, las formas de organización que emergieron, sus modos de participación y sus lecturas de los hechos. En cada *nütram* participaron entre tres y cinco

9 Relatos/diálogos (respectivamente) en mapudungun, lengua mapuche.

10 Préstamo castellano en el mapudungun; *chamपुरrea* refiere a mestizo, mezclado.

jóvenes, más dos personas del equipo de investigación. A su vez, por medio de *nütram* individuales se realizaron biografías de la revuelta para indagar en historias de vida y definir cómo se entienden los acontecimientos actualmente, considerando el contexto de pandemia. En total se elaboraron diez biografías en las ciudades de Temuco, Antofagasta, Concepción y Santiago. Además, y como ejercicio colectivo de memoria, reconstruimos la revuelta desde el 18-O por medio de un mapeo temporal con datos aportados en los *nütram*. El objetivo fue crear un diagrama de tiempo donde cartografiar sucesos hitos que marcaron la memoria de algunos participantes. Para esto se hizo un trabajo de archivo a partir de publicaciones de medios de prensa digital, oficiales y alternativos, de distintas ciudades del país, y registros de memoria oral. Así, reconstruimos la sucesión de hechos de la protesta, de la respuesta policial, de las movilizaciones, de las medidas del Gobierno, de las declaraciones de movimientos sociales y de las conferencias del presidente, por nombrar algunas.

Diagramar los tiempos del proceso de la revuelta nos permitió dar cuenta de las diversas temporalidades comprometidas en ella, cuya periodización sigue siendo una pregunta abierta para investigadoras, investigadores, analistas y movimientos sociales. Si bien existe un acuerdo respecto al 18-O como punto inaugural, no hay acuerdo que determine el inicio de las protestas previas al estallido ni, menos aún, que identifique un fin, si acaso existe, del momento. Este recorrido cronológico procuró mostrar también aquellos lugares de enunciación donde quedó registro de la toma de palabra. De tal modo fue posible reconocer quiénes, dónde y cuándo detentaron con mayor o menor fuerza su voz y, a partir de esto, analizar las causas de las variaciones.

No son treinta pesos, son treinta años: genealogías de una grieta

Si bien la revuelta fija su inicio cronológico el 18-O, su temporalidad movimental subyace en las profundas capas de acción de movimientos sociales, populares y de resistencia del territorio chileno. Temporalidad que, en tanto genealogía, permite reconocer luchas recientes que dieron fuego, carne y contenido al movimiento telúrico popular más

grande de las últimas décadas. En octubre, los muros de la ciudad, entre un *collage* de rayados, pegatinas y grafitis, lucían referencias que yuxtaponían cronologías presentes y pasadas; entre ellas: “2019-1973”. Esta consigna en particular permite gestar un giro temporal explicativo y descriptivo: hay un 2019 porque alguna vez existió un 1973, y en 2019 todavía se respiran los aires represivos de 1973. En esta línea plasmada en el mobiliario urbano percibimos una justificación histórica de la movilización, una reflexión colectiva que abre la primera grieta para pensar los tiempos que habitaron la revuelta. Por otro lado, se encuentra la frase que expresó con mayor claridad el tenor de aquellos días (finalmente devenidos en meses): “No son treinta pesos, son treinta años”. El sentido común que gestó la movilización edificó rápidamente una narrativa histórica que permite reconstruir desde sus propias reflexiones una posible reseña de los nudos desatados el 18-O. La revuelta misma elaboró su relato, buscó hacerse comprender, no solo fue proclamada por lo inusitado de su potencia, sino a través del diseño espontáneo de un guion temporal defendido por la misma movilización. Se trató de respuestas precisas y contundentes frente a la prosa contrainsurgente que buscó y aún busca criminalizar la protesta. “2019-1973” y “no son treinta pesos, son treinta años” fueron dos aglutinadores de sentido, consignas para reclamar un lugar histórico, líneas que resumieron contundentes argumentos de millones de personas en las calles.

Como se sabe, una de las fracturas político-sociales más fuertes en la historia de Chile sucedió el 11 de septiembre de 1973. La profundidad de esa herida es bestial, tanto por la violación sistemática de derechos humanos, como por la instauración de un modelo económico que barrió con muchas de las conquistas del movimiento obrero durante el siglo XX. Por tanto, 1973 aparece como año de mayor peso gravitatorio que otros; su número posibilita significar cientos de malestares, años de rabia. Más allá de que el neoliberalismo no se haya consolidado específicamente en esa fecha (Bravo, 2012), 1973 se vuelve un ícono por el golpe de Estado y sus consecuencias, fantasma de un pasado que no pasa. De modo que este es el primer nudo temporal que desata la revuelta. Se deja entrever a ella misma como reacción (incluso con aires redentores) de aquella fecha que Chile lleva sobre sus hombros: la carga de un sistema

económico neoliberal y la impunidad. El estallido puso en dura cuestión la privatización de los derechos sociales que la sociedad chilena viene perdiendo progresivamente desde 1973. Por supuesto, la revuelta tiene como antecedente el acumulado histórico de los movimientos sociales, dedicados desde la década de los noventa a encender el brío contraneoliberal.

Además de los empujes privatizadores, que tuvieron un reimpulso bajo la administración de los Gobiernos posdictatoriales (Garretón, 2012), en una transición democrática de nunca acabar, otros de los fenómenos impugnados por la revuelta fueron los cierres institucionales que han bloqueado por décadas los cauces democráticos de los movimientos sociales. Bajo este segundo nudo podemos englobar aquellos treinta años impugnados. El fin institucional de la dictadura se concretó entre 1988 y 1990; es decir, entre el plebiscito del sí y el no¹¹ y la asunción del demócrata-cristiano Patricio Aylwin a la presidencia del país. Durante estos dos años se aseguró una transición que afectara lo menos posible el modelo económico, mediante una gobernabilidad que apaciguó la conflictividad social por vía del abandono y la forzosa exclusión de los sectores populares (actores fundamentales en las movilizaciones que empujaron el fin del régimen dictatorial). Este pacto fue conocido más tarde como la democracia de los acuerdos, donde las actorías políticas quedaron restringidas a los políticos profesionales (“expertos”) y al aparato técnico-burocrático del país. Esta dinámica se ha denominado “democracia incompleta”, por los enclaves autoritarios en la vida política posdictatorial (Garretón y Garretón, 2015). Este modelo de gobierno hizo posible que ante cualquier conflictividad social el malestar fuese subsumido por el aparato institucional (poniendo en entredicho la legitimidad de las demandas bajo argumentos de una supuesta actitud quimérica por parte de los actores movilizados) o controlada con violencia. Por tanto, la democracia de los acuerdos permitía que los sujetos políticos de los sectores en lucha fuesen finalmente criminalizados o caricaturizados. El pacto democrático posdictatorial se narró como perfecto. La democracia de los acuerdos del empresariado con los

11 Plebiscito Nacional de Chile que en 1988 consultó al pueblo chileno si aprobaba o no el mandato del dictador Augusto Pinochet.

partidos políticos decretó la privatización del país para sostener crecimiento macroeconómico, y sus cerraduras antidemocráticas garantizaron en las multitudes un desprecio hacia la política, o al menos ese fue el análisis que intentó explicar el incremento sostenido del abstencionismo electoral. Cientos de luchas gestadas durante esos treinta años otorgan un carácter específico a los acontecimientos del 18-O. Revisemos brevemente algunos hitos que grafican el proceso formativo de descontentos y utopías que la revuelta comenzó a sedimentar.

¡Que vivan los estudiantes!

El año 2011 chileno fue marcado por uno de los hitos más importantes de la última década. Comenzaba la movilización estudiantil de mayor participación desde la revolución pingüina del año 2006¹²; a partir de entonces, año a año el sector estudiantil, y particularmente los estudiantes secundarios, venían insistiendo por cambios estructurales del sistema educativo (Rifo, 2013). Tal como en las protestas de los ochenta o en el mochilazo de 2001¹³, el sector estudiantil fue la cara visible de la disputa contra un sistema insostenible (Thielemann, 2012; Schwabe, 2018). Frente al movimiento social estaba toda la herencia de la dictadura. Sebastián Piñera se encontraba en el segundo año de su primer mandato, y el ministro de Educación de entonces era Joaquín Lavín, un “Chicago Boy”, economista, miembro del Opus Dei y cómplice de la dictadura cívico-militar: un ingeniero comercial gerenciando el sistema educativo, llevando las tesis de Milton Friedman hacia una fase superior del modelo político-económico imperante. El neoliberalismo nos invadía, pero aún resultaba complejo configurar un relato capaz de desbaratarlo y de convocar a toda la sociedad. En ese momento “Fin al lucro” y “Educación Gratuita” fueron las consignas que esbozaron otro horizonte. Lo comunitario y lo colectivo se volvían a redibujar entre escuelas tomadas y universidades en paro. Más de doscientas mil personas marchando por la Alameda conformaban un acontecimiento

12 Movilización estudiantil conocida con este nombre por el apelativo que reciben en Chile los estudiantes de primaria y secundaria.

13 Primera protesta de multitudinaria participación en Chile después de la transición a la democracia, protagonizada por estudiantes secundarios.

que no se veía desde las multitudinarias manifestaciones en apoyo a la Unidad Popular. El ministro Lavín fue removido de su cargo. Parecía el año de jugarse el todo o nada: “Estamos dispuestos a perder el año académico”, advirtieron las asambleas universitarias. Por otra parte, estudiantes secundarios practicaron huelgas de hambre, fueron secuestrados, padecieron torturas y vejaciones por parte de carabineros¹⁴. Sin embargo, resistieron levantando propuestas como la toma de colegios autogestionados y la creación de currículos escolares desde la comunidad. El 4 de agosto la movilización alcanzó su punto cumbre. Plaza Italia, hoy Plaza Dignidad, fue escenario de una lucha entre estudiantes y carabineros. Durante todo el día, y de manera desbordante, cada calle a la redonda fue cortada, cada centro educacional se convirtió en trinchera. En la noche de ese mismo 4 de agosto, Julio Chehuin, comunicador mapuche que se encontraba en La Hermida, fue atropellado; como consecuencia sufrió la amputación de una de sus piernas y recibió años de rehabilitación en Venezuela antes de retornar al Wallmapu¹⁵. El 25 de agosto del año 2011, Manuel Gutiérrez, de dieciséis años, habitante de Jaime Eyzaguirre, cayó abatido por disparos de la fuerza policial, mismo cuerpo de represión que veintisiete años antes mató en ese lugar al Peñi¹⁶ (Pedro Mariqueo), también de dieciséis años de edad. Este duro golpe marcó un declive en la movilización. La táctica del Gobierno fue la implementación de mesas de diálogo. Sectores de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) entraron en procesos de negociación con el Ejecutivo, mientras sectores populares entregaban todos sus esfuerzos durante la lucha.

Las luchas antiextractivistas

En 2012, Aysén y Freirina se colocaron en el mapa de las movilizaciones. El 6 de febrero de este año se dio inicio a cuarenta días y cuarenta noches de fuertes protestas en la ciudad de Aysén (1.919 km

14 Agentes de Carabineros de Chile, policía que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad.

15 Territorio mapuche.

16 “Hermano” en mapudungun.

al sur de Santiago). Dos hechos se consideran antecedentes: la lucha contra la instalación de Hidroaysén¹⁷ desde 2005 en adelante, y el terremoto y posterior tsunami del 21 de abril de 2007. En ambos casos fue notorio el abandono del Estado chileno. Al comienzo de la movilización, el Movimiento Social de Aysén agrupó un total de catorce organizaciones sociales de toda la región, pero este conglomerado muy pronto llegó a reunir veinticinco organizaciones patagónicas, aumentando su alcance geográfico y social. Confluyeron organizaciones de pescadores, comerciantes, transportistas, trabajadoras y trabajadores, funcionarias y funcionarios públicos, asociaciones medioambientales, vecinales, campesinas, de pueblos originarios; en definitiva, representantes de la comunidad en pleno se unieron bajo el lema: “Tu problema es mi problema”. Mateadas, ollas comunes y barricadas mostraron la voluntad de un pueblo por no dar un paso atrás. Algunas demandas del Movimiento Social de Aysén exigían solución al alto costo de los combustibles, salud de calidad, equidad laboral, derecho a participar en las decisiones sobre la región, universidad pública regional de calidad, regionalización de los recursos naturales, rescate de la pesca artesanal, rebaja en el costo de la canasta básica, rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino, pensión regionalizada para adultas y adultos mayores. La consigna “hasta que la dignidad se haga costumbre”, que copó las calles en la revuelta del 18-O, mostró aquellos primeros bríos. La táctica del Gobierno nuevamente fue una mesa de diálogo (en este caso llamada “Mesa Social de Aysén”) como estrategia para disuadir y dividir la subversión. En paralelo, veintidós madres de familia, vecinos, pescadores y pequeños comerciantes de Aysén, fueron acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado. El resultado de esas movilizaciones fue un acuerdo para la implementación de una zona franca y aumento del mínimo del subsidio habitacional base. Se prometieron estudios para la creación de una universidad pública regional y ajustes en el precio de los combustibles. No obstante, solo se entregó un bono de leña, que causó el aumento de los precios sostenidamente desde 2012 en adelante.

Otra experiencia muy importante sucedió en Freirina, comuna ubicada en la Provincia de Huasco, en la región de Atacama (a 179 km

17 Proyecto que contemplaba la construcción de cinco centrales hidroeléctricas.

de Copiapó, capital de la Tercera Región). Freirina tiene una población de 6.000 habitantes, forma parte del Valle del Huasco, sector que históricamente se ha vinculado a actividades productivas de bajo impacto ambiental, como la pequeña minería, la pesca, la agricultura y la crianza de animales. El conflicto se hizo visible en septiembre de 2011, debido a malos olores emanados por Agrosuper. El proyecto de este conglomerado de empresas productoras de proteína animal fue aprobado en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, y pudo ser plenamente implementado durante el año 2011, año en que comienzan a hacerse evidentes los efectos sobre la población de la zona. La planta apuntaba a convertirse en la agroindustria alimentaria más grande de Sudamérica, albergando en sus instalaciones hasta dos millones quinientos mil cerdos para distribuir en Asia, Europa, Norteamérica y países vecinos. Las principales enfermedades producto de la emanación de olores fueron diarrea, cefalea, náuseas y hepatitis. Ante esta situación los pobladores organizados de Freirina se sumaron al movimiento Valle del Huasco, efectuaron asambleas territoriales, convocaron marchas desde diciembre del año 2011 para socializar el conflicto, interpelaron a las autoridades políticas. Incluso dirigentes y activistas de Freirina viajaron hasta La Moneda¹⁸ para buscar soluciones que no llegaron. La escalada del conflicto se dio paulatinamente hasta mayo de 2012, cuando hubo enfrentamientos entre fuerzas especiales y habitantes de la zona. Las mayores consecuencias las pagaron los pobladores (con detenciones ilegales y golpes). Uno de los manifestantes, Wilson Campusano, fue herido de gravedad en un ojo por el disparo de un perdigón de carabineros. Finalmente, el cierre definitivo de la planta ocurrió durante el año 2013, y Jaime Mañalich, en su primera gestión como ministro de Salud de Piñera, admitió que al menos dos años más tomaría limpiar la contaminación y los desechos generados por la planta.

Por otro lado, la movilización contra el extractivismo y la contaminación ambiental tendrá lugar con mayor intensidad durante la última década, debido a la creciente demanda de proyectos extractivistas y sus consecuencias para la vida humana y la biodiversidad. Emblemática ha sido la lucha de las comunidades de Huasco Alto contra el megaproyecto de extracción minera Pascua Lama,

18 Palacio, ubicado en la capital, principal símbolo del poder administrativo.

perteneciente a la empresa Barrick Gold, que finalmente detuvo sus faenas en el 2018. Así también son fundamentales las defensas territoriales desarrolladas por comunidades de todo el país ante proyectos de megaminería, centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, forestales, monocultivos, producción agropecuaria, silvicultura, pesca de arrastre, entre otras, que ocurren a lo largo del territorio y que han generado consecuencias irreversibles para el ecosistema; a tal punto, que se asume la categoría de “zonas de sacrificio” para nominar una situación normalizada en pro del desarrollo económico y energético. Tocopilla, Mejillones, Coronel, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Ventanas y Coronel, están mapeadas como “zonas de sacrificio”; es decir, territorios entregados a la contaminación indiscriminada por sobre el derecho a la vida. Prácticamente todas las centrales termoeléctricas a carbón se encuentran en estas comunas, “que a su vez son responsables del 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO₂), el 88% de la totalidad de material particulado (MP), el 97% de las emisiones totales de dióxido de azufre (SO₂) y el 91% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno (NO₂)” (Chile Sustentable, 2017). Nefastas han sido las consecuencias para la población y la biodiversidad en general. Durante los meses de agosto y septiembre de 2018, más de mil cuatrocientas personas sufrieron severos daños neurológicos, mareos, vómitos, abortos, producto de intoxicaciones derivadas de las emisiones excesivas de hidrocarburos orgánicos volátiles, dióxidos de azufre y otros gases. Tras sesenta años de permanente estado de contaminación, las comunidades circundantes a la Bahía de Quinteros y Puchuncaví (Región de Valparaíso) se alzaron bajo la consigna: “Morir luchando, de cáncer ni cagando”. Por primera vez un conflicto ambiental lograba tal nivel de movilización masiva en Chile. Ya no era solo una vertiente ciudadanista del año 2010 contra el proyecto Barrancones en Punta de Choros (Región de Coquimbo), se trataba de las principales ciudades del país concentradas impugnando la implementación de zonas de sacrificio. Lo que se fraguó en cada una de estas movilizaciones fue una disputa por los sentidos de la vida, por el modelo de producción, por las formas de habitar los territorios y, como declaró el movimiento

feminista, contra la precarización de la vida. El sentido común neoliberal seguía mostrando sus fisuras y estas eran denunciadas cada vez más duro por los movimientos sociales. Previo a esta revuelta, se activaron los debates medioambientales sobre el problema del agua. La consigna “no es sequía es saqueo” buscó politizar la falta de agua en el Norte Chico y la zona central del país. La lucha se enfocó contra las mineras y el monocultivo de paltas (el llamado “oro verde”), que demanda para su producción el agua con que se abastecen decenas de campesinos de los valles transversales (Mundaca, 2014). Las imágenes de cuencas de ríos desérticos y de animales muertos por falta de comida se transmitieron por televisión. La disputa por el agua se volvió centro del debate.

El movimiento mapuche

Al comienzo de la primera administración de Piñera (2010-2014), el objetivo del Ejecutivo era sacar la rentabilidad máxima al territorio mapuche, esta vez por medio del Plan Araucanía y del Plan Arauco. “Dios fue muy generoso cuando le tocó crear la Araucanía”, expresó en tono profético el presidente del país sobre el cerro Ñielol en Temuco. La década anterior había estado marcada por la persecución política al pueblo a través de la Operación Paciencia, que otorgó fondos para fortalecer la presencia de fuerzas especiales de carabineros en el Wallmapu; hecho que se tradujo en allanamientos, detenciones arbitrarias y torturas contra comunidades mapuche (Pairican, 2014), la detención de longko¹⁹ de comunidades y miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), además de los asesinatos de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, perpetrados por carabineros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile por violación a los derechos humanos en los casos de detención de personas mapuche y aplicación de la ley antiterrorista a través de esta operación.

Con tales antecedentes, el Gobierno priorizó la estrategia de la mercantilización en territorio mapuche. Para esto fue clave la figura de Joaquín Lavín (excandidato de la derecha a la presidencia del

19 “Líderes” en mapudungun.

país), en tanto cara visible de la propuesta de desarrollo regional. Tal como se relató líneas atrás, Lavín fue blindado en medio de la movilización más grande de la historia estudiantil y dejó esa cartera para asumir como ministro de Planificación (posteriormente Ministerio de Desarrollo Social). Sin embargo, tras un incendio ocurrido en un fundo de Vilcún, cercano a la ciudad de Temuco (conocido como el caso Luchsinger-Mackay, fechado el 4 de enero de 2013), la careta dialogante hacia el pueblo mapuche se caería. El ministro del Interior, Andrés Chadwick (primo de Sebastián Piñera y miembro de la ultraderecha pinochetista) declaró: “Sabemos que tenemos que enfrentar a un adversario poderoso”. Las formas y discursos represivos utilizados contra la revuelta del 18-O fueron ensayados en territorio mapuche. El Estado de Chile retomó el relato del enemigo interno, agregando que se trataba de una estructura político-militar, con jerarquías, con formación y apoyo económico desde el extranjero. De igual modo había procedido el mismo Gobierno tres años antes durante el mediatizado caso Bombas para detener a catorce personas, acusadas de colocar artefactos explosivos en Santiago; finalmente, todas fueron absueltas por no haber pruebas que sostuvieran semejante acusación.

Así también se reafirmó el pacto oligopólico entre el Estado y el extractivismo forestal, que desplaza comunidades, contamina el medioambiente, desertifica suelos y elimina la biodiversidad territorial. El machi Celestino Córdova fue uno de los primeros acusados, siendo condenado a dieciocho años de prisión sin derecho a beneficios. La *razzia* del Estado de Chile no se detuvo. A su paso asesinó a Rodrigo Melinao Licán (2013), a José Quintriqueo (2014), a Macarena Valdés (2016), a Luis Marileo y a Patricio González (2017). Ya se habían formalizado las Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas (PACI), instrumento del Estado que daba garantías para la vigilancia, patrullaje y allanamiento en las comunidades. La violencia estatal se instaló en territorio mapuche. Con fanfarria mediática el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) anunció el desbaratamiento de organizaciones terroristas. En el despliegue de la Operación Huracán fueron detenidas ocho personas mapuche, miembros de la Coordinadora

Arauco-Malleco (CAM) y de la organización Weichan Auka Mapu, bajo cargos de asociación ilícita terrorista.

Todo fue un montaje. Carabineros de Chile, institución que venía acusada por casos de corrupción económica debido al robo de 28.300 millones de pesos (el fraude “más grande de la historia” desde el comienzo de la reforma procesal penal vigente hasta la fecha), necesitaba demostrar resultados; para ello la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) manipuló las pruebas incautadas y señaló como terroristas a los miembros de ambas organizaciones. Nuevamente, manipulación y estigmatización; pero la opinión pública, cada vez más escéptica del rol de Carabineros y del Gobierno, mostró contundentes luces de insatisfacción y malestar.

El estallido estaba a la vuelta de la esquina, pero aún faltaba el segundo pie de la gestión de Piñera (2018-hoy). De vuelta en el Gobierno, retomó la agenda económica del Plan Araucanía, pero ahora a través del control territorial militar del Wallmapu. Para ello conformó el Comando Jungla, una suerte de tropa de carabineros de élite, formados en cursos especializados en Colombia para enfrentar las comunidades mapuche. Dotados de tanquetas, armas, drones y tecnología militar de última generación, Piñera prometía emprender una nueva etapa represiva para el Wallmapu, una militarización inusitada. Poco tiempo pasó para ver los resultados del intervencionismo militar. La tarde del 14 de noviembre de 2018, Camilo Catrillanca (miembro de la comunidad de Temucuicui) fue asesinado por el Comando Jungla. El Gobierno aseguró que se trató de una operación de inteligencia, debido al robo de vehículos donde además, afirmó, hubo “fuego cruzado de por medio”. Al día siguiente, las principales ciudades de Chile se desbordaron. Fue la primera vez que el asesinato de un mapuche causó tal nivel de conmoción social a lo largo del país. Algo despertaba. El descrédito del Gobierno se percibía de modo generalizado. Una a una cayeron las afirmaciones del montaje: Camilo Catrillanca fue asesinado por la espalda, sin mediar provocación alguna. Algo se activó aquellas semanas. Casi un año antes del 18 de octubre de 2019, los ojos de toda la sociedad pudieron ver sin velos el terrorismo de Estado contra el pueblo Mapuche.

Las huelgas “ilegales” y la lucha por las pensiones

Entre las más tempranas y profundas transformaciones neoliberales de la dictadura está el Plan Laboral (1979), legislación que regula los derechos colectivos de trabajadoras y trabajadores (sindicalización, negociación colectiva, huelga) y la creación de un nuevo sistema de pensiones (1980), basada en la capitalización individual y en la administración privada de estos fondos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ambas reformas son comandadas por José Piñera, ministro del Trabajo del dictador y genocida Augusto Pinochet, y hermano del actual presidente. El Plan Laboral, cuyos pilares se preservan casi intactos en el actual Código del Trabajo (1994), introdujo una reorganización radical de las relaciones entre trabajadores y empleadores, fundada, por una parte, en la fragmentación de la fuerza asalariada²⁰, y por otra, en la “despolitización” de los sindicatos mediante la incompatibilidad entre los cargos de representación sindical y la participación en actividades políticas.

Esta reforma fue capítulo de una transformación mayor que consistió en la privatización de muchas empresas estratégicas y el desmembramiento de toda la actividad productiva de estas por vía de tercerización, *outsourcing* y externalización de trabajadores. El impacto cotidiano de esto, deliberadamente previsto por sus impulsores, se refleja en la siguiente escena multiplicada por millones: personas que trabajan en un solo lugar físico y que comparten la misma realidad laboral, pero no pertenecen formalmente a la nómina de un mismo empleador y, por tanto, no pueden asociarse, negociar condiciones comunes de trabajo, ni ir a huelga juntas, porque eso en Chile es ilegal. Estos poderosos amarres comenzaron a agrietarse en el 2005 con la gran huelga de trabajadores subcontratados de la Codelco, empresa estatal del cobre. Casi treinta mil subcontratados pertenecientes a empresas distintas se asociaron y lucharon a lo largo de todo el territorio para reclamar derechos comunes y responsabilidad en las condiciones laborales por parte de la empresa principal o

20 Se prohíben las negociaciones colectivas y las huelgas que involucren trabajadores de dos o más empresas diferentes, e incluso se prohíbe el uso de las palabras “único” y “única” en la denominación de las organizaciones sindicales.

mandante, en este caso Codelco, para la cual trabajaban pero por la cual no estaban contratados. El resultado de esta gesta emergida en los surcos de la cordillera de los Andes, en medio de la nieve y de las barricadas, fue la Ley de Subcontratación (2006), que regula las responsabilidades de empresas mandantes, y el Acuerdo Marco (2007), primer instrumento colectivo que establece condiciones comunes de trabajo para subcontratados de ese sector. Esta lucha, librada desde la actividad económica más estratégica del país, inauguró el periodo de las huelgas “ilegales”; es decir, de huelgas que desbordaron la legislación dictatorial tan celosamente resguardada por los partidos de la transición de Gobiernos civiles. También se inauguraron las organizaciones sindicales “de hecho”, cuyas organicidades excedían el marco legal. A los trabajadores del cobre les siguieron en menor escala los trabajadores subcontratados de la industria forestal (2007), sin éxito en sus demandas y sin alcanzar formas organizativas permanentes, pero cuya paralización generó gran impacto social. En este marco temporal (corría el primer mandato de Michelle Bachelet), un trabajador fue asesinado por la policía durante la huelga: Rodrigo Cisternas Fernández, de veintiséis años de edad.

Después llegó el turno de los trabajadores portuarios (2012-2013), que iniciaron una paralización exigiendo media hora de colación dentro de la jornada de trabajo, y que terminaron llevando al paroxismo a todo el comercio exterior del país durante meses. Si pudieron sostener una movilización de esta magnitud, fue porque lograron una organización “de hecho” que agrupó trabajadores de todos los puertos del país, la Unión Portuaria de Chile: experiencia organizativa inédita en la realidad local. Transcurría el primer período presidencial de Sebastián Piñera y la autoridad a cargo del conflicto era la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, hija de un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea que fue miembro de la Junta Militar de Gobierno durante la dictadura. Las actorías obreras, eclipsadas por largos años, volvieron a irrumpir en clave reivindicativa y transversal, pues aunque estas acciones aún se hallaban enmarcadas dentro de una evidente sectorialidad, estaba en curso un proceso que comprometía a importantes sectores de trabajadores y activaba organicidades (im)posibles e imprescindibles en tiempos

neoliberales, si se quiere existir como sujeto colectivo a nivel laboral. La clave transversal vino del Movimiento NO+AFP²¹, que estalla en 2016 y que lucha por poner fin al sistema privado de pensiones. La masividad y apoyo instantáneos que esta demanda concitó, el multitudinario volcamiento de personas en las calles de un momento a otro y la aparente futilidad de la chispa que encendió esta pradera (la noticia sobre la pensión millonaria que percibía una militante del Partido Socialista) anunciaban, tal vez embrionariamente, la dinámica de los acontecimientos por venir. Una fuerza telúrica comenzaba a impugnar irreversiblemente la institucionalidad previsional que constituye una de las mayores fuentes de capitalización para el empresariado del país.

El movimiento feminista

En Chile el movimiento feminista tiene una larga tradición; en los años ochenta asumió un rol fundamental para resignificar los repertorios de protesta en el marco de la lucha por el retorno de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Esta fue una década particularmente prolífica en la reflexión y articulación feministas, con intelectuales como Julieta Kirkwood, que pusieron en el debate que la lucha antidictatorial debía exigir “democracia en el país y en la casa”, y plantearon la necesidad de politizar la intimidad y el espacio doméstico llamando a las mujeres a manifestarse “en la calle, en la casa y en la cama”. Tras el cese pactado de la dictadura durante los noventa, el feminismo autónomo se ha enmarcado en una crítica al poder centralizador, vertical y masculino del Estado en los Gobiernos de la denominada transición democrática, y una de sus demandas históricas ha sido la disputa por el reconocimiento de la violencia política sexual como práctica sistemática estatal tanto en dictadura como en posdictadura. Uno de los principales referentes feministas de la década de los noventa es la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (conformada en 1990): uno de los espacios más emblemáticos de organización feminista a nivel nacional, que asumió las diversas violencias hacia las mujeres como expresiones de un mismo patrón patriarcal.

21 AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones.

Con los años, la lucha feminista devino una necesidad en el seno del movimiento estudiantil. A partir del ciclo de movilizaciones estudiantiles emprendidas con la revolución pingüina de 2006, y que vuelve a alzarse en 2011, es cuando el movimiento estudiantil salió a las calles a reclamar contra el lucro en el sistema educativo y por educación pública, gratuita y de calidad. Esto introdujo una ruptura masiva y alegre del consenso neoliberal de la transición, quiebre que generó como respuesta el recrudecimiento de la política represiva del Estado. Desde entonces la trayectoria de este movimiento se ha seguido expandiendo en intersección con otras luchas y movimientos. Una confluencia con el feminismo puede identificarse en la elección de Melisa Sepúlveda como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) en 2013 (primera feminista y anarquista en asumir este cargo) y, luego, en el Congreso Nacional por Educación No Sexista realizado en 2014, que amplió radicalmente el repertorio de la demanda histórica por la recuperación de la educación pública en clave feminista. Desde entonces el movimiento feminista se despliega de la mano de estudiantes secundarias y universitarias, en un pulso que se expande desde 2016 con la masividad de hitos internacionales como #NiUnaMenos, que en Chile llegó a habilitar amplios espacios de articulación feminista contra la violencia de género a los que se sumaron diversas generaciones. Años después, en 2018, las tomas de sedes universitarias y escolares llevaron a miles de jóvenes a las calles durante las jornadas del Mayo Feminista que activó el movimiento estudiantil tras la demanda por educación pública, gratuita y no sexista, a la vez que rompían el silencio institucional sobre las distintas formas de abuso, violencia y acoso sexual inscritas en las relaciones pedagógicas y laborales al interior de establecimientos educativos.

Para entonces, el proceso que preparaba la primera Huelga General Feminista comenzaba a configurarse a partir de la potencia del Mayo Feminista, y luego con el Primer Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, en diciembre de 2018. En este contexto, la noción de “precarización de la vida” surgió como parte del relato central que intenta una impugnación radical de las formas de administración de la vida y el posicionamiento de una lectura feminista a la crisis del capitalismo neoliberal.

Al momento de analizar que, tras años de movilización feminista, estábamos inscritas en un relato que nos narraba como víctimas de las violencias que habíamos salido a denunciar y gritar a viva voz, agotando desde allí nuestra capacidad de hablar de nosotras mismas, con la intención de movernos de ese lugar, en enero de 2018 nos llamamos a pasar a la ofensiva como sujetas políticas. Nos llamamos a hablar de nuestra vida entera, y de cómo la violencia patriarcal es inseparable e incomprensible por fuera de todas las condiciones de esa vida que queríamos cambiar en su totalidad (Manzi y Carrillo, 2019, p. 170).

La marcha del 8 de marzo (8-M) de 2018 fue la movilización más grande en Chile desde la posdictadura hasta antes de la revuelta.

***Nütram* de la revuelta**

La grieta se ha hecho visible. Los movimientos telúricos articulados bajo la consigna “no son treinta pesos, son treinta años” ponen de manifiesto el choque entre dos modelos de sociedad antagónicos. Dos placas tectónicas se enfrentan y liberan una energía acumulada que busca, en términos de continuidad o ruptura, reorganizar las dimensiones materiales y subjetivas del mundo social. Si bien este trabajo, tal como se anunció al principio, intenta analizar la revuelta a partir de la perspectiva de la juventud, en particular de juventudes no organizadas, los diálogos y voces registrados en este *nütram* pusieron en cuestión la consigna principal y llevaron a plantear algunas interrogantes. ¿Bajo el criterio de quién esta juventud no está organizada? ¿Por qué no pensar que emerge una nueva forma de organización social, con fuerza destituyente de los marcos políticos que provocaron la crisis de representatividad?

Llamamos *nütram de la revuelta* al entramado complejo de polifonías, experiencias y energías dinámicas que se articularon en los diálogos llevados a cabo para cristalizar este estudio. Relatos diversos que expresan hilos temporales y vivenciales tejidos a través de la palabra y la memoria. De acuerdo con Gago (2017), a propósito de la crisis de 2001 en Argentina, la fuerza destituyente es capaz de crear, desde abajo, nuevos mundos y reglas. Es decir, tiene capacidad

para “derribar y vaciar la hegemonía del sistema político de partidos y (...) abrir una temporalidad de indeterminación radical a partir de la fuerza de los cuerpos en la calle” (p. 68). En este sentido, el *nütram de la revuelta* permitió asir, con claridad, que la juventud que prende la mecha del estallido a su vez da inicio a una nueva manera de movilización en Chile: una impronta capaz de poner en jaque a la institucionalidad política sin necesidad de repetir la tradición de la izquierda chilena.

Producto de los diálogos, se identificaron seis nudos críticos transversales en los relatos, descripciones y análisis. En primer lugar, el nudo nominado *espacio-memorias-territorios* reivindica una trama de memorias históricas (con siglos de distancia entre sí), y las articula en un nuevo gran relato identitario que barre con aquel de la formación del Estado nacional chileno. Por tal razón, es posible afirmar que los imaginarios expresados en calles, muros, cantos, memes y lienzos se caracterizan por su posheroísmo y su laicidad. Un segundo nudo, *vida-dignidad-despertar*, permitió leer en los *nütram* colectivos e individuales cómo se gestó una consigna capaz de enunciar la crisis de precarización de la vida en todas sus formas posibles. Los relatos recopilados dan cuenta de esto, de la desolación que provoca el modelo político-económico en el pueblo, pero también de un hartazgo, otra pólvora del estallido: desde nuestra perspectiva, champurrea y situada, lo llamaremos *newen*²² constituyente. Así, este nudo reveló cómo la revuelta hizo un rayado de cancha al Gobierno; con la consigna “con todo, si no pa qué”, las multitudes manifiestan: ya lo hemos perdido todo y todo está por construirse. Un tercer nudo crítico identificado fue el de *violencias*. Los relatos reflejan miedos que estuvieron presentes en el estallido y su revuelta. La represión de las fuerzas del Estado y la prisión política definen este punto. Como cuarto nudo persiste el eje *tiempos-temporalidades*, estrechamente vinculado con el primero, pero diferente en la medida en que permite analizar la superposición de memorias y tiempos históricos en un solo momento: la temporalidad presente de la revuelta. Un quinto nudo hace alusión a una *nueva clase trabajadora / nuevo pueblo unido*, estas categorías fueron reconfiguradas y resignificadas durante el estallido.

22 “Fuerza” en mapudungun.

Consignas como “el pueblo unido” y su histórico canto siempre se asociaron a la tradición comunista chilena, pero la revuelta (con su *newen* constituyente) las hizo suyas y las colmó de nuevos sentidos y demandas. Finalmente, el nudo *intergeneracional* aparece en los relatos como eje clave. La articulación de personas de diversas edades fue otro elemento determinante del ciclo de protestas en análisis y trajo consigo la recomposición de tejidos sociales y de comunidades históricamente aisladas.

La ciudad, un muro

Los muros y altas estructuras de la ciudad de Santiago han estado cubiertos por un cúmulo caótico de carteles, luminarias, fachadas y gigantografías publicitarias. Una ciudad pastiche ha sido la expresión urbana de una de las herencias más implacables de la dictadura: la privatización del espacio público. En este contexto, los muros forman parte de la extensión visual de capitales nacionales que reproducen, de diversas maneras, la celebración de ofertas, bonos y deudas. De tal modo, el pastiche de la ciudad neoliberal ha revelado su propia uniformidad, regida por la búsqueda permanente de tener todo acorde a la lógica de compra-venta; que todo luzca coherente ha legitimado la ilusión cohesionadora. Históricamente el control estético de la ciudad en América Latina se desarrolló mediante la construcción de muros físicos: desde empalizadas en los primeros siglos coloniales hasta cinturones sanitarios durante los procesos modernizadores del siglo XIX y XX. Estos muros, en la actualidad, se cimientan en una ciudad de mayores flujos, donde abundan marcas y resabios de una actividad permanente e invisible; su borramiento es la estrategia dictatorial que persigue y desaparece huellas de amplios sectores de izquierdas y desarrolla su propio golpe estético (Leiva y Errázuriz, 2012). Fue así como se intentó borrar de la ciudad cualquier gesto de disidencia dispuesto como mural, rayado, toponimia insurgente o arte político. La “operación limpieza” en palabras de Errázuriz y Leiva “representa por una parte la desinfección del pasado marxista y, por otra, la promoción de una noción militarizada de la estética cotidiana que se refleja en rasgos tales como la depuración,

el orden y la restauración fervorosa de los símbolos patrios” (2012, p. 152). En Chile, la Junta Militar irrumpió en el poder y las ciudades borrando los rastros inconclusos de la Unidad Popular. La cal y la pintura blanca sobre los muros fueron la encarnación de su proyecto de shock, la *tabula rasa*. Por más de treinta años, la ciudad neoliberal ha buscado consagrar este borramiento, internalizarlo, rutinizarlo e incluso privatizarlo en una labor tercerizada, precaria y racializada; todo para reafirmar el muro como hecho divisorio entre los habitantes de bien y las hordas plebeyas. Santiago es una ciudad que se ha borrado a sí misma, barriendo tras cada manifestación papelitos y evidencias. Hacía falta una segunda mirada para distinguir manchones de pintura que disimulaban las marcas de la última movilización, los afiches rasgados, los papelógrafos de la Brigada Chacón²³ y aquellos lugares donde persistía la caligrafía improvisada, incluso vandálica, de rayados callejeros; intersticios donde se multiplicaron obstinadamente las escrituras a pulso, grafitis, tachados y *tags*, las pintas (a veces ilegibles) de *spray* y plumón, los lugares tomados por la “ciudad pizarra”, a decir de la escritora Guadalupe Santa Cruz.

Tras el golpe a Allende, uno de los primeros rayados que comenzó a multiplicarse fue una R dentro de un círculo. Gesto mínimo y germinal de resistencia en muros, paraderos y transporte público de la ciudad sitiada. Con el tiempo, esos rayados pasaron a ser murales, afiches, esténciles, grafitis y todo tipo de marca que se hacía y rehacía persistentemente a pesar de los borramientos constantes. Luego del cese pactado de la dictadura cívico-militar, los borramientos y reescrituras forman parte de la gramática de la ciudad neoliberal. En tal sentido, es posible afirmar que la revuelta del 18-O, paradójicamente, hizo de los muros lugares habitables. En particular, Plaza Dignidad (antes, Plaza Italia), que de algún modo era una frontera simbólica, un hito geográfico. “De Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo”, se decía comúnmente para demarcar la segregación urbana. De modo que no es casual que este lugar haya sido uno de los referentes del estallido que abordamos. En Concepción fue la Plaza de la Independencia; en Valparaíso, la Plaza de la Resistencia

23 Brigada muralista surgida a finales de los años ochenta, al interior del Partido Comunista de Chile.

(antes, Plaza Aníbal Pinto); en Temuco, la Plaza Caupolicán (antes, Plaza Dagoberto Godoy); en Antofagasta, la Plaza de la Revolución (antes, Plaza Sotomayor). Muros y esquinas que devinieron polos gravitacionales de una ciudad tomada y de un tiempo interrumpido.

Caligrafías de una ciudad en disputa

“Una ciudad sin gritos pegados en los muros sería hoy en día casi una ciudad silenciosa”, escribió la cartelista Ana Cortés en 1937, mientras veía frente a sí el auge de la ciudad impresa y los prolegómenos de la modernidad de los Frentes Nacionales. La imagen del estallido evoca algo que ya no parece siquiera un grito o muchos gritos al unísono. Sí, más bien, una sonoridad estridente, metálica y sucia; sonido de rejas cayendo en las entradas de las estaciones de metro, de torniquetes estrellados, de risas también, de estampidas y de fondo, como de tiempo pasado que es también presente, canto vociferado, como si nunca, como si siempre, del “pueblo unido jamás será vencido”.

Durante la noche del 18-O en Santiago, las estaciones de metro se inflamaron en llamas, se multiplicaron las barricadas y los saqueos a supermercados; en menos de ocho horas el Gobierno anunció la guerra y decretó estado de emergencia. En los días que siguieron se suspendió el tiempo mientras distintas ciudades y pueblos de Chile sufrieron un cambio de piel y de nombre. Irrumpió un momento destituyente. Temprano síntoma de esto, fue el desborde de los muros por caligrafías dispares y poéticas insurgentes en clave política de negación colectiva. Tal como señala la intelectual feminista Sarah Ahmed (2020), para el feminismo el “no” es un instrumento político; para la revuelta este fue también un modo de insistir, de sostener y enfatizar que *no es no*. Así comenzó a retomarse y multiplicarse rápidamente la consigna abierta que inauguró el Colectivo de Acciones de Arte (CADA) en 1983, a diez años del golpe de Estado. El “no +” (no más) como expresión colectiva, plural: “no + abusos”, “no + pacos”²⁴, “no + miedo”, “no + impunidad”, “no + deudas”; incluso y en más de una ocasión simplemente: “no +”, y punto.

A esas primeras líneas aisladas, siguen aquellas consignas que fueron articulando el sentido general y vital de la sublevación: “no son treinta pesos, son treinta años”, “hasta que valga la pena vivir”, “nos deben una vida”, “el neoliberalismo nace y muere en Chile”, “la normalidad siempre fue el problema”. La revuelta del 18-O, a diferencia de otros procesos de movilización anteriores, implicó el desborde de su propia ignición; no fue una demanda, un sector, ni un pliego, fue la emergencia destituyente, una embestida al presente con densidad histórica, una impugnación popular a todos los pasados que no pasan. Las ciudades fueron escrituras públicas, simultáneas, caóticas, apretadas y acumulativas. Tras este acontecimiento, el tiempo que requiere todo borramiento, el espacio de distancia que se necesita para barrer una manifestación, ya no existían:

Me tocó también viajar a Santiago (...) a Plaza la Dignidad (...) cuando recién estaba empezando (...) fue como a fines de octubre, me parece, estaba muy fuerte el tema. Lo que más me llegó fue ir leyendo los mensajes por las paredes: “estamos cansados”, “basta”, “lo asumimos, perdimos el miedo”. Era como si las murallas hablaran, como dice el dicho. Literalmente sentí que ahí estaba impregnada toda la rabia o todo el descontento, en las paredes (...) era ver muchas cosas, mucho sentimiento; una mirada más allá de lo que se puede ver (*nütram*).

De manera inédita, las escrituras públicas de la ciudad no pudieron ser eliminadas, la democratización de la letra manchaba, desde las creatividades juveniles, una urbe sitiada por la represión. Así, la escritura insurgente y callejera comenzó a expandirse por las rendijas, en los murales de siempre, en las esquinas tomadas por años. Muros hasta entonces cuidados celosamente por la municipalidad, por dueños o por costumbre, pasaron a ser no lienzo sino cuaderno abierto tamaño urbe y sin cuadricular. La insospechada experiencia de una ciudad escrita llevó a sus habitantes a reconocer estilos, lugares comunes y distintos imaginarios que coincidían sin mezclarse del todo, coexistiendo entre memes, animes, tradiciones de izquierdas, *pop art*, trap, demandas de aborto libre y wenufoye²⁵.

25 Bandera mapuche.

Algo nuevo, a ratos ininteligible, se confabuló en los *collages* de cada muro que a falta de limpieza o borradura fueron cada día más. La repetición de un mismo signo suele ser en estos casos estrategia de visibilización. Un *tag* dentro del mundo del grafiti es una firma o lema que marca los muros con un gesto entre el anonimato y la personalización. ¿Qué pasa, entonces, cuando un *tag* se asume colectivamente? Sin duda, el más repetido desde el inicio fue “ACAB”, que corresponde a las siglas de “All Cops Are Bastards” (todos los policías son bastardos), o su versión numérica: 1312.

Los “1312” se acumularon en la ciudad de la revuelta. Para muchos y muchas, en un principio, se trató de un signo indescifrable, una especie de código secreto legible para pocos. En realidad era un signo cultural de la rabia juvenil cosmopolita. Detrás de esta pinta subyacía un conocimiento de significaciones globales antisistémicas, solo identificable por navegantes virtuales del pensamiento crítico contemporáneo. Era la juventud demostrando su rebeldía frente al control y la violencia policial a través de mensajes de indignación globalizada. De modo que la escritura pública insurgente se dirigió primero contra la represión. Los “1312” y los “ACAB” tomaron la ciudad, no había otra manera: Carabineros de Chile, desde el propio 18-O, actuó como cuerpo defensor sanguinario del régimen, dejando a cientos de manifestantes mutilados, sin globos oculares, sometiendo a cientos de personas a la pérdida parcial o definitiva de la vista. La metáfora resultó perversa: “Abrimos los ojos, por eso nos ciegan”. Los ojos se convirtieron en otro símbolo de crítica antipolicial, pero también de un sentir que anunciaba una epifanía dolorosa, un despertar frente a la ensoñación del régimen neoliberal. El dibujo de un ojo abierto y sangrando copó la ciudad. Por todas partes se grafitearon ojos. Fue una forma de decir “ACAB” y al mismo tiempo sentenciar que “Chile despertó”. La impugnación al régimen chileno fue tan profunda que detonó un fenómeno cuya posibilidad había sido históricamente bloqueada: la gestación de un proceso constituyente emanado desde las rabias, utopías y poderes de los pueblos. Todavía está por verse la calidad democrática de este proceso, pero nadie podrá desconocer que solo el hecho de estar discutiendo sobre ello es un logro contundente de la revuelta.

La primera consecuencia plausible fue un plebiscito que originalmente se planificó para abril de 2020, pero que la pandemia contribuyó a diferir para octubre. Como sea, esta consulta pública presentaba dos opciones, rechazar o aprobar un cambio constitucional. Ante tal posibilidad política, *tags* y grafitis desplegaron una serie de estilos gráficos para posicionar el APRUEBO. Estrategia fascinante, dada la cualidad abierta en términos orgánicos de la revuelta, donde difícilmente algún movimiento social o político puede arrogarse la representación común o hegemónica. Esta campaña del APRUEBO tampoco fue susceptible de normalización sobre la base de un relato estético, por el contrario, se hizo múltiple en formas, colores y tipografías por toda la ciudad. Coexistieron diversidades identitarias y culturales de la juventud movilizada: desde barras de fútbol hasta exponentes del hip hop, desde el muralismo político hasta representaciones del K-pop. El APRUEBO como posibilidad unificadora no fue uniforme ni uniformado, se expresó y posicionó de modo barroco y creativo.

Por otra parte, casi en paralelo a la revuelta chilena, en Hong Kong se disparaban protestas bajo otras consignas, pero que de este lado del orbe se observaron sobre todo por sus repertorios de movilización. Una dinámica llamó especialmente la atención y fue adoptada de inmediato. Así, de pronto hubo luces láser iluminando las noches de las principales ciudades del país. Líneas y puntos de luz incomodaron a represores policiales desde lejos, apuntados a distancia para que perdieran control visual. Esta práctica además permitió un entramado de luces que conformó espectáculos colectivos para admirar también en colectivo. Por ejemplo, en Meiggs (barrio de mercado mayorista en Santiago) los rayos se tejían ante la nocturnidad de la protesta y tramaban un show luminoso entre las barricadas. La ciudad-luminaria, engendro de la seguridad y la publicidad, se rebeló bajo el signo de otros fines y otras luces: el verde fluorescente aportó un toque futurista y distópico a la rabia de la juventud global y tercermundista.

La impronta estética y de resignificación de la protesta, que activó luchas por la reapropiación de relatos sobre la ciudad, se manifestó también de modo pleno en el ejercicio de renombramiento

de lugares centrales de las urbes. Plazas, parques, determinadas intersecciones, ciertas zonas, calles, aquello susceptible de ser renombrado pasó por el tamiz de filiaciones políticas y afectivas de las personas movilizadas. En este punto, la confrontación estética adquirió un enfoque decididamente político, ya no solo de impugnación. En esos nombres y señas insurgentes había otra ciudad en emergencia, un proyecto en ciernes. Lo destituyente asomó su gestación creativa.

Íconos juveniles y posheroísmo

La historia oficial está repleta de héroes. En su mayoría son hombres, blancos, ricos y heterosexuales; mismos que ocupan el panteón simbólico y físico de la ciudad. Las quimeras de los siglos XIX y XX demandaron estas heroicidades. Tanto la fundación y consolidación de repúblicas latinoamericanas, como los proyectos revolucionarios anticapitalistas del siglo pasado impusieron la idea de hombres dispuestos a entregar su vida por ensoñaciones de futuros resplandecientes. Desde Bolívar al Che Guevara, el relato de “patria o muerte” se fraguó sobre nociones martiroológicas. Martirio y heroísmo fueron elementos movilizadores de la historia y esto parece desvanecerse hoy. Monsiváis (2006), fundamental ensayista mexicano, evidencia un nuevo momento icónico en América Latina que, quizá producto de la efervescencia pop, respira una modernidad profunda que hace del héroe mítico, casi religioso, un héroe laico porfiadamente terrenal. El propio Monsiváis considera que la expresión máxima de aquello fue la muerte de Salvador Allende, que construyó la posibilidad de desacralizar al héroe mediante un martirio laico, democrático. De acuerdo a esta perspectiva, Allende no muere por un sueño, él mismo lo expresó de este modo: “Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”. Su muerte no es mítica ni sucede por fervor cuasirreligioso a la utopía. Es más concreta: muere por el poder emanado del pueblo organizado. Con Allende emerge un posheroísmo. Tal vez por ello es Chile también donde se manifiesta nuevamente una ruptura y desacralización del discurso heroico, al vaivén de la revuelta; entre imaginarios *kitsch* y pop que han ingresado con fuerza en la juventud popular, resultó imposible el martirologio, lado sin duda positivo de

la falta de liderazgos míticos y coagulantes. En estricto rigor, nadie es imprescindible, y por tanto todas y todos somos necesarios. Este relato disruptivo se mostró estéticamente en una serie de “héroes” pop, referentes juveniles, aglutinadores, de potencia barroca.

Para los sectores dominantes y el Gobierno este acontecimiento comportó un total extrañamiento, y con el paso de las semanas tomó al menos dos formas destacables. Primero, de alteridad radical, como si se tratase de un “aterrizaje alien”, según palabras de la primera dama a días del estallido. Los hechos en desarrollo se entendían como de otro mundo, de otro país al menos, en cualquier caso no del Chile habitado y administrado por ellos durante décadas. Si para la industria cultural es más factible la representación del fin del mundo que el fin del capitalismo, para la élite chilena el levantamiento popular, en pleno oasis, fue menos previsible que una invasión alienígena. Recurrir al insulto y la negación obcecada, definir la revuelta en términos de un imaginario monstruoso, incluso poshumano, fueron tácticas para no reconocer la naturaleza y los sentidos de la protesta. Un día después de filtrarse y hacerse viral el audio de Cecilia Morel, primera dama, donde compartía con una conocida sus primeras impresiones sobre el estallido, la multitud en las calles se apropió del impropio para resemantizarlo: miles de personas salieron con máscaras alienígenas, otras con carteles que decían “venimos por ti, Cecilia”, o pintaron murales que mostraban hordas extraterrestres cayendo desde platillos voladores, con cacerolas en las manos y demandando el fin de las AFP. En segunda instancia, aquello que ya no podía ser negado como problema estrictamente humano, pasó a ser suscrito en la tesis de una agresión geopolítica foránea, tal como indicó el estudio de Big Data encargado por el entonces ministro del Interior, que apuntó al K-pop como encarnación posmoderna de la amenaza extranjera; de los espías rusos a aficionadas y aficionados de coreografías de televisión coreana. Al día siguiente de publicarse el informe por medios de comunicación, se convocó a la “Marcha K-pop más grande de la historia”. Si bien la oportunidad de burlarse del Gobierno fue motivo de todo tipo de alusiones propias de este género musical (quizás

una de las más emblemáticas fue el saludo con el corazón), en las marchas que siguieron, el repertorio anime y pop ya formaba parte del imaginario de la revuelta y sus personajes. Expresión de esto fueron *cosplays*, personificaciones y disfraces que adoptaron algunas personas en medio de la protesta: Spiderman, Pareman²⁶, Nalcaman²⁷, dinosaurios y, quizá la más querida, la tía Pikachu, una mujer de clase trabajadora cuyo hijo menor compró por error setecientos dólares en AliExpress, incluyendo un disfraz inflable de su ídolo Pokémon. La familia revendió todo excepto el *cosplay*, pensando en darle uso en Halloween, que en Chile se consume y celebra con mucha intensidad. Pero no llegó Halloween sino el estallido, y Giovanna Grandon decidió sumarse bailando a una de las primeras marchas, vestida de Pikachu, con una rosa y una banda presidencial: “Baila, Pikachu, baila”; pasó a ser emblema y parte de la mitología popular. Otro personaje ineludible de la revuelta fue sin duda el Negro Matapacos, un perro que vivió las protestas estudiantiles de 2011, y que al morir pasó a ser ícono de la protesta callejera. Su imagen con el pañuelo rojo al cuello, es uno de los símbolos más reconocidos del estallido. Algo así como un anuncio quiltro²⁸, antifascista y multiespecies del proceso en curso; imagen icónica que no tardó en ser replicada en otras latitudes, incluso en medio del clamor de la revuelta antirracista contra la brutalidad policial en Estados Unidos. De este modo un perro quilto devino emblema internacionalista del levantamiento al sur del mundo.

Junto al Matapacos, el mayor símbolo internacionalista de la revuelta provino de un grupo de jóvenes feministas de la ciudad de Valparaíso, LASTESIS; se trata de la *performance* “Un violador en tu camino”. Este baile y grito común contra la “violencia que no ves” fue una revuelta dentro de la revuelta, reanimando la intensidad de los primeros días a partir de su propio ritmo y de un nuevo régimen de visibilidad. Conjuro feminista contra la impunidad y la violencia patriarcal que hizo reverberar en cuerpos y lenguas de mujeres de

26 Pareman se hizo famoso durante el estallido por el uso de una señalética vial de “Pare”, de ahí su nombre.

27 La nalca es una planta comestible nativa de la zona sur de Chile. Durante la revuelta, apareció el personaje Nalcaman, un hombre disfrazado de esta planta.

28 Perro mestizo.

distintos territorios y generaciones, como contagio espontáneo, una solidaridad internacional que activó capas de impugnación en diversos puntos de enunciación.

El desplazamiento del lugar de la violencia política fue otro rasgo que caracterizó la intensidad compartida del estallido. La figura hasta entonces marginada del encapuchado se resignificó en su condición de “primera línea”, anulando la criminalización internalizada que le ha asignado tradicionalmente una violencia extrainstitucional. Frente a los tanques de una policía militarizada y brutal, la primera línea estuvo conformada por una trama (en apariencia frágil) de cuerpos que miraban al frente, a veces con antiparras o a rostro cubierto, otras sin más protección que el cuerpo contiguo, pero casi siempre agarrados con fuerza a escudos improvisados (antenas telefónicas y señaléticas pintadas de colores vibrantes), que en conjunto evocaban una dignidad inesperada. En un giro muy interesante, la primera línea no pareció identificarse, al menos en el imaginario popular, con la vanguardia de la tradición de guerrilla urbana, sino con la expresión de una política de cuidado y sostenimiento de la vida de cara a la violencia policial y militar, esto tal vez por una ética de la hospitalidad que acompañó y resguardó a quienes se sumaban por primera vez a la protesta, y también a quienes volvían a hacerlo tras años de espera. Es preciso decir que no buscamos edificar una apología ingenua. La primera línea mostró lo más brutal del neoliberalismo en Chile: la constitución de un grupo joven que no tiene nada que perder; y ese gesto de “poner el cuerpo” es señal, al mismo tiempo, de compromiso y desesperanza.

***Desmonumentalizar la waria*²⁹**

La impugnación, en tanto juicio plebeyo, pasó rápidamente de los treinta años de transición de la posdictadura, a los cuarenta y siete del golpe de Estado y a los quinientos de continuidad de desmanes coloniales: capas de violencia política, económica y simbólica que develaron el alcance de la revuelta como ejercicio de revisión histórica. La potencia destituyente tomó forma de sacudida, de derrumbe de una

29 “Ciudad” en mapudungun.

historia patrimonializada en monumentos de invasores y patriarcas. Cristóbal Colón en Arica, Pedro de Valdivia en el Wallmapu, Francisco de Aguirre en La Serena, entre otros insignes, cayeron en la desmonumentalización poética y épica que expresó la fuerza descolonizadora de la revuelta. La alteración de estos símbolos del orden que durante siglos se pensaron imperturbables, marcó uno de los puntos de inflexión de la protesta. El repertorio desmonumentalizador sería fácilmente comprensible si los protagonistas de estas acciones hubieran sido solo indígenas. Es común vincular estas heroicidades coloniales con las rabias y dolores de pueblos originarios, y de algún modo fue así, en Wallmapu fueron fundamentalmente personas mapuche quienes accionaron el derribo de monumentos, pero en otros lugares del país fueron jóvenes no indígenas quienes tumbaron esculturas de cuerpos elitarios. ¿Cómo comprender ese fenómeno? Los sectores conservadores básicamente hablan de “violentistas”, cerrando las vías de comprensión de uno de los elementos más interesantes del estallido. Sin embargo, es posible ver tras la desmonumentalización tanto una incomodidad cultural e identitaria como la inauguración de otro modo de imaginar la nación chilena. Se trata no solo de un ejercicio de solidaridad con el devenir indígena, sino de una crítica al guion nacional construido por las élites desde el siglo XIX. La juventud chilena, al parecer, ya no se siente representada por las heroicidades patrias, por aquella historia oficial que, aparentemente, no incomoda únicamente a los pueblos indígenas, sino a amplios sectores de la sociedad chilena que no se leen en la narrativa histórica. Salto cualitativo que impugna los cimientos de la comunidad imaginada, su cohesión interna evidencia fracturas, los relatos del pasado entran en combate con los presentes, y los elementos ideológicos que sostienen la unidad nacional quedan abiertos a debate.

También algo súper, súper, que me provocó, la verdad, mucha mucha alegría, fue cuando le quitan la cabeza al monumento (...) no fue de Pedro de Valdivia, fue de otro, creo que de Diego de Almagro. Sí, de Diego de Almagro, y se la cuelgan a Caupolicán. Yo creo que eso fue supersimbólico (...) porque fue una cuestión potente (*nütram*).

Este repertorio de acción colectiva de la revuelta es también destituyente, busca exponer y expurgar la inconformidad que genera el relato homogeneizante y jerarquizado de la nación. Los monumentos reflejan, ante todo, “celebración del poder, del poder tener, el poder de monumentalizar” (Achugar, 1999). Por tanto, la desmonumentalización cuestiona a un tiempo el relato de las élites y la condición performática de su poder en la actualidad. La lucha por el relato de la historia no es solo un combate por el pasado, es esencialmente una confrontación a los poderes que aún actúan sobre la memoria y sobre nuestras vidas materiales. La juventud chilena buscó expurgar esas continuidades coloniales del poder. Así se manifiesta la condición anticolonial de la revuelta chilena, sustrato temporal poco o nulamente incorporado en los debates de proyectos emancipatorios del siglo XX. Se devela otra de las características de la formación subjetiva del mundo popular y la clase obrera que despuntan sus luchas en el siglo XXI. Es probable que uno de sus elementos sea, sin duda, repensar los marcos aglutinadores de la comunidad imaginada, ya no fraguada por héroes patrios; estos cuadros de referencia vienen en franca destitución, particularmente por la juventud movilizada. La cuestión es hacia dónde se dirigen las subjetividades colectivas. Quizás el uso de la *wenufoye* está abriendo un camino, avisando que la modernidad borroneada por la blanquitud elitaria vuelve al calor de la protesta y pugna por constituirse en posibilidad subjetiva. Si la desmonumentalización es destituyente, tal vez la *wenufoye* marque la senda constituyente.

Chile era una bomba de tiempo

El 9 de octubre de 2019, Sebastián Piñera declaró en una entrevista de televisión: “Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”. La escena grafica el abismo que separa a gobernantes de gobernadas y gobernados. Nadie sabía cuándo ni cómo sería la ignición del “oasis”, pero la incandescencia largamente gestada ya latía en grandes mayorías. El circuito estaba armado: un ardor antiguo tantas veces avivado en múltiples episodios de estos quinientos años. En la memoria colectiva pesaba la amalgama intergeneracional que

la dictadura de Pinochet comprometió, la amarga experiencia con la democracia neoliberal y las recientes luchas estudiantiles de 2011: el grito transversal por no más AFP, las multitudinarias movilizaciones y marchas feministas, la lucha del pueblo mapuche y, particularmente, el asesinato de Camilo Catrillanca.

Y en ese avanzar nos dimos cuenta después (...) que la dictadura nunca terminó. La disfrazaron. Si la Constitución del ochenta sigue existiendo, las leyes, no sé, el Código Laboral, el Código Civil, siguen siendo los mismos. Entonces, en el fondo, esta democracia es de mentira. Nunca fue real. Siempre fue dictadura. La disfrazaron, nomás. Hasta que nos dimos cuenta de que hoy día se transformó en una dictadura perfecta. Un compañero decía: “Tenemos pandemia, milicos en las calles y toque de queda”. Perfecto. La dictadura perfecta (*nütram*).

La transición pactada y sus Gobiernos civiles no hicieron otra cosa más que profundizar el modelo. Todas las personas desde algún punto compartimos una agotadora sensación de injusticia: “Yo creo que el detonante fue haber recordado, quizá, todo lo que viví desde chico, las injusticias y todo eso, salí a hacer algo al respecto, por mí y por toda la gente que está viviendo cosas injustas” (*nütram*). Durante los últimos cinco años, el sistema privado de pensiones (AFP) venía mostrando sus resultados: gran parte de la población recibiendo fondos equivalentes al 30% de lo ahorrado durante toda su vida, mientras el resto “desaparece” entre gastos administrativos e inversiones en mercados financieros. La volatilidad de los recursos está asegurada constitucionalmente. Así, el mundo del trabajo muestra su extrema precarización debido a la falta de seguridad laboral, amparada bajo el Código del Trabajo, norma hecha durante la dictadura a la medida del empresariado. El sistema de salud, educación y vivienda corre sobre rieles similares, con sus estructuras de endeudamiento como forma de control de la población. El derecho a la vida fue sustraído hace más de cuarenta años. En Chile se sabía que algo estaba mal, se sentía, pero la gente a la fuerza aprendió a normalizarlo. Nadie podía prever cuándo iba a explotar la bomba. Los diversos movimientos sociales hacían esfuerzos por activar el mecanismo, sin embargo, aún parecía lejana la posibilidad de una articulación de luchas, y es que al frente hay un enemigo “poderoso y formidable” llamado

experimento neoliberal, el más avanzado y radical del mundo. Chile estaba en el letargo de su dolor: “Yo siento que Chile (...) tenía un poquito de indefensión aprendida. Había sido vulnerado, golpeado repetidas veces (...) había recibido tantos abusos, que en algún minuto aprendimos que nada de lo que hiciéramos iba a tener un impacto o un cambio en nuestras condiciones de vida” (*nütram*). Hasta que pocos días después de la afirmación de Sebastián Piñera se encendió la mecha en el “oasis”. La tercera semana de octubre, cual final de temporada, se anunciaba el ocaso del modelo. Sobre torniquetes de estaciones de metro destellaron chispazos de otra realidad posible. En cuanto a sus componentes, el nitrato lo dio la juventud y sus diversas expresiones: periférica, secundaria, trabajadoras y trabajadores precarizados del sistema, profesionales con deudas eternas por créditos universitarios. Generaciones de personas que no se sentían parte de un modelo que las crió desde la no pertenencia.

Yo para el Gobierno no califico en nada, no soy ni pobre ni tampoco rico, por lo tanto no tengo ningún beneficio, y de repente para entidades financieras tampoco califico, entonces estoy como al medio, estoy como en un limbo donde está la gran mayoría del país (*nütram*).

El carbón, lo agregó la experiencia de organizaciones que tenían reminiscencias de las últimas décadas de luchas. El azufre emanó de todo el dolor vivido durante años. Una avalancha de biografías finalmente comenzó a liberar hartazgo por las calles, para hacer arder décadas de injusticia.

Esa bomba comenzó a llamarse pueblo

El estallido fue producido por una bomba y esa bomba volvió a llamarse pueblo. Millones de personas comprometidas día a día en las jornadas de protesta tuvieron la certeza de protagonizar un *acontecimiento*, de estar abriendo “algo” por fin distinto. El sentido de los propios actos dejó de ser ajeno, empujaba un *todo* imposible de cuantificar. El pasado, el presente, la rabia y la alegría del encuentro, el miedo. Durante meses Chile fue presente puro. La historia llamó a su gente al *aquí* y al *ahora*. Superlativa en su deseo transformador,

la revuelta se presentó tan palpable como inasible; la experiencia común que se forjó al calor de barricadas, de balas militares y balines policiales, de saberse millones y potentes. Se unificaron múltiples sucesos que hasta hacía poco parecían inconexos. Desde las paredes vibró la memoria de los rayados clandestinos de la dictadura, donde se podía perder la vida en cada acción. Esa bomba que éramos intentó ser desactivada durante más de tres décadas por el relato ciudadano de los “consensos” y de “avanzar en la medida de lo posible”; discursos vacuos, puesto que ni el sujeto ciudadano ni la república de derechos existe en Chile. En treinta años habíamos sido despojados de todo, incluso del tiempo para articular un relato. En esa ausencia de relato común emergió la canción de protesta de las últimas décadas, “el pueblo unido jamás será vencido”, “el baile de los que sobran”, comenzó a mezclarse con la bullente vida ecléctica musical del presente. Se conformó un tiempo donde habitan muchos: los tiempos del pueblo.

Llegar allá y ver que todos estábamos en las mismas. Todos pedíamos lo mismo, cantar, saltar, la gente toda buena onda. Había gente de todos tipos de clase social; abuelitos, cuando veía abuelitos yo realmente me acordaba de los míos, que si mi abuelo estuviera vivo yo creo que hubiera estado ahí, presente también. Todo, todo pa mí era agradable, ir a marchar todos los viernes o casi todos los días (*nütram*).

Cada quien en su lugar, en su rol, comenzó a sentirse parte de una historia que se reescribía, un lugar desde el cual aportar e irrumpir:

Algo que marcó a todos fue la empatía por el otro, o sea todos éramos, todos somos pobres, todos luchamos, a todos nos están jodiendo con la AFP (...) con los sueldos (...) todos éramos uno (...) y ver la cohesión social, con un objetivo claro, que se cumplieran las demandas, las demandas a nivel macro, eso fue lo que más me marcó (*nütram*).

La química de la lucha de clases

Junto con el pueblo se activó la lucha y esa lucha es de clases. Las primeras palabras del presidente Sebastián Piñera fueron una declaración de guerra al pueblo, a quien llamó su enemigo. Una relación

histórica quedó al desnudo en estado químicamente puro. Comenzamos a ser pueblo porque articulamos nuestra acción respecto a un otro que nos declaraba la guerra. Aquello que las personas de la protesta tenemos en común es radicalmente antagónico a lo que tienen en común las clases dominantes, quienes hablan a través de lacrimógenas y balas. Desde el 18-O todo Chile, de algún modo, se transformó: “Oye, si fue cuático³⁰ ese día, también hay sensaciones comunes, de repente fue un día que nos cambió a todas y todos” (*nütram*). En adelante se habló de un despertar. La última órbita de lo admisible fue cruzada, desbordada. Las máscaras y los maquillajes no pudieron sostenerse y las multitudes tomaron la acción: “El darse cuenta de que la democracia no es una democracia, que es una falsa democracia” (*nütram*). La condición de clase se desarrolló a partir de la propia lucha. La realidad desbordó cualquier análisis previo. En su capacidad performática, como afirma Bogo (2013), el pueblo se desplegó como clase: “Uno se reencantó con el sentimiento de colectividad, yo creo que eso fue esencial, o sea, el sentimiento de que todo el mundo estaba de acuerdo (...) con lo que estaba pasando” (*nütram*). El asfalto ardiente, los cajeros fundiéndose, el rojo y el verde de los semáforos derritiéndose, era una fiesta. Por primera vez la propiedad privada fue arrebatada y colectivizada. Parecía necesario derribar las estructuras de la vieja sociedad para poder crear lo otro, que no tiene nombre previo, pero que comporta un sentimiento común. Para ello fue preciso recuperar la mirada, que nos había hecho caminar con la cabeza agachada desde hacía más de cuarenta años. Queríamos hablar, por primera vez nos atrevíamos a decir algo. La vida política abrió las ventanas y se sorbía en cada té rebelde, en cada actividad comunitaria. La vida digna comenzaba a saludar.

A mí también me causó alegría ver a la gente de tercera edad que también luchaba. Tantos años callaron por miedo y ahora verlos al lado de nosotros, luchando por una misma causa. Eso también te da mucha alegría y, a la vez, pena, porque hay mucha gente de la edad de ellos que viven en condiciones precarias que no deberían vivir (*nütram*).

30 Voz chilena que quiere decir grande, sobresaliente, buenísimo.

Hubo que revisar la historia reciente, pero esta vez contada por sus propios protagonistas, callados durante décadas ante la represión y el terrorismo de Estado. El miedo no desapareció en las protestas, menos aún con la evocación golpista y dictatorial de tanquetas y militares armados recorriendo las calles:

Entonces, igual en un minuto nos empezamos a preguntar, “¿qué haremos si es que viene un golpe?”. Esa es una pregunta que en algún minuto nos hicimos (...) hablar de seguridad. Hablar de estrategias en caso de que esta cuestión se complique. Creo que son aprendizajes y que, también, ese traspaso generacional con compas que estuvieron en resistencia en la dictadura es superimportante, y bonito ese traspaso (*niitram*).

El estallido por dentro y por fuera

Chile es un país puertas adentro; un latifundio brumoso y periférico ubicado al fin del mundo; un país de chapa sin cerradura, o con cerradura rematada a contrabando allá por la década de los ochenta. Todas las empresas estratégicas del Estado fueron repartidas endogámicamente, vendidas a precio de huevo, como versa el dicho local. Luego de más de cuatro décadas de extractivismo, *lobby*, malversaciones de fondos, empresas zombis, cohecho, perdonazos (y cuanta aberración permita el neoliberalismo chileno y la Constitución rampante), hoy estos grupos económicos hacen prestigio de su robo en pasarelas como las revistas *Forbes* y *Capital*. La fortuna de Sebastián Piñera crece cada día. En paralelo, al pueblo le cerraron la Alameda, allá por el 11 de septiembre de 1973 del siglo “pesado”, a decir del poeta y cantautor Mauricio Redolés. El imaginario colectivo se llenó de restricciones: las ñañas, nuestras abuelas, madres y tías, eran asectoras del hogar “puertas adentro”, en las casas no se podía hablar ni de fútbol ni de política, de nada se podía hablar. Ser pobre en Chile es sobrevivir al presente continuo. La calle, la vida pública como lugar de expresión popular estaba clausurada por decreto, incluso desde antes de la república. Chile es una bomba de tiempo:

Yo creía que la realidad nacional era insostenible, definitivamente insostenible (...) las presiones eran una olla a presión. O sea, la gente

ganando poca plata, y lo otro, que además a nivel latinoamericano y a nivel mundial, incluso, la extrema derecha iba ganando fuerza. Y había un grupo político de personas que estaba muy descontento con esto, pero al parecer había otras personas que estaban muy muy de acuerdo, y empezó a bullir esto, y había dos fuerzas antagónicas (*nütram*).

Desde el 18-O, la Alameda entró a las casas. La agónica proclama *allendista* tuvo que ver nuevas generaciones para empezar a ser palpable. Nuevas generaciones marcadas, también, por la irrupción de un movimiento feminista que en los años inmediatamente anteriores a la revuelta adquiere dimensiones de masas, y que en su contenido impugna y redibuja las fronteras entre lo *público* y lo *privado*, entre el *afuera* y el *adentro*, convirtiéndose en una potencia que interpela simultáneamente múltiples estructuras de la compleja relación social.

En las movilizaciones, las mujeres emprendieron formas colectivas de sostener los cuidados para ejercer su derecho a luchar en las calles: “Yo participé, bueno, desde antes igual venía trabajando con el Encuentro de Mujeres de Antofagasta y, de ahí de la Mesa de Trabajadoras, que acá es la mayor organización de mujeres (...) la que más trabajo tiene, y desde ahí empezamos a organizar guarderías para que las compas pudieran ir a marchar” (*nütram*). El feminismo denunció la violencia sexual perpetrada por agentes del Estado (sostenida por sus diferentes fuerzas de orden), mientras organizó la subsistencia colectiva.

Se replicó el baile de las compañeras de LASTESIS, creo que para esa misma fecha también se hizo. La lucha feminista y del movimiento de mujeres también se ha marcado en cuestiones más cooperativas, más comunitarias y colectivas, siempre reivindicando el feminismo y la emancipación de la mujer. Por ejemplo, desde el Encuentro de las Mujeres de Antofagasta y desde la asamblea comunal de Antofagasta se levanta el cordón de economía solidaria (...) donde ahora ayudan como a ochenta familias, donde hacemos compras por mayor y las distribuimos, y también a las compañeras que no tienen pega³¹ o que están en una situación compleja (*nütram*).

31 Trabajo.

La comida se compartió entre vecinas y vecinos, y las puertas y ventanas de las comunidades se abrieron:

Todos los días marchar, salir de la pega, ir a marchar, involucrar a la familia para no estar tanto tiempo sin ellos, ir con mis hijos (...) Entonces (...) yo creo que los dos meses ni siquiera fueron desgastadores, fueron motivadores, porque había la ilusión de que los cambios se podían lograr a través de la exigencia del propio pueblo (*nütram*).

Durante las revueltas, el quehacer cotidiano se modificó en función de necesidades propias y colectivas. La noción (tan neoliberal) del “salvarse solo” se vio afectada, la gente empezó a notar que únicamente como comunidad “podía salvarse”. Tras cada barricada, había alguien asistiendo, ayudando, limpiando con agua y bicarbonato, personas llevando el pan a quienes resistían la represión en la primera línea. En todas las líneas hubo brazos sosteniéndose unos a otros. No importó nombre o rostro; la presencia y la disposición para luchar fueron suficientes.

Me involucré por mi hermana (...) me motiva mi hermana, toda la lucha que tiene ella y la fuerza. Yo dije “vamos, si soy la mayor, cómo no voy a salir si sale ella”. Las conversaciones en mi casa fueron todo el rato (...) era política (...) y para nosotros que somos más jóvenes que mis papás es una experiencia nueva. Para mis papás, lo hablo en el caso de mi papá, lo que él nos comentó, era como volver al 73; él sintió miedo, en realidad. Que todo esto pasara para él fue: “Bucha, vamos a volver a lo mismo de antes”. Para mí no fue así, para mí el tiempo se pasaba volando. Era bacán salir de la pega y salir a marchar, ya era como una rutina todos los días tener que ir y luchar (*nütram*).

Para las personas mayores la situación significó una mirada retrospectiva, recuperar el entusiasmo robado por la dictadura y también procesar, en nuevas lecturas históricas, sus propias biografías. Miles de mujeres se convocaron a realizar la *performance* de LASTESIS en versión *senior* a las afueras del Estadio Nacional (centro de detención y tortura durante la dictadura, y hoy sitio de memoria), apuntando a los jueces, al Estado y al presidente como perpetradores de violencia sexual. Para las generaciones más jóvenes fue la

oportunidad de reencontrarse con las generaciones previas desde un campo de experiencias que ya no resultaba ajeno, desde un presente y un pasado atravesado por violencias. Fue la oportunidad de hacer un corte histórico al trauma y a la típica frase “es que ustedes no lo vivieron”, suerte de invalidación *per se* ante cada intento de avance o movilización estudiantil. Las protestas fueron multitudes sociales frente al enemigo común, que tiene diversos rostros, pero un mismo origen. La revuelta popular tiene antecedentes de otras luchas, pero se distingue en su quehacer; esta diferencia la potencia, y resignifica su pasado. El pueblo tiene un acumulado histórico diverso, no solo hereda el trauma, también su resistencia popular.

Si pensamos en los pueblos, en el pueblo mapuche y en los pueblos que han resistido por el Aby Yala, son más de quinientos años. Y van a seguir. Sigue siendo ahí la resistencia, se sigue alimentando, se sigue traspasando toda esta oralidad que es tremendamente importante. Ahora, en medio de esta conversa, digo: a lo mejor debimos haber sido más. Es tremendamente necesario poder registrar todas estas historias. Porque al final es historia y una no se da cuenta hasta que se ve enfrentada a mirar para atrás (*nütram*).

Esa oralidad ha sido un voto de confianza del pueblo en el pueblo. En lo íntimo de cada núcleo afectivo ha estado presente la necesidad de cuidado, que el hecho de ser sujetos políticos no signifique perder las ganas de amar es, también, parte de ese quiebre de paradigmas. Porque nos afectamos es que tenemos la oportunidad de transformar la realidad de forma colectiva. El *cómo* es un desafío ineludible, y solo caminar con esa pregunta al fragor de la práctica va señalando caminos. Cualquier idea preconcebida tendrá asidero únicamente si es contrastada con la realidad.

Conclusiones

El *nütram* de la revuelta y la identificación de los nudos críticos persistentes en él, hicieron posible una visión panorámica de los ejes comunes en los relatos de las personas entrevistadas. A partir de esto se construyó una narrativa colectiva de los acontecimientos con foco

especial en la juventud, pero también en articulación y diálogo con múltiples generaciones y temporalidades que habitaron la protesta social en Chile. Si bien el rol de la juventud se muestra fundamental, la revuelta no se puede explicar exclusivamente a partir de este sector, ni entender su potencia destituyente y constituyente de manera aislada. Los relatos confirman que las juventudes aportaron el tenor creativo de nuevas formas de organización social, de toma de espacios públicos antes negados, de resistencia y de agendas de lucha frente a la política de los acuerdos, de reconstrucción de identidades populares y anticoloniales para replantear el derecho a vivir dignamente. Sin embargo, los antecedentes que esbozamos al principio de este trabajo evidencian que el estallido estudiado trajo consigo un acumulado histórico transgeneracional e interseccional; la juventud fue combustible, catalizadora o el merkén (ají picante) en la olla común. Por tanto, es imposible analizar el fenómeno sin una revisión profunda de la historia reciente, y esa revisión exhaustiva del presente debe darse en clave retrospectiva e identitaria. Esta investigación es una aproximación para comprender el desborde social chileno. Así, para ahondar aún más en el papel de sus distintos actores, advertimos como necesario continuar las prácticas de *nütram* en múltiples territorios y dar continuidad al relato colectivo que acá iniciamos; de este modo se evita universalizar discursos.

La revuelta popular no es una sola, sino cientos de fuegos ardiendo en simultáneo por todo el territorio, una onda expansiva incontrolable que se derrama en diversas formas, redibujando nuestro entendimiento de la realidad política. En su despliegue, las experiencias y acciones de unos, impactan las maneras en que se activan otros, constituyendo revueltas dentro de la revuelta. De este movimiento superlativo resulta algo que sin dejar de ser plural se muestra común, algo que no es homogéneo pero permite el reconocimiento de millones como parte de lo mismo, la configuración de un “nos” y de una gran relación social que, aunque parece excedernos, tiene un sentido cada vez menos etéreo. En esta puesta en común de tantas realidades, surge la posibilidad de afirmar la impugnación contundente de lo que existe y de reedificar alternativas colectivas para transformar radicalmente la vida política y, por tanto, las vidas

íntimas; afirmación que aparece cargada de memoria y de futuro. La protesta con su advenimiento telúrico ha liberado una energía latente e inconclusa. El 18-O abrió un escenario histórico; sus protagonistas saltaron desde la galería hacia el centro social removiendo a antiguos actores e interpretando una obra renovada que carece de guion. En este acto de creación nada está resuelto de antemano, es potencia pura buscando un cauce entre ríos históricos que llaman a saldar deudas. La revuelta se anuncia como desorden que pugna por un encuentro posible, su gesto constituyente no modula un proyecto ni asume paradigmas de sectores populares organizados, porque no se trata de la simple reunión de reivindicaciones sectoriales sostenidas por organizaciones, que si bien prefiguraron en cierta medida (significativa) los contenidos del acontecimiento, no alcanzan a dar cuenta del desborde de horizontes que la magnitud del levantamiento social implica. A pesar de los intentos represivos y de la pandemia, la revuelta no tiene dueño ni es domesticable. Es una bomba que late, esperando para arder de vida, porque la realidad no deja de confirmar sus razones.

Referencias bibliográficas

- Achugar, Hugo. (2003). “El lugar de la memoria, a propósito de monumentos”. En *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*, compilación de Jelin Elizabeth y Langland Victoria, 191-214. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ahmed, S. (2020). *Oh Hell No: And Other Ways to Set Some Damn Boundaries*. San Francisco: Chronicle Books.
- Aniñir, D., y Candina, A. (2020). Estallido social: elementos para una genealogía de las violencias. Meridional. *Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, (14), pp. 241-246. doi:10.5354/0719-4862.2020.57136
- Bogo, A. (2013). *Identidade e luta de classes*. São Paulo Brasil, Expressão Popular.
- Bravo, V. (2012). Neoliberalismo, protesta popular y transición en Chile, 1973-1989. *Revista Política y cultura*, 37, pp. 85-112.
- Brito, S. (2019). *Por una Constitución feminista*. Pez espiral.
- Castiglioni, R. (2019). ¿El ocaso del “modelo chileno”? *Nueva sociedad*, 284, 5-14.
- Chile Sustentable. (2017). “Matriz Eléctrica y Generación a Carbón en Chile: Propuestas para Acelerar la Transición Energética”. Recuperado de: <http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2017/11/Cartilla-Termoelectricas-a-Carbon-Propuestas-Para-Acelerar-La-Transicion-Energetica-2017.pdf> [20/08/2021]
- Cortés, A. (2019). La rebelión social como imaginación sociológica colectiva. *Cuadernos de Teoría Social*, 5 (10), pp. 77-93.
- Errázuriz, L.H. y Leiva, G. (2012). *El golpe estético. Dictadura militar en Chile, 1973-1989*. Santiago, Chile: Ocho Libros.
- Fernández Droguett, F. (2019). Territorializando el proceso constituyente: algunas reflexiones sobre plurinacionalidad, feminismo de los pueblos y derechos de la naturaleza. En S. E. Brito (Comp.). *Por una Constitución feminista*. Pez espiral, pp. 130-141.
- Gago, V. (2017). Intelectuales, experiencia e investigación militante. Avatares de un vínculo tenso. *Nueva Sociedad* 268, pp. 65-76.

- Ganter, R. y Varela, G. (2020). *Violencias / Desobediencias: un antes-durante el estallido social chileno 18/O*. Manuscrito, en prensa y por publicar en Lom Ediciones, Santiago de Chile.
- Garcés, M. (2020). *Estallido social y una nueva Constitución para Chile*. Lom Ediciones.
- Garretón, M. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los Gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. ARCIS-CLACSO.
- Garretón, M. y Garretón, R. (2010). La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales. *Revista de ciencia política*, 30(1), pp. 115-148.
- Gerber, M. (2019). El problema de legitimidad en las movilizaciones de octubre. *Ciper Académico*.
- Guíñez, P. (2019). (Des)organización, violencia (in)útil y autogestión. Un comentario anarco-comunista a la “revuelta de octubre” de Chile. *Vorágine. Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales*, 1(2), pp. 1-16.
- Jérez, D. (2019). “No son 30 pesos. Son 30 años”: Raíces históricas del descontento en Chile. *Vorágine. Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales*, 1(2), pp. 46-53. <https://www.revistavoragine.com/no-son-30-pesos-son-30-a%C3%B1os> (consultado el 13 de agosto de 2021).
- Karmy, R. (2019). La Revuelta. *Revista de Política, Derecho y Sociedad*, pp. 35-39.
- Karmy, R. (2020). *El porvenir se hereda: fragmentos de un Chile sublevado*. Sangría.
- Manzi, J. y Carillo, A. (2019). Lo constituyente, lo destituyente y la imaginación política feminista. En S. E. Brito (Comp.), *Por una Constitución feminista*. Pez espiral, pp. 163-183.
- Márquez, R. y Viacava, J. (2020). Las desigualdades territoriales y el 18-O de Chile: algunos antecedentes. *IdeAs*, 15, 1-8. <https://journals.openedition.org/ideas/8404> (consultado el 13 de agosto de 2021).
- Millahueique, N. (2019). No son \$30, son 30 años de abuso y más. Del oasis al espejismo: la rebelión chilena en contra del modelo neoliberal. *Revista de Estudios Internacionales*, 1(2), 10. <https://>

- revistas.unc.edu.ar/index.php/revesint/article/view/27012 (consultado el 13 de agosto de 2021).
- Monsiváis, C. (2006). *Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina*. Barcelona: Anagrama.
- Mundaca, R. (2014). *La privatización de las aguas en Chile. Causas y resistencias*. Santiago: América en Movimiento.
- Pairicán, F. (2014). *Malón. La rebelión del movimiento mapuche. 1990-2013*. Pehuén Editores.
- Palma, E. (2020). Notas sobre el proceso constituyente chileno 2019-2020. *Revista Culturas Jurídicas*, 7(16), pp. 1-37.
- Pezo, L. (2019). Nueva Constitución para Chile en el contexto del estallido social actual. *Diálogos. IPDRS*, pp. 1-6.
- Ragas, J. (2020). La batalla por los rostros: el sistema de reconocimiento facial en el contexto del “estallido social” chileno. *Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, 14, pp. 247-258. <https://revistas.uchile.cl/index.php/MRD/article/download/57137/60687/> (consultado el 13 de agosto de 2021).
- Ramírez, C., Yáñez, C. y Salinas, I. (2019). Chile, la democracia se acabó: crisis institucional en el 18-O chileno. *Re-presentaciones. Investigación en Comunicación*, 12, pp. 6-28. <https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/re-presentaciones/article/view/4317> (consultado el 13 de agosto de 2021).
- Rifo, M. (2013). Movimiento estudiantil, sistema educativo y crisis política actual en Chile. *Polis*, 12(36), pp. 223-240.
- Schwabe, N. (2018). “No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura”. El movimiento estudiantil chileno en 2011 y después. *Nueva Sociedad*, p. 273.
- Tello, A. (2019). “Otro fin de mundo es posible”. Revuelta y anarquismo. *Re-presentaciones. Investigación en Comunicación*, 12, pp. 77-91. <https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/re-presentaciones/article/view/4320> (consultado el 13 de agosto de 2021).
- Thielemann, L. (2012). Para una periodificación del Movimiento Estudiantil de la transición. *Revista Pretérito Imperfecto*.

Valdés, R. (2019). Desigualdad y la primavera chilena. *ARS MEDICA. Revista de Ciencias Médicas*, 44(4), pp. 8-9. <https://arstica.cl/index.php/MED/article/view/1644> (consultado el 13 de agosto de 2021).

CARTOGRAFIAR LA INTENSIDAD |
Aproximaciones sensibles
a la revuelta popular chilena

PIERINA FERRETTI¹

1 Socióloga. Integrante de la Fundación Nodo XXI y del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg.

Se ha dicho muchas veces, y con razón, que Chile fue la cuna del neoliberalismo: primer territorio de aplicación de las recetas monetaristas, realizada sobre las cenizas de una clase trabajadora que había sido derrotada en 1973. Casi medio siglo ha pasado desde entonces y Chile se ha vuelto a convertir en un laboratorio, esta vez de la posible salida, popular y democrática, de este sistema de desposesión. Una nueva clase trabajadora, modelada en la usina de la mercantilización extrema de la vida y el consumo, endeudada y con empleos precarios, conectada e irreverente, hizo saltar por los aires la imagen de un país manso y de una población pasiva y conformista que las élites se habían esforzado en construir. El 18 de octubre de 2019 volaron piedras, se derribaron monumentos, las ciudades se paralizaron, las barricadas ardieron y no hubo vuelta atrás. Sin saberlo todavía, asistíamos al comienzo definitivo de un nuevo ciclo político cuyo desenlace sigue abierto y se disputa día a día.

¿Por qué se rebela un pueblo? ¿Cómo se produce una revuelta? Explicaciones sociológicas hay muchas. Tenemos cifras que cuantifican la desigualdad, sofisticados coeficientes para medir el malestar, informes que cada dos o tres años confirman los mismos y graves problemas. Pero los datos no son suficientes para explicar por qué un pueblo se levanta. La explotación no provoca, necesariamente, rebeldía. Cuando se produjo la ola de protestas de los “chalecos amarillos” en Francia, el filósofo Jacques Rancière escribió acerca de la dimensión inexplicable de la rebelión a la que asistía asombrado:

Los motivos de sufrimiento que se enumeran para explicar la revuelta son exactamente análogos a aquellos por los que explicaríamos su ausencia: unos individuos sometidos a semejantes condiciones de existencia normalmente no tienen el tiempo ni la energía para rebelarse. La explicación de las razones por las que la gente se moviliza

es idéntica a la explicación de las razones por las que la gente no se moviliza.²

¿Qué pasa, entonces? ¿Cómo se accede a esos puntos de quiebre, individuales y colectivos, que producen una rebelión popular? Y más allá, ¿cómo se narra un proceso de esa intensidad, donde se mezclan tiempos, cuerpos, territorios, biografías y proyectos? La investigación precedente³ se interna, precisamente, en estos problemas: se propone ahondar en la dimensión subjetiva y experiencial de la revuelta a partir de los relatos de jóvenes que se politizaron al calor del estallido y las movilizaciones sociales que se sucedieron durante meses. La metodología, basada en un conjunto de entrevistas individuales y *nüttram/nüttramkan* (relatos/diálogos en mapudungun) con jóvenes de Temuco, Concepción, Valparaíso y Santiago; la rigurosa revisión bibliográfica realizada y el ejercicio de análisis y construcción de categorías interpretativas, dio como resultado un texto rico en matices y capas, que logra dar cuenta de la complejidad del proceso político general y de las sutilezas de la politización íntima que se produjo en quienes fueron parte de la revuelta.

Coincido en resaltar de los acontecimientos varios “nudos críticos” que condensan dimensiones de la experiencia de quienes participaron: la trama de historias que se activaron; el modo en que la revuelta se narró a sí misma como un “despertar” (“¡Chile despertó!” fue, quizá, el primer canto espontáneo de las calles); la centralidad que adquirió el concepto de dignidad; la expresión del surgimiento, desde las entrañas del neoliberalismo, de una nueva clase trabajadora, distinta a la que conocimos en el siglo XX, que en esta coyuntura hizo contundente aparición en el escenario político y que, con su carácter abigarrado, irreverente y desordenado, sorprendió no solo a las élites político-empresariales, sino también a unas izquierdas incapaces de conducirla. En el estudio que comento queda manifiesta

2 Las virtudes de lo inexplicable: Jacques Rancière a propósito de los “chalecos amarillos”. Publicado en: https://www.eldiario.es/interferencias/chalecos-amarillos-jacques-ranciere_132_1708256.html (consultado el 18 de agosto de 2021).

3 “R de Revueltas / Un relato colectivo y champurrea (mestizo) del 18-O en Chile”, p. 173.

una particular preocupación por las temporalidades superpuestas en la revuelta, hecho patente en algunas de las consignas: “hay un 2019 porque alguna vez existió un 1973”, “no son treinta pesos, son treinta años”, “no son treinta años, son quinientos años”. Esas múltiples líneas de tiempo, que remiten a la conquista, a la formación del Estado nacional, a la derrota sufrida por trabajadoras y trabajadores chilenos en 1973, a los enfrentamientos contra Pinochet, a la resistencia mapuche y a las frustraciones de una transición a la democracia que permitió la pervivencia de la dictadura, se juntaron en las calles, en los rayados, en los cantos y las voces. Las luchas del presente citando a las del pasado. Las victorias populares de hoy haciendo justicia a caídas y caídos de ayer. Es fundamental ese interés por las temporalidades y por reconstruir minuciosamente los movimientos que antecedieron el estallido y que “cocinaron a fuego lento” la rebelión.

En efecto, desde el retorno a la democracia, y sobre todo a partir de la década del 2000, la conflictividad social en Chile no ha parado de agudizarse. El pueblo mapuche ha sostenido una resistencia permanente contra el despojo de sus territorios por parte de la alianza forestal-estatal; el movimiento estudiantil masificó la lucha por el derecho a la educación pública y gratuita; las demandas socioambientales contra el extractivismo y el saqueo del agua han llegado a movilizar a cientos de miles de activistas; las luchas de personas trabajadoras precarizadas y el reclamo por pensiones dignas también adquirieron relevancia; y el movimiento feminista, que logró los niveles más grandes de masividad conocidos hasta antes del estallido, fue abonando una disposición rebelde en el conjunto de la sociedad. Todos esos procesos de contestación fueron momentos de acumulación popular que prepararon el camino. Sin embargo, el 18-O produjo un salto cualitativo. Ya no se trató de sectores específicos peleando por demandas sectoriales, sino de una rebelión generalizada y de una envergadura que hasta entonces no se había alcanzado.

Una revuelta popular es un fenómeno múltiple, que se despliega en distintas escalas: en movimientos masivos e intervenciones visibles y espectaculares en el espacio público, pero también en desplazamientos subjetivos y en procesos internos que operan a nivel de los individuos. La dimensión más rica del estudio que comento se encuentra,

precisamente, en su capacidad para captar cómo la revuelta popular fue una experiencia de politización acelerada y extendida hacia enormes franjas de población, que al calor de barricadas, de asambleas barriales, de represión policial, de resistencia y de organización, comenzaron a vivir una nueva vida. La investigación confirma así que uno de los elementos más potentes de la revuelta residió en la politización simultánea de millones de personas. Después de una experiencia de tal alcance, individual y colectivo, es difícil redisciplinar a un pueblo. La filósofa brasileña Suely Rolnik ha dicho que para aproximarnos a la riqueza de los procesos sociales debemos realizar cartografías, ejercicios de elaboración teórico-políticos producidos al mismo tiempo que los movimientos de transformación, mientras se desintegran ciertos mundos y se forman otros, y que para hacerlo es preciso involucrarse en las intensidades de esos movimientos. Desde esa perspectiva, autores y autoras de la investigación presentada realizaron una densa cartografía de la revuelta chilena, captando los afectos e intensidades de un momento excepcional y contribuyendo con ello a comprender las tramas sensibles de este proceso de rebelión popular.

Ahora bien, en el plano más general y de conjunto, es preciso realizar algunas consideraciones. El carácter determinante que ha tenido la emergencia de actores que no responden a parámetros tradicionales con que las izquierdas y los movimientos sociales de larga trayectoria están acostumbrados a operar, ha impuesto enormes desafíos de articulación. Los sectores del campo popular que hoy ingresan a la lucha política lo hacen en sus propios términos, con sus lenguajes y repertorios de acción y no están dispuestos a subordinarse a conducciones externas. En su heterogeneidad, las izquierdas políticas, los movimientos sociales y estos sectores del pueblo, son los llamados a conformar una alianza capaz de acumular fuerza suficiente para llevar adelante la tarea de desmontar el neoliberalismo y de enfrentar grupos dominantes que defenderán sus amenazados intereses de clase. El camino para conformar este nuevo bloque histórico se ha abierto, pero su resultado no está para nada asegurado. Los hitos recientes del proceso han dado señales favorables en esa dirección, pero también muestras elocuentes de las enormes dificultades que tendrán que afrontarse para lograr mayores grados

de unidad política. El 25 de octubre de 2020 un plebiscito ratificó la contundente voluntad popular de acabar con la Constitución de Pinochet. Luego, en los comicios celebrados el 15 y 16 de mayo de 2021 para elegir a los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución, los partidos tradicionales (de derecha y de la Concertación) prácticamente se desplomaron, mientras que los movimientos sociales, pueblos originarios, representantes del campo popular, activistas medioambientales, feministas y militantes de izquierda, obtuvieron la mayoría de escaños. De este modo, en la Convención Constitucional se abrió un inédito espacio de determinación popular y una invaluable posibilidad de avanzar en la conformación de ese nuevo bloque social y político antineoliberal.

Ciertamente, los vientos de rebeldía no han sacudido solamente a Chile. Como muestran los casos que se reúnen en este libro, el ciclo político latinoamericano actual está signado por la emergencia de revueltas populares donde se combinan tensamente nuevos sujetos y actores sociales y políticos más tradicionales. Por lo mismo, lo que suceda con el proceso chileno tiene relevancia para toda la región, pues así como en el país austral se iniciaron estas décadas de despojo, la nueva clase trabajadora que se ha gestado en sus entrañas ha comenzado a desbrozar el camino de salida del atolladero neoliberal para todos los pueblos del continente.



COLOMBIA

PARAR PARA AVANZAR |

Sentir y actuar el paro nacional
de 2019 en Colombia¹

MARÍA ANGÉLICA PRADA-URIBE²
ANDREA LOPERA LOMBANA³

-
- 1 Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, y sin la labor del equipo de investigación del proyecto conformado por Carolina Peña Niño, Felipe Rojas Barrera, Ana Milena Prada Uribe y Juliana Rubiano.
 - 2 Abogada. Profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
 - 3 Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia.

Introducción

“¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!” fue la consigna emblemática que a finales de 2019 pintó de multicolor y resonó en las calles de Bogotá, al son de cacerolas y arengas por la defensa de la vida. El paro nacional que inició con las movilizaciones del 21 de noviembre (21-N) y se extendió hasta inicios de 2020, se enmarca en las recientes revueltas populares que han tenido lugar en diferentes países de América Latina. Gracias a las convocatorias espontáneas y creativas de actividades con gran impacto geográfico y mediático alrededor del país, el 21-N fue catalogado como exponente de una de las movilizaciones más importantes, masivas, pacíficas y creativas vividas en Colombia en los últimos años.

Este trabajo busca explorar las experiencias de jóvenes, mujeres y sectores populares durante las semanas del paro, tratando de abordar los procesos sentipensantes individuales y colectivos que marcaron vivencias y posibilidades de movilización. Diferentes teorías sobre los movimientos sociales han intentado caracterizar los motivos y razones que dan sentido a la acción colectiva de personas y grupos, sea atendiendo al paradigma “instrumentalista” y su análisis de costo-beneficio (Klandermans, 1984; Van Stekelenburg & Klandermans, 2013), o desde las aproximaciones a procesos “identitarios” en tanto mediaciones que la motivan (Stürmer & Simon, 2004). Así, este estudio se sostiene sobre una premisa: las emociones están insertas en nuestros juicios y valoraciones del mundo. Se trata, por tanto, no solo de procesos sentipensantes (Fals Borda, 2009) sino también relacionales, de “afectos” (Aminzade & McAdam, 2001; Aparicio et al., 2017; Escobar, 2014; Jasper, 2018; Quintana, 2020; Solomon, 2008). En este sentido, sostenemos que emociones como la rabia, el miedo, la alegría y la solidaridad jugaron roles fundamentales tanto en la convocatoria como en el desarrollo de las actividades del paro.

Por otra parte, las revueltas de 2019 no surgen en un vacío social, y su auge debe ser entendido a partir del acumulado de distintas expresiones de fuerza de los movimientos sociales, tanto en el contexto regional como nacional. A nivel latinoamericano, estos levantamientos pasan a engrosar las filas de movilizaciones ciudadanas espontáneas, lideradas por los sectores más jóvenes de la sociedad, para expresar indignación ante la crisis ambiental, el aumento de la desigualdad y la pobreza, así como por las respuestas autoritarias y represivas de los Estados. En el contexto local, las movilizaciones del paro en cuestión se dan también en reacción al retorno del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo candidato, el actual presidente Iván Duque, ganó las elecciones presidenciales de 2018. En tal sentido, el paro se integra al nuevo ciclo de protesta social que desde 2008 ha mostrado un aumento sostenido (Archila Neira, 2019), articulando a través del Comité Nacional del Paro (CNP) sectores movilizadores y otras expresiones ciudadanas como sindicatos, organizaciones de mujeres, ambientalistas y trabajadores informales, por citar solo algunas.

En términos formales, la metodología usada en este estudio tiene un componente importante de experimentación. El contexto de pandemia por la covid-19 nos llevó a adaptar la variedad de estrategias metodológicas. A través de un bricolaje de herramientas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y una encuesta virtual⁴, diseñamos formas de *reconstruir* hechos, emociones y reflexiones que se tejieron alrededor de las protestas y movilizaciones que tuvieron lugar entre el 21 de noviembre de 2019 y el 24 de marzo de 2020. Dada la diversidad de experiencias, expresiones y geografías de los acontecimientos, enfocamos nuestra atención en la ciudad de Bogotá.

Un paro joven

Tal como fue registrado por diferentes medios de comunicación en el país, el paro nacional de 2019 fue un paro joven. La revista *Semana*, por

4 Fueron encuestadas seiscientos treinta y tres personas, principalmente jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años, habitantes de Bogotá o Cundinamarca. Es importante precisar que si bien los resultados de la encuesta no son estadísticamente representativos, analizados junto con las entrevistas realizadas permiten identificar tendencias significativas dentro de la protesta social.

ejemplo, catalogó como personaje del año el “grito de la juventud” (Santos Rubino, 2019), el periódico *La República*, en un artículo titulado “Jóvenes, los verdaderos personajes de Colombia en el 2019 ¿Y el 2020?”, aseguró que “el papel protagónico de los jóvenes en las protestas colombianas es incuestionable”, y el medio de comunicación alternativo *Revista Hekatombe* (Marin Guzmán, 2019) se refirió a mujeres y jóvenes como “baluarte fundamental del paro nacional”. En efecto, gran parte de las personas que participaron activamente en las acciones de movilización convocadas a partir del 21-N fueron jóvenes de distintas procedencias. Lo visto en la capital del país mostró que no solo la alta capacidad movilizadora del estudiantado llenó las calles, sino que las marchas, manifestaciones, plantones y cacerolazos entre noviembre y diciembre estuvieron marcados por caras e iniciativas juveniles de sectores ambientalistas, feministas, barristas, antifascistas, entre otros, así como por jóvenes de barrios y veredas de la ciudad que participaron espontáneamente en las convocatorias. La impronta juvenil en la protesta social fue creativa, alegre y potente.

¿Pero a qué se hace referencia al decir “juventud” o “jóvenes”? En la ley colombiana la juventud ha sido demarcada como un rango de edad que va desde los catorce hasta los veintiocho años, y “jóvenes” se define como personas “en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hacen parte de una comunidad política y en ese sentido ejercen su ciudadanía” (Ley 1622 de 2013, artículo 5). No obstante, como es sabido, ese período de la vida que llamamos “juventud” no responde a un concepto universal⁵, por el contrario, se trata de una construcción social cuyo significado y alcance varía histórica y culturalmente (Jones, 2009). En este sentido, diferencias culturales, sociales y de género atraviesan la construcción de aquello que significa ser joven. En el caso que nos ocupa, la idea de juventud para los pueblos indígenas,

5 En las discusiones que dieron lugar a esta definición se contempló ampliar la edad hasta los treinta años, al considerar que el proceso de construcción de ciudadanía y ejercicio pleno de libertades requiere mayor tiempo debido a la exclusión social que enfrentan las juventudes; es más, teniendo en cuenta que algunas políticas de oferta educativa se dirigen a personas de hasta treinta y cinco años, esta edad también fue contemplada como límite del rango (Gaceta Congreso N° 709 de 2011).

por ejemplo, es una categoría problemática atravesada no solo por discusiones que responden a criterios biológicos e institucionales sino que también se despliega en entramados socioespaciales y culturales que a partir de lo rural, lo urbano y lo identitario organizan comprensiones y definiciones de lo que es y puede llegar a ser la juventud (Castro Pozo, 2011; Osorio Pérez, 2016). Más allá de estos debates, la pregunta por la juventud indígena en algunas comunidades colombianas durante las últimas décadas ha estado signada por la vulnerabilidad de esta población frente al conflicto armado, en tanto los actores del conflicto suelen ver al joven indígena como instrumento de guerra con conocimientos, habilidades y destrezas aprovechables en la geografía de la disputa, haciéndolo susceptible de reclutamientos y represalias (Zapata Cardona & Hoyos Agudelo, 2005). De esta manera, al preguntar por la acción colectiva de los jóvenes, debemos tener en cuenta no solo cómo esta etapa se construye de manera diferente según el contexto cultural, sino también de qué modos la clase y género de la juventud pueden afectar su percepción y concepción.

Así, las experiencias de los jóvenes durante el paro provocan tensiones y discusiones en los procesos de estudios sobre juventud: entre quienes promueven una perspectiva de transición donde las estructuras de clase, género, etcétera, constriñen el paso de los jóvenes a la adultez, y quienes, desde una aproximación cultural, ponderan la agencia de los jóvenes que resisten a los esfuerzos de determinación y regulación a partir de múltiples expresiones culturales (Besant et al., 2020; Furlong et al., 2011). De manera que la juventud (entendida al mismo tiempo como condición de riesgo y potencia de transformación) entrelaza, paradójicamente, dos características que demostró en Colombia cuando tomó las calles, tanto en las movilizaciones masivas del movimiento estudiantil en 2011 y 2018, como en el paro nacional que investigamos.

La juventud como condición de riesgo y estigmatización

“Ser joven es todo un reto (...) salir ileso de la juventud es un reto”(entrevista, 8 de junio de 2020), afirmaba un habitante de 31 años de la localidad de Kennedy y con ello señalaba las dificultades que deben enfrentar los jóvenes colombianos en relación a, por un

lado, problemas sociales estructurales como la violencia y la falta de oportunidades, y por el otro, factores de exclusión sociocultural que se expresan en la estigmatización de conductas e identidades asociadas tradicionalmente a la juventud: pasatiempos, gustos musicales, formas de vestir y habitar los espacios públicos, preferencias sexuales e identidad de género. De acuerdo con la encuesta de esta investigación, el acceso a educación básica y universitaria de calidad, los altos costos de la educación, la precarización laboral y la ausencia de oportunidades de trabajo, son los principales desafíos de la juventud; así como la falta de oportunidades para el futuro, la represión del Estado, y la falta de espacios de representación política. Un hallazgo interesante de la encuesta es que la inseguridad que los espacios públicos representan para las mujeres está entre los problemas que enfrenta la juventud. Los resultados también dan cuenta de que la poca garantía de derechos sexuales y reproductivos es otro tema identificado como problemático, así como la falta de acceso al aborto libre y seguro y la violencia sexual. Por otro lado, situaciones relacionadas con la militarización de la vida juvenil fueron identificadas como problemas graves para las juventudes colombianas. De acuerdo a lo afirmado por un habitante de la localidad de Suba, en los sectores populares la principal situación adversa es la violencia que “se expresa en términos de represión de la policía, también del ejército, que termina asesinando a muchos jóvenes en los barrios⁶, o los criminaliza, o los termina estigmatizando” (entrevista, 20 de junio de 2020, hombre, 33 años). Para una docente de primaria de 26 años, la falta de ofertas laborales hace “más fácil ofrecerles [a los jóvenes] (...) el servicio militar o generar esta figura del reclutamiento, que muchas veces no da oportunidades, sino que coarta la posibilidad de estudiar” (entrevista, 6 de junio de 2020, 26 años).

Las narraciones anteriores dejan de relieve que la estigmatización y violencia que sufren los jóvenes no son solo resultado de la inseguridad y del conflicto armado. Indiscutiblemente esta sigue siendo un

6 Hace referencia a casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos como “falsos positivos”, en que miembros del ejército mataron jóvenes pobres o campesinos alegando que eran guerrilleros.

factor de alto riesgo en muchos territorios, no obstante, la violencia es potenciada por la ausencia de oportunidades socioeconómicas (Gómez et al., 2011; Restrepo, 2005).

Durante las actividades del paro, una de las denuncias constantes fue el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. La represión policial estuvo dirigida particularmente hacia sectores jóvenes y populares, aun cuando también se reportaron casos similares en otros sectores de la ciudad, en especial los días 21 y 22 de noviembre. Un defensor de derechos humanos que trabaja en la “Campana defender la libertad es un asunto de todas” comentó que, de acuerdo a su experiencia en escenarios de movilización, “el joven es más propenso a ser atacado, y el sector que más se compone de jóvenes es el movimiento estudiantil, que resulta el más beligerante y más reactivo” (entrevista, 2 de septiembre de 2020). Además, el despliegue extendido de calificativos como “vándalos” o “capuchos”, que durante las protestas hicieron algunos medios de comunicación y funcionarios de Gobierno para desacreditar las manifestaciones (*El Tiempo*, 2019c; *Semana*, 2019b; *TeleSur Tv*, 2019), también se identificó como estrategia para criminalizar la acción juvenil.

Los jóvenes con quienes hablamos durante esta investigación demostraban rabia, indignación y frustración por vivir en un país que no ofrece futuro. Esta idea del “país del no futuro” nos permite poner en escena la rabia detrás de la masiva movilización de juventudes en Colombia. Sus expresiones, como recuerda Hage (2009), no son simples metáforas, son modos de verbalización de sensaciones y descontentos frente a la movilidad existencial del bienestar social. La consigna “¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional!”, adquiere significado entre los jóvenes en tanto expresión de un sentido de “estancamiento” (*stuckedness*) que, junto a la sensación del no futuro, generó indignación colectiva y una energía emocional que catalizó la movilización.

La juventud como potencia transformadora

“Luchar por los ideales y pelear”; “el que quiere un cambio”; “que tiene ideas transformadoras”; “la capacidad, la autonomía, la energía”; “una oportunidad”; “ser propositivo, ser dinámico, es tener energía

para aportar a muchos ejercicios”; fueron algunas de las respuestas y modos de autopercepción de los entrevistados al momento de definir qué significa ser joven en Colombia. Juventud como potencia y posibilidad de transformación: “Posibilidad de manifestarse, de expresar libremente la opinión con sus cuerpos, de salir a las calles, de hacer música, de hacer arte, pero también de hacer crítica (...) creo que ser joven es una construcción política y social atada a movimientos de revolución, revolución pacífica y a veces no tan pacífica, que hace parte de esa expresión” (entrevista, 3 de julio de 2020, mujer, 33 años, Usaquén). La rebeldía, como se ve, juega aquí un papel completamente distinto al que puede tener en el discurso de estigmatización, puesto que se trata de un rasgo del que la juventud puede estar orgullosa. En tal sentido, un estudiante de la Universidad San Buenaventura expresa: “Ser joven es la vitalidad propia de lo que implica el ser humano (...) yo creo que ser joven es la rebeldía (...) querer cambiar cosas para tener un futuro mejor” (entrevista, 25 de mayo, hombre, 20 años).

La potencia de la juventud en los procesos de acción colectiva no es algo nuevo. Tanto el devenir de luchas y de sujetos colectivos solidarios con el movimiento estudiantil, como las expresiones culturales y deportivas que se manifiestan en grupos (las barras de fútbol y el movimiento punk, por ejemplo), se constituyen en acumulados históricos que anteceden y, al mismo tiempo, impulsaron acciones y sentidos en el marco de las protestas. En el caso del movimiento estudiantil, la ola de movilizaciones nacionales y masivas que desde el 2011 venía luchando contra reformas en la educación (la Ley 30) y contra recortes presupuestarios, generó expectativas importantes respecto a la participación estudiantil en el paro del 21-N, más aún cuando el acuerdo pactado en el último paro estudiantil, relacionado con la financiación de la ciencia y la tecnología, venía siendo incumplido por el Gobierno. De manera que la participación estudiantil durante el paro nacional fue muy importante. De hecho, algunas organizaciones, como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), hicieron parte del CNP desde el inicio de la convocatoria, aunque UNEES se retiró de este espacio después del rompimiento que tuvo lugar en la asamblea nacional, en enero de 2020.

Incluso así, la participación de jóvenes en las jornadas del paro trascendió al movimiento estudiantil. Además de llenar las calles en las movilizaciones, jóvenes de diferentes sectores (comunal, ambiental, feminista, antifascista) tomaron barrios y veredas para organizar actividades y construir procesos de democracia participativa local. La movida futbolística en Bogotá, por ejemplo, estuvo muy activa. No solo se incorporaron en las movilizaciones barras de equipos de la capital, sino que grupos y colectivas de fútbol barrial organizaron eventos e intervenciones: a través de procesos de sensibilización y concientización explicaron el pliego de peticiones y combatieron la explosión de noticias falsas. Mujeres pertenecientes a la movida futbolística cubrieron las graderías del estadio El Campín con un trapo morado gigante que tenía el símbolo feminista. También se organizaron variadas actividades artísticas juveniles, como el Cacerolazo Punk en el Parque de los Hippies y un concierto de punk y metal en el centro de la ciudad. Asimismo, la juventud del movimiento ambientalista popular (del que participan organizaciones como la Colectiva Huertopía en San Cristóbal, La Huerta Wayra del Sur en Ciudad Bolívar y el proceso de Humedales Bogotá) participó activamente en las asambleas locales del paro, promovió movilizaciones en sus localidades y organizó actividades comunitarias en los barrios.

Por tanto, identificamos dos roles fundamentales de las juventudes durante el paro. Por un lado, fueron el sector energizante, pues mantuvieron las calles abarrotadas casi a diario hasta finales de diciembre. Por el otro, fueron educadoras y comunicadoras populares, a través de la elaboración de carteles, en las convocatorias, y del diseño y dinamización de metodologías de múltiples actividades. En cuanto a la difusión de información y cobertura de hechos en el territorio, también asumieron una responsabilidad determinante, así lo explica un miembro del colectivo José Martí: “El rol fue ser comunicadores, o sea fomentar la tarea, sobre todo en redes sociales, de comunicar a la gente lo que iba pasando día a día, minuto a minuto” (entrevista, 16 de abril de 2020, hombre, 26 años, colectivo José Martí, Soacha). Tal como se ha documentado en diversas investigaciones, en la nueva ola de movilizaciones sociales espontáneas y descentralizadas del mundo, las redes sociales han significado un elemento categórico en

la transmisión y difusión de repertorios de acción que se propagan principalmente de modo desarticulado hacia múltiples escalas geográficas. Este fue el caso, por ejemplo, de la *performance* “Un violador en tu camino”, que inició con una intervención durante el estallido social en Chile y rápidamente se extendió a diferentes espacios de acción colectiva local en Bogotá.

Finalmente, para muchos de los jóvenes, su amplia y constante participación en las movilizaciones contrastó con su reducida presencia en ámbitos de dirección del paro. Cierta molestia e incluso rabia fue evidente en varias entrevistas frente a lo que pareció ser una división etaria en la organización de la protesta. Con las siguientes palabras lo expresó un miembro del colectivo Abya Yala: “Los jóvenes fueron quienes le pusieron el pecho al paro en las marchas, en las manifestaciones, a la hora de contener los abusos policiales. Creo que la energía de la juventud dio vida al paro, mientras que en las reuniones del comité la gente mayor, en su mayoría, daba las discusiones y los conflictos por las definiciones del paro” (entrevista, 3 de junio de 2020, 30 años).

Si bien en el CNP participaron algunos jóvenes, numéricamente estos fueron minoría. La imagen del comité que se hizo viral por redes sociales y medios de comunicación fue la de un grupo compuesto sobre todo por hombres mayores, líderes de antaño del movimiento social y sindical, que posaban para las cámaras al dar comunicados o ruedas de prensa. Una representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), ante la pregunta por su experiencia como joven y mujer en el CNP, confirmó la persistencia de una brecha generacional dentro de este; brecha que si bien “impone una contradicción, en el estilo, en muchas formas”, también permitió aprender cosas de esa “vieja dirigencia” (entrevista, 8 de abril de 2020).

Sentir y actuar el paro: las emociones en la protesta social

La convocatoria del paro inició con más de un mes de anticipación. El 4 de octubre de 2019 las organizaciones sindicales, el

movimiento estudiantil y otros procesos sociales realizaron un “encuentro nacional de emergencia” donde aprobaron realizar un paro nacional el 21 de noviembre (Comité Nacional del Paro, 2019). Sin embargo, como explicó el director de la organización Viva la Ciudadanía, la idea se fue “cocinando, cocinando entre reuniones y encuentros que desde enero del mismo año tuvieron los miembros del sector social organizado” (entrevista, 22 de julio de 2020). También lo confirmó uno de los jóvenes del Colectivo José Martí de Soacha: “Nosotros demoramos reuniéndonos, pensando en el paro nacional, en que las cosas salieran bien y en poder tener una gran coalición política durante mucho tiempo”. No obstante, a pesar de toda la planificación, afirma, “en un principio era un poco escéptico con que se diera muy fuerte” (entrevista, 16 de abril de 2020). El escepticismo no fue solo de este entrevistado. Muchos esperaban que se tratara de “un paro más”, una movilización de un día. Contrario a ello, actualmente se ha consolidado un consenso entre los analistas: nadie previó la magnitud de la participación y el sostenimiento en el tiempo que este alcanzaría. En estos términos lo expresó el filósofo y profesor Alejandro Mantilla (2019) a través del medio alternativo de comunicación *La Sinistra*: “Ni los activistas más optimistas ni los policías de la opinión lograron predecir el ímpetu y la duración de una movilización que reflejó un descontento generalizado”. Por tanto, ¿cómo explicar la masividad de las manifestaciones durante el paro? Según el comunicado oficial del CNP, las movilizaciones fueron convocadas para manifestarse en contra del “paquetazo de Duque [que] contiene las reformas laboral, pensional y tributaria, la privatización del aparato productivo del Estado y del sector financiero estatal por medio de la Holding, el tarifazo nacional en favor de Electricaribe, el incumplimiento de los acuerdos con sectores sindicales, sociales y estudiantiles, la restricción del derecho a la protesta social, la eliminación del salario mínimo, y la impunidad total frente a la corrupción”, y movilizarse por la exigencia del “cese de la violencia y los asesinatos de los líderes sociales”, por “el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, y porque se “financie adecuadamente la educación y la salud públicas” (Comité Nacional del Paro, 2019).

Si bien las motivaciones para participar en las movilizaciones guardan semejanzas con las justificaciones especificadas en el

comunicado citado, fue posible identificar otras relacionadas con la defensa del medioambiente, el derecho a protestar, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (conocido como ESMAD), y los derechos de las mujeres; demandas integradas, junto a otras reivindicaciones, en el pliego de peticiones ampliado del CNP, que pasó de tener trece a ciento cuatro puntos. En este sentido, el CNP no fue solo un movilizador de ideas preexistentes. Por el contrario, generó un proceso itinerante de producción de significados y “procesos de enmarcamiento” (Snow & Benford, 1992) relativamente exitoso al lograr comunicar e incorporar, de manera amplia, demandas de diferentes sectores y personas que paulatinamente se sumaron al paro. Sin embargo, la coincidencia en las demandas no termina de explicar la magnitud y duración del acontecimiento. Detrás de toda movilización hay claras demandas y descontentos, pero los estudios sobre movimientos sociales han mostrado que esto no es del todo suficiente para que las multitudes pasen de la indignación a la acción. Al intentar explicar este tránsito, encontramos en las emociones y los afectos un eje esencial de estímulos para la acción. De acuerdo con Solomon (2008), las emociones son inteligentes, pues involucran nuestras habilidades para conceptualizar y evaluar. Por tanto, estas no solo “encajan” dentro de nuestras vidas, sino que le dan sentido y forma a través de concepciones y evaluaciones de lugares, situaciones y personas (Ibid., p. 204).

En tal sentido, dos procesos emocionales pueden considerarse estructurales en la masividad de las movilizaciones del 21-N. Por un lado, en la última década se evidencia una transformación en la relación afectiva que muchas personas en Colombia tienen con la protesta y la movilización en el espacio público. La criminalización de la protesta social asociada a la lucha contra la insurgencia armada y el terrorismo, y la relación afectiva negativa que gran parte de los ciudadanos tenía con la protesta por la represión social que comporta la doctrina de seguridad nacional, la institucionalización del estado de sitio, el aumento de la violencia rural y urbana durante la década de los noventa por causa del conflicto armado y la guerra contra el narcotráfico, se han ido modificado en el imaginario social de las últimas décadas a partir del surgimiento de movilizaciones por la paz, actividades multitudinarias por la defensa del agua y el

medioambiente, el aumento de las marchas del orgullo LGBTIQ y por los derechos de las mujeres (Archila, 2019). Transformación afectiva que venía mostrando evidencias antes del paro en cuestión y en la cual el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que concluyó con el Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, tuvo importante impacto, pues se tradujo en desestigmatización de las protestas por parte de las mayorías sociales. Esto no quiere decir que desde el Gobierno y los poderes hegemónicos la criminalización y la estigmatización de la protesta hayan terminado, por el contrario, se recrudecieron con la elección de Iván Duque a la presidencia en 2018. En el marco de los eventos que analizamos, es posible afirmar que esta tendencia generó en la sociedad civil la transformación del miedo en la indignación que contribuyó de manera contundente a la masividad de las movilizaciones del 21-N, fenómeno que consideramos el segundo proceso emocional estructural. De acuerdo a Hess & Martin (2006), los procesos represivos, en algunos casos, producen un efecto contrario al esperado (*backfire*) al activar en la opinión pública un sentimiento de indignación generalizada. Cuando esto sucede, comúnmente se reacciona no a uno o más eventos represivos, sino a un proceso dinámico, al despliegue de una serie de estrategias ineficaces de las autoridades para prevenir, mitigar, controlar o inhibir la indignación social.

En este sentido, hemos identificado dos situaciones previas de represión y violencia estatal que gestaron una sensación de indignación en todo el país. El primero tuvo lugar en septiembre de 2019 en Bogotá, cuando la policía nacional respondió a las protestas que estudiantes de la Universidad Distrital habían organizado contra la corrupción de su casa de estudio. Los gases lacrimógenos y las “aturdidoras” del ESMAD alcanzaron a miembros de la vecina Universidad Javeriana, institución privada donde estudia buena parte de la clase media-alta en el país. Esto propició vínculos solidarios entre universidades públicas y privadas, lazos que venían en conformación desde la experiencia de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE) en el 2011. Posteriormente, a comienzos de noviembre de 2019 (a menos de un mes del inicio del paro), el senador Roy Barreras denunció que en agosto de ese año el Ejército

Nacional de Colombia había bombardeado un campamento de disidentes de las FARC donde murieron ocho menores de edad. Este escándalo de alcance nacional no solo llevó a la renuncia del entonces ministro de Defensa (*El Espectador*, 2019a), sino que generó un sentimiento de indignación extendido que se identificó como una de las razones de la protesta del 21-N.

En respuesta al descontento nacional, como sucede en los procesos de *backfire*, el Gobierno emprendió una cruzada mediática para intentar contener la opinión pública y evitar manifestaciones. Justificó el uso de la fuerza tanto en el caso de los estudiantes, llamándolos “vándalos” y “encapuchados” (*El Tiempo*, 2019a), y buscó excusar la muerte de los niños y niñas del Caquetá argumentando daño colateral en el ataque contra un objetivo militar legítimo (*El Tiempo*, 2019b). Además, puesto que simultáneamente se había anunciado la convocatoria el 21-N, inició una campaña de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales, a través del eslogan #NoParamosAvanzamos, con la intención de disuadir a la población de salir a las calles; campaña que desembocó en acciones como allanamientos contra medios de comunicación alternativos y militarización de algunas ciudades (*Semana*, 2019a). Sin embargo, estas medidas tuvieron un efecto opuesto al deseado y, según reconocieron algunos miembros dentro del CNP, desencadenó un proceso de expansión de rabia legítima que terminó constituyendo uno de los catalizadores de las movilizaciones masivas del 21-N.

Ahora bien, si la rabia y la indignación jugaron un rol fundamental en la convocatoria para el 21-N, a lo largo del paro estas no fueron las únicas emociones que tuvieron protagonismo en la experiencia de movilización. De acuerdo con los resultados de la encuesta, las emociones que más representan la experiencia de los manifestantes son la solidaridad y la esperanza, seguida luego de la rabia, el orgullo, la alegría y el miedo. Al desagregar los datos de cada emoción por rango etario es posible ver que esta proporción cambia levemente. Los jóvenes entre dieciséis y veintiocho años, por ejemplo, sintieron proporcionalmente mucho más miedo y rabia que los demás grupos etarios. Esto último no es un resultado sorprendente, teniendo en cuenta que fueron quienes más sufrieron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Otro hallazgo significativo al

analizar los datos por identidad de género, fue que las mujeres sintieron sustancialmente más miedo, rabia y ansiedad que los hombres, dando cuenta, siguiendo a Lorde (1987), de la rabia como experiencia legítima en la vida de las mujeres.

Del miedo a la rabia y al duelo

El 21-N las organizaciones estudiantiles se congregaron en la Universidad Nacional de Colombia frente a la entrada, ubicada sobre la calle 26, también conocida como la avenida El Dorado. A diferencia de las demás marchas cuyo objetivo era entrar a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad, los estudiantes querían lograr algo más audaz: marchar por toda la avenida 26 hasta llegar al aeropuerto internacional El Dorado. El inicio de la marcha fue una explosión de alegría, camaradería y esperanza. No obstante, el nerviosismo de los gestores de convivencia y los defensores de derechos humanos era evidente. Ellos sabían que el Gobierno no iba a permitir que los estudiantes llegaran hasta el aeropuerto, y que existía la orden de reprimir la manifestación si no cambiaba su recorrido a la altura de la avenida 68. A pesar de los esfuerzos de gestores de convivencia y defensores de derechos humanos para desviar la marcha, la masa de estudiantes era incontenible y no se detuvo ante la frágil “cadena humanitaria” que improvisaron. Los estudiantes avanzaron hasta encontrarse, debajo del puente de la 68, con una línea de tanques antidisturbios y efectivos del ESMAD. Primero hubo silencio. La fuerte tensión del ambiente invadió los cuerpos de los manifestantes. Con un grito, que se ha vuelto común dentro de este movimiento, los estudiantes rompieron el silencio: “¡Sin violencia, sin violencia!”. Lo que sucedió después lo reconstruimos en una entrevista con un defensor de derechos humanos que trabaja en una importante ONG en Bogotá y que estaba acompañando la protesta:

En el puente de la 68 estuvimos, no muchos, intentamos hablar a los policías: “Tranquilos, no va a ocurrir nada”, y pensamos que íbamos a poder aguantar un poquito para que la movilización pudiera salir por la 68 hacia el norte. Pero duramos muy poco aguantando a la gente, y como en 10 el ESMAD empezó a tronar las aturdidoras (...) por debajo de la línea de escudos (...) Cuando estallaron esas

primeras aturdidoras, la primera reacción de las personas que está ahí, por el choque, es salir a correr. Muchas salieron a correr y nosotros les intentamos decir que si se iban a retirar, lo hicieran mirando a la policía, porque es más peligroso darles la espalda, porque en esos espacios muchas veces empiezan a disparar esas balas que se conocen como marcadoras (...) Pero eso no es lo peligroso, sino que cuando muchas personas salen a correr, esas balas las impactan en la nuca y eso los puede tirar al piso y les puede causar lesiones considerables (...) Lo que hacen después es disparar los gases, porque los gases tienen un rango mucho más largo que lo demás (...) entonces la multitud sale angustiada, y como sale angustiada, necesita respirar mayor cantidad de aire, y si el aire tiene ese gas, pues la disuade y la debilita (entrevista, 8 de agosto de 2020).

La marcha de los estudiantes por la calle 26 no fue la única que recibió la desmesurada arremetida de la policía. Las manifestaciones que se dirigían hacia la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, también fueron violentamente reprimidas. Según un reporte de la campaña “Defender la libertad asunto de todas”, durante el 21-N se efectuaron 166 detenciones a manifestantes y 45 personas resultaron heridas como consecuencia del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza policial (Defender la libertad un asunto de todas, 2019). Sin entrar en discusión sobre el uso legítimo de la violencia, puesto que excede el alcance de este trabajo, cabe sostener a partir de estos ejemplos que la consigna y la práctica “sin violencia” fueron más allá de un uso estratégico. La ocupación masiva y pacífica de las calles y el espacio público, en respuesta a la amenaza de la represión policial, se constituyó en acción política emancipatoria (Butler, 2015) que, gracias al trabajo emocional (Taylor & Rupp, 2002) realizado por colectivos y movimientos sociales a través de sus comisiones de derechos humanos, buscó transformar el miedo de los manifestantes en acción. En este sentido, son elocuentes las palabras de uno de los fundadores de la Red Distrital de Derechos Humanos: “Nuestra intención era que la gente pudiera salir a protestar más tranquila porque ahí estaba la Red para que no los jodieran, para que no quedaran durante días enteros sometidos a la policía” (entrevista, 13 de agosto de 2020). Sin embargo, a pesar de las técnicas de trabajo emocional desplegadas por las organizaciones de derechos humanos, en las entrevistas quedó en evidencia que la mayoría de los

manifestantes (solo unos pocos hombres dijeron no haberlo sentido) había experimentado miedo durante las protestas, mezclada con rabia e indignación por causa de la represión emprendida por la fuerza pública. De este modo lo rememoró una mujer joven: “Yo creo que sobre todo miedo, llegué a sentir bastante miedo, digamos que enfrentarse a esos entes que desarrollan el monopolio de la fuerza es bastante duro, es bastante complejo, da rabia” (entrevista, 28 de mayo de 2020, mujer, 22 años, Colectivo Caos, San Cristóbal).

La represión tuvo su momento cúspide la noche del 22 de noviembre, etiquetada por muchos de los entrevistados como “la noche del miedo”. Ese día el alcalde de Bogotá decretó un toque de queda generalizado en toda la ciudad a partir de las nueve de la noche, en respuesta a las movilizaciones, fundamentado en unos pocos enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes, sin importar que la mayoría de las protestas fueran pacíficas. Producto de, por un lado, declaraciones previas de políticos del Centro Democrático acusando a Venezuela de querer infiltrar las protestas (*Cuestión Pública*, 2019), y, por el otro, de los modos en que las élites políticas y medios tradicionales de comunicación modelaron la imagen de los manifestantes bajo sustantivos como “vándalos” y “capuchos”, la noche del 22 de noviembre devino en una situación de pánico moral (Garland, 2008). De un momento a otro, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y los grupos de WhatsApp se llenaron de videos que mostraban personas ingresando a conjuntos residenciales para saquear, acompañados de textos que indicaban que se trataba de grupos de venezolanos. El resultado fue una desmedida alarma social en algunas localidades de la ciudad como Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba⁷. En el informe “Persiguiendo fantasmas”, realizado por el concejal Diego Cancino, se determinó que

7 La noche del miedo también evidenció las fronteras invisibles en Bogotá, su segregación e inequidad espacial. Mientras que las personas que entrevistamos en los barrios de las localidades de la Medialuna Sur y de Suba nos hablaron de escenas de militarización y pánico vecinal durante la noche del 22 de noviembre, en barrios como la Macarena, en Santa Fe, o la Soledad, en Teusaquillo, los manifestantes mantuvieron los cacerolazos nocturnos en la calle haciendo “resistencia” sin que hubiera ninguna repercusión policial por violación del toque de queda.

no hay evidencia en el registro de la policía de que esa noche hayan ingresado “vándalos” o que, con posterioridad, se hayan efectuado judicializaciones por hechos de esa naturaleza (Cancino & Cifras y Conceptos, 2020). En cambio, la Clínica de Migrantes de la Universidad de los Andes, según testimonio de un abogado que estaba apoyando a esta organización, registró durante el paro la detención y deportación arbitraria de personas venezolanas por parte de autoridades colombianas (entrevista, 9 de agosto de 2020). Asimismo, los medios de comunicación reseñaron varios casos de agresión contra venezolanos en la ciudad.

La reacción de la ciudadanía a la noche del miedo fue salir a manifestarse con fuerza el sábado 23 de noviembre. Ese día, finalmente, el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado cobró una víctima mortal. Como miles de jóvenes durante el paro, Dilan Cruz había salido a manifestarse en el centro de Bogotá, cuando fue herido por un proyectil detonado por un agente del ESMAD. El asesinato de este joven de dieciocho años, que acababa de culminar su bachillerato y estaba buscando oportunidades para iniciar sus estudios universitarios, dejó una marca profunda en la afectividad de los participantes de las protestas. Dilan se convirtió en un símbolo de indignación contra la brutalidad del ESMAD. La rabia, la indignación, la frustración y el dolor que este episodio generó en la experiencia sentipensante de los movilizados de esos días, fueron muy profundas. Además de potenciar la rabia que de por sí persistía en las protestas por las agresiones de la fuerza pública, la muerte del joven generó una expresión colectiva de duelo que se manifestó a través de las palabras “Dilan no Murió, a Dilan lo mataron” (o en su versión digital #DilanNoMurióLoMataron). Así se reclamó y disputó la narración de lo acontecido, resistiendo al discurso posicionado por políticos del partido de Gobierno y medios de comunicación que culpabilizaban al propio Dilan de su muerte, por manifestar. En estas circunstancias, el duelo por el asesinato de Dilan se vivió de manera colectiva en el espacio público de la ciudad, donde los cuerpos dolidos de los marchantes se juntaron para reconocerse en y solidarizarse con el dolor e indignación del otro. Como ha mostrado María Angélica Ospina (2020), en el espacio público de la ciudad brotaron altares efímeros que densificaron y concentraron el clamor

general en torno al reclamo, el ritual y el duelo como derechos sociales inalienables. Estos altares para el duelo colectivo son ejemplo de cómo los manifestantes recurrieron a ingeniosos (y algunas veces espontáneos) repertorios de acción colectiva para contagiar, transmutar o tramitar los múltiples afectos que afloraron. Un duelo colectivo que, en tanto ritual social, produjo relaciones de solidaridad (Solomon, 2008).

El paro como carnaval: esperanza, alegría y solidaridad

A pesar del miedo, la hostilidad y el duelo, las historias y recuerdos en torno a los eventos explorados están llenos de imágenes, sonidos y colores que evocan alegría, regocijo, esperanza y solidaridad. De este modo lo describe uno de los participantes que el 21-N se desplazó por toda la avenida séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar: “El baile, la danza, el encuentro, eran muy bonito, muy simbólico también ver las vías principales de Bogotá, la capital del país, cerradas” (entrevista, 16 de junio de 2020, hombre, 30 años). Si esta primera manifestación se caracterizó por su masividad, la festividad de las representaciones artísticas y por la sátira en los carteles; las actividades que siguieron fueron estallidos de espontaneidad y creatividad que trascendieron las formas más tradicionales de protesta. Tal como se ha mencionado, la marcha en tanto espacio de jolgorio y “carnaval” no es novedad en Colombia. En varias localidades y barrios de Bogotá se organizaron cacerolazos bailables, clases a la calle, canelazos, ollas comunitarias y conciertos para animar a las personas a sumarse. Estas ingeniosas prácticas de congregación lograron impactar positivamente la experiencia y permitieron que los participantes recuerden las ocupaciones del espacio público como potencia fundamental del paro. Uno de los eventos más rememorados fue el cacerolazo espontáneo que se expandió de ventana a ventana y de calle a calle por todo Bogotá la noche del 21-N, en reacción a la violenta arremetida de la fuerza pública contra manifestantes. Muchas personas aseguraron sentir una gran frustración al ver que la jornada que había sido “alegre” y “pacífica” terminó en un ejercicio de violencia física y simbólica, esta última especialmente

a través de la representación de los eventos que elaboraron los medios de comunicación tradicionales (Quintana, 2019). Las historias sobre el camino de regreso a casa suelen empezar de forma desoladora, pero culminan con tenor emancipador. Leer sus propios relatos es el mejor modo de comprender los procesos individuales y colectivos que experimentaron las personas que participaron en la movilización:

Nosotros nos quedamos hasta tarde, como que sabíamos que iba a haber finalmente conflicto en la Plaza de Bolívar, entonces estuvimos un rato. Empezó a llover y nos empezamos a retirar (...) Cuando íbamos de regreso, o sea ya tipo cinco o seis de la tarde, por Teusaquillo empezamos a escuchar el ruido y pensamos “¿qué está pasando?”. Miramos redes sociales y vimos que parecía que habría cacerolazo. Pero uno ve esos ejercicios como muy focalizados (...) y yo un poco escéptico dije: “Bueno, es Teusaquillo, una localidad de clase media alta donde la mayoría de las personas tiene una formación, es natural, un poco, que se generen este tipo de movilizaciones”, que igual me parecía muy bonita. Pero tomo mi bus, llego a mi barrio, y en mi barrio también empiezo a escuchar cacerolas; entonces, se vuelve un ejercicio muy llamativo cuando es en el barrio (...) que es un lugar industrial, no habitan muchas personas. Y empiezo a escuchar gente también a lo lejos (...) “¡Cacerolazo!”, y te llena de fuerza. Esto que yo pensaba que se acababa en una simple movilización no acababa (...) Fue un ejercicio bonito (entrevista, 26 de junio de 2020, hombre, 25 años, Puente Aranda).

En estas y otras historias, llama la atención que los interlocutores no atinaban a dar nombre concreto a la sensación que experimentaron durante el evento. A diferencia de lo que pasaba al nombrar rabia, alegría, miedo o indignación, los cacerolazos parecen evocar una emoción más sublime, más difícil de aprehender. Si en las protestas, al decir de Laura Quintana (2019), se propagó la alegría de sentir una potencia común entre los cuerpos, de lo que se puede en un ensamblaje de muchos, igualmente vulnerables, una vez que se organiza la indignación y esta se manifiesta colectivamente, ¿qué sucedió durante ese primer cacerolazo nocturno que provocó efectos

simultáneos en todos los lugares y en ningún lugar en particular?⁸ De las narraciones se desprende que tal acontecimiento logró amplificar la potencia de la movilización, conectando cuerpos distantes a través del eco seco, intermitente y sostenido de cientos de cacerolas: “Uno con la cacerola no se siente solo caminando en la noche, porque muchas veces hice trayectos muy largos (...) en las noches. Y oír una cacerola por ahí o tenerla en la mano te hacía sentir distinto en la calle” (entrevista, 22 de mayo de 2020, mujer). Otros manifestantes resaltaron de manera reiterada que los cacerolazos hicieron posible que más personas se sumaran a la protesta; personas que de otra manera no habrían podido participar por pertenecer a sectores que tradicionalmente no se incorporan a actividades de calle o porque, aunque tuvieran deseos de hacerlo, debían trabajar durante el día para no perder su medio de sustento. Esta potencia en la práctica de “caceroliar” (sic), verbo popularizado durante el paro, no manó únicamente en un sentimiento de alegría o regocijo; pareció ir más allá. El estruendo de las cacerolas (que conmovió hasta el llanto a algunas personas) propició una experiencia estético-afectiva sublime que transformó no solo repertorios de acción de la protesta social, sino que comportó una práctica ritual cuyo símbolo fue la esperanza y que, en consecuencia, recargó y maximizó la energía emocional (Collins, 2004) que mantuvo vivo el paro durante semanas.

A lo largo de las protestas se activaron también gestos de empatía y prácticas de solidaridad. Aun cuando muchas veces las personas no distinguen entre estas dos emociones en el discurso coloquial, ciertas señales indican un grado de persistencia. Este hecho nos permite especificar que cada uno de estos afectos determina prácticas relacionales muy distintas. En el lapso de los acontecimientos las redes sociales posicionaron fuertemente la etiqueta “#QueElPrivilegioNoTeNubleLaEmpatía”, con dos fines subyacentes: por un lado, “planeaba que los privilegiados no debían olvidarse del infortunio que

8 La cacerola ha jugado en América Latina, sobre todo en los países del cono sur, un rol importante en las protestas sociales. En particular, en Colombia el cacerolazo ha tenido antecedentes en los procesos de acción colectiva, sin embargo, no había alcanzado la magnitud y relevancia simbólica que tuvo durante el paro nacional de 2019.

viven los menos favorecidos. Por otro, hacía hincapié en la empatía como afecto movilizador” (Mantilla, 2019). Si bien la empatía, como explica Mantilla (2019), es “el intento de comprender los estados del otro”, su estructura relacional, de acuerdo con análisis de varias feministas (Hemmings, 2012), reproduce estructuras jerárquicas, pues esta se experimenta por sujetos que se consideran en mejor situación que aquellos a quienes perciben con menos poder o recursos. Por tanto, y siguiendo a Mantilla (2019), la empatía puede movilizar un altruismo despolitizador “que no pretende tejer con otros, sino solidarizarse en la distancia”. Es por eso que, desde una perspectiva feminista, afirmamos que el verdadero potencial emancipador durante el paro estuvo en las prácticas afectivas de solidaridad y de cuidado de los manifestantes, y no en emociones empáticas. Innumerables historias registradas en las entrevistas lo refrendan:

Un momento que también me pareció muy muy bonito fue un día, creo que el 27 de noviembre, más o menos después de la muerte de Dilan (...) yo estaba muy afectado por este asesinato. Había una movilización acá en Soacha, me levanté temprano para alistarme (...) y no alcancé a hacerme el desayuno. Entonces, salí a comprar donde la vecina, dos arepas. Cuando llegué, la vecina me dice: “¡Ay, yo a usted lo he visto en las marchas! Usted siempre va con un chaleco que dice algo de gestión humana, qué es lo que hace”. Yo me pongo a contarle, y ella dice: “Tan chévere, mijo, ¿quiere un tintico?”. Dije: “La verdad, solo tengo para la arepa”. Y ella: “No, mijo, le regalo el tintico y le regalo la arepa porque sé que lo que usted va a hacer no es fácil”. Eso, a mí, [viniendo] de una persona que nunca había visto movilizándose ni organizándose en nada, como uno lo ha hecho, me pareció bien bien bonito (entrevista, 16 de abril de 2020, hombre, 26 años, colectivo José Martí, Soacha).

Estas prácticas de cuidado colectivo que generaron esperanza en el desarrollo de los eventos, se dieron tanto en el contacto interhumano directo como a través de redes sociales y WhatsApp, donde se organizaron grupos, como el de Profes al Paro, para asistir a marchas y desplegar tramas de cuidado y protección, por ejemplo, a la Guardia Indígena del Cauca en Bogotá (en la movilización del 4 de diciembre hacia la Plaza de Bolívar); o desde prácticas menos orgánicas pero igual de potentes, como la de mujeres y abuelas que

abrazaban y protegían manifestantes frente a la represión policial. Se trata de ejercicios de solidaridad que ayudaron a controlar y reducir el miedo (Flam, 2007) y se constituyeron en “mecanismos de apoyo” que conformaron parte esencial de los repertorios de acción colectiva (Goodwin & Pfaff, 2001). Vale acotar que en Colombia los movimientos populares han desarrollado sistemas de autocuidado como las comisiones de derechos humanos y las comisiones de verificación que acompañan la protesta social (Prada-Uribe & González, de próxima publicación). Entender estas dinámicas en una dimensión meramente instrumental (para el “manejo” de las emociones), sería una visión muy angosta, reduciría su propósito e invisibilizaría los afectos, contextos culturales y prácticas espacio-temporales que en realidad fortalecen lazos comunitarios de reivindicación y defensa de la vida.

La descentralización popular

De los encuentros sociales, nacionales y departamentales para la planificación del 21-N (que reunieron organizaciones sectoriales, grupos ambientalistas, pueblos indígenas, movimientos de mujeres, entre otras colectividades), surge eventualmente el Comité Nacional del Paro (del que ya hemos comentado y que identificamos mayormente por sus iniciales: CNP) y su manera descentralizada de convocar y azuzar la movilización. Este ejercicio de descentralización se fundamentó, según explicó el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), en la capacidad logística de las centrales obreras y los sindicatos en muchas ciudades y municipios de Colombia, posibilitando la formación de comités locales que se articulaban con el comité nacional (entrevista, 7 de octubre de 2020). Si bien el CNP, como afirmamos en apartados anteriores, logró integrar las demandas de los diferentes sectores organizados, la masividad de las movilizaciones y la diversidad de sujetos activos en ellas desbordaron su capacidad integradora; esto dio pie a contradicciones organizativas que tensionaron los estilos democráticos, sus procesos de toma de decisiones, las formas de participación en instancias de coordinación y posibles marcos de negociación con el Gobierno.

Mientras las actividades en las calles avanzaban y se esparcían por todo Bogotá, el CNP se reunió todos los días después de las movilizaciones en la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para analizar la coyuntura y tomar decisiones. A estos encuentros se fueron acercando los nuevos sectores movilizados para ser incluidos en el proceso. Aunque el CNP mantuvo una política de puertas abiertas, las tácticas de ampliación y las prácticas de enmarcamiento de demandas no estuvieron exentas de controversias. El modelo democrático que en principio funcionó de manera relativamente pacífica cuando el comité estuvo integrado por “sectores organizados del movimiento social”, sufrió una fuerte crisis de legitimidad: “No fueron capaces [los actores del CNP] ni siquiera de salir a respaldar las acciones de los barrios populares. Es decir, se muestra que había una burocracia impuesta por parte de sectores de izquierda que termina visibilizando o haciéndose la cabeza visible del paro, pero no reflejaba lo que la gente quiere en los barrios” (entrevista, 13 de mayo de 2020, miembro de la asamblea popular, localidad de San Cristóbal).

En efecto, esta primera contradicción organizativa hizo evidente la existencia de lógicas de descentralización antagónicas. Por un lado, una descentralización jerárquica promovida por el CNP, y por el otro, una descentralización autonomista que surgió de manera espontánea en las localidades que lograron activar redes de comunicación entre sí y con el propio comité. Dos dinámicas que expresan, a su vez, tensiones entre nociones de democracia y participación ciudadana diferentes. Si en el CNP predominó una visión que se cristalizó en reglas de inclusión/exclusión respecto a quién podía participar y tener voz, en las experiencias locales y populares, por el contrario, se concretaron procesos experimentales de democracia participativa y asamblearia que alcanzaron diferentes niveles de consolidación e impacto en sus espacios de acción; procesos como los articulados por el movimiento feminista y las asambleas de Suba y Usaquén, que detallaremos en próximos apartados. El desencuentro entre estas dos perspectivas llevó a un rompimiento en el seno del CNP el 30 de enero de 2020, en la Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales efectuada en la sede del teatro Jorge Eliécer Gaitán. Durante la organización de esta asamblea surgió una

disputa entre quienes opinaban que la reunión debía ser abierta y quienes consideraban que la participación debía ser por asignación de delegados. Aun cuando se optó porque ingresaran solo personas acreditadas por los sectores movilizados, las exigencias de abrir el evento produjo diferencias irreconciliables que dividieron los espacios de encuentro.

A este contexto se sumaron tensiones derivadas de los diálogos y posibles escenarios de negociación del CNP con el Gobierno. El llamado del presidente Duque a una “gran conversación nacional” [para generar, según sus palabras, la posibilidad de “que en medio de las diferencias políticas, si se quiere, o ideológicas, seamos capaces de unirnos en los propósitos comunes y atenderlos” (Presidencia de la República, 2020)], fue interpretado por el CNP como una negación de las reivindicaciones y la conflictividad social. En palabras del director de Viva la Ciudadanía: “El CNP pidió diálogo y negociación, y el Gobierno ofreció conversación nacional, que era con nosotros y un montón de gente que ellos se inventaban (...) y dijimos que eso no, que éramos un sector en conflicto (...) Ellos nos querían disolver, [demostrar] que nosotros solo éramos una parte de la sociedad. Y sí, nosotros solo éramos una parte de la sociedad, pero en conflicto con el Gobierno” (22 de julio de 2020). Es notable que la diferencia entre el CNP y el Gobierno no era simplemente un desacuerdo irrelevante frente al uso de las palabras “negociación” y “conversación”, como hizo parecer la cobertura del periódico *El Tiempo* (2020); se trató de una disputa por la forma de materializar el principio democrático cuando existe una importante movilización por parte de un sector social en contra del poder político.

Las mesas de diálogo fueron ampliamente criticadas por múltiples actores. Desde el Movimiento Nacional Ambiental (MNA) y otras organizaciones, el diálogo fue calificado de “falso diálogo” y de “monólogo gubernamental” (Movimiento Nacional Ambiental & otros, 2019). Al decir de una mujer que trabaja en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES): “Fueron mesas que terminaron ocupadas por los mismos funcionarios del Gobierno; este no invitó a la sociedad que había llevado a la movilización, sino que, al contrario, terminó siendo un diálogo entre ellos mismos. La verdad, fue indignante” (entrevista, 25 de

mayo de 2020, 26 años). Así, frente a la ausencia de garantías de participación en la “conversación nacional”, el CNP reivindicaba la confrontación y el conflicto como elementos esenciales en las dinámicas democráticas. En tal sentido, la negativa a entablar un diálogo con el Gobierno si no implicaba una negociación, se entendió como prueba de la crisis de legitimidad que atraviesan los modelos democráticos. Someterse al diálogo nacional habría significado renunciar al carácter antagónico del paro frente a las políticas del Gobierno y legitimar un espacio de discusión que no daba garantías a los diversos sectores. El problema es que el CNP, aun cuando era consciente del impacto de la situación sobre las movilizaciones y el ímpetu ciudadano, no logró comunicar de modo asertivo las razones que hacían imposible avanzar en una conversación que no daría resultados tangibles y efectivos. Finalmente, la frustración por la ausencia de resultados concretos⁹ y los reclamos por la falta de legitimidad representativa del CNP hicieron que la energía emocional colectiva mermara paulatinamente, hasta agotarse del todo en las festividades de diciembre.

Las geografías del paro en Bogotá

La descentralización de las movilizaciones tampoco es novedad en Colombia, especialmente en Bogotá, donde la segregación socioespacial¹⁰ ha generado procesos históricos de protesta local. En zonas marginadas, los habitantes han tomado las calles para exigir la prestación de servicios sociales básicos y la garantía de sus derechos

9 En su momento, algunos miembros del movimiento ambiental celebraron como un logro del paro que el Gobierno de Duque se comprometiera a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, más de un año después de las movilizaciones el Gobierno no ha cumplido su promesa, dando la razón a los sectores del ambientalismo popular que criticaron el diálogo nacional y que se retiraron del proceso (Movimiento Nacional Ambiental & otros, 2019).

10 Mayorga et al., (2017, p. 30), al espacializar el indicador de calidad de vida (ICV) en Bogotá, identificó que “presenta un patrón fuerte de concentración de condiciones favorables hacia el área central de la ciudad y de dispersión de condiciones adversas en distintas intensidades hacia la periferia”. Los sectores censales con el menor índice de calidad de vida se encuentran en las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Bosa.

(Alfonso, 2013). Desde hace varios años, por ejemplo, organizaciones sociales y colectivos ubicados en la Medialuna Sur de Bogotá (que une principalmente las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, y en algunos casos también San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y el municipio de Soacha) han reivindicado las movilizaciones masivas en sus territorios como acción política que pugna por revertir asimetrías sociales a través de “estrategias subalternas de localización” (Escobar, 2008, p. 59). Estas prácticas de relocalización de la acción colectiva engloban una importante crítica a la acumulación del poder en el centro político y económico de la ciudad, geográficamente ubicado en la zona oriental, donde tradicionalmente se organizan las grandes marchas y protestas. Una feminista popular, militante de Fuerzas Hermanadas Bosa, que participó en la organización de la marcha feminista del 25-N, testimonia: “Nos quedamos como siempre, pensando que el poder está concentrado en el centro de la ciudad y, pues, el poder está en los barrios” (entrevista, 28 de agosto de 2020).

Si bien, como enfatiza el testimonio, el paro se movilizó en el centro político de la ciudad, una de sus potencialidades emancipatorias se expresó en los modos de acción colectiva propagados y diversificados en los territorios periféricos. Son variadas las experiencias en puntos de la ciudad que tuvieron como efecto el despliegue de un ejercicio transgresor que alteró las rutinas espaciales, repolitizando y agrietando sus mecanismos de gubernamentalidad (Tilly, 2000; Wang, 2019). Fuese a través de marchas que ingresaban a los barrios para ir “recogiéndolos a los manifestantes”, o de múltiples actividades artísticas y culturales que pacíficamente se tomaron por días enteros el espacio público, la protesta se acercó a las realidades de los habitantes en una escala local, superando las distancias y los altos costos de tiempo que implica moverse fuera del territorio y que afectan particularmente a los sectores populares. En consecuencia, la transformación afectiva de la ciudadanía con respecto a la protesta social desbordó patrones socioespaciales a lo largo de la geografía de la ciudad, gracias a la participación de: sectores populares que tenían trayectorias de movilización; sectores populares de poca tradición en protesta social y acción colectiva, como la Asamblea

Local de Usaquén; y sectores de clase media y media-alta, como Chapinero y Teusaquillo¹¹, que generaron en el Parkway y el Parque de los Hippies nuevos circuitos y focos de reunión fuera del centro de la ciudad, superando su construcción histórica como clase apolítica (López-Pederos, 2019; Montero & Peñaranda Currie, 2020).

Por su parte, la localidad de Suba se convirtió en un referente de la protesta y de organización local, tanto por sus masivas movilizaciones como por la temprana conformación de asambleas. Durante la jornada del 21-N, Suba sorprendió con una marcha multitudinaria que llegó a la Plaza de Bolívar y puso la mira en el norte. Desde la invitación al paro, a través del volanteo, hasta las reuniones de planificación de las jornadas en la Plaza Fundacional, la magnitud y alcances de la convocatoria despertaban dudas, puesto que no había certeza de cuánta gente llegaría al punto de encuentro, según testimonios de miembros del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea de Suba (grupo focal, 8 de mayo de 2020). Entre posiciones ganadas a la acción directa y otras que apostaban a la dimensión política del paro, los jóvenes se reunieron a las seis y media de la mañana, en el Portal de Suba, para ver si llegaban más personas y procedían a parar el Transmilenio, o si debían salir de la localidad para buscar otro grupo al cual unirse. Finalmente, un tumulto de gente con un cartel que aludía al paro bloqueó el portal de Transmilenio, y mientras los pasajeros desalojaban los buses

11 Si bien coincidimos en que la forma de acción colectiva en estas localidades es novedosa, esto no quiere decir que no existan precedentes de acción colectiva urbana en algunos de sus barrios de clase media y media-alta. Algunos ejemplos recientes son las movilizaciones en defensa de la séptima, la conformación del grupo ambiental Amigos de la Montaña que ha defendido los Cerros Orientales, las manifestaciones en contra de la peatonalización de la Zona G, y la oposición al Plan Parcial de Renovación Urbana “Ciudad CAN” en Teusaquillo. Por otro lado, es necesario destacar que en estas zonas, en especial Chapinero y Teusaquillo, la securitización para controlar la protesta fue mucho menor, lo que demuestra cómo ciertos lugares de movilización se transforman en puntos donde la ciudadanía alcanza cierta protección frente a medidas de securitización y criminalización; este hecho es consecuencia de la segregación espacial de Bogotá que asigna connotaciones de privilegio y protección de clase a diferentes zonas de la ciudad (Prada-Urbe & González, de próxima publicación).

fueron invitados a la movilización. El bloqueo de portales y vías de Transmilenio hace parte hoy en día de los repertorios de acción más usados por los bogotanos al momento de protestar (Leal, 2020), de manera que no es sorprendente que Suba haya sido una de las primeras localidades donde intervino el ESMAD, que a las siete y media de la mañana ya estaba lanzando gases y dispersando las multitudes. A pesar de ello, los manifestantes continuaron una marcha que avanzó por todos los barrios recogiendo personas hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

En contraste, el proceso de participación de los miembros de la asamblea local de Usaquén (grupo focal, 19 de julio de 2020), empieza a gestarse después de la movilización del 21-N y de forma menos articulada. La protesta en Usaquén estuvo catalizada por la decisión espontánea y desarticulada de transformar los cacerolazos barriales en múltiples marchas nocturnas que terminaron en congregaciones de gente frente a la residencia del presidente Duque. Desde ese día, la residencia se convirtió en un punto constante de protesta, donde llegaban incluso habitantes de otras localidades a descargar su rabia golpeando cacerolas. Un elemento importante de la asamblea de Usaquén fue el rol que los partidos y movimientos políticos alternativos y de izquierda jugaron en la organización de asambleas de los diversos territorios; participación que, al igual que en otras experiencias, como la de Teusaquillo, no estuvo exenta de tensiones y antagonismos. En la localidad de Bosa, por ejemplo, las mujeres de Fuerzas Hermanadas intentaron participar del comité local, pero se retiraron del espacio frustradas y molestas:

Básicamente ella [una militante del movimiento feminista] había sido escogida antes para moderar el espacio [la reunión de la asamblea local de Bosa] con otra compañera, pero la callaron y le dijeron que esa metodología no era. Ella había llevado sus carteles para hacerla como la habíamos hecho [en las asambleas feministas] pero ampliada, y estos manes dijeron que no, que primero tenían que hablar. Después [la asamblea] se convierte en una echadera de discurso que no generó ninguna propuesta territorial, no generó ningún tipo de agenda. Por fortuna, nosotras construimos nuestra agenda y la pasamos a la asamblea sur (entrevista, 8 de abril de 2020).

A pesar de esta circunstancia, la amplia participación en diferentes eventos y procesos asamblearios demuestra que en Bogotá se ha ido configurando una ciudadanía en latencia, una masa de personas inconformes, susceptibles de ser incorporadas a la acción política siempre que se den las condiciones adecuadas. Según pudimos reconstruir, en procesos como las asambleas de Suba y Usaquén, y en experiencias de mujeres y feministas, la protesta permitió el (re)surgimiento de instancias experimentales de democracia participativa local que desbordan las lógicas del modelo hegemónico-institucionalista de democracia representativa (De Sousa Santos & Avritzer, 2004, p. 35).

La movilización se teje desde el movimiento feminista

Las mujeres tuvieron un papel determinante en el paro. En Bogotá no solo participaron masivamente de todas las actividades, sino que a través de sus organizaciones, en particular, y del movimiento feminista, en general, concretaron experiencias de participación propias para reivindicar, también en las protestas, sus derechos y necesidades específicas. Muestra de ello fue la movilización del 25-N que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hicieron, motivaron, gestaron y gestionaron las mujeres. En principio, la planeación y realización de la marcha fue totalmente autogestionada por las organizaciones de mujeres y colectivas feministas¹². Para ello, con el fin de presentar un frente común que trascendiera sus afiliaciones institucionales y de diseñar una semana

12 La reivindicación de la autogestión tiene una historia destacada en la acción colectiva feminista de Bogotá. Durante muchos años las marchas y movilizaciones de mujeres estuvieron principalmente a cargo de organizaciones no gubernamentales (como Sisma Mujer, la Casa de la Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otras) que surgieron como parte del proceso de “ONGenización” del movimiento de mujeres durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina (Lamus Canavate, 2010, p. 96). Sin embargo, en los últimos quince años, más o menos, han empezado a surgir organizaciones y colectivas feministas de estudiantes y populares lideradas por mujeres jóvenes que reivindican la importancia de un movimiento feminista independiente y autogestionado, y que han logrado popularizar el discurso y las prácticas feministas a través del uso de redes sociales (Prada Uribe & Sánchez, 2019).

de movilización unificada y autogestionada, se congregaron bajo el lema “Somos un Rostro Colectivo”. Así lo rememora una integrante de la Batucada Feminista La Tremenda Revoltosa: “Fue un proceso de planificación arduo, que intentó ser lo más horizontal posible y que reunió muchas organizaciones e incluso activistas independientes (...) No solo fue el 25-N, fue toda una semana de hablar de la eliminación de las violencias contra las mujeres” (grupo focal, 10 de julio de 2020).

No obstante, ese movimiento “que no se ha tejido bajo una sola bandera, ni bajo un solo objetivo, [que] se ha tejido de manera colectiva, sorora, cercana” (entrevista, 18 de mayo de 2020, mujer feminista), se enfrentó a diversas problemáticas relacionadas a su articulación con el CNP, a la participación de hombres movilizados en el paro, a los dilemas y paradojas de las instancias de democracia participativa local y a la violencia en el espacio público. Las mujeres que participaron en la “juntanza” que dio pie a la movilización del 25-N desde meses previos a la protesta, sintieron frustración y descontento por el proceder de organizaciones que coordinaban el paro frente a asuntos asociados a la participación de las mujeres, al respeto de sus espacios de congregación y al apoyo en la logística de movilización. Si bien “Somos un Rostro Colectivo” tuvo acercamientos con el CNP para debatir sobre la actividad del 25-N, no fue posible llegar a un acuerdo: “Una de las solicitudes por parte de las centrales era que les diéramos el micrófono en tarima, y uno de nuestros consensos (...) era que no le íbamos a dar el micrófono a un hombre, y menos reconociendo las dinámicas supermachistas que tienen los líderes de las centrales obreras” (Fundadoras de La Morada, entrevista, 5 de octubre de 2020).

Esta situación refleja las tensiones propias de las formas de participación y toma de decisiones en el proceso de articulación y coordinación con el CNP, y da cuenta, también, de las dificultades internas del movimiento feminista y de las mujeres para transversalizar, incorporar y priorizar, en el debate, los puntos de sus agendas. Dificultad que, a pesar del compromiso y duro trabajo adelantado por las militantes, pone de manifiesto, en algunos casos, la persistencia de prácticas machistas y de una división sexual del trabajo expresada tanto

en asambleas, con el uso del tiempo del derecho de palabra, como en la presencia mayoritaria de hombres en cargos de dirigencia (grupo focal, 7 de julio de 2020). Aunque el CNP contaba con la participación de mujeres en los espacios de negociación con el Gobierno, las mesas de las dirigencias en asambleas y reuniones fueron ocupadas mayoritariamente por hombres. Esta monopolización masculina de la palabra y del liderazgo de los espacios de participación llevó a muchas mujeres, como especificaremos adelante, a articularse en ámbitos locales de mujeres y feministas¹³. Sin embargo, las problemáticas inherentes a las formas de participación y toma de decisiones no se dieron solo en el contexto que acabamos de describir. A pesar de los esfuerzos de “Somos un Rostro Colectivo” por unificar las corrientes feministas en Bogotá, hubo tensiones dentro del movimiento. De un lado, y a contramano de la propuesta (realizada por mujeres de las centrales obreras y de algunas agrupaciones políticas) de iniciar la congregación del 25-N en la Plaza de Bolívar¹⁴, “Somos un Rostro Colectivo” (respondiendo a la demanda por la descentralización de la protesta) decidió emprender el recorrido en el Parque Nacional y culminar en la Plaza de la Hoja, por tratarse de un sitio emblemático gracias a su ubicación geográfica, su historia y su valor simbólico. Del otro, este proceso fue visto como “centralista” por algunas de las

13 La identificación del liderazgo con la idea de masculinidad es algo común tanto en la literatura sobre el tema (Reverter-Bañón & Medina-Vicent, 2017) como en la práctica de los movimientos sociales en el mundo. Erica Edwards (2012) ofrece un ejemplo al explicar cómo las narrativas de la importancia de los liderazgos carismáticos en el movimiento afroamericano ha devenido en una violencia epistemológica que reproduce jerarquías de género en la valoración política de las personas al asignar un poder incuestionable a las masculinidades normativas como condición natural de la expresión política.

14 La tensión entre el movimiento feminista y las organizaciones sociales y políticas de izquierda es de vieja data. De hecho, durante la segunda ola feminista en América Latina, las mujeres que participaban en estos movimientos se disputaban con sus compañeros de línea ortodoxa la conformación de una pluralidad de actores revolucionarios, y la interconexión entre producción y reproducción en el sistema de explotación capitalista. Estas contradicciones llevaron a que algunas mujeres identifiquen su participación en la izquierda y en el movimiento feminista con la expresión “doble militancia”, y a que en muchos casos abandonaran las organizaciones políticas (Stoltz Chinchilla, 1992).

mujeres y organizaciones feministas que se estaban reencontrando en los territorios de la Medialuna Sur de la ciudad.

Por otra parte, según pudimos reconstruir en conversación con feministas populares de Ciudad Bolívar, Soacha y Bosa, las mujeres en el sur de la capital se fueron encontrando y reconociendo en las reuniones de organización local antes y después del 21-N. Esta juntanza propició nuevas e interesantes iniciativas: “Un día, hablando nosotras como chicas, dijimos que por qué no nos encontrábamos, pero para hablar como mujeres, para ver cuáles eran nuestras necesidades, acá, en el municipio” (joven feminista popular-comunitaria de Soacha, entrevista, 23 de julio de 2020).

Esta división en el movimiento de mujeres en Bogotá desembocó tanto en la profundización de los espacios asamblearios locales, como en la organización de una marcha independiente de mujeres en el sur de la ciudad por parte de colectivos organizados en los territorios de la Medialuna. El punto de encuentro fue en la avenida Villavicencio, en la localidad de Ciudad Bolívar, y la movilización avanzó por toda la autopista sur hasta la plaza de Soacha: “La actividad era leer el manifiesto y parchar un rato en la plaza, sin embargo, la presencia de la policía nos amenazó todo el tiempo. Así que llegamos y nos sentimos satisfechas de leer el comunicado y parchar ahí un rato después de garantizar unos combos seguros para que se devolvieran a la localidad” (fundadora de la Huerta Wayra del Sur, entrevista, 10 de julio de 2020). La participación de mujeres y feministas también fue muy activa en la organización de asambleas locales mixtas y de mujeres, bien a través de la puesta de voluntades en común (en las asambleas de mujeres de Parkway y la asamblea popular de la plazoleta de la Universidad del Porvenir en Bosa), de metodologías de educación popular y pedagogía feminista, o de la estructuración de relatorías y planeaciones, como el caso de la asamblea local de Usaquén, en tanto estrategias para incorporar y transversalizar, en las agendas, temas de género y de mujeres (grupo focal, 10 de julio de 2020).

Sin perder la autonomía del proceso de movilización de las mujeres en el sur de la ciudad, para el 8 de marzo de 2021 (8-M) estas se articularon con “Somos un Rostro Colectivo”. Esta juntanza

translocal, sin embargo, tuvo dificultades por las concepciones que caracterizaban cada uno de los procesos, puntualmente respecto a las reivindicaciones a enfatizar. Mientras que algunas iniciativas feministas del centro de la ciudad consideraban oportuno enfocar la marcha en el lema “Abortamos el Patriarcado”, las del sur proponían posicionar un mensaje de clase bajo la consigna “Todas Somos Trabajadoras”. Ahora bien, más allá de las actividades del 25-N y 8-M, los repertorios de acción colectiva de las mujeres durante el paro fueron muy variados, se activaron por toda la ciudad y estuvieron articulados, en ciertos casos, desde sus apuestas de relocalización y recomunalización de la vida social (Escobar, 2014, 2020). Ejemplos de estas dinámicas son las actividades organizadas por la Red Comunitaria Trans, que buscó visibilizar la expresión territorial que marca y aniquila los cuerpos de las mujeres trans en el barrio de Santa Fe en Bogotá:

Cuando llegó todo el tema del paro, al inicio [percibimos que] nuestras problemáticas no estaban siendo visibilizadas en el pliego de peticiones. Entonces [tocaba] pensarnos como organización comunitaria –en la cual están asesinando personas trans constantemente, cuando la violencia contra personas trans es tan dura– cómo íbamos a participar de una manera activa (...) Nosotras nos movilizamos, llamamos a la movilización social, salimos a movilizarnos, pero paralelamente también participamos el 12 de diciembre con un cacerolazo en el barrio Santa Fe que se llamó “Yo Paro Trans”, que era donde queríamos decirles: necesitamos que incluyan de manera urgente las necesidades de las personas trans y de las trabajadoras sexuales en el paro nacional (directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, entrevista, 19 de octubre de 2020).

Por otro lado, es preciso señalar que durante la movilización del 25-N algunas mujeres sufrieron agresiones sexuales. Este fue un tema transversal en las discusiones y relatos de las mujeres cuando se abordaron sus experiencias en las marchas. Marcadas por el miedo al acoso y la violencia sexual, no solo por parte de la policía sino también de hombres que acompañan las marchas, ponen de manifiesto las connotaciones de tomar las calles y el espacio público durante una protesta. Geógrafas feministas han demostrado que la

proyección del “miedo femenino” sobre el espacio público es totalmente justificado y racional. No solo porque se trata de un efecto de la socialización que recibimos desde niñas, sino además porque es un mecanismo de defensa que las mujeres desarrollamos para operar en sociedad (Kern, 2020). Aun así, como no podemos operar en una sociedad evadiendo y temiendo a todos los hombres, las mujeres desplazamos parte de nuestro miedo al espacio, esto da sensación de control y de poder eludir “lugares y hombres peligrosos” (Ibid., pp. 148-150). A este panorama se suman las prácticas cotidianas de acoso sexual callejero ampliamente extendidas en Bogotá (Quiñones, 2020), prácticas que parecen recordarnos a las mujeres que existen ciertos lugares que no “debemos” frecuentar (Hille, 1999).

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos dado cuenta de trayectorias y experiencias que durante eventos del paro contribuyeron a transformar las relaciones afectivas de los sujetos participantes. Hay suficiente evidencia de que la rabia, el miedo, la alegría y la solidaridad impactaron significativamente los modos de organización, de construcción de liderazgos, de toma de decisiones y de ocupación del espacio público, como respuesta a la ausencia de un futuro o de *una vida digna de ser vivida* en Colombia. Los manifestantes, especialmente las juventudes, lograron recifrar, reconfigurar y relocalizar los sentidos de la protesta desbordando lógicas de estigmatización y criminalización desplegadas por el Gobierno, sus voceros y los medios tradicionales de comunicación.

Asimismo, los repertorios colectivos de acción demostraron diversidad y abarcaron distintos niveles de la sociedad. Desde lo local hasta lo nacional, desde sectores populares hasta clases medias, desde movimientos sectoriales con demandas específicas hasta la ciudadanía en general, se tejieron redes afectivas de solidaridad y cuidado que forjaron agendas, alianzas y modos de articulación que afectaron la geografía de los acontecimientos.

En un país como Colombia, donde la represión, la criminalización y la estigmatización han formado parte destacada en la relación

histórica de sus habitantes con la protesta, los procesos afectivos que catalizaron el paso del miedo a la indignación y la acción, expresan el papel fundamental de las emociones para dar sentido y forma a la experiencia vital (Salomon, 2018). La conducción efectiva del miedo y la indignación a través del cuidado colectivo y de la ocupación festiva y pacífica del espacio público contribuyó a la producción de la energía emocional necesaria para sostener la movilización.

Aun cuando la trama afectiva y relacional del paro no estuvo exenta de tensiones y antagonismos, una mirada a contrapelo de paradigmas instrumentales nos permite observar, en la multiplicidad de experiencias registradas, mecanismos de expresión a partir de los cuales cuerpos comúnmente invisibilizados, marginados y estigmatizados, se hicieron notar en el espacio público. Por tanto, es posible afirmar que la comunidad afectiva del paro se desplegó más allá de los actores tradicionales de la protesta social.

Desafortunadamente, la frustración ante las negociaciones con el Gobierno, la falta de resultados tangibles y las críticas al Comité Nacional del Paro fueron mellando el impulso movilizador de la ciudadanía. Poco a poco las marchas, las actividades y la participación en asambleas locales decrecieron hasta que las festividades navideñas terminaron de mitigarlas. A pesar de esto, los aprendizajes y las redes de solidaridad no han desaparecido del todo y se han activado en nuevas movilizaciones que recuerdan la potencia social transformadora.

Referencias bibliográficas

- Alfonso, T. C. (2013). *La ciudad en la sombra: barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1977*. Universidad Piloto de Colombia.
- Aminzade, Ronald R., & McAdam, Doug. (2001). Emotions and Contentious Politics. En R. R. Aminzade, J. A. Goldstone, D. McAdam, E. J. Perry, S. Tarrow, W. H. Sewell, & C. Tilley (Eds.), *Silence and voice in the study of contentious politics*. Cambridge University Press.
- Aparicio, J. R., Caicedo, A., Jaramillo, P., Manrique, C. A., & Quintana, L. (2017). Formas de acción política y movimientos populares en Colombia hoy: Anotaciones para pensar un glosario de lo común. En M. Nieto Olarte (Ed.), *Colombia contemporánea: miradas disciplinares diversas*. Ediciones Uniandes.
- Archila Neira, Mauricio. (2019). Trayectorias de las luchas sociales, 1975-2015. En M. Archila Neira, M. C. García Velandia, L. Parra Rojas, & A. M. Restrepo Rodríguez (Eds.), *Cuando la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia, 1975-2015*. CINEP.
- Bessant, J., Pickard, S., & Watts, R. (2020). Translating Bourdieu into youth studies. *Journal of Youth Studies*, 23(1), 76-92. <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1702633>
- Butler, J. (2015). *Notes toward a performative theory of assembly*. Harvard University Press.
- Cancino, D., & Cifras y Conceptos. (2020). *Persiguiendo fantasmas* [Archivo PDF]. <https://drive.google.com/file/d/1oalqQDHuwadRngZ3KeTMnMDQyguJp1Ts/view> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Castro Pozo, M. U. (2011). Retos contemporáneos en los estudios sobre juventud. *Alteridades*, 21(42), 13-32.
- Collins, R. (2004). *Interaction Ritual Chains*. Princeton University.
- Comité Nacional del Paro. (10 de abril de 2019). Convocatoria al Paro Nacional 21 de Noviembre | Contra el Paquetazo de Duque. #ParoNacional. <http://www.paronacional.com/convocatoria/>(consultado el 12 de agosto de 2021).
- Cuestión Pública. (3 de diciembre de 2019). Xenofobia y paranoia en la Bogotá fantasma del toque de queda. *Cuestión Pública*.

- <https://cuestionpublica.com/xenofobia-y-paranoia-en-la-bogota-fantasma-del-toque-de-queda/>(consultado el 12 de agosto de 2021).
- De Sousa Santos, B., & Avritzer, L. (2004). Introducción: Para Ampliar el Canon Democrático. En De Sousa Santos, Boaventura (Ed.), *Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa*. Fondo de Cultura Económica.
- Defender la Libertad un Asunto de Todas. (2019). *Boletín informativo #3: Paro Nacional*. <https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-3-paro-nacional/> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Eckert, J. (2015). Practice Movements: The Politics of Non-Sovereign Power. En D. Della Porta & M. Diani (Eds.), *The Oxford Handbook of Social Movements*. Oxford University Press.
- Edwards, E. R. (2012). *Charisma and the fictions of black leadership* (Vol. 28). U of Minnesota Press.
- El Espectador. (11 de julio de 2019a). Renunció el ministro de Defensa tras escándalo por muerte de menores en bombardeos. *El Espectador.com*. <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/renuncio-el-ministro-de-defensa-tras-escandalo-por-muerte-de-menores-en-bombardeos/>(consultado el 12 de agosto de 2021).
- El Espectador. (23 de noviembre de 2019b). Duque se reúne primero con empresarios y comerciantes que con líderes del paro. *El Espectador.com*. <https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-se-reune-primero-con-empresarios-y-comerciantes-que-con-lideres-del-paro/>(consultado el 12 de agosto de 2021).
- El Tiempo. (26 de septiembre de 2019a). Protestas universitarias en Bogotá fueron infiltradas: Ministro de Defensa. *El Tiempo.com*. <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/protestas-universitarias-en-bogota-fueron-infiltradas-ministro-de-defensa-416874> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- El Tiempo. (9 de noviembre de 2019b). El objetivo no eran los menores, era “Gildardo Cucho”: Mindefensa (e). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/general-navarro-ministro-de-defensa-encargado-habla->

- de-bombardeo-en-el-que-murieron-menores-de-edad-432022(consultado el 12 de agosto de 2021).
- El Tiempo. (28 de diciembre de 2019c). “Epa Colombia” y más indignantes casos de vandalismo en las marchas. *ElTiempo.com*. <https://www.eltiempo.com/bogota/vandalismo-en-bogota-durante-paro-nacional-en-colombia-438204> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- El Tiempo. (13 de febrero de 2019). Discusión entre Gobierno Nacional y Comité del Paro sobre hablar de Negociación o conversación. *ElTiempo.com*. <https://www.eltiempo.com/politica/discusion-entre-gobierno-nacional-y-comite-de-paro-sobre-hablar-de-negociacion-o-conversacion-461854> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Escobar, A. (2008). *Territories of difference: Place, movements, life, redes*. Duke University Press.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre el desarrollo, territorio y diferencia*. Unaula.
- Escobar, A. (2020). *Pluriversal Politics: The real and the possible*. Duke University Press.
- Fals Borda, O. (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina (antología)*. CLACSO/Siglo del Hombre Editores.
- Flam, Helena. (2007). Emotions’ map: A research agenda. En H. Flam & D. King (Eds.), *Emotions and social movements*. Routledge.
- Furlong, A., Woodman, D., & Wyn, J. (2011). Changing times, changing perspectives: Reconciling ‘transition’ and ‘cultural’ perspectives on youth and young adulthood. *Journal of sociology*, 47(4), 355-370. <http://dx.doi.org/10.1177/1440783311420787>
- Garland, D. (2008). On the concept of moral panic. *Crime, Media, Culture*, 4(1), 9-30. <https://doi.org/10.1177/1741659007087270>
- Gómez, P. B., Sepúlveda, V. E. P., & Agudelo, N. V. L. (2011). Narrativas del conflicto sociopolítico y cultural de jóvenes en seis contextos locales de Colombia. *RLCSN*, 9(2).
- Goodwin, J., & Pfaff, S. (2001). Emotion Work in High-Risk Social Movements: Managing Fear in the US and East German Civil Rights Movements. En Jeff Goodwin, James M. Jasper & F. Polletta (Eds.), *Emotion Work in High-Risk Social Movements:*

- Managing Fear in the US and East German Civil Rights Movements*. University of Chicago Press.
- Hage, G. (2009). Waiting Out the Crisis: On Stuckedness and Governmentality. En G. Hage (Ed.), *Waiting*. Melbourne University Press.
- Hemmings, C. (2012). Affective solidarity: Feminist reflexivity and political transformation. *Feminist Theory*, 13(2), 147-161. <https://doi.org/10.1177%2F1464700112442643>
- Hille, K. (1999). 'Gendered exclusions': Women's fear of violence and changing relations to space. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 81(2), 111-124. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.1999.00052.x>
- Jasper, J. M. (2018). *The emotions of protest*. University of Chicago Press.
- Jones, G. (2009). *Youth*. Polity.
- Kern, L. (2020). *Feminist city: Claiming Space in a Man-made world*. Verso.
- Klandermans, B. (1984). Mobilization and participation: Social-psychological expansions of resource mobilization theory. *American sociological review*, 583-600.
- La República. (23 de diciembre de 2019). Jóvenes, los verdaderos personajes de Colombia en el 2019 ¿y el 2020? *La República*. <https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos-final-2019/jovenes-los-verdaderos-personajes-de-colombia-en-el-2019-y-el-2020-2947231>(consultado el 12 de agosto de 2021).
- Lamus Canavate, D. (2010). *De la subversión a la inclusión: Movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975-2005*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Leal, D. F. (2020). Mass Transit Shutdowns as a Tactical Innovation in Bogotá, Colombia. *Social Currents*, <https://doi.org/10.1177/2329496520906826>
- Leyes desde 1992 / Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1622_2013]*.(s.f.).https://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Ley_1622_2013.pdf (consultado el 12 de agosto de 2021).
- López-Pedrerros, A. R. (2019). *Makers of Democracy: A Transnational*

- History of the Middle Classes in Colombia*. Duke University Press.
- Lorde, A. (1987). The uses of anger: Women responding to racism. *Women and Language*, 11(1), 4.
- Mantilla, A. (30 de diciembre de 2019). 2020: El Porvenir del Paro. *La Siniestra*. <https://lasiniestra.com/?s=Paro+Nacional+21>
- Marín Guzmán, F. (24 de diciembre de 2019). Hace un mes: 10 ideas para explicar por qué del 21-N al 21-D hay mucho más que un mes de distancia. *Revista Hekatombe*. [https://www.revistahekatombe.com.co/hace-un-mes-10-ideas-para-explicar-por-que-del-21-n-al-21-d-hay-mucho-mas-que-un-mes-de-distancia/\(consultado el 12 de agosto de 2021\)](https://www.revistahekatombe.com.co/hace-un-mes-10-ideas-para-explicar-por-que-del-21-n-al-21-d-hay-mucho-mas-que-un-mes-de-distancia/(consultado%20el%2012%20de%20agosto%20de%202021)).
- Martin, D. G. (2016). Places Frames: Analysing Practice and Production of Place in Contentious Politics. En W. Nicholls, B. Miller, & J. Beaumont (Eds.), *Spaces of contention: Spatialities and social movements*. Routledge.
- Martin, D., & Shaw, D. (s. f.). Chilean and Transnational Performances of Disobedience: Las Tesis and the Phenomenon of “Un violador en tu camino”. *Bulletin of Latin American Research*, n/a (n/a). <https://doi.org/10.1111/blr.13215>
- Mayorga, J. M., García, D. M., & Hernández, L. (2017). Calidad de vida y su correlación con los precios del suelo: Aproximación a la segregación residencial en Bogotá. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 10 (19), 22-41.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American journal of sociology*, 82 (6), 1212-1241.
- Montero, S., & Peñaranda Currie, I. (2020). An Urban Perspective on the Colombian “Paro Nacional”. Spotlight On Urban Revolts. *Spotlight On, International Journal of Urban and Regional Research*. [https://www.ijurr.org/spotlight-on/urban-revolts/an-urban-perspective-on-the-colombian-paro-nacional/\(consultado el 12 de agosto de 2021\)](https://www.ijurr.org/spotlight-on/urban-revolts/an-urban-perspective-on-the-colombian-paro-nacional/(consultado%20el%2012%20de%20agosto%20de%202021)).
- Movimiento Nacional Ambiental, & otros. (2019). *Comunicado de Defensores-as de la naturaleza y de los derechos de las comunidades. Respecto del Diálogo Nacional Ambiental con el Presidente Duque*. <https://drive.google.com/file/d/147xycy3Irm4VPTFLRfx>

- 1qWCUqWqsW3mxy/view (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Osorio Pérez, F. E. (2016). Campos en movimiento. Algunas reflexiones sobre acciones colectivas de pobladores rurales en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 52(1), 41-61. <https://doi.org/10.22380/2539472X2>
- Ospina Martínez, M. A. (2020). “Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán” Altares efímeros del 21-N al 28N. *Boletín OPCA*, 16, 8-24.
- Prada Uribe, M. A., & Sánchez, R. (2019). Conectad@s: La movilización digital de las ideas feministas en Colombia. En *El Futuro de la Abogacía: Ciberespacio, Ciberseguridad y Ciberjusticia en la Era Digital*. Universidad del Rosario.
- Prada-Uribe, M. A. (2020). *¿(In)acción colectiva en los Cerros Orientales de Bogotá? La Mesa Ambiental de los Cerros Orientales: “Ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros”* [Magíster en Antropología]. Universidad de los Andes.
- Prada-Uribe, M. A., & González, A. (de próxima publicación). El estado no nos cuida: Atmósferas de (in)seguridad en el ejercicio del derecho a la protesta en Bogotá. *Latin America Law Review*.
- Presidencia de la República. (2020, febrero 28). *Intervención del Presidente Iván Duque en la novena Conversación Nacional en Pereira*. Presidencia de la República. <https://id.presidencia.gov.co:443/Paginas/prensa/2020/Intervencion-del-Presidente-Ivan-Duque-en-la-novena-Conversacion-Nacional-en-Pereira-200228.aspx> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Quintana, L. (25 de noviembre de 2019). La afectividad de la protesta: Entre el miedo y la esperanza. *La Sinistra*. <https://lasinistra.com/la-afectividad-de-la-protesta-entre-el-miedo-y-la-esperanza/> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Quintana, L. (2020). *Política de los cuerpos: Emancipaciones desde y más allá de Jacques Rancière*. Herder Editorial.
- Quiñones, L. M. (2020). Sexual harassment in public transport in Bogotá. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 139, 54-69. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.06.018>
- Restrepo, C. M. P. (2005). Joven, crimen y estigma. *Quórum. Revista de*

- pensamiento iberoamericano*, 12, 65-94.
- Reverter-Bañón, S., & Medina-Vicent, M. (2017). Intersecciones entre liderazgo y feminismo. *Dossiers feministes*, 22, 5-12. <http://dx.doi.org/10.6035/Dossiers.2017.22.1>
- Santos Rubino, A. (21 de diciembre de 2019). Personaje del año: El grito de la juventud. *Semana.com*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/personaje-del-ano-2019-de-semana-el-grito-de-la-juventud-en-medio-de-las-protestas/646012/> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Semana. (19 de noviembre de 2019a). Policía hace allanamientos y organizaciones los califican como una provocación previa al paro. *Semana.com*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-21-de-noviembre-policia-hace-allanamientos-y-organizaciones-los-califican-como-una-provocacion/640852/> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Semana. (23 de noviembre de 2019b). Los hilos ocultos tras el fenómeno en las calles. *Semana.com*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/que-hay-detras-de-la-violencia-en-el-paro-nacional-del-21-de-noviembre/641839/> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1992). Master Frames and Cycles of Protest. En A. D. Morris & C. McClugher Mueller (Eds.), *Frontiers in Social Movement Theory*. Yale University Press.
- Solomon, R. C. (2008). *True to our feelings: What our emotions are really telling us*. Oxford University Press.
- Stoltz Chinchilla, N. (1992). Marxism, Feminism, and the Struggle for Democracy in Latin America. En A. Escobar & S. Álvarez (Eds.), *The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy and Democracy*. Routledge.
- Stürmer, S., & Simon, B. (2004). The role of collective identification in social movement participation: A panel study in the context of the German gay movement. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 30(3), 263-277. <https://doi.org/10.1177%2F0146167203256690>
- Taylor, V., & Rupp, L. (2002). Loving internationalism: The emotion culture of transnational women's organizations, 1888-1945.

- Mobilization: An International Quarterly*, 7(2), 141-158. <https://doi.org/10.17813/maiq.7.2.fw3t5032xkq5l62h>
- TeleSurTv. (22 de noviembre de 2019). *Duque condena vandalismo durante paro nacional en Colombia*. TeleSurTv.net. <https://www.telesurtv.net/news/duque-vandalismo-paro-nacional-colombia-20191122-0001.html> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Tilly, C. (2000). Spaces of contention. *Mobilization: An International Quarterly*, 5(2), 135-159.
- Universidad del Rosario. (2020). *¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?* [Archivo PDF]. Universidad del Rosario. <https://www.urosario.edu.co/Imagenes/2020/Informe-Que-piensen-sienten-y-quieren-los-jovenes.pdf> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). The social psychology of protest. *Current Sociology*, 61(5-6), 886-905. <https://doi.org/10.1177%2F0011392113479314>
- Wang, X., Ye, Y., & Chan, C. K. (2019). Space in a social movement: A case study of Occupy Central in Hong Kong in 2014. *Space and Culture*, 22(4), 434-448.
- Zapata Cardona, C. A., & Hoyos Agudelo, M. (2005). ¿Existe una condición de juventud indígena? *Nómadas (Col)*, 23, 28-37. <https://doi.org/10.1177%2F1206331217751805>

**NO EMPEZAMOS AYER
NI NOS CANSAREMOS MAÑANA**
Prácticas alternativas
a raíz del 21-N en Colombia

PABLO OSPINA¹

1 Historiador. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política; integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg.

Mi comentario busca complementar los temas tratados en la investigación precedente², reflexionando sus conexiones con el debate sobre las estrategias de transformación social y política. El trabajo se centró en mostrar los efectos y las dinámicas subjetivas desencadenadas por la extendida movilización callejera. Un complemento necesario es reflexionar sobre las razones subyacentes del ciclo de protesta social en Colombia, que se intensificó a partir del año 2008. El contexto preciso de esa intensificación es que las oportunidades abiertas para la movilización social por la derrota política y militar de las FARC, solo podían madurar apropiadamente en el marco de una división de las élites gobernantes.

La lenta descomposición del uribismo (todavía lejos de ser suficiente) que se expresó en el conflicto con Juan Manuel Santos y luego en la caricatura borrosa, grotesca y torpe de Iván Duque, favoreció un cambio sustancial en las emociones dominantes entre las juventudes: el miedo fue superado por la indignación. En efecto, la derrota de las FARC terminó por debilitar socialmente la efectividad de los discursos que legitimaban la desmovilización y la represión porque asociaban la movilización social a una violencia armada que había perdido apoyo popular. Entonces, se ve un resurgimiento de las grandes movilizaciones en tiempos recientes, estudiantiles, anti-mineras y en defensa de los territorios: todas ellas estuvieron acalladas durante la guerra, y ahora tienen espacio para manifestarse más abierta y descaradamente.

Los motivos de indignación contra los efectos de las políticas neoliberales, de ajuste y de despojo territorial, existían desde antes del auge del ciclo. Pero el uribismo en su mejor momento político podía aplicarlas y legitimarlas mediante su apelación a la lucha sin cuartel

2 “Parar para avanzar / Sentir y actuar el paro nacional de 2019 en Colombia”, p. 231.

contra las guerrillas. Ya no pueden. Las movilizaciones se despliegan en las costuras de la crisis de esos modos de legitimación del ejercicio del poder. Y cuando se desatan, los ciclos ascendentes de movilización social comandan las formas y varios de los sentidos en que se politizan los sectores populares y los jóvenes que intervienen en ellas. La discusión sobre las “estrategias de transformación” es muy relevante sobre este telón de fondo de politización y radicalización de grupos que participan en la protesta.

En efecto, tal como sugiere la investigación de Lombana y Prada, los períodos de auge de las acciones colectivas de protesta no solo operan en el plano de las correlaciones de fuerza política y social; no solo debilitan al adversario y activan los grupos sociales que convocan o lideran la protesta. También ayudan a configurar la subjetividad de los participantes: canalizan sentimientos de autoconfianza, de orgullo y de valoración de las capacidades propias, así como el apoyo mutuo y la protección colectiva en momentos de riesgo. Despliegan numerosas iniciativas que refuerzan la propia creatividad, tanto de expresión como de difusión de mensajes de indignación largamente atorados en la garganta y que pugnan por salir. Tejen redes de solidaridad y amplían la audiencia de los convocados; activan efectos subjetivos y políticos sobre los jóvenes que ratificaron su militancia o que la iniciaron con estas protestas.

En largas discusiones sobre las “estrategias de transformación” se ha debatido ampliamente sobre el papel del Estado y su relación con los movimientos sociales. Pero también han surgido voces que señalan sus límites. Recuerdo vívidamente una intervención de hace un par de años en la que se afirmaba que ni el Estado ni los movimientos sociales eran categorías decisivas para el impulso de la transformación, sino la identificación de *prácticas* alternativas. Ejemplo de estas prácticas podrían ser las actividades de solidaridad comunitaria desarrolladas al margen y en contraposición al orden y la lógica dominante. El ciclo de movilizaciones continental y mundial del año 2019, incluyendo la auténtica revolución que presenciamos en Estados Unidos contra el racismo colonial persistente, vuelve a poner sobre la mesa el papel crucial de la acción colectiva en la transformación. Al hacerlo, no invalida las críticas a la efectividad de

la movilización social, sino que resalta la necesidad de algún tipo de *combinación* de estrategias variadas: la acción estatal, la movilización social y la creación de prácticas alternativas en las fisuras del sistema. En lo que resta de este texto, quiero examinar *indicios* de posibles formas de combinación de estrategias, determinar sus potencialidades y límites, tal como emergen de la reciente experiencia de movilización social en Colombia.

En una modalidad típicamente colombiana, las movilizaciones pusieron en primera línea del debate político el problema de la violencia. La acción colectiva siempre se confronta con este problema, que está todos los días en el debate norteamericano, y que se discierne sin dificultad en los octubres ecuatoriano y chileno. La descalificación mediática y gubernamental más estridente respecto a las protestas es que se trata de grupos violentos, caóticos y vandálicos. A su vez, una de las más importantes formas de autolegitimación de los manifestantes es la manera en que se protegen de la represión estatal, responden ante ella, se cuidan entre sí. La consigna “sin violencia, sin violencia”, en las movilizaciones colombianas, era un intento de arrebatar esa arma de legitimación al adversario, al tiempo que buscaba volverla propia, en un contexto claramente desfavorable para la violencia abierta. Es cierto que sin el desorden, el enfrentamiento callejero y la efusión de rebeldía, las manifestaciones probablemente no tendrían efecto político alguno. Gente con pancartas en las aceras, sin hacer ruido y sin molestar a nadie, no consigue el altavoz de los medios ni de la opinión. Pero hacerlo de tal manera que la violencia pueda ser clara y definitivamente atribuida al adversario, es sin duda un aspecto central tanto de la legitimación social y del atractivo popular, como de la capacidad de autolegitimación de los rebeldes.

El enfrentamiento a la policía suele ser un rasgo altamente masculinizado de la movilización social, y se asocia a varios de sus valores tradicionales. Las movilizaciones colombianas han mostrado que el control de esa violencia imposible de evitar, y el rol central de legitimación que supone, pueden jugar papeles destacados en la mezcla de estrategias: usar el arte, la música, el teatro, la comunicación en redes. Al mismo tiempo, en las labores de cuidado y de

autoprotección colectiva, las movilizaciones callejeras convocan a sumarse a una multitud de experiencias organizativas centradas en “prácticas alternativas”.

Quizá más importante, la participación juvenil en las movilizaciones revela una aguda desconfianza hacia los partidos, el sistema político y también hacia las formas tradicionales de organización sindical, expresada en la crítica al verticalismo del Comité del Paro. Esta crítica es frecuente en todos los colectivos de jóvenes, desde el ambientalismo hasta el feminismo, pasando por artistas y comunicadores sociales. El problema es que las formas descentralizadas y asamblearias funcionan para ciertas cosas y hasta cierto punto. ¿Cómo evitar interminables reuniones que duran hasta la madrugada con una sucesión de discurso tras discurso, para llegar a alguna negociación entre posiciones dispares y resolver discrepancias de estrategia, de táctica o de agenda? Cualquier combinación de la lucha callejera con las políticas públicas requiere ese trabajo de negociación tan vilipendiado. ¿Qué formas de organización y qué estructuras de coordinación son necesarias para hacer viable la articulación en la política cotidiana? No parece razonable suponer que las relaciones de poder o los conflictos (a veces ásperos) entre diferentes perspectivas políticas puedan sencillamente eludirse acudiendo a la buena voluntad, la convicción o la moral revolucionaria. Se necesitan reglas diferentes, efectivas y acordadas para procesar las diferencias. Sin embargo, ninguna solución elimina la negociación, las discusiones interminables y aburridas, ni los espacios de controversia: la solidaridad y el afecto pueden existir, pero cuando se despliegan poderosamente también hacen que los conflictos por posiciones dispares sean vividos de formas más intensas, frustrantes y desgarradoras.

El contraste entre el papel de la CONAIE en Ecuador con el rechazo absoluto a toda forma autorizada de dirección en Chile, y con Colombia, que cae en algún lugar en el medio, nos sirve muy bien como plataforma para seguir debatiendo un aspecto central de toda combinación posible de estrategias de transformación. Esa hibridación será el fruto de alguna deliberación consciente y de alguna vía de acuerdo político entre grupos, posiciones e intereses

divergentes. Los modos de organización y de autoridad delegada que la organización supone (y de arreglo para la toma de decisiones conjuntas), no siempre están en la agenda de los jóvenes.

Movilización, prácticas alternativas, transformación y subordinación del Estado a la sociedad. Esa vieja agenda de discusiones de todas las revoluciones y las luchas revolucionarias del pasado, vuelve ahora con nuevos elementos e indicios de posibles conjugaciones gracias a la historia y a la creatividad siempre renovada de las luchas sociales. La gente, con su experiencia, inventa lo nuevo a partir de la arcilla de todo lo viejo que parecía abandonado. El nuevo ciclo de movilizaciones sociales no debería hacernos repetir las discusiones del pasado, sino llevarlas a un nuevo lugar porque no empezamos ayer ni nos cansaremos mañana.



PERÚ

PODER DE VETO POPULAR
Revolta social y elecciones
en el Perú del bicentenario republicano

CARMEN ILIZARBE¹

1 Antropóloga y magíster en Ciencia Política. Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

*¿Alguien imaginó ver (ser) un mar de gente
gritando a una sola voz?*

YAGO MARTÍNEZ

Introducción

En noviembre de 2020, en una semana para los libros de historia peruana, una multitudinaria movilización nacional resultó determinante para impedir que se consolidara un golpe de Estado impulsado desde el Congreso de la República. En medio de la pandemia de covid-19 y de una grave crisis social, económica y política, la gente inundó calles y plazas de las ciudades más importantes del país hasta forzar la renuncia del Gobierno que denunciaba como usurpador. La juventud fue corazón y rostro visible de la movilización popular, marcando el pulso, el ritmo y el discurso de una revuelta cuya efectividad sorprendió a todos. La inmediatez y espontaneidad de la respuesta, la rápida generación y articulación de formas de organización para la acción política, el despliegue de creativas estrategias de intervención pública, y la expansión de un ánimo de resistencia combativa por todo el país, fueron indicadores claros de la contundencia de un poder de veto desplegado anónima y masivamente. Fue una expresión de soberanía popular que se reveló como última línea de defensa de la arrinconada democracia electoral peruana a la que, contra todo pronóstico, logró sostener.

El éxito de esta emergencia popular –en su doble sentido de surgimiento y urgencia– está muy ligado a las excepcionales circunstancias en que se desarrolló. El contexto específico incluye factores estructurales y coyunturales que resultaron determinantes. En primer lugar, la fuerte desestructuración del sistema de representación política que se expresa en el colapso del sistema de partidos políticos

(Tanaka, 1998; Tanaka, 2005; Zavaleta, 2014) ha implicado que la democracia de corte liberal implantada en el año 2000 opere sin mecanismos adecuados de intermediación de las demandas sociales, frente a lo cual se han instituido informalmente modos de autorrepresentación directa, entre los que están las protestas ciudadanas (Remy, 2005; Ilizarbe, 2016), pero también los *lobbies*, e incluso formas de captura del Estado como las “puertas giratorias” (Durand, 2018). Dicho de otro modo, en el Perú las protestas no son hechos anormales o extraordinarios, son formas de participación política popular a las que se recurre de manera sostenida frente a la imposibilidad de hacerse escuchar por otros canales.

En segundo lugar, la movilización popular se produjo en respuesta a una crisis constitucional consecuencia del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República que terminó con la renuncia forzada del presidente legítimamente elegido en 2016, Pedro Pablo Kuczynski, e incluso del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien asumiera el mando en relevo de Kuczynski de acuerdo a la línea de sucesión planteada por la Constitución². La caída del presidente Vizcarra puso en evidencia la crisis institucional peruana y la imposibilidad de resolver el grave enfrentamiento con mecanismos previstos, y fue así que el país entró en un tiempo de política excepcional y se dio paso a un Gobierno de transición directamente asentado en la voluntad popular.

En tercer lugar, las graves consecuencias sociales y económicas que la pandemia de covid-19 produjo en el país³ catalizaron de forma decisiva la quiebra del relato neoliberal en un Perú que se imaginaba en un eterno crecimiento macroeconómico (Ilizarbe, 2020).

2 He reseñado la victoria de Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori en este artículo: <https://theglobalobservatory.org/2016/06/peru-kuczynski-fujimori-president-election/>; asimismo, he analizado el enfrentamiento inicial entre el Congreso liderado por el fujimorismo y el Gobierno de Kuczynski aquí: <https://carmenilizarbe.lamula.pe/2016/12/10/gobierno-bicefalo/carmenilizarbe/> (consultado el 12 de agosto de 2021).

3 En el Perú la pandemia se entiende mejor como una *sindemia*, es decir como la interacción de la pandemia con las condiciones estructurales de desigualdad socioeconómica, cuyo efecto más visible para el Perú fue el doloroso récord del mayor número de muertes per cápita por covid-19 del mundo. Ver al respecto el reporte sobre el Perú de la Universidad Johns Hopkins: <https://coronavirus.jhu.edu/region/peru> (consultado el 12 de agosto de 2021).

Así, los efectos de la pandemia permitieron, primero, la formulación pública de preguntas sobre el rol del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, vivienda y educación; segundo, la reivindicación de la solidaridad y las formas colectivas de acción ciudadana para la sobrevivencia; y tercero, la visibilización pública de la desigualdad, expresada no solo en las carencias de muchos, sino especialmente en los privilegios de pocos que por tener dinero e influencias no sufrían gravemente los efectos de la pandemia.

En ese complejo contexto emergió multitudinaria y contundentemente la sociedad politizada. ¿Cómo fue posible articular esta forma de resistencia popular en un contexto tan difícil? ¿Quiénes protagonizaron la revuelta y cuál fue su agenda? ¿Cuál fue el impacto de la movilización social y de qué manera contribuye a fortalecer la democracia? Este escrito argumenta que las protestas de noviembre de 2020 deben ser entendidas como manifestación reactiva de la soberanía popular que logró articular un poder de veto, suficiente para detener un fuerte ataque a la democracia electoral, pero insuficiente para articular un movimiento o plataforma de acción democrática propositiva. El análisis se centra en describir los hechos y sus protagonistas, así como en ponderar sus efectos en la política nacional.

Acción y reacción: emergencia popular en defensa de la democracia

Todo empezó el día lunes 9 de noviembre, cuando se aprobó en el Congreso un proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra⁴ con los votos de 105 congresistas de un total de 130. Era

4 El artículo 113 de la Constitución establece que la presidencia puede ser declarada vacante por el Congreso en diversas circunstancias, entre las que se encuentra la declaración –por el Congreso– de incapacidad física o moral permanente. La figura ambigua de *incapacidad moral permanente* se utilizó para acusar al presidente de corrupción, citando una denuncia infundada. Esta interpretación del artículo 113 contradecía al artículo 117 que estipula que el presidente solo puede ser acusado por traición, obstaculización de procesos electorales y clausura inconstitucional del Congreso. Todas las demás denuncias proceden una vez que ha acabado su mandato.

la cuarta vez que se invocaba la figura de la vacancia presidencial en el período de Gobierno 2016-2021, era el segundo presidente de la república forzado a renunciar, y era el punto culminante de un enfrentamiento entre dos poderes del Estado que terminaba por definirse a favor de una coalición partidaria vinculada al fujimorismo en el Congreso. El enfrentamiento había tenido varios puntos culminantes: censura de ministros y gabinetes, el cierre constitucional del Congreso por acción del presidente Vizcarra⁵, la elección de un nuevo Congreso en las urnas, un referéndum convocado por el presidente para iniciar una reforma política, y los procesos de vacancia iniciados en contra de los presidentes Kuczynski y Vizcarra. Finalmente, cuando solo faltaban cinco meses para la elección de un nuevo Gobierno, la coalición partidista logró los votos suficientes para deponer al presidente y nombrar un nuevo Gobierno desde el Congreso, en medio del desconcierto de un país que a duras penas enfrentaba las desastrosas consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

La indignación sucedió inmediatamente al desconcierto, y luego abrió paso a la furia encarnada en el puñetazo que el joven Carlos Ezeta le propinó en el rostro a un congresista cuando defendía la maniobra política en una conferencia de prensa⁶. Ese *golpe* marcó el inicio de la frontal respuesta popular, en lo que sería un ejercicio de fuerza dispar y finalmente victorioso para la protesta ciudadana. La reacción fue masiva e inmediata, frente a un acto rápidamente calificado en redes sociales como golpe de Estado. Esa misma noche hubo plantones y protestas en distintas ciudades del país, y en los siguientes cinco días la movilización fue permanente. Una marcha nacional fue convocada para el día jueves 12 de noviembre, y luego

5 El artículo 134 de la Constitución establece que el presidente puede disolver el Congreso después de haber censurado dos gabinetes, excepto durante el último año de gobierno. El Congreso censuró un gabinete durante el mandato del presidente Kuczynski y un gabinete durante el mandato del presidente Vizcarra. El Tribunal Constitucional confirmó la corrección de la disolución (0006-2019-CC / TC).

6 Ver el recuento de este suceso aquí: <https://elcomercio.pe/lima/vacancia-presidencial-entre-conos-y-punetazos-cuando-la-indignacion-ciudadana-se-desborda-y-se-convierte-en-violencia-carlos-tubino-carlos-ezeta-nczg-noticia/> (consultado el 12 de agosto de 2021).

otra, más grande aún, ocurrió el sábado 14. Entre las varias formas de justificar la activación social se había invocado el artículo 46 de la Constitución de 1993, que se titula *Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia* y dice: “Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

Luego de la respuesta inmediata, la protesta se sostuvo y empezó a crecer con el visible apoyo de una gran mayoría en el país. Se hizo evidente al cabo de cinco días que la gente no se desmovilizaría hasta derrocar a Manuel Merino, aun enfrentando una violenta represión policial que dejó como trágico resultado el asesinato de dos jóvenes, decenas de personas secuestradas y centenares de personas golpeadas y gaseadas por ejercer sus derechos ciudadanos, políticos, constitucionales. La contundencia de la protesta se apreció en la toma masiva y descentralizada de calles y plazas del país con banderolas, pancartas, lemas y cantos; en los memes, las *performances*, los grafitis, los *gifs* y los videos de TikTok que circularon intensamente por todas las plataformas virtuales disponibles. También se expresó en la exitosa convocatoria a un cacerolazo permanente que con el lema “todas y todos podemos protestar” se hacía sentir cada noche, demostrando que había que contar entre quienes protestaban no solo a quienes lo hacían en calles y plazas. La fuerza de la protesta se evidenció incluso en las encuestas, que reportaron una participación directa del 63% de la población, y un 86% de respaldo o aprobación (IPSOS, 2020; IEP, 2020). En el espacio público se dio una buena combinación de la dimensión material de la calle –distanciamiento social de por medio–, con la dimensión virtual de las redes sociales, hecho que acercó a las esferas públicas regionales y nacional, generando un sentido de unidad muy particular en una coyuntura de crisis multifactorial.

La protesta adquirió rápidamente un sentido de unidad nacional, expresado en la apropiación épica de la bandera como símbolo de lucha popular. En el Perú del siglo XXI se ha vuelto usual ver ondear una inmensa bandera rojiblanca sobre una multitud

que protesta en defensa de la democracia. Así ocurrió, quizá por primera vez, en la histórica Marcha de los Cuatro Suyos⁷ contra la reelección ilegal de Alberto Fujimori en el año 2000. Así también había ocurrido en las protestas organizadas por el Colectivo No A Keiko (NAK) contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016 (Fernández-Maldonado y Navarro, 2016). Todas estas protestas alcanzaron nivel nacional, fueron multitudinarias, afirmaron la dimensión electoral de la democracia, y excedieron largamente las formas de organización y los planteamientos de los partidos políticos. Hay, sin embargo, una importante diferencia entre la protesta del año 2000 contra A. Fujimori y la de 2020: esta última logró derrocar al Gobierno golpista, la primera no. Es preciso resaltar aquí dos cosas: 1) en los veinte años transcurridos desde el 2000 se ha consolidado un poder de veto, una forma de soberanía popular reactiva y defensiva que cohesiona a una sociedad politizada alrededor de una demanda identificada como de unidad nacional; y 2) ha habido un proceso de afirmación y aprendizaje en la construcción de una plataforma ciudadana comprometida con la democracia electoral y la lucha contra la corrupción. Los veinte años que median entre la Marcha de los Cuatro Suyos y la revuelta popular de noviembre de 2020 son años de afirmación de una forma exitosa de control ciudadano (Rosanvallon, 2010).

En noviembre de 2020 la bandera volvió a ondear sobre la enorme multitud, pero esta vez hubo que defenderla de la policía que —como documentan numerosas fotos que circularon en las redes virtuales— pugnaba por arrancarla de las manos de quienes protestaban, incluso pisándola (Nolte y Rodríguez, 2020, p. 8). El relato épico más difundido fue la fotografía de la batalla campal entre policías y jóvenes, en que una bandera agujereada a balazos ondeaba en medio de ambos grupos (Nolte y Rodríguez, 2020, p. 68). La foto evocó el escenario donde los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron asesinados a tiros, la noche del 14 de noviembre. Inmediatamente fueron

7 He analizado la Marcha de los Cuatro Suyos aquí: https://www.academia.edu/3776255/Lo_extraordinario_lo_diverso_y_una_pregunta_sobre_la_unidad_A_diez_años_de_la_marcha_de_los_cuatro_suyos (consultado el 12 de agosto de 2021).

nombrados “héroes del bicentenario” y se acuñó la frase “generación del bicentenario” para designar la juventud que claramente lideró la revuelta.

Protagonistas y agendas plurales y desiguales

¿Hasta qué punto es pertinente hablar de una revuelta joven, generacional? Cuando se habla de generaciones se piensa en cohortes, en grupos etarios que comparten experiencias y valores; es decir, se refiere a grupos que comparten circunstancias y están cohesionados alrededor de ciertos sentidos. Asimismo, se usa el término “generación” para señalar la capacidad de crear algo nuevo. En ese sentido, la frase “generación del bicentenario” captó positivamente la imaginación de mucha gente que participó en la protesta y permitió que se reconociese el liderazgo de una juventud a quien por lo general se retrata como extremadamente individualista, capturada por la tecnología y desinteresada del acontecer nacional.

Como ha planteado quien acuñó la consigna en un *tweet*: “La frase intentó canalizar un sentimiento que navegaba entre los cánticos y carteles: ‘se metieron con la generación equivocada’. No podemos negar un espíritu colectivo detrás de cada rostro. Encontramos coincidencias en edades, expresiones, repertorios de protesta, formas de organización, formas de uso de las redes sociales, la actitud burlesca frente a los estigmas, y el uso de la consigna ‘no nos vamos a quedar callados’” (Chávez, 2020, p. 28). A la vez, la frase fue rápidamente utilizada en medios masivos de comunicación para invisibilizar la pluralidad, diversidad e incluso desigualdad que incluía la movilización liderada por jóvenes.

El testimonio de Yago Martínez, comunicador de la ciudad de Trujillo en el norte peruano, enfatiza la diversidad de quienes desde los márgenes irrumpen en el centro político, y lo hacen recuperando espacios, derechos, voz, emoción, comunidad, y contacto físico. Después de largos meses de encierro, el regreso combativo a la calle y a la política fue también un signo de la recuperación del cuerpo social y del espacio público.

¿Alguien imaginó ver (ser) un mar de gente gritando a una sola voz? ¿Alguien pensó que la “generación de cristal” desactivaría bombas y combatiría cuerpo a cuerpo la represión fascista? ¿Alguien pensó que TikTok, los otakus y los K-pop se transformarían en verdaderos guerrilleros digitales? Fueron más de siete meses los que nos tuvieron contenidos, sin caches, sin trabajo, sin amigos, sin posibilidad de duelo por la muerte de nuestros seres queridos, sin escape, soportando a nuestras familias, sin juergas ni salidas, con hartazgo y desgastados física y emocionalmente. Todo ese hartazgo y esa arrechura masiva y colectiva se volcaron en una gran revuelta a lo largo y ancho del país. Aquí en Trujillo nos fuimos contra los locales del APRA, FUERZA POPULAR y ALIANZA PARA EL PROGRESO: nunca más, la politiquería del narcotráfico y la estafa. Y no fueron los de siempre quienes se pusieron en primera línea. Fuimos los débiles, los desviados, las feministas, los maricones, las tracas, los comunistas —despreciados y terruqueados por el pueblo que salieron a defender— las juventudes desideologizadas, los bailes celebratorios, el reggaetón; en fin, las, los y les que no teníamos nada que perder excepto nuestra dignidad. Aquí hubo colectivas verdaderamente heroicas: 8-M, Paro Internacional de Mujeres, Izquierda Estudiantil, Bloque LGBTQ+, entre otros (Rodríguez y Nolte, 2020, p. 51).

En el testimonio de Yago Martínez resaltan varias de las características de la movilización popular: el liderazgo juvenil que irrumpió con fuerza gracias a su particular vínculo con la tecnología y las redes virtuales, el ánimo celebratorio que contrastaba con la dinámica fragmentaria y aislacionista del distanciamiento social, la capacidad de organización que incluyó acciones como “desactivar bombas”, actuar como “guerrilleros digitales”, y “ponerse en primera línea”. También destaca la diversidad y desigualdad que conforma al colectivo, “los débiles, los desviados, las feministas, los maricones, las tracas, los comunistas”, así como el rol preponderante de quienes sufren distintas formas de estigmatización, “despreciados y terruqueados por el pueblo que salieron a defender”. Finalmente, se resalta el carácter rebelde y transgresor de la protesta: “revuelta”, rebelión, resistencia, insurgencia popular. Y en conjunto, resulta central la celebración del espacio comunitario, colectivo, masivo, emotivo y sensorial, más que ideológico (Canetti, 1981). Además, se puso de manifiesto una lúdica juvenil que se mostró mediante la aparición

de personajes como Elmo, el Hombre Araña, o los dinosaurios; las comparsas musicales como Las Tamboras, los bailes, *performances*, cantos y arengas colectivas celebratorios de la recuperación de la calle para la gente y el espacio público para la política. El humor resultó otra forma de disrupción que aportó elementos globales e infantiles a la protesta, así como la seguridad que viene con el anonimato detrás del rostro de un personaje fantástico. La fotografía de Elmo con la policía le quita seriedad a esta institución, y a la vez simboliza la fuerza anónima de la protesta. Como dijo uno de los jóvenes que asistió a la marcha con un disfraz, “la protesta no tiene un rostro”⁸. En todo caso, no tiene un rostro único, pues el cuerpo del sujeto político que constituye es el de una multitud, una forma de expresión de la pluralidad humana que practica la cohesión sin la homogeneización (Aristotle, 1981).

Si bien es cierto que la juventud protagonizó visiblemente la protesta, también lo es que la extensión y amplitud de la acción política se explica por la convergencia de distintos sectores de la sociedad acostumbrados a movilizarse por distintos objetivos, incluyendo la defensa de la democracia (Ilizarbe, 2017). En este sentido, la característica más importante de esta movilización fue la capacidad de articulación nacional, rápida y efectiva, de una acción defensiva a la que respondieron cohesionadamente organizaciones sociales muy bien asentadas en el país, como sindicatos, frentes regionales, organizaciones feministas, colectivos ciudadanos, ONG, y también una anónima multitud de personas del común cuya participación no agrupada contribuyó decisivamente a sostener la potente corriente de opinión que se forjó a favor de la protesta. El resultado fue un efectivo poder de veto. Una multiplicidad de organizaciones, instituciones sociales e individuos se manifestaron públicamente constituyendo un poder colectivo.

El punto de encuentro se dio en el diagnóstico del problema (un golpe de Estado que había puesto en el poder de manera ilegítima al congresista Manuel Merino) y en la consciencia de que la solución

8 Ver el reportaje aquí: <https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/conoce-a-martin-huaman-el-joven-que-participo-de-las-marchas-disfrazado-de-elmo> (consultado el 12 de agosto de 2021).

era la movilización y resistencia popular, en todas las formas pacíficas posibles y con una convocatoria muy amplia. Es decir, una movilización que reivindicaba el compromiso cívico más que ideológico, ciudadano antes que partidario, y por tanto, también, una agenda mínima expresada claramente en los *hashtags* y lemas que llamaban a forjar la unidad en torno a una posición compartida en defensa de la democracia.

#Fuera Merino. Toma la Calle.
 #Todos los días, hasta que caiga.
 #No al golpe.
 #Marcha Perú. Todas y todos podemos protestar. Cacerolazo permanente, 8 p.m. (todos los días)
 #Este congreso no me representa
 “El Kongreso es el peor virus”
 “Amo a mi país, me avergüenza mi gobierno”
 “Al gobierno le gusta cuando callas porque estás como ausente”
 “Cuando la tiranía es ley la revolución es orden”
 “Mamá estoy aquí defendiendo a mi Perú”.⁹

En efecto, mucha gente que participó en la protesta nacional –quizá la mayoría– no se vinculaba a ella ideológica o partidariamente, y más bien se consideraba defensora de la sociedad ampliamente entendida, de la democracia, de la justicia. Esto se aprecia claramente en el testimonio de Adriana Chávez y Jrisanti Delgado, de Cajamarca:

Tal vez como jóvenes no nos identificamos en sí con la izquierda o la derecha. Pero algo tenemos claro todos, queremos honestidad por parte de candidatos políticos. Hemos demostrado que no somos indiferentes, no somos desinformados, inconscientes o desentendidos de la política. Hemos usado la tecnología para informarnos entre nosotros de las verdades que la prensa no informa. Queremos cambios, sí, y seguiremos en la lucha social hasta buscar una sociedad más justa y equitativa (p. 75).

9 Los lemas y los *hashtags* fueron vistos en carteles, fotos, videos y producciones audiovisuales de y sobre las protestas, e incluso en algunos reportes periodísticos. Una notable fuente para la memoria gráfica y testimonial de la rebelión es la publicación *11/20*, editada por el fotógrafo Musuk Nolte y la antropóloga Sandra Rodríguez, de la cual se toman varios testimonios en este capítulo.

A pesar de que la protesta se organizó pacíficamente, la represión policial fue sumamente violenta y confrontacional desde el inicio. Como ha planteado Teresa Cabrera, la respuesta represiva del Estado “puede leerse también como expresión del método de control último contra el soberano”, que es usual ver en el manejo de protestas vinculadas a los proyectos extractivos que pueblan el país, pero difícilmente en el centro de administración y ejercicio del poder (2020, p. 17). Esta vez, sin embargo, Lima fue testigo y víctima, en carne propia, de la impune brutalidad policial con que el Estado peruano, en sus distintos Gobiernos, ataca a personas que expresan su oposición a políticas públicas que atentan contra los territorios, la salud y el bienestar de poblaciones marginales rurales y urbanas. Como se ha señalado en informes oficiales (Defensoría del Pueblo, 2015) y en medios de investigación periodística¹⁰, todos los Gobiernos democráticamente elegidos de este siglo son responsables del asesinato de ciudadanas y ciudadanos peruanos en manifestaciones de protesta, sin que haya habido sanciones. Así, en dieciocho años de Gobiernos democráticamente elegidos, ciento cincuenta y nueve personas fueron asesinadas en protestas y hasta la fecha nadie ha sido sancionado. Esta vez, sin embargo, la represión se concentró en Lima, como indica el testimonio de Yenifer Chávez Alarcón, estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho.

El 14 de noviembre fue el día que sentimos el mayor despertar. No puedo calcular el número de personas que salimos a marchar. Jamás he visto tanta gente movilizándose. Fuimos un grupo muy diverso: artistas, universitarios, colectivos, gremios, frentes, sindicatos, mercados, clubs deportivos, ciclistas organizados, familias completas. Todas esas voces se unieron en mancomunidad para mostrar su rechazo al Gobierno de facto, y con el optimismo de tejer una nueva historia para nuestro país. No vivimos ningún episodio de represión policial. Fuimos por cuantas calles quisimos, e incluso se quemó un ataúd de cartón que tenía pegada la cara de Merino y los tres congresistas representantes de Ayacucho que votaron por la vacancia en plena Plaza de Armas, sin embargo, no hubo ninguna

10 Ver el informe del portal periodístico *Convoca* aquí: <https://convoca.pe/agenda-propia/en-ocho-anos-159-personas-murieron-en-protestas-sociales-y-nin-gun-policia-acusado> (consultado el 12 de agosto de 2021).

respuesta de parte de los policías. Esa noche nadie durmió. A través de las noticias vimos la brutal represión en Lima, la saña y crueldad con que actuaron y nuevamente la indolencia del Estado. Cuando se supo del primer joven asesinado, algo en mí se rompió por dentro, me invadió el dolor y la rabia. Estaba recién procesando esa muerte y solo unos minutos después se confirmó la muerte de otro joven; al dolor y rabia se sumó el miedo. En el insomnio de esa madrugada, nos volvimos a organizar para salir en la tarde de ese mismo día (Rodríguez y Nolte, 2020, p. 25).

El testimonio de Yenifer deja constataciones importantes. Su relato señala una inversión de lo habitual en la vida nacional, la alteración de lo que *suele suceder*, y la entrada en un tiempo *extra-ordinario*. No es habitual que Lima sufra más represión que las regiones; tampoco lo es el sentimiento de solidaridad nacional; ni la sensación de “despertar” que permitió sostener la protesta a pesar del dolor, la rabia y el miedo. Asomarse colectivamente a esa expresión de desigualdad, de pronto invertida, generó un sentido comunitario fuerte, emotivo, heroico. Y el dramático contexto de la pandemia agudizó mucho más aún estas emociones. Todo eso se expresó en el lenguaje de la memoria política. Luego, después de que se lograra el objetivo de forzar la renuncia de Manuel Merino y asegurar un Gobierno de transición con mínimas credenciales democráticas, la movilización continuó y entonces la gramática de la memoria se hizo visible, articulando el lenguaje de la política de la calle.

En las semanas posteriores a la lucha por la recuperación de la democracia, los muros y paredes de muchos distritos en Lima se inundaron con inscripciones e imágenes que rememoraban esa lucha y a sus héroes. Rápidamente los nombres y los rostros de Inti Sotelo y Bryan Pintado se convirtieron en símbolos de la lucha y la resistencia, y en símbolos de denuncia persistente de la violencia policial. Un relato épico empezó a gestarse en los memoriales y murales que las acciones de censura gubernamental no lograron acallar. A la violenta destrucción de los homenajes espontáneos llenos de flores y carteles se respondió rehaciéndolos, y al borrado de murales en homenaje a la lucha ciudadana se reaccionó multiplicándolos, incluso con mayor planificación y arte. Y en estas acciones de intervención del espacio público, el discurso que insistía en recordar el

golpe a la democracia y la violencia policial sirvió para revitalizar la movilización, para evitar que se desvaneciese la conciencia de lucha, para impedir que se silenciaran los reclamos y demandas de justicia aún sin atender. La potencia de la inmediatez se conjugó bien con la profundidad del ejercicio práctico de hacer memoria.

El reencuentro popular en calles, plazas y muros físicos y virtuales en defensa de la democracia significó la recuperación de mucho más que el espacio público: fue también un momento de recuperación de la política como acción ciudadana. Esta enorme fuerza colectiva y anónima, sin liderazgos individuales prominentes, había empezado a utilizar el lenguaje de la memoria para construir sentidos comunes propios, para defender su particular relato de los hechos, y para fijarlo en símbolos que hablan de aquel momento histórico, pero también de otros similares en el pasado. La posibilidad de articulación de un lenguaje político autónomo, distinto del que difunden los oligopolios que controlan la televisión y la prensa, o las agrupaciones y líderes políticos bien instalados en las instituciones de Gobierno fue, asimismo, de las mejores noticias en muchos años en el Perú.

La pregunta que subsiste es, sin embargo, si esa ciudadanía movilizada anónimamente y de manera extraordinaria podrá constituirse, arraigarse, sostenerse e impulsar la imprescindible renovación de la política y la reinención de un proyecto democrático en el Perú.

Límites y perspectivas de la revuelta peruana

¿Qué posibilidades abre para la profundización de la democracia la emergencia de formas de soberanía popular que logran ejercer un poder de veto? Si se recupera algo de perspectiva histórica, se reconoce que en dos décadas este tipo de participación social se ha fortalecido, a la par que avanzaba la desestructuración institucional del sistema de representación peruano. Conforme colapsaban los partidos políticos y el sistema de representación, aumentaba el recurso a la protesta como forma de incidencia política y participación ciudadana informal. En veinte años hubo importantes experiencias similares previas, que dan cuenta de un camino recorrido y ciertos aprendizajes, así como del esfuerzo por construir organizaciones de

carácter horizontal, sin liderazgos caudillistas, y con agendas abiertas que permitieran alianzas, más que articulaciones. Así, importantes antecedentes de la movilización de noviembre de 2020 fueron las protestas del movimiento antifujimorista y el Colectivo No A Keiko en los dos procesos electorales anteriores (Fernandez-Maldonado y Navarro, 2016). La marcha #NiUnaMenos, en el año 2016, en contra de toda forma de violencia contra la mujer, fue una importante expresión multitudinaria alrededor de un sentido común que se reclamaba y se sentía universal, o por lo menos con capacidad de apelar ampliamente a actores sociales e incluso institucionales diversos. Otra movilización que logró carácter nacional en años previos fue la protesta por el recorte de derechos laborales de personas jóvenes¹¹. De manera que ha habido aprendizaje y se ha ido ganando fuerza hasta consolidar un poder de veto, que sin embargo no ha logrado sortear las desigualdades enraizadas en el país.

Precisamente, las desigualdades hacen difícil la integración y unificación de los distintos grupos que se articulan en las protestas *en contra* de un objetivo común. Más allá de los escenarios límite, y de las polarizaciones que fuerzan los procesos electorales —especialmente de segunda vuelta— las agendas y demandas no son fácilmente reconciliables. Por ejemplo, las demandas de las feministas no son apoyadas por los sindicatos de trabajadores; los reclamos de salario justo y trabajo digno de los obreros de la agroexportación no son acompañados por las organizaciones de estudiantes; la agenda de defensa de los territorios y el buen vivir no alcanza solidaridad intercultural y se convierte en una demanda específica de los pueblos indígenas. Y es que también en el terreno de las protestas ciudadanas se expresan las distancias que caracterizan históricamente al Perú. La impronta de una sociedad colonial estamental se deja sentir en el carácter elitista de una democracia electoral que ha hecho poco y siempre

11 He analizado las protestas contra la candidatura de Keiko Fujimori de 2016 aquí: <https://carmenilizarbe.lamula.pe/2016/04/09/el-significado-de-la-marcha-del-5-de-abril-del-2016/carmenilizarbe/> y aquí: <https://carmenilizarbe.lamula.pe/2016/04/05/el-factor-calle/carmenilizarbe/>, así como la protesta contra el recorte de derechos laborales juveniles, aquí: <https://carmenilizarbe.lamula.pe/2014/12/19/des-ciudadanizacion-y-falacias-del-neoliberalismo/carmenilizarbe/> (consultados el 12 de agosto de 2021).

tarde para atacar las grandes desigualdades sociales y económicas que separan a un pequeño grupo de familias de las grandes mayorías populares (Durand, 2018; Gilbert y Samamé, 2019). Como en otros países de América Latina, el Perú es un país sumamente desigual, donde el crecimiento macroeconómico hizo muy poco por reducir la desigualdad y más bien favoreció la acumulación geométrica de dinero de un grupo pequeño habituado a los privilegios (Alarco, Castillo y Leiva, 2019).

El carácter estamental y poco cohesionado socialmente del Perú se ha hecho evidente también durante más de dos décadas en emblemáticas protestas sociales por proyectos extractivos de recursos primarios como Conga, Tía María, Las Bambas, o el Baguazo. Apenas dos semanas después de las protestas en defensa de la democracia, en Ica se levantaron trabajadores de la industria nacional agroexportadora, cuyos salarios y condiciones laborales han sido miserables por veinte años, aun cuando las empresas recibían del Estado incentivos financieros. La demanda cuestionaba la renovación por diez años más, adicionales a los veinte ya cumplidos, de beneficios tributarios para las empresas sin mejoras para los trabajadores¹². Aunque fue contundente en la región de Ica, la protesta no tuvo gran respaldo en Lima ni en otras regiones y ciudades importantes del país. Claramente, la agenda específica de los derechos laborales de jóvenes rurales del rubro de la agroexportación no genera una solidaridad extendida.

Así, aunque en veinte años el poder de veto en defensa de la democracia se ha fortalecido alrededor de procesos electorales, ha prevalecido la desarticulación más allá del contexto electoral polarizado. No todas las agendas, discursos y liderazgos resuenan con la misma fuerza o centralidad en la esfera pública nacional. La agenda diversa de reclamos ciudadanos revela que subyacen formas distintas de comprensión de la democracia, no siempre convergentes o coincidentes (Ilizarbe, 2017). En esta línea, hay que anotar que en la última década el fortalecimiento de la protesta ha permitido, a la

12 Un buen reporte periodístico puede verse aquí: <https://ojo-publico.com/2300/el-cuestionado-regimen-laboral-de-las-agroexportadoras> (consultado el 12 de agosto de 2021).

vez, el surgimiento de organizaciones antiderechos que también se afirman en la fuerza de la multitud: por ejemplo, el transnacional Colectivo Con Mis Hijos No Te Metas¹³, o los grupos protofascistas que emergieron en la disputa por la elección de Pedro Castillo en segunda vuelta.¹⁴

El centralismo es otra tensión política importante que se puso de relieve alrededor de las elecciones de 2021, y que otorgaron al maestro rural Pedro Castillo la presidencia. No solo se trató de un proceso electoral sumamente desigual y violento, también se trató de un enfrentamiento social que partió al país, una vez más, en términos de su centro hegemónico (Lima) y su periferia (las otras regiones)¹⁵. La elección de Pedro Castillo, incluyendo la defensa de esa elección frente a la reticencia de la candidata perdedora a aceptar públicamente los resultados, implicó una movilización popular a través del voto, y posteriormente en defensa de la elección y del inicio de su Gobierno. Asimismo, conllevó el recurso sostenido a expresiones de racismo y clasismo que buscaron en todo momento cuestionar y socavar la figura de un candidato que terminó simbolizando para unos y otros a los indígenas y desposeídos del país.

Conclusiones

La proliferación de imágenes fijas y en movimiento que transmitieron la indignación ciudadana en las redes contrastó con la cerrazón de los medios de comunicación concentrados en oligopolios. En cinco días la movilización popular derrocó al Gobierno designado

13 Un excelente análisis de la ideología del movimiento, escrito por Alexandra Hibbett, puede leerse aquí: <https://disonancia.pe/2018/05/10/la-marcha-por-la-ideologia/> (consultado el 12 de agosto de 2021).

14 Un recuento de algunas de estas formas aparece en este artículo de opinión de la historiadora Cecilia Méndez: <https://larepublica.pe/opinion/2021/07/19/libertad-de-expresion-o-libertad-de-destruccion-por-cecilia-mendez/> (consultado el 12 de agosto de 2021).

15 He analizado los mapas electorales peruanos de los últimos Gobiernos aquí: <https://tramacritica.pe/debate/2021/05/01/ni-sorpresa-ni-novedad-lima-y-las-elecciones/> (consultado el 12 de agosto de 2021).

desde el Congreso, y dio soporte a un Gobierno de transición. Sin embargo, el costo fue alto. Decenas de personas desaparecidas y detenidas, golpeadas, dos jóvenes asesinados, un centenar de personas acusadas de terrorismo y detenidas sin el debido proceso (Ledgard, 2021). La movilización llegó a vocear la demanda de una nueva Constitución, y esta fue recogida por organizaciones de izquierda en competencia electoral. Incluso, Pedro Castillo ganó las elecciones con la promesa de convocar a un referéndum para decidir, como en Chile, si se debía ir hacia un proceso constituyente. A pesar de esto, la ácida prolongación del proceso electoral y los cuestionamientos deslegitimadores que enfrentó el presidente ni bien asumió funciones silenciaron el tema. La sola idea de un proceso constituyente en el Perú generó una ola de miedo entre las élites, particularmente limeñas, que asumieron la defensa de la Constitución de 1993, y en especial del modelo económico allí trazado. A diferencia de Chile, la revuelta peruana no desembocó en la dirección de un proceso constituyente, al menos no de manera directa. No se abrió un momento constituyente, pero sí quedó claro el agotamiento institucional, la decadencia y desestructuración de la política formal, así como también el quiebre ideológico del neoliberalismo peruano.

Como caras de una misma moneda, dos extraordinarios hechos recientes iluminan las vicisitudes de la política y la democracia en el Perú del siglo XXI: la revuelta popular que en noviembre de 2020 derrocó en menos de una semana al Gobierno usurpador de Manuel Merino, y la elección del maestro rural Pedro Castillo como presidente en el año del bicentenario de la fundación de la república. Parecen hechos contrapuestos, pero no lo son. En una coyuntura marcada por la pandemia de covid-19 y una crisis constitucional, ambos acontecimientos son expresiones de soberanía popular que alcanzaron fuerza suficiente para definir el destino político del país. Ambos sucesos fueron ejercicios de poder democrático: en el primer caso rescató al país de un Gobierno usurpador y, en el segundo, llevó al poder a un campesino y líder sindical completamente desvinculado de las élites económicas, sociales y políticas, hecho inédito en la historia peruana.

Aunque deben contemplarse los límites de ambas formas de expresión del poder popular, estos hechos revelan la importancia que

en el Perú ha adquirido en años recientes la participación popular en la política, en un contexto de fuerte desestructuración institucional. Si bien es cierto que ambos acontecimientos dan cuenta del agotamiento del sistema político y económico instituido por treinta años, también reflejan la emergencia de formas de soberanía popular que, sin embargo, resultan insuficientes para renovar la política. La movilización de noviembre no solo fue reactiva sino principalmente defensiva: preservó los confines de una democracia electoral que ha sido insuficiente para renovar la política y asegurar condiciones de vida justas a las grandes mayorías históricamente postergadas en el Perú. Así, aunque muchos la defiendan, la democracia peruana ha dejado contentas a muy pocas personas.

Es importante anotar que el Perú tiene tradición tanto autoritaria como democrática, y que ambas tradiciones informan las prácticas de quienes se reclaman liberales y quienes se identifican como de izquierda. Las prácticas autoritarias son muy visibles en los hogares peruanos y en las relaciones interpersonales, en el caudillismo y elitismo de la política electoral, y en las lógicas verticales y centralizadas de las organizaciones e instituciones sociales y políticas. Pero hay, también, un imaginario que moviliza a la sociedad, y que se expresa en prácticas democráticas y democratizadoras que van a contrapelo de la tradición autoritaria. En las protestas de noviembre, lideradas por jóvenes en defensa de la endeble democracia peruana, se expresó nítidamente ese imaginario. Se hizo visible una férrea convicción democrática en grupos muy diversos de la sociedad, que fueron capaces de articular una acción política suficientemente potente para evitar que se consumara un golpe de Estado. La masividad y carácter nacional de la protesta hablan de la extensión del imaginario democrático en el Perú. La capacidad inmediata de articulación de individuos y colectivos para constituirse en fuerza política habla de su potencia. Las estrategias y formas de organización que la sostuvieron revelan conocimiento y aprendizaje. Los discursos y demandas señalan una consciencia y una identidad ciudadana. ¿Es posible afirmar, entonces, que se trata de un movimiento capaz de renovar democráticamente la política? No, y principalmente porque su poder es reactivo y de obstrucción, antes que propositivo y para la acción. Sin embargo,

desconocemos cómo opera en la temporalidad más larga, más allá de las coyunturas electorales, la construcción de movimientos y alternativas políticas. Hay señales esperanzadoras en la extensión, potencia, arraigo y efectividad que puso en evidencia el compromiso ciudadano con las protestas en defensa de la democracia.

Referencias bibliográficas

- Alarco, G., Castillo, C. & Leiva, F. (2019). *Riqueza y desigualdad en el Perú*. Visión Panorámica. Lima: OXFAM.
- Aristotle. (1998). *Politics*. Hackett.
- Cabrera, T. (2020). Promesa de resurrección del soberano. En Nolte M. & Rodríguez, S. (editores) *11/20* (pp. 16-17). XYZ.
- Canetti, E. (1981). *Masa y Poder*. Muchnik Editores.
- Chávez, N. (2020). Generación Bicentenario y disputa de sentidos. En Nolte M. y Rodríguez, S. (editores) *11/20* (pp. 28-29). XYZ.
- Congreso de la República del Perú. (1993). *Constitución Política del Perú*.
- Defensoría del Pueblo. (2012). *Violencia en los conflictos sociales*. Informe Defensorial N° 156. Defensoría del Pueblo.
- Durand, F. (2018). *Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y OXFAM.
- Fernandez-Maldonado, E. y Navarro, D. A. (2016). ¿Protestas o movimientos sociales? Los casos de Keiko No Va y Peruanos contra el TPP (pp. 157-173). En *Perú Hoy*. DESCO.
- Ilizarbe, C. (2016). Autorrepresentación y desacuerdo: Estado y conflictividad social en el Perú. En Romeo Grompone (editor) *Incertidumbres y distancias. El controvertido protagonismo del Estado en el Perú* (pp. 379-402). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Ilizarbe, C. (2017). Democracia desde la calle: esfera pública contrahegemónica y gramáticas de reclamación en la transición política peruana del año 2000. En M. E. Ulfe y R. Trinidad (editoras) *En Busca de Reconocimiento. Reflexiones desde el Perú diverso* (pp. 137-166). Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Ilizarbe, C. (2020). El sustrato ideológico del neoliberalismo en el Perú. En Cánepa, G. & Lamas, L. (2020) *Épicas del neoliberalismo. Subjetividades emprendedoras y ciudadanías precarias en el Perú* (pp. 129-156). Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Instituto de Estudios Peruanos. (2020). *Encuesta especial – Crisis política (noviembre 2020)*. <https://iep.org.pe/noticias/encuesta-especial-crisis-politica-noviembre-2020/> (consultado el 12 de agosto de 2021).

- IPSOS. (2020). *La crisis política en el Perú. Noviembre 2020*. <https://www.ipsos.com/es-pe/la-crisis-politica-encuesta-de-opinion-noviembre-2020> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Ledgard, Jimena. (2021). Atrapados en Olimpo. *Revista Ideele*, 296. <https://www.revistaideele.com/2021/02/24/atrapados-en-olimp/> (consultado el 12 de agosto de 2021).
- Nolte M. y Rodríguez, S. (2020). *11/20. XYZ*.
- Remy S. M. (2005). *Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú. Un reconocimiento y algunas reflexiones*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Rosanvallón, P. (2010). *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Manantial.
- Tanaka, M. (1998). *Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada*. IEP.
- Tanaka, M. (2005). *Democracia sin Partidos. Perú 2000-2005. Los problemas de representación y las propuestas de reforma política*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Zavaleta, M. (2014). *Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral*. Instituto de Estudios Peruanos.



DESBORDES Y PORVENIRES

QUE LA CUNA DEL NEOLIBERALISMO SEA TAMBIÉN SU TUMBA

Una mirada actual de la región
a partir de Colombia y Chile

ENTREVISTA DE BRENO BRINGEL
A PIERINA FERRETTI Y ALEJANDRO MANTILLA¹

1 Filósofo. Integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg y miembro de la revista *La Sinistra*.

Una de las premisas más relevantes de las investigaciones que conforman el cuerpo principal de este libro, es que los estallidos que sacuden parte de América Latina y el Caribe desde el año 2018 han sido protagonizados por una multitud heterogénea de actores. Dentro de esa heterogeneidad tienen peso sujetos y movimientos sociales que venían agenciando las luchas sociales desde mucho antes, pero además hay destacada presencia de personas que no habían tenido participación política previa; en especial, jóvenes. En tal sentido, las revueltas resultaron en un proceso de politización o activación política que incluyó en algunos casos un saldo organizativo. A tres años del inicio de lo que hoy podría apreciarse como un ciclo de protestas y movilizaciones masivas que recorre la región, es necesario evaluar sus implicaciones en estos sujetos y en los procesos sociales desencadenados por su agencia.

La presente entrevista indaga sobre la cuestión desde los casos de Chile y Colombia, sin perder de vista el contexto regional, por cuanto ambos países cuentan con una larga hegemonía política de la derecha y una gobernabilidad neoliberal plenamente establecida; represión y violencia política mediante. La victoria de las fuerzas populares reflejada en la Convención Constitucional en Chile, y la fuerza del paro de 2021 en Colombia (que logró detener varias iniciativas gubernamentales y obligó al Gobierno a negociar), son procesos que permiten un análisis del devenir de las fuerzas políticas populares, con énfasis en las subjetividades, los movimientos organizativos emergentes (y sus relaciones con aquellos más consolidados), la reconstitución de las derechas, y los escenarios futuros a corto, mediano y largo plazo. La conversación que sigue se realizó a principios de julio de 2021 y buscó, a raíz de los acontecimientos recientes, explorar sus impactos, sentidos y posibles consecuencias.

BRENO BRINGEL: *En el ciclo de protestas que en Colombia y Chile arranca con los estallidos de 2019, ¿qué novedades, continuidades y rupturas aprecian en términos de emergencia de nuevos sujetos?*

ALEJANDRO MANTILLA: Los acontecimientos actuales en Colombia son parte de un ciclo largo de protestas de larga duración que arranca en 2008. Dentro de este hay un ciclo corto que inicia en 2019 y que tiene un pico en el 2021 con el paro que en estos momentos languidece.

El ciclo corto refleja varias rupturas con lo anterior. La principal está en que las movilizaciones nacionales de 2008 a 2016 fueron protagonizadas por grandes plataformas organizadas del movimiento sindical, estudiantil, campesino, indígena y afro. Lo vimos en la movilización estudiantil de 2011, en la minga de 2008, en las mingas indígenas y en los paros agrarios de 2014 y 2016. La gran ruptura de 2019 radica en la fuerza de lo que llamaríamos “autoconvocados”: personas no organizadas en las plataformas mencionadas, pero con una gran capacidad de indignación, de protesta y de recreación de las dinámicas de la movilización.

Las movilizaciones de la década pasada estuvieron organizadas por plataformas de índole nacional o sectorial del movimiento campesino y del sindical. En cambio, desde 2019 en adelante observamos la emergencia de dinámicas diferentes, no necesariamente desorganizadas, donde el protagonismo está en organizaciones barriales y locales.

Otra diferencia tiene que ver con una transformación de cantidad en cualidad: el paro de 2021 ha sido el más extenso geográficamente, el más largo temporalmente, y también el de mayor diversidad de sujetos y de prácticas. Por el contrario, muchas de las dinámicas de las movilizaciones anteriores eran muy localizadas en términos de actoría social. En 2021 tenemos una gran articulación y una gran diversidad, en las cuales interviene lo campesino, lo sindical, lo indígena, lo estudiantil, pero sobre todo lo barrial-popular.

Otra ruptura importante se ve en el relevo de género y generación: en estas protestas hay un mayor protagonismo juvenil y de

mujeres jóvenes urbanas. Este relevo revela la emergencia del actor barrial-popular. En el pasado había mucha movilización juvenil, pero eran jóvenes ligados a las izquierdas o a las movidas contraculturales del punk y el movimiento estudiantil. Ahora ha ganado potencia una movilización juvenil que tiene al barrio como centro de muchos esfuerzos.

El relevo de género y generación y la emergencia de lo barrial-popular son resultado de los treinta años de la precarización neoliberal. En tal sentido, estamos frente a una movilización contra la sociedad del no-futuro, contra la imposibilidad que tienen los jóvenes de clase trabajadora y popular de plantearse un proyecto de vida a mediano y largo plazo.

PIERINA FERRETTI: En Chile también se identifica un ciclo largo de luchas antineoliberales que recorrió los años noventa del siglo pasado y las primeras décadas de este siglo; luchas que anticiparon y fueron acumulando fuerzas en el campo popular para el estallido del 18 de octubre de 2019, conocido como 18-O. Este ciclo largo fue impulsado por actores más conocidos y más tradicionales, como el movimiento estudiantil, cuya actividad fue permanente durante los noventa, hasta que logró instalar la demanda por un sistema público y gratuito en un país donde la educación está completamente mercantilizada. Está, asimismo, el movimiento mapuche, que protagonizó una larga resistencia, luchando contra las empresas forestales y extractivistas. Además se dieron algunos otros conflictos en localidades y regiones alejadas de la capital, muchos de ellos por problemáticas medioambientales.

Pero todo eso no logró articularse a nivel nacional como un gran movimiento (aunque el movimiento estudiantil sí lograra una articulación amplia), y fue liderado en su momento por actores que estaban entre lo viejo y lo nuevo; unos conocidos y más clásicos, y otros que se vislumbraban como novedosos.

Lo que ocurre en octubre de 2019 es la eclosión de estos actores con un recambio generacional y de género, donde los conflictos centrales ya no necesariamente se ordenan en el eje capital-trabajo, sino en el eje derechos sociales y mercantilización de la vida; o puesto en

términos más políticos, ya no se ordenan en el eje izquierda-derecha, sino en clave élite-pueblo.

En Chile también reconocemos un ciclo corto de protestas, que es este que estamos viviendo, y hay consenso en situar su inicio en el estallido de octubre de 2019, cuando se produjo la emergencia de actores nuevos de un campo popular heterogéneo y abigarrado, producto de casi cincuenta años de una modernización conservadora neoliberal que destruyó a la vieja clase obrera (base social del proyecto de la Unidad Popular).

En octubre, las personas que toman las calles son profesionales precarizados, también trabajadores sin formación universitaria (más precarizados aún), pero no son trabajadores sindicalizados (en el país solo hay un 20% de sindicalización de la fuerza laboral). Se trató de la emergencia de un mundo popular que no responde a viejos marcos y condiciones de clase, sino que comporta un universo mucho más heterogéneo, atravesado por la precarización del trabajo y de la vida, por el endeudamiento, por la inseguridad vital que genera una sociedad en la que no se tiene prácticamente ningún derecho asegurado; eso fue lo que surgió con tanta fuerza en octubre de 2019.

A ese grupo popular y heterogéneo, con su recambio generacional y de género, que protagonizó el estallido, se sumaron todos los actores constituidos: sindicatos, movimientos sociales, activistas, gente que viene del ámbito social organizado. Aunque estos no produjeron el levantamiento, ni lo condujeron, sí se sumaron rápidamente a la movilización y lograron contribuir a la articulación de los sectores que no provenían del espectro sociopolítico.

B. B. ¿Cuáles serían las principales implicaciones de la emergencia de estos nuevos sujetos en clave de formas de movilización y dinámicas organizativas? ¿Hubo tensiones con los actores que venían protagonizando el ciclo largo?

A. M. En el ciclo de 2019 a 2021, identificamos una gran diversidad de prácticas y de sujetos que para mí son indisolubles. Sobre todo en el paro de 2021, que arranca con el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, en Cali, por el pueblo Misak, un gesto simbólico-decolonial muy poderoso en una ciudad que ha

sido epicentro en las movilizaciones. El 21 de abril aconteció una gran marcha nacional, y en Bogotá, por ejemplo, hubo un baile de mujeres trans frente a la policía antimotines (que en Colombia es profundamente violenta y represiva); ese mismo día hubo lo que llamamos “el tropel” (enfrentamiento con la fuerza pública y las barricadas), y al lado de estas “primeras líneas”, muy parecidas a las de Chile, teníamos las ollas comunitarias.

También, en el 2021 persisten algunas lógicas habituales pero no necesariamente tradicionales. Pienso en las jornadas de murales, las de baile protesta y la proyección de videos con *video-beam* en los edificios, al igual que en la experiencia chilena. Junto a los repertorios habituales del movimiento sindical, indígena, estudiantil, campesino, tuvieron lugar barricadas barriales que no habíamos visto desde 1977, porque incluso en 2019 el tropel fue móvil. En el 2021 hubo una resignificación del territorio con barricadas permanentes.

Esto es importante: el tropel es un enfrentamiento contra lo que representa la policía en Colombia en términos de brutalidad contra los jóvenes, pero al lado está la olla comunitaria que implica la posibilidad de tejer comunidad. En Cali, varios reportajes arrojaron que los muchachos y las muchachas de las barricadas estaban comiendo mejor en las ollas comunitarias que en sus casas. Las ollas son un síntoma de la violencia y la precarización, pero también abren la posibilidad de hacer un tejido comunitario que pasa por la movilización y la organización.

En clave de organización, existe una relación complemento-tensión entre los diferentes sujetos que protagonizaron las protestas: hay complementariedad entre las lógicas habituales y tradicionales del movimiento sindical, las formas de manifestación de los autoconvocados y de las organizaciones locales. Por ejemplo, el Comité Nacional del Paro (CNP) convocaba una marcha para un día y ese día había marcha con participación de los autoconvocados y las organizaciones barriales y locales.

Sin embargo, hay también tensión, y en tal sentido aparece una representatividad en competencia. El movimiento sindical y el CNP trataron de representar las protestas, lo que generó tensión porque los chicos y chicas de las primeras líneas y los procesos locales no se

sienten representados por el CNP. Esto es muy interesante, pero no siempre es productivo.

P. F. Muchas cosas dialogan entre Colombia y Chile. Creo que las formas de movilización que hemos visto desde el 18-O en adelante implicaron todas las formas de ocupación de la calle. En Chile, la primera línea fue una organización de autodefensa popular que se articuló con mucha rapidez y efectividad, que logró contener a la policía y permitió el desarrollo de las protestas en un perímetro muy amplio, no solo en Santiago sino también en otras ciudades.

Resulta interesante que, si bien se suele decir que la primera línea está conformada exclusivamente por jóvenes de barrios populares, algunas investigaciones levantadas en el terreno indican una composición también de profesionales no tan jóvenes y personas muy diversas. Asimismo se dieron formas nuevas como las brigadas de salud espontáneas, compuestas por profesionales y técnicos que al salir de sus trabajos se instalaban en sectores, calles y pasajes cercanos a las protestas, configurando redes que atendían a muchísima gente con dedicación y compromiso.

En un primer momento llamó la atención el desorden de las movilizaciones. No eran las acostumbradas del movimiento estudiantil y sindical: marchas que comienzan en un lugar y terminan en otro, donde se monta un escenario, se emiten discursos y hay un orden del día. Las movilizaciones de la revuelta popular iban hacia todas las direcciones posibles; no había un centro sino múltiples; no había oradores ni discursos programados ni escenarios centrales. Esto es muy ilustrativo de su carácter fragmentario y simultáneo.

Por otro lado, en los primeros días se trató de una rebelión de gente sola (y no de organizaciones), de gente que llegaba a la plaza, a las calles, con su mamá, con su familia, con algún amigo, sin banderas, sin pancartas de organizaciones. La única bandera que flameó durante los primeros días fue la del pueblo mapuche, que se convirtió en un símbolo popular de lucha, en la bandera de todos los pueblos de Chile. Con el paso de los días comenzaron a aparecer las banderas de los sindicatos, de los partidos, de las organizaciones, pero en principio fue algo espontáneo muy caótico, pero de algún modo coordinado.

Después de las primeras semanas, la protesta empezó a tomar cierta forma y comenzaron los procesos organizativos, las asambleas o cabildos populares, fundamentalmente en los barrios, aunque no únicamente, también en algunos lugares de trabajo, en los estadios de fútbol con las hinchadas (que están bastante más identificadas con sus equipos que con los partidos políticos, de hecho, entre las banderas que aparecieron tempranamente estaban las de fútbol).

Muchos de estos cabildos se empezaron a organizar en redes de asambleas, y algunos tuvieron proyección en el proceso constituyente, el cual obligó a que las organizaciones que se habían formado espontáneamente se reorganizaran para estar presentes. La expresión más clara de ese proceso fue la Lista del Pueblo, que fue la gran sorpresa en las elecciones y estaba compuesta fundamentalmente por personas que provenían de las asambleas populares a lo largo de todo Chile, junto con otro tipo de organizaciones (territoriales, barriales, ambientalistas) que ya existían.

Así, el proceso constituyente puso cierto apuro a los sectores que se politizaron al calor del estallido en cuanto a la necesidad de organizarse, y permitió que muchas organizaciones territoriales (sobre todo ambientalistas y feministas) se articularan, confluyeran en la conformación de listas y lograran representación en la Convención Constitucional.

En Chile también se dio la misma tensión por la representatividad de la protesta. Hubo un espacio en el que se articularon un conjunto de movimientos sociales y organizaciones sindicales que se llamó Unidad Social (US). Esta existía desde un poco antes del estallido, pero con él agarró fuerza. Sin embargo, la US no tenía capacidad para conducir las protestas; de hecho, las marchas ocurrían todos los días, con o sin convocatorias formales. Los paros nacionales que convocó la US fueron muy exitosos, pero hay que decir que el sindicato se tardó en reaccionar. Inmediatamente después del estallido, algunos movimientos sociales levantaron un llamado a paro nacional que no fue acompañado por las centrales sindicales. El día lunes 21 de octubre, se produjo un paro nacional fáctico, que no fue llamado por US, y ese día Chile no funcionó.

En Chile, al igual que en Colombia, se dieron tensiones por la representación de lo que podríamos llamar “la calle”. Ni Unidad Social ni la izquierda política (el Partido Comunista y el Frente

Amplio) podían arrogarse la representación de la revuelta. Los diversos grupos organizados se veían presionados a tomar decisiones que tensaban el ambiente (ir o no a las reuniones convocadas por el Gobierno, firmar o no el acuerdo que marcó el itinerario del proceso constituyente); todo eso trajo muchas peleas al interior de cada uno. Sin embargo, la revuelta callejera corría por otros carriles. Luego, el proceso constituyente ayudó a ordenar todo esto y logró avances en la articulación.

A. M. Hay muchas semejanzas entre los dos procesos, pero lo último que dice Pierina es clave para ir delineando la diferencia. En Chile el proceso constituyente generó una ruta, en Colombia aún estamos en una gran incertidumbre. Es decir, la gran pregunta es si lo que ha surgido en los últimos años y lo que surgió como organización social en 2021 va a tener continuidad o va a ser efímero. A mi entender, tres actores participaron en las dinámicas de 2021 en Colombia: las plataformas tradicionales de los movimientos sociales de izquierda; las organizaciones locales-territoriales; y las dinámicas autoconvocadas con toda su diversidad.

Sin embargo, gran parte del peso de la protesta en el 2021 estuvo en las organizaciones locales, muchas de estas forjadas en las luchas de los años anteriores; por ejemplo, en la lucha contra los megaproyectos mineros. Pienso en el caso de Cajamarca (Tolima): allí se mantuvo el paro durante más tiempo por las organizaciones sociales que se fundaron en la pelea contra la AngloGoldAshanti². Con respecto a las dinámicas autoconvocadas, las Resistencias Unidas de Cali (una de las articulaciones de las primeras líneas en la ciudad) tienen hoy gran capacidad de articulación, y la pregunta es si eso tendrá continuidad organizativa. La expectativa está en si las dinámicas de las primeras líneas de Bogotá, en el sur de la ciudad

2 “La Colosa” es el nombre del proyecto minero aurífero emprendido por la multinacional AngloGoldAshanti en el año 2008 en el departamento de Tolima. Este proyecto tiene un alcance regional e involucra al municipio Cajamarca y otros municipios agrícolas cercanos, además de partes de la Reserva Forestal Central. Actualmente se encuentra detenido tras conflictos impulsados por organizaciones territoriales.

y en el Portal Resistencia, y las dinámicas asamblearias que hemos visto en Medellín, en Ibagué y en otras ciudades, tendrán continuidad organizativa.

En Colombia estamos en la incertidumbre, el escenario está abierto e incluso puede generar una nueva reacción de la derecha o una canalización vía sectores “de centro”, que representan un “neoliberalismo dialogante”.

PF: La cuestión de la continuidad organizativa de las dinámicas y la incertidumbre es muy importante. En Chile siempre hubo sectores resistiendo en distintos puntos del país y organizados en torno a conflictos concretos, luchas contra el extractivismo, por la educación, por las pensiones... Lo que ocurrió muchas veces, por ejemplo, con el movimiento estudiantil, es que el actor social que levantó la demanda después no tuvo la capacidad política para determinar el curso de las reformas que se implementaron posmovilizaciones. El movimiento estudiantil tuvo mucha fuerza para instalar la demanda por educación gratuita en 2011, y el Gobierno de Michelle Bachelet creó una reforma para instalar educación gratuita, pero no por medio de la expansión de la educación pública, sino a través de un *voucher* transferido directamente a los estudiantes que ingresan mayoritariamente a las universidades privadas. Esa reforma finalmente no fortaleció la educación pública, porque el actor social que instaló la demanda (vale enfatizar), no tuvo la capacidad para orientar políticamente la reforma.

También conocemos la experiencia del atrincheramiento de las organizaciones sociales y populares en su conflicto específico, en su esfera puntual de lucha, pero sin proyección a nivel nacional, sin capacidad de impactar el escenario político general.

Lo que ocurrió con la revuelta popular de octubre es que fue tan intensa que alteró completamente el mapa de fuerzas y abrió la posibilidad de que, por primera vez en este largo período de democracia restringida, sean sectores del propio pueblo, del campo popular, quienes tengan la oportunidad de llegar a la institucionalidad. La Convención Constituyente dispone la posibilidad de proyectar los intereses populares de manera directa.

La incertidumbre en este caso también persiste porque es posible que esto se repita en las elecciones parlamentarias, y tengamos representantes de estas organizaciones populares en el parlamento. Incluso es posible que el próximo Gobierno nacional sea de izquierda. Entonces se plantean las preguntas: ¿qué pasa cuando las izquierdas, cuando los militantes populares y activistas sociales llegan a la institucionalidad política?, ¿cómo se hace para que la organización popular no se debilite?, ¿cómo se hace para que esa llegada sirva para la afirmación de la autonomía popular y no termine en la desmovilización y el debilitamiento de la potencia social?

¿Para qué queremos llegar al poder institucional, para qué queremos esos espacios? No puede ser para convertirlos en productores de élites políticas de recambio, neoliberales con rostro humano o dialogante, como los llamó Alejandro.

No basta con llegar a las instituciones para subvertir sus lógicas y ponerlas a disposición del pueblo. Nosotros no podemos explicar los giros de experiencias anteriores, como las de Podemos y Syriza, por la bondad o maldad de sus dirigencias. Hay lógicas conservadoras en las instituciones, en el poder, que son muy fuertes y no somos inmunes a ellas, y si no tenemos ojo, en unos años más podemos enfrentar un gran fracaso.

B. B. ¿Cómo analizan la disputa sobre las apropiaciones y los sentidos de las protestas, del paro de 2021 y de la Constituyente? ¿Qué significan el paro en Colombia y la Constituyente en Chile en cuanto a debates sobre las lecturas de la realidad y los imaginarios políticos contemporáneos?

A.M. Yo insisto en que el escenario en Colombia sigue abierto y que este estallido social todavía puede ser canalizado por sectores reaccionarios o neoliberales. Sin embargo, aun así, interesa ver si el ciclo de 2019 a 2021 ha permitido cambios en las convicciones, creencias y emociones de la sociedad, especialmente en los sectores populares y de clase media. Eso no sería poco en una sociedad tradicionalmente conservadora como la de Colombia, donde nunca hemos tenido un Gobierno progresista, donde llegó primero el anti-comunismo que el comunismo, donde tenemos presencia del paramilitarismo, del narcotráfico y alta injerencia de los Estados Unidos.

Queda claro que muchos sectores barriales, populares, indígenas y campesinos se han politizado por las dinámicas de movilización y han expresado su descontento. Se impone la interrogante sobre el devenir de los sectores que no se movilizan y de quienes se mantienen fieles al uribismo que, vale recordar, ha marcado la agenda política colombiana del siglo XXI.

El caso de Cali es emblemático porque se trata de la tercera ciudad más grande del país y donde se vivió más fuerte el paro. Allí los bloqueos generaron una alteración de la vida, y la arquitectura misma de la ciudad cambió. Es posible que haya sectores de clase media, e incluso sectores populares, que por un mes vieron los bloqueos con simpatía, pero que luego empezaron a verlos con cierta sospecha. Cali es una ciudad conservadora y uno de los epicentros del narcotráfico. Los mensajes conspiranoicos que intentó instalar la derecha (como por ejemplo, que el paro era impulsado por el narcotráfico, o que era financiado por Soros y el Foro de São Paulo) pueden pegar en sectores silenciosos, sectores que en determinados momentos generan giros en los modos de comprender políticamente la sociedad. Por eso reitero que el panorama, en términos de disputa por el sentido, permanece incierto.

Por otra parte, está la cuestión de las agendas de transformación a la que refería Pierina. En Colombia hubo una gran dificultad durante el paro, porque era claro contra qué nos movilizábamos (contra todo, es decir, contra el régimen neoliberal, contra el presidente Iván Duque, contra el uribismo, contra la guerra, contra el narcotráfico), pero no era claro cómo canalizar el descontento en transformaciones institucionales concretas, cómo conducir el descontento hacia cambios específicos en la seguridad social, la salud, el ordenamiento territorial, etc. El paro nos rebasó, tanto, que ya está languideciendo y no se lograron reformas institucionales profundas, aunque, quizá, sí se logró un cambio en términos de creencias, convicciones y afectos.

PF: Al respecto de qué es la Constituyente en términos de disputas de sentido, es relevante señalar que en Chile tenemos un debilitamiento de la hegemonía cultural del neoliberalismo, la cual se empieza a resquebrajar en el 2000, cuando los estudiantes plantean la consigna contra el lucro, la ganancia y la educación como negocio.

Allí se empieza a debilitar también la capacidad de la Concertación, bloque que dirigió la transición para procesar los conflictos sociales y conducir intelectual y moralmente al país.

Fue este debilitamiento tremendo lo que posibilitó la hondura de la revuelta y la creación de una correlación de fuerzas lo suficientemente poderosa como para alterar a tal punto el ordenamiento político que estamos en un proceso constituyente.

Más allá de lo jurídico, para no quedarnos en la superficie de los procesos, la Convención Constitucional es un espacio de enfrentamiento de fuerzas, de intereses sociales, del cual va a surgir un nuevo equilibrio de clases. Hay que tener presente que durante toda la historia del país la relación de fuerzas ha sido tremendamente favorable a las clases dominantes, a la oligarquía en sus diferentes versiones hasta la oligarquía neoliberal contemporánea.

En la Convención se van a enfrentar los intereses de las clases populares con los de la oligarquía neoliberal, con la diferencia de que en este momento las fuerzas en la constituyente son más favorables a los intereses del campo popular y a la redacción de un texto constitucional que exprese, por ejemplo, la necesidad de consagrar derechos sociales universales, de hacer retroceder al mercado en áreas clave de la reproducción social, como la educación, la salud y las pensiones.

La constituyente en este momento significa un espacio de disputa, de choque de perspectivas, donde los intereses del campo popular podrían avanzar, donde es posible comenzar a institucionalizar la salida del neoliberalismo.

Ahora, que las fuerzas en la constituyente sean convenientes al campo popular, no asegura todo. Aunque la derecha está completamente arrinconada (no tiene siquiera la capacidad de ejercer el veto en la Convención), las experiencias recientes de América Latina muestran que por muy avanzadas que puedan ser las constituciones, encuentran una serie de dificultades en su implementación. Los centros económicos no van a retroceder en su afán por hacer prevalecer sus intereses, y por más que su representación política en la Convención sea minoritaria, su poder económico, su poder político extra-institucional sigue operando, y hay que ver cómo se van a expresar a lo largo del proceso.

B. B. ¿Cómo este ciclo de protestas está impactando en las derechas, incluido el poder económico?

A. M. Este paro ha sido el síntoma más significativo de la pérdida de consenso que había generado el uribismo, tanto hacia la clase dominante como hacia buena parte de la sociedad. El uribismo siempre ha sido una alianza de clases entre los sectores de la burguesía tradicional, la inversión extranjera directa y, sobre todo, la burguesía emergente paramilitar-narcotraficante. En los ochenta y noventa, esos tres sectores tuvieron fuertes tensiones, pero Uribe logró unificarlos y logró una gran aceptación popular. Ese consenso empieza a romperse en 2008, con la minga social y comunitaria. La movilización indígena y campesina pone contra las cuerdas a Uribe, luego viene todo el debate sobre los acuerdos de paz. Aunque el uribismo retomó el poder en 2018, el Gobierno de Duque (sobre todo con el paro de 2021) refleja una crisis de liderazgo, una crisis de consensos, de diálogo social por parte de la derecha (en especial la uribista).

Hay que tomar en cuenta que a la clase dominante colombiana no le gusta dialogar con gente distinta a ella, y cuando lo hace y genera acuerdos, suele incumplir. El sector que está en el poder en estos momentos en Colombia es el sector más a la derecha de la clase dominante.

La gran ingobernabilidad de los últimos tres años, de 2018 a 2021, expresa la pérdida de capacidad para propiciar consenso, liderazgo e iniciativa política por parte de los sectores tradicionales de derecha. Hoy la derecha colombiana no tiene un candidato presidencial con chance de arrasar en las elecciones, se trata de una situación inédita.

Pero la derecha tiene tres puntos clave a favor. Primero, el Gobierno tiene mucha fortaleza institucional, cosa que comporta una gran paradoja. Duque es el presidente más impopular, pero logró anular todo contrapeso en el interior del Estado. Hoy no hay contraloría, procuraduría, defensoría, ni congreso independiente; todos están captados por el Gobierno nacional. Segundo, Duque cuenta con una absoluta fidelidad de las fuerzas militares y policiales que se han forjado en el marco del conflicto armado y del anticomunismo.

De ahí que, por ejemplo, los índices actuales de violencia solo sean equiparables a los de Birmania, según el último informe de la Jurisdicción Especial para la Paz. La represión se explica en buena medida por estos dos puntos. Tercero, la solidaridad de clase dominante permanece, por ejemplo, el consejo gremial que agrupa a los grandes empresarios del país cerró filas con Duque.

En Colombia hay una situación paradójica porque la derecha sigue estando muy compacta, sigue teniendo fortaleza institucional y mantiene respaldo de las fuerzas armadas, pero experimenta una crisis de liderazgo, de generación de consensos y de iniciativa política. La consecuencia es un escenario muy polarizado en el país y muchas incertidumbres.

P. F. En Chile, durante este ciclo corto la derecha ha sido la gran derrotada. Sufrió dos grandes derrotas: la del plebiscito para cambiar la Constitución de octubre de 2020; y luego, la elección de constituyentes, donde se repitió el escenario. Solo el 20% del bloque de la derecha fue electo, quedando muy detrás de lo que ella misma había proyectado. A sabiendas de que estaban en una posición desafortunada, sus actores querían al menos un tercio de la Convención para poder ejercer el poder de veto, cosa que no lograron.

Por otro lado, se observa que, como estamos en período de campaña presidencial, estas figuras de la derecha han corrido sus discursos hacia una suerte de democracia social de centro-derecha. Están hablando de derechos sociales universales, cuando ellas mismas instalaron la focalización del gasto social. Han tenido que modificar su retórica porque ya no se sostiene, dadas las demandas y expectativas de la población.

Además, el curso que tomó la revuelta popular ha puesto una contención a la posibilidad de avance de la derecha más dura. Incluso la derecha blanda se ha transformado en símbolo de enemistad contra los intereses populares, enemistad que no se interpreta tanto en el eje izquierda-derecha, como en el eje élite político-empresarial contra pueblo.

Dicho lo anterior, es importante acotar la incertidumbre que genera un dato: entre el 50 y 60% de la población adulta y con derecho a voto no se expresa en las urnas ni siquiera en este

contexto de apertura política y democratización. El plebiscito de 2020 fue el acontecimiento electoral que contó con más movilización, y solo votó el 51% del padrón; en las de convencionales votó el 42%; y en las últimas elecciones, la segunda vuelta para los gobernadores regionales, votó el 19%. De modo que todavía hay una crisis muy grande de representación que el escenario desplegado por la revuelta no ha logrado revertir. Todo esto es muy interesante porque tendremos próximamente el plebiscito de salida de la Constitución para aprobar o no la propuesta que emane de la Convención, será con voto obligatorio, y no se sabe cómo se comportará ese 50%. Es posible suponer que no será un alimento para la derecha, pero no hay certeza.

A. M. Pensando en los contrapesos que las movilizaciones han impuesto a las derechas, puede darse un escenario similar en Colombia. Actualmente los políticos más a la derecha no tienen capacidad de agencia en un panorama de elecciones presidenciales. Habrá varias iniciativas muy bolsonaristas, uribistas, pero creo que están neutralizadas.

Sin embargo, es preciso tomar en cuenta, primero, el rol de las fuerzas militares, que siguen jugando un papel de estabilización del régimen político y económico; segundo, en un país donde gran parte del PIB proviene del narcotráfico, este se convierte en un factor de estabilidad y no de desestabilización. Mientras subsista el narcotráfico en Colombia, es muy difícil que haya un Gobierno progresista; y si llegase a haberlo, sería un factor de desestabilización.

Es bastante posible que la crisis provocada por la movilización sea canalizada por el autodenominado centro político, porque en buena medida el paro refleja un sentimiento antineoliberal y antiuribista, pero hay que decir que los principales líderes de la izquierda aún no tienen la aceptación requerida para ganar unas elecciones. En tal sentido, ese sector del centro político está lanzando un discurso contra los extremos muy predecible y muy efectivo. Frente a la izquierda, Gustavo Petro y el Pacto Histórico³, afirman que encarnan

3 El Pacto Histórico es una coalición política y electoral compuesta por catorce partidos políticos y movimientos sociales de izquierda y centroizquierda. Fue lanzada en el año 2021. Gustavo Petro, actual senador de Colombia, es uno de sus precandidatos a la presidencia a través de su partido Colombia Humana.

un nuevo extremismo; y frente al uribismo afirman que profundizó la crisis.

Esto es peculiar, puesto que ese centro político es muy diverso. Hay sectores que vienen de la derecha y de la izquierda que se han moderado, otros vienen de ser independientes. De manera que es muy posible el posicionamiento de algún tipo de Gobierno de “transición” que bloquee las posibilidades de cambio desde las izquierdas e impida reformas que debiliten la derecha; en concreto: un Gobierno de quienes hoy representan el centro político, la Coalición de la Esperanza y el Partido Verde, como contención a lo que representa el Pacto Histórico y la alianza de la izquierda. Ese es un escenario posible de reconfiguración de la derecha.

B. B. En términos de escenarios y de temporalidades de cambio, ¿creen ustedes que las diversas subjetividades que protagonizaron las protestas, con sus distintas agendas, puedan confluír en la constitución de escenarios de futuro diferente más allá de objetivos y metas inmediatas?

P. F. Es cierto que en este proceso se encuentran distintas temporalidades. En Chile hay quienes creemos que comienza un nuevo ciclo político, donde los actores que todavía no se constituyen sólidamente están en proceso de hacerlo. Nos sentimos como cuando el movimiento obrero moderno empezó a organizarse en América Latina. En Chile tardó casi un siglo el proceso de maduración de las clases subalternas y trabajadoras. Ahora estamos en un proceso similar de conformación de nuevas clases y actores que tomará tiempo, no se sabe cuánto, pero al menos serán décadas. La nueva clase trabajadora precarizada, ubicada fundamentalmente en el sector servicios, se irá articulando en nuevas formas de organización y representación.

Paralelamente, los sectores más organizados del campo popular están presentes en la constituyente, y mientras eso ocurre todavía están vigentes consignas y actores que vienen de atrás (como el Partido Comunista y el Partido Socialista), que pueden confluír con nuevos actores (como el Frente Amplio) que se nutren de un pasado más reciente, y que posiblemente cumplan un rol de bisagra en la constituyente.

El movimiento feminista tiene elementos de los años ochenta, que conviven con lógicas y dinámicas completamente nuevas y diferentes. Es un movimiento que cuenta con grupos organizados, muy organizados y con alta capacidad de acción y articulación política; pero también hay una suerte de feminismo laxo, una especie de aire que se respira, en el que las nuevas generaciones crecen y se identifican como feministas aunque no sean activistas ni militantes de organizaciones.

Posiblemente en el mediano plazo surjan ordenamientos políticos donde confluyan el Frente Amplio, el Partido Comunista, sectores del socialismo, de los movimientos sociales y de los nuevos actores populares que han emergido, conformando un bloque temporal que sea flexible, que tenga choques y momentos de confluencia, pero que motorice y ordene un ciclo de reformas más o menos profundas, de acuerdo a la correlación de fuerzas. Si en el corto y mediano plazo se vislumbran reformas, en el largo plazo se avizora la conformación de un nuevo campo popular, de una nueva clase trabajadora que irá generando formas de organización y articulación entre lo tradicional y lo nuevo. Estamos asistiendo al proceso de formación de un nuevo bloque histórico.

A. M. Aquí se presentan contrastes. En términos de temporalidades del cambio, es preciso pensar en la temporalidad de lo dominante. En Colombia es posible identificar un ciclo larguísimo que implica la continuidad de la guerra que ha configurado el sistema político. Primero, la guerra entre liberales y conservadores; luego, la guerra con las guerrillas desde los años cincuenta para acá. Dentro de ese ciclo hay una prolongada estabilidad de la clase dominante.

Se trata de una democracia estable y muy violenta; lo primero, gracias a lo segundo. El régimen colombiano se ha anclado en esa continuidad del bloque dominante que no ha tenido ningún temor para reprimir a los adversarios, aun en democracia, por mecanismos institucionales y extrainstitucionales. Ha sido así desde el inicio de la república. Hablamos de una sociedad con grandes dificultades, con un racismo estructural, donde el 10% de la población es afrocolombiana y el 4,4% indígena, y a pesar de esto parece que afrocolombianos

e indígenas no existieran en el país, puesto que solo aparecen en la prensa cuando hay minga. Esas dinámicas violentas y excluyentes están muy presentes en esos doscientos años de historia republicana formando una línea temporal larga en un país que, insisto, no ha tenido Gobiernos progresistas y que, no obstante, ha tenido una democracia relativamente estable.

A esto hay que agregar un ciclo largo, de treinta o cuarenta años, con tres factores que cambiaron la vida política colombiana: el narcotráfico, el neoliberalismo y el extractivismo. De este modo se perfilan dos temporalidades de muy larga duración que configuran todo aquello a lo cual la gente se opone con las movilizaciones.

Por tanto, sucede que a diferencia de lo que está ocurriendo en Chile, en Colombia no hay actualmente un escenario puntual de reforma o cambio institucional que nos saque de esos paradigmas, eso sigue en disputa.

Sería posible que en 2022 hubiese una victoria electoral por parte del Pacto Histórico y de Gustavo Petro (candidato con más opción), pero es difícil. La verdad es que la movilización de calle no necesariamente se refleja en las urnas, pues mucha de la gente que protesta no vota, por desconfianza hacia los políticos, incluso a los de izquierda. Por otro lado, sigue muy latente esa mayoría silenciosa que no se moviliza y sí se expresa en contiendas electorales, que muchas veces lo hace por miedo y que hoy, en época de *fake news*, es susceptible de manipulación por parte de sectores que posicionan matrices de opinión conservadoras.

También, como dije antes, podemos bosquejar el escenario, más posible, de un Gobierno de transición neoliberal pero “dialogante”, que baje un poco los niveles de violencia y genere algunos cambios institucionales que no lleguen a reformas, que no varíen mucho la dinámica del régimen económico.

Sin duda el paro expresa descontento, aun así las preguntas nucleares persisten: ¿qué abona ese descontento?, ¿cuál es el referente de sentido de ese descontento? Puede dirigirse contra el mismo Pacto Histórico y contra las dinámicas de las izquierdas. Eso puede ocurrir.

Muchos de los miembros de las primeras líneas son profundamente machistas, y las denuncias de violencia contra las mujeres en

las barricadas han sido constantes. De manera que hay malestar y rabia, es cierto, pero no significa que eso nos lleve automáticamente hacia transformaciones y cambios emancipadores. Eso también sigue en disputa.

Por último, se debe tener en cuenta que estamos en un contexto global y regional de profunda inestabilidad política, lo cual establece límites en las expectativas sobre el porvenir en Colombia. Vivimos una crisis sanitaria y económica agravada por el aumento de la violencia, crisis que tiende al aumento en todo el país, esta situación también define límites objetivos a las posibilidades de cambio a corto plazo.

Recientemente se han abierto debates sobre el sentido de agitar una constituyente en Colombia. Es una discusión difícil, por varias razones: 1) La Constitución de 1991 fue una Constitución neoliberal progresista en derechos, no sociales, pero sí individuales; esto en una sociedad conservadora se ve con mucha simpatía. 2) A muchos nos da temor que gane la derecha y tengamos un paso atrás en lugar de uno adelante. Hay personas convencidas de que la movilización se va a expresar en las urnas y que por esa vía ya cambiará la correlación de fuerzas, y que tendremos la posibilidad de experimentar cambios institucionales que se proyecten en una constituyente. Es una hipótesis interesante, pero en 2016 perdimos el plebiscito por la paz. Perdimos quienes queríamos una solución pacífica al conflicto armado. La pregunta era si queríamos o no seguir matándonos, y fueron más los votos a favor de seguir matándonos. Si ese es el escenario, ¿qué puede pasar en una constituyente? Sobre todo cuando es factible que el descontento no se concrete en avances organizativos. Ese es el principal contraste con Chile, que el panorama se mantiene en la incertidumbre, con mucha inestabilidad, y que probablemente el escenario electoral no genere verdaderas transiciones, sino una gestión de la crisis sin cambios en el corto plazo.

A pesar de esto, pesimismo aparte, en términos de cambios culturales y disputas por la hegemonía, el paro refleja transformaciones que se expresan en la politización y el relevo generacional. Por esto, si en el 2022 tenemos reveses, a mediano plazo podríamos estar frente a una realidad más esperanzadora.

B. B. Para ir cerrando nuestra conversación, ¿cómo ven el escenario regional y el porvenir político latinoamericano desde Colombia, donde no hubo ciclo progresista, y desde Chile, donde este llegó solo de forma tímida? ¿Qué desafíos y horizontes vaticinan para las izquierdas latinoamericanas en estos momentos tan convulsos?

P. F. Es difícil dar una visión general porque hay choques de fuerzas contradictorias, hay mucha volatilidad, al menos en términos electorales, como el caso de Castillo en Perú, que por muy poquito pudo ocurrir un resultado distinto. En Argentina, después de Macri volvió el peronismo, pero eso no significa necesariamente la afirmación o la estabilidad de un nuevo ciclo progresista; y así sucede con todas las victorias electorales de la izquierda, la de AMLO en México incluida.

No obstante, en la región se va dibujando un período de mayor dificultad para mantener el orden social y el consenso neoliberal por parte de las clases dominantes. A su vez, tendremos la conformación de nuevos actores políticos, o confluencias tensas entre actores nuevos y de la izquierda tradicional, que estarán disputando la conducción de procesos y de la conflictividad social.

Viene un período de crisis fuerte, de crisis económica y social poscovid que se sentirá mucho en los sectores populares. Esto probablemente va a generar nuevos ciclos de revueltas y desestabilización política. Es lo que se vislumbra más claramente en un horizonte de mediano plazo. La incapacidad de mantener el orden por parte de las élites, también puede traer un recrudecimiento de las respuestas represivas, porque cuando el orden no se mantiene por consenso, se mantiene por la vía de la coerción directa; ha sido una constante de los Gobiernos en la región: Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua. La respuesta ha sido militarización, criminalización, represión cruda. El choque entre rebeliones populares y respuestas represivas tiende a ser parte del ciclo a mediano plazo.

Posiblemente habrá un ciclo de luchas antineoliberales, por derechos sociales. La pandemia ha puesto en evidencia la crisis de los cuidados, las consecuencias nefastas de la desigual distribución de riqueza al interior de los países, el debilitamiento de los sistemas de

salud pública y la necesidad de pelear por los derechos universales. El movimiento feminista, que ha desarrollado una reflexión en torno a estos problemas, seguirá ganando protagonismo y junto al ambientalismo conformarán vectores fundamentales para ordenar las luchas contra el extractivismo, no solo en abstracto, sino contra el modelo concreto que se sostiene en la extracción de bienes comunes naturales.

En Chile la megaminería, la industria forestal, todo ese entramado del modelo de desarrollo, tiene consecuencias en la concentración de la riqueza y del poder político. Al poner en cuestión el modelo monoprodutor extractivista, se pondrá en tensión el modelo de acumulación de poder político. El ambientalismo no será “hippie”, será antineoliberal y ordenará políticamente las disputas. Por otro lado, el movimiento feminista dará dirección cultural a las luchas por el derecho a los cuidados, por la construcción de sociedades de bienestar, y eso involucra una serie de cambios en la lógica de desarrollo, cambios que permitan ordenar la sociedad hacia un sistema de bienestar y cuidados. El ecologismo y el feminismo serán dos vectores tan importantes, que quizá logren alinear las fuerzas políticas, cuando antes ha sido a la inversa.

A. M. Coincido a pie juntillas con la perspectiva de Pierina. Solo agrego algunas consideraciones. Estamos en un momento de transición inestable, hay cambios acelerados en la región y no sabemos en qué dirección irán; tal vez no lleven a ninguna parte, sino hacia una especie de transición caótica y entrópica de la situación política. Es posible que no haya ni un ciclo progresista ni un ciclo de reacción, sino una permanente inestabilidad. Hay casos como el peruano, con su ebullición de los últimos años, que ejemplifican bien este panorama probable. Además, la inestabilidad se ha acentuado con la crisis sanitaria y la crisis económica que atraviesa la región.

Por otra parte, el análisis de las formaciones nacionales tiene mucha importancia. Las diferencias entre el proceso constituyente chileno, la situación argentina, la “cuarta transformación” en México, el caso ecuatoriano y el devenir peruano reflejan que los regímenes políticos son explicables únicamente a partir de la propia realidad de las formaciones nacionales, y eso hace muy difícil aventurar generalizaciones.

No obstante, la gran pregunta sobre el porvenir en la región es quién canalizará los descontentos sociales y políticos. Estamos en un momento de altísima conflictividad, pero vemos que el descontento se conduce de distintas maneras de acuerdo a las configuraciones nacionales y al momento específico: un proceso constituyente en Chile, la victoria de la derecha en Ecuador, la impredecible victoria de Castillo en Perú, o victorias como las de Bukele en El Salvador, donde el rechazo hacia las estructuras de la izquierda del Frente Farabundo Martí generó este tipo de liderazgo caudillista, autoritario 2.0. El mismo Bolsonaro es la expresión del descontento de un sector racista, patriarcal, etc. De modo que esa es también la gran interrogante en Colombia: ¿quién logrará canalizar el descontento?

Los Gobiernos progresistas ya no son lo que solían ser. Unos, por excesiva moderación, y otros, por sostener prácticas autoritarias. El eje Ciudad de México / Buenos Aires / La Paz es mucho más moderado de lo que llegaron a ser los Gobiernos progresistas de principios de siglo, ni hablar del autoritarismo del eje Managua-Caracas.

En cuanto a las izquierdas, persiste un gran contraste entre Ecuador y Chile: en este último hay un bloque articulado que, a pesar de las diferencias internas, disputa un proceso constituyente. En Ecuador la diferencia entre las izquierdas generó el triunfo de Lasso. En algunos casos de la región vemos que hay fracturas en las propias dinámicas izquierdistas. Por un lado hay una izquierda muy ligada al control del Estado, muy preocupada por generar crecimiento económico, por dar mayor bienestar social; y por otro lado, unas izquierdas más sensibles a la lucha contra el patriarcado, contra el racismo y en favor de la lógica decolonial y ambientalista. A partir de estos devenires surgen preguntas en términos de referentes de sentidos.

¿Cómo evitar los quiebres de la izquierda? Abriendo debates dentro de la misma izquierda. En varios de nuestros países se mantiene la narrativa de que todos los Gobiernos progresistas son santos e incuestionables, que la crítica favorece a la derecha. Esto también debe ser motivo de discusión con miras a generar procesos de articulación a escala regional.

Cierro diciendo que es factible que mucho de lo que ocurra en Chile marque pauta en el resto de la región, teniendo en cuenta que

el ciclo largo neoliberal arranca allí y que ahora asistimos a un proceso constituyente paritario, con una presidenta mapuche, lo cual resulta esperanzador y genera referentes interesantes.

P. F. Vale agregar un tema determinante. Ha corrido mucha tinta respecto al ciclo progresista latinoamericano, sobre sus límites y avances, y es imposible entender ese ciclo si se saca de la ecuación el período de buenos precios de las materias primas. Todas las políticas de ese ciclo se sustentaron en economías extractivistas y en el precio de los *commodities*, situación que puso tope a las posibilidades. Esta experiencia plantea la urgencia de un modelo de desarrollo alternativo, y la búsqueda de Gobiernos de izquierda que no se afirmen en la monoproducción y el extractivismo. Esto es un problema en Chile, porque una parte del ideario de izquierda todavía sostiene que hay que nacionalizar el cobre junto al litio, lo que implica replicar un esquema de desarrollo cuyos paradigmas conocemos.

Por último, respecto al comentario final de Alejandro, concuerdo. En Chile sentimos el peso histórico del proceso constituyente, por todo lo que significa, por todas las posibilidades que despliega, por todos los peligros que trae aparejado. En lo personal, tengo intacta la esperanza de que la cuna del neoliberalismo sea también su tumba, y las primeras señales que vemos reafirman mi expectativa.

Este libro se imprimió
en los talleres de Editorial El Conejo,
en septiembre de 2021.
La edición consta de 1.000 ejemplares.
Quito-Ecuador.

Paros, levantamientos y revueltas sociales han sacudido los cimientos políticos de varios países de América Latina en el último lustro. Este resurgir de la acción de calle tiene claros antecedentes, pero la fuerza de las movilizaciones y su carácter de desborde han sorprendido incluso a las multitudes involucradas. Es amplio el espectro de discusiones e interpretaciones sobre sus significados, causas y porvenires.

La Fundación Rosa Luxemburg se suma al debate con esta compilación de trabajos de investigación y ensayos: a partir del estudio de cinco casos específicos (Nicaragua, Ecuador, Chile, Colombia y Perú), intenta conocer las diversas subjetividades que sostuvieron las movilizaciones, haciendo especial énfasis en las juventudes. También expande la mirada y resalta similitudes, diferencias, tendencias y expectativas. En su conjunto, el libro arroja interpretaciones sobre estos procesos y busca analizar en qué medida los estallidos aportan a la reinención de la política transformadora y alumbran nuevos mundos posibles.

ISBN: 978-9942-8539-5-0



9 789942 853950